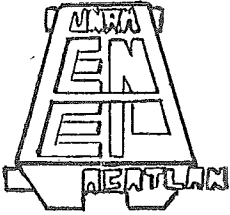


ACA-T-23



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
"ACATLAN"



*Dra. de Cuarta*

*7742537-8*

UNEP ACATLAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
CARRERA DE LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES

EL CONFLICTO IRAN - ESTADOS UNIDOS A LA  
LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE  
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

P R E S E N T A :

**MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ**

ACATLAN, EDO. DE MEXICO.

1983

*M-0037559*



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## INDICE

Introducción	
Capítulo I Relaciones Irán-Estados Unidos.....	1
1.1 Antecedentes.....	2
1.2 Golpe de Estado 1953.....	4
1.3 Revolución Blanca.....	8
1.4 Asistencia Militar.....	10
Capítulo II La Revolución Islámica.....	23
2.1 Fuerza Política del Islam.....	24
2.2 Modelo Islámico Civilizatorio.....	28
2.3 Caída del Sha.....	32
2.4 Llegada de Khomeini.....	34
2.5 Establecimiento de la República Islámica....	41
Capítulo III Toma de la Misión Diplomática.....	48
3.1 Antecedentes.....	49
3.2 Desarrollo Cronológico.....	56
3.3 Reacción y Sanciones de Estados Unidos.....	61
Capítulo IV Las Naciones Unidas ante el Conflicto.....	67
4.1 Consejo de Seguridad.....	68
4.2 Viaje del Secretario General.....	73
4.3 Comisión Investigadora.....	74
4.4 Convención sobre Toma de Rehenes.....	77
Capítulo V Resoluciones de la Corte Internacional de Justicia.....	82
5.1 Generalidades.....	82
5.2 Acción de Estados Unidos.....	84
5.3 Providencia del 15 de diciembre de 1979.....	97
5.4 Fallo del 24 de mayo de 1980.....	102
Capítulo VI Acuerdo sobre la Liberación de los Rehenes...	132
6.1 Antecedentes.....	133
6.2 Negociaciones.....	134
6.3 Documentos.....	138
6.4 Justificación de la Política de Estados Unidos.....	150
6.5 Acciones Jurídico-administrativas de ejecu- ción.....	152
Conclusiones Políticas.....	154
Conclusiones Jurídicas.....	157
Bibliografía.....	160
Anexos.....	

A MIS PADRES  
Y  
HERMANOS

A JUAN MANUEL

## INTRODUCCION

La Revolución Islámica en Irán es un fenómeno sui generis que conlleva un proceso revolucionario e ideológico con características únicas.

Por ello es materialmente imposible entender la revolución islámica irania bajo una óptica de razonamiento occidental que no profundiza en la esencia del fenómeno islámico definido en términos políticos, ideológicos y revolucionarios.

La versión chiita del Islam se ha manifestado claramente como un movimiento antimperialista y de liberación nacional en Irán en diversas ocasiones\*.

Como resultado de la instauración del régimen islámico en Irán se ha establecido un modelo civilizatorio propio que para su preservación y desarrollo requiere excluir toda influencia externa.

El caso iranio es un ejemplo de las consecuencias nefastas que recaen sobre una nación como producto de resabios colonialistas y del imperialismo hegemónico de las superpotencias.

Además del negativo factor exterior, el pueblo iranio ha sido expoliado por grupos oligárquicos domésticos, destacando de manera singular la dictadura Pahlevi.

El Sha gobernó durante casi cuatro décadas, tiempo en el que los iranos fueron víctimas de una brutal represión política y militar, con el abierto apoyo de Estados Unidos.

La acción de la política de Estados Unidos en Irán condujo a resultados desastrosos, pues en su afán por habilitarlo como "Gendarme del Golfo Pérsico", sació con demasía el apetito bélico desmesurado del Sha, quien destinó la inmensa mayoría de los considerables ingresos petroleros de su país a la compra de armas y capacitación de su ejército.

Tan grande era la confianza estadounidense sobre el papel de Irán en el área, que poco antes del colapso total del Sha, el presidente Carter declaró: "Irán es una isla de estabilidad en esta zona turbulenta".

La única fuerza capaz de oposición y lucha organizada contra el Sha y su aparato represivo se encontraba en el clero chiita, encabezado por Ruhollah Khomeini, quien al tomar las riendas del poder desató un enérgico rechazo a Occidente, especialmente a Estados Unidos al que culpaba de intervenir en sus asuntos internos.

El repudio popular a Estados Unidos se tradujo en el ataque a su Misión diplomática, así como en la toma de rehenes del personal de la misma. Posteriormente, este acto inicial perpetrado por estudiantes islámicos, se convirtió en acto oficial del gobierno iraní al respaldar y estimular tal acción.

El presente trabajo tiene por objeto el análisis crítico de las implicaciones políticas capítulos I, II y III y jurídicas, capítulos IV, V y VI, del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Para ello se ha recurrido al estudio histórico político de las relaciones entre ambos países, capítulo I , de modo que a partir de esa base se pueda comprender con mayor amplitud de criterio la conducta de ambos actores.

Asimismo, se expone el papel desempeñado por las Naciones Unidas en la búsqueda de una solución pacífica, capítulo IV , bajo dos perspectivas: política y jurídica. La primera, a través del Consejo de Seguridad, el cual debido a su peculiar mecanismo de operabilidad, no logró mayores avances, y la segunda, a través de la Corte Internacional de Justicia capítulo V , la cual si bien carece de poder coercitivo, realizó un excelente trabajo fundamentado exclusivamente en consideraciones jurídicas.

Por último, la parte final, capítulo VI , analiza los documentos jurídicos y financieros internacionales mediante los cuales las partes involucradas llegaron a un acuerdo para solucionar su conflicto.



CAPITULO I

RELACIONES IRAN-ESTADOS UNIDOS

SUMARIO

- 1.1 Antecedentes
- 1.2 Golpe de Estado 1953
- 1.3 Revolución Blanca
- 1.4 Asistencia Militar

### 1.1 Antecedentes

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán —Persia en ese entonces— se establecieron en 1883; año en el que se instaló la primera Misión diplomática de Washington en Teherán. El interés de Estados Unidos en ese tiempo consistía en la protección de misiones evangélicas, llegadas en 1829, las cuales trabajaban sólo con las comunidades cristianas minoritarias.

Dichas misiones fundaron escuelas y hospitales que propiciaron la introducción a Irán de ideas modernas provenientes de Occidente. (1)

A lo largo del siglo XIX y en las primeras décadas del actual, Irán estaba demasiado alejado de Estados Unidos no sólo geográfica, sino políticamente, ya que los intereses de éste en el primero eran mínimos. El Tratado de Comercio y Navegación suscrito por ambos países en 1856, constituye el principal punto de referencia de sus relaciones hasta la década de 1930. (2)

Es en estricto sentido a partir de la Segunda Guerra Mundial que Irán comienza a adquirir importancia para Estados Unidos, aunque esto no significa que aquél no jugase un papel estratégico y económico considerable para las potencias europeas desde comienzos de siglo.

Con objeto de precisar la situación de Irán en ese período respecto a la intervención extranjera, a continuación la mencionamos brevemente.

Durante la guerra de 1914-18, Irán era nominalmente neutral pero en realidad las fuerzas turcas, británicas y rusas, y agentes alemanes actuaron activamente en el país y con la conclusión del armisticio entre Rusia y Turquía en 1917, dos fuerzas expedicionarias británicas partieron hacia Rusia pasando por Irán, en lo que parecieron ser misiones prematuras. Al final de la guerra, la condición interna de Irán, era caótica. Para el gobierno británico la restauración del orden era deseada, y con este fin en mente se firmó en 1919 un acuerdo mediante el cual una cantidad de hombres sería prestada para reorganizar la armada irania y para reformar el Ministerio de Finanzas y se daría un préstamo de dos millones de libras esterlinas. Como hubo oposición a este acuerdo en Estados Unidos, Francia e Irán, el Tratado no se ratificó. (3)

Para el año de 1921 ocurrió un Golpe de Estado y Reza Khan --más adelante el Sha Reza-- pasó a ser Ministro de Guerra. En 1923 el Sha Reza se convirtió en Primer Ministro y finalmente en 1925 se le confirió la Corona de Persia. Su primera tarea fue restaurar la autoridad del gobierno central a lo largo de todo el país, y la segunda, establecer las relaciones persas con los países extranjeros en un plano de igualdad.

El 16 de septiembre de 1941 el Sha Reza abdicó (4) en favor de su hijo Muhammad Reza. En este período el gobierno persa nombró asesores americanos con la esperanza de reorganizar ciertos aspectos administrativos; pero sus esfuerzos no fueron tomados en cuenta sino como una medida limitada de salir ade-

lante, por lo que posteriormente se terminaron sus servicios. Para el año de 1947, Irán firmó un acuerdo con Estados Unidos en virtud del cual, se proporcionaría una misión militar americana a Irán para cooperar con el Ministro de Guerra iraní en aumentar la eficiencia de la armada iraní.

### 1.2 Golpe de Estado de 1953

Irán, uno de los mayores países productores de petróleo en el mundo, se enfrentó a graves problemas y en 1941 se desencadenó una nueva crisis por la cuestión de la nacionalización del petróleo.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial el sentimiento nacionalista de Irán se había orientado contra la continuación de la propiedad del petróleo en manos de la Anglo-Iranian Oil Company, cuando la Unión Soviética trató de adquirir una concesión petrolera en el norte en 1944.

En el año de 1950 Irán recibió un préstamo por 25 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de Washington y una donación de 500,000 millones de dólares. Subsecuentemente en 1952 el programa de ayuda se expandió. En 1951 la Asamblea Nacional expidió un proyecto de ley para la nacionalización de la industria petrolera y en mayo el doctor Muhammad Mossadeg, líder del movimiento de protesta del petróleo, ocupó el cargo de Primer Ministro.

Mossadeg era el símbolo de la oposición democrática y nacional. En 1925 había combatido vigorosamente contra el occu-

so al trono de Reza Khan y por consiguiente fue encarcelado por algún tiempo. Reapareció en 1941 y pronto se convirtió en líder de la oposición parlamentaria. Su lucha contra todo atentado a la democracia y a la soberanía nacional se acentuó y se manifestó en particular por una viva oposición a los acuerdos soviético-iranios de 1946, que concedían a la URSS un derecho de intervención militar y la explotación del petróleo del norte, y a la revisión constitucional de 1949, que permite al Sha disolver las asambleas, y , sobre todo, por su combate constante por la recuperación total de la principal riqueza del país: el petróleo. Se afirmó entonces como uno de los precursores del no alineamiento, predicando el "equilibrio negativo", rechazo de toda concesión a cualquier potencia extranjera que fuere.

Sus dos años de gobierno, abril de 1959 a agosto de 1961, están dominados por la cuestión del petróleo, pero no se reducen sólo a eso. Su obra legislativa es importante y se expresa en los principales campos: vida democrática, agricultura, educación e independencia nacional.

Mossadeg encabezaba una coalición de diputados -Majlis- que formó un grupo llamado Frente Nacional, y aunque este frente no fue nunca una organización política coherente tenía muchos seguidores en Teherán y otras ciudades. (5)

La política americana mostró un creciente interés en los asuntos iraníes. Entre el período que va de agosto a octubre de 1952 hubo mucha correspondencia entre los gobiernos británico, americano e iraníes, en cuanto a la disputa del petróleo.

terminando ésta con una oferta conjunta entre Sir Winston Churchill y el Presidente Truman, quienes hacían proposiciones de acuerdo al gravamen que se debía pagar por compensación a la compañía petrolera Anglo-Iranian y el recomienzo de distribución del petróleo a los mercados mundiales. El gobierno iraní rechazó estas proposiciones y el 22 de octubre rompió relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.

En febrero de 1953 se presentaron otras proposiciones anglo-americanas para llegar a un acuerdo sobre el petróleo, pero el gobierno persa las rechazó y fue así que el Primer Ministro Mossadeg tomó la iniciativa de nacionalizar la industria petrolera. Al cabo de pocos meses el gobierno de Mossadeg estaba en conflicto directo con el Sha y a través de éste con Estados Unidos; a pesar de los esfuerzos iniciales de Mossadeg por ganarse el apoyo de este país.

La situación económica de Irán empezó a deteriorarse rápidamente culminando con el derrocamiento de Mossadeg por el general Zahedi en agosto de 1953.

Tras el golpe militar que derrocó a Mossadeg, el Sha, quien se había visto obligado a abandonar Irán en virtud del poder obtenido por Mossadeg, regresó 3 días más tarde, con el apoyo de la CIA.

Mossadeg había tratado de obtener el apoyo de Estados Unidos, pero logró escaso éxito porque sobre todo las elecciones presidenciales de 1952 habían llevado al poder en ese país al gobierno más agresivamente anticomunista, el cual pensaba erró

neamente que estaba abriendo la puerta a la influencia soviética, dada la posición geográfica de Irán. Además, debido al tenso clima internacional de la época -Guerra Fría- Estados Unidos no estaba dispuesto a correr riesgos: si Mossadeg hubiese sido capaz de consolidar su posición, posiblemente Estados Unidos lo hubiera aceptado, sobre todo debido a que el Partido Tudeh, partido comunista, sólo apoyó abiertamente a Mossadeg durante el último año de su gobierno. Pero Mossadeg no pudo estabilizar la situación.

No hay duda de que el gobierno de Estados Unidos y específicamente la CIA -ver infra 3.1.1- desempeñaron un papel activo en la organización del golpe del 19 de agosto de 1953 y de que esta intervención fue fruto del fortalecimiento de la presencia norteamericana en Irán. (6)

La ayuda norteamericana continuó aún en los años en que se empezaron a generar ganancias petroleras y cerca de 800 millones de dólares fueron vertidos sobre Irán entre el final de la Segunda Guerra Mundial y septiembre de 1960. El 5 de marzo de 1959 se firmó en Ankara un acuerdo bilateral de Defensa entre Irán y Estados Unidos. Bajo dicho acuerdo el gobierno de Estados Unidos "en caso de agresión, tomaría una acción apropiada incluyendo el uso de la fuerza armada, como se acordó mutuamente y como se había considerado en la Resolución Conjunta para promover la paz y la seguridad en el Medio Oriente", la Resolución Conjunta, "The Joint Resolution", se refiere a la Doctrina Eisenhower. (7)

### 1.3 La Revolución Blanca

Desde 1953, el Sha pudo fortalecer el poder del Estado en todo Irán. Se abrogaron todas las libertades legales constitucionales y en muy poco tiempo se acabó con los centros de oposición. sin embargo la economía irania venia experimentando una recesión desde 1958, el presupuesto era deficitario y el Sha estaba en conflicto con varios funcionarios civiles y militares.

Para el año de 1961 subió al poder en Washington John F. Kennedy quien le hizo saber al Sha que sólo continuaría apoyándolo a condición de que iniciara un programa de reformas. El gobierno estadounidense concedió un préstamo a Irán por 35 millones de dólares para la ejecución de ciertas políticas; así el Sha realizó un proyecto llamado "Gran Civilización o Revolución del Pueblo y del Sha", de la cual surgió posteriormente la Revolución Blanca, la cual constaba de 7 puntos, proclamada el 27 de enero de 1963.

1.- El Sha propuso que Irán recuperara el influjo que había perdido tras varios períodos de decadencia.

2.- Llevar a cabo simultáneamente una reforma agraria sin precedentes, iniciar el proceso de industrialización y liberar a Irán de las tutelas extranjeras.

3.- Nacionalización de aguas y bosques

4.- Participación de los obreros en los beneficios de las empresas.

5.- La reforma a la ley electoral con voto para las mujeres y la creación de ejércitos del saber y la higiene.



6.- Expansión de servicios sociales y educativos.

7.- Renovación y reconstrucción urbana y rural, además de incrementar infraestructuras tales como, caminos, vías férreas y otros sistemas de comunicación. (8)

Es importante considerar que el punto más sobresaliente de la Revolución Blanca fue el de la reforma agraria. El Sha reparte entre los campesinos las tierras de que su padre se había apoderado. Reza Pahlevi dispone que ningún propietario podrá poseer más de un pueblo o el equivalente a un pueblo. El excedente de tierras se venderá a los campesinos que las cultivan.

Ahora bien, la posición norteamericana en Irán era similar a su posición en América Latina, donde se inició un programa de reformas con el nombre de "Alianza para el Progreso" para combatir el impacto de la Revolución Cubana. En ambos casos, la administración Kennedy creía que, por razones políticas, el único camino para preservar a los Estados pro-occidentales, es decir capitalistas, del Tercer Mundo consistía en la realización de un programa de reformas en el que la reforma agraria ocupaba un lugar prominente.

Para septiembre de 1977, se agregaron otros trece puntos al proyecto "Revolución Blanca", entre ellos la creación de un ejército de salubridad, la reforma administrativa y un programa de acciones para los trabajadores.

Según Halliday, "el programa no es original en ningún sentido ya que la mayoría de las medidas son las que debería

tomar cualquier proceso de desarrollo capitalista. Por otro lado, la Revolución Blanca ahora llamada la Revolución Popular del Sha, no es, por supuesto, ninguna revolución: es más bien un programa de reformas implantado para impedir una revolución y para fortalecer la posición de la monarquía y el Estado" (9)

Así pues, es evidente que el período 1960-63 marca un punto de inflexión en el desarrollo del Estado iraní. Por un lado, estableció el inicio de la promoción estatal del desarrollo capitalista acelerado. Por el otro, puso a la defensiva a las diversas fuerzas políticas que se habían resistido a la consolidación del poder del Sha y al fortalecimiento general del Estado Pahlevi. Este período marcó el fin de toda esperanza de que las fuerzas liberales de 1941-1953 pudieran cambiar el veredicto del golpe de 1953.

#### 1.4 Asistencia Militar

Las fuerzas armadas de Irán adquirieron una posición dominante en 1921, antes de que Estados Unidos desempeñara algún papel importante; pero es sobre todo la relación existente con Estados Unidos lo que consolidó desde 1941 el papel de los militares y les permitió obtener dimensiones enteramente nuevas, tanto en el exterior como dentro de su país.

La relación militar con Estados Unidos ha atravesado por 4 fases distintas, en cada una de las cuales han aparecido nuevos factores económicos y estratégicos.

1) La primera etapa se presenta de 1943 a 1947, tras la ocupación por Gran Bretaña y la URSS de Irán en 1941. Allanaron el camino para que 30 mil soldados norteamericanos del Comando del Golfo Pérsico entraran a Irán a encargarse del transporte de abastos a la URSS. Las fuerzas armadas iránias habían sido destruidas en 1941 de modo que Estados Unidos llevó al año siguiente dos pequeñas misiones para que ayudaran a reconstruir tales fuerzas. Una misión militar se asignó al ejército con funciones de asesoría, y otra misión más operativa, la Gemish, trabajó con la gendarmería. La Gemish fue en esa época el eslabón más importante entre Estados Unidos y el órgano de seguridad iraní: fue a través de ella y de su jefe el coronel Norman Schwartzkopf, funcionario del FBI y ex jefe de la policía estatal de Nueva Jersey, como Estados Unidos desempeñó un papel activo en el aplastamiento de la resistencia popular en Azerbaiján y Kurdistán después de su reocupación en 1946-47.

En 1946, cuando la secesión de Azerbaiján, los soviéticos se negaron a evacuar, el norte del país, como se había decidido en la Conferencia de Teherán que sostuvieron en 1943 Roosevelt, Churchill y Stalin. Fue necesario un ultimátum secreto de Truman a los soviéticos para que Stalin accediera a replegar sus divisiones. Se dice que este ultimátum venía acompañado de una amenaza nuclear. Desde ese momento, para Estados Unidos, Irán se convertiría en una fortaleza de avanzada en uno de los costados de la URSS.

La doctrina Truman no consistía en implantar directamente las fuerzas estadounidenses en Irán, sino en organizar ahí la mayor fuerza posible. En aquella época, el ejército iraní contaba con 150 mil hombres equipados con material obsoleto: cañones y fusiles de épocas anteriores a la guerra. La aviación y la marina simplemente no existían. Para Estados Unidos, Irán debía convertirse en un muro frente a la URSS, en un territorio donde el ejército pudiera oponer resistencia en caso de un enfrentamiento entre los dos grandes. Estados Unidos decidió "americanizar" el antiguo ejército iraní. (10)

2) La segunda etapa va de 1947 a 1964. Es en esta época que Estados Unidos e Irán consolidaron su relación pues se inicia la Guerra Fría. En 1947, la misión militar, que antes era sólo asesora, se volvió operativa, con el nombre de Armish y Estados Unidos empezó a llevar material bélico sobrante para un gran refuerzo posterior.

"En términos generales, Irán recibió entre 1946 y 1970, de Estados Unidos, ayuda militar con valor de 1,365,600 millones de dólares; de esta suma, 830.4 millones se recibieron en forma de asistencia militar y representaron el 7% del total de la ayuda norteamericana bajo su programa de asistencia militar en este período; los restantes 504.1 millones de dólares se recibieron en forma de créditos". (11)

Dentro de este período (1947-64) es muy importante hablar sobre la acción de la "Sazman-i Etaat va Amjniaat-i Keshvar" (SAVAK), es decir, la Organización Nacional de Información y

seguridad.

La SAVAK fue una unidad de espionaje creada en el año de 1957 y dirigida por el general Teimur Bakhtiar, quien a su vez estaba asesorado por una misión secreta permanente norteamericana.

Esta unidad de espionaje formaba parte de la oficina del Primer Ministro, su jefe era designado por el Sha y tenía el rango de Viceprimer Ministro. La SAVAK se ocupaba de obtener información "requerida para el mantenimiento de la seguridad nacional, descubrir espías y sospechosos de violar las leyes relativas a la actividad antimonárquica, la oposición armada, los delitos militares y los atentados contra la vida del rey y del príncipe de la Corona".

Las actividades de la SAVAK se extendieron más allá de las fronteras de Irán por lo menos en 4 sentidos: espionaje, acciones encubiertas en el exterior, conexión con servicios de espionaje extranjero y vigilancia de los disidentes iraníes.

Las dos agencias extranjeras con las que cooperó durante más tiempo la SAVAK fueron las de Estados Unidos e Israel. La creación de la SAVAK se realizó bajo supervisión estadounidense y es significativo el hecho de que no fue sólo la CIA, es decir, la agencia de espionaje en el extranjero sino también el FBI, la agencia interna, los que proporcionaron tal ayuda.

Por la forma en que Irán desarrolló sus actividades de espionaje en el extranjero, podemos suponer que otra agencia norteamericana, la Agencia Nacional de Seguridad de vigilan--

cia Electrónica, estableció contactos con la SAVAK. Desde 1973, Teherán había sido el cuartel principal de la CIA en el Medio Oriente, antes estaba en Nicosia. El nombramiento como Embajador de Estados Unidos en Irán del ex jefe de la CIA, Richard Helmes entre 1973 y 1976, también resulta ilustrativo a este respecto. (12)

Pero volvamos a 1953-54 y la "americanización" del ejército iraní. Irán se integró entonces a la Organización del Tratado Central (CENTO), el pacto de alianza defensiva que unía a Paquistán, Turquía e Iraq con Gran Bretaña, miembro no regional, y Estados Unidos, miembro asociado. Dicha organización fue creada en 1955 a instancias de Estados Unidos con la obvia intención de destinar a Irán el papel de "Gendarme del Golfo Pérsico".

En ese tiempo se formó una escuela de oficiales siguiendo el modelo de West Point. Los oficiales se integraban muy jóvenes a la escuela y recibían entrenamiento intensivo durante 5 años. La mayoría recibía cursos en Estados Unidos y gozaban de una situación económica análoga a la de los oficiales estadounidenses. Los suboficiales técnicos, mecánicos de aviación, especialistas en radio y los que operaban las armas más modernas también eran enviados a Estados Unidos. Y finalmente lo más importante: Estados Unidos suministraba la mayor parte del armamento. "El Sha tiene una gran ventaja desde el punto de vista norteamericano: paga. Después podría incluso contribuir con sus ganancias del petróleo al desarrollo de ciertas armas

norteamericanas". (13)

3) La fase siguiente de 1964 a 1972, se caracteriza primero porque: Irán empieza a desarrollar por vez primera una política exterior regional; es decir, el Sha sostenía que estaba defendiendo los intereses occidentales frente a los regímenes árabes radicales tales como el de Nasser en Egipto y el republicano de Iraq, en las fronteras de Irán. Segundo: la política armamentista de Estados Unidos cambió de la provisión directa de ayuda hacia la venta de armas a crédito, tanto en el sentido de ser un aliado como en el de su capacidad para recibir préstamos a escala considerable, derivada de sus crecientes ingresos petroleros. Tres fechas destacan en este período:

A) Junio de 1964: El Sha, en una visita a Washington, convenció a un presidente Johnson anteriormente renuente de que debería hacer a Irán ventas militares a crédito. Este crédito aumentó de 48 millones de dólares en 1965 a 300 millones en 1973, lo que marcó un cambio estratégico de la política estadounidense hacia el nuevo nivel de abasto de armas. El programa de asistencia militar de Estados Unidos terminó en 1969 mientras que las ventas de gobierno aumentaron en mayor medida aún.

B) Enero de 1968: los británicos anunciaron que retirarían sus fuerzas del Golfo Pérsico para fines de 1971, e Irán hizo saber que estaba decidido a tomar el lugar de Gran Bretaña como la potencia militar dominante. El Golfo y el norte del Océano Indico se convirtieron entonces en la mayor preoccu

pación en la planeación de la defensa irania: se movilizaron soldados desde la frontera occidental con Iraq y las provincias del sur de Irán que colindan con el Golfo. Los tres cuerpos principales del ejército tenían sus cuarteles generales en posiciones correspondientes a esta nueva postura: el primer cuerpo del ejército tenía su cuartel en Kermanshah, el segundo en Teherán y el tercero en Shiraz.

C) Junio de 1969: el presidente Nixon afirmó en la isla de Guam que Estados Unidos estaba interesado en alentar a los países del Tercer Mundo para que asumieran una mayor responsabilidad por su propia defensa de que Estados Unidos promovería este proceso. Esta doctrina nueva se relacionaba más inmediatamente con Vietnam, pero tenía implicaciones para Irán y el Sha tenía dinero y ocupaba una posición estratégica para aprovechar la oportunidad, y esta llegó tres años más tarde.

(14)

4) 1972 y después, última fase: Irán entró a una dimensión enteramente nueva de compras de armamento a resultas de lo siguiente:

a) En mayo de 1972, el presidente Nixon visitó Teherán y en un acuerdo secreto sin paralelo en las relaciones de Estados Unidos con los países no industrializados, aceptó vender a Irán todas las armas convencionales que necesitara. En particular, aceptó entregar a Irán aviones de combate F-14 y F-15, los más avanzados en aquella época.

b) A fines de 1973, los países miembros de la OPEP elevaron el precio del petróleo 5 veces. Así se quintuplicaron los



ingresos petroleros de Irán y con ello su capacidad para comprar armas. Ambos sucesos unidos desataron el mayor auge de la venta de armas de la Historia.

PRESUPUESTO DE DEFENSA DE IRAN 1970-77  
(En millones de dólares a precios corrientes)

AÑO	PRESUPUESTO DE DEFENSA	AUMENTO PORCENTUAL SOBRE EL AÑO ANTERIOR
1970	880	-----
1971	1065	17
1972	1375	29
1973	1525	11
1974	3680	141
1975	6325	72
1976	8925	41
1977	9400	5

\*Fuente: US Military Sales to Iran, Informe técnico al subcomité de Asistencia Extranjera del Comité de Relaciones exteriores del senado Washington 1976, p.13

VENTAS MILITARES DE ESTADOS UNIDOS A IRAN 1950-77  
(En millones de dólares a precios corrientes)

AÑO	AÑO	SUMA	
	1950-69	757.0	
	1970	113.2	
	1971	396.8	
	1972	519.1	
	1973	2157.4	
	1974	4373.2	
	1975	3021.0	
	1976	1458.7	
	1977*	4213.0	
	1950-77	17009.4	*Estimación

Fuente: Michael Klare, basada en publicaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos. 1978.

Después del acuerdo celebrado entre Nixon y el Sha en 1972, y sobre todo después del aumento del precio del petróleo, descendió sobre Irán un ejército de vendedores de armas norteamericanas, como también de armas británicas y francesas en menor número. Sin embargo, pronto se puso en claro que, aún en términos de lo que quería el gobierno iraní y sus proveedores extranjeros, es decir, dejando de lado las implicaciones políticas, habían surgido graves dificultades:

I El flujo de armas estaba fuera de control: ninguna agencia estadounidense estaba vigilando los pedidos de Irán, y tampoco lo estaba haciendo ninguna agencia del gobierno iraní. La única responsabilidad de las grandes compras residía en el Sha, quien no se cuidaba de investigar los detalles de lo que Irán adquiriría. Para 1976 se habían deteriorado las relaciones entre los funcionarios norteamericanos e iraníes involucrados: el Sha acusó a las firmas estadounidenses de vender a Irán equipo inútil y de elevar sus precios en forma injustificada. Mientras que los investigadores del Congreso de Estados Unidos estaban cuestionando la capacidad de Irán para usar las armas que adquiriría.

Todavía el presidente del Estado Mayor Conjunto, general George Brown, observó: "al examinar los programas militares del Sha nos preguntamos si no tendrá ilusiones de reconstruir algún día el imperio persa", y el Embajador estadounidense en Teherán, Richard Helms, declaró que se había "lavado las manos" respecto de algunas partes del programa de ventas milita

res de Estados Unidos. (15)

II El más grande de los problemas prácticos era la escasez de iraníes calificados para mantener y usar el nuevo equipo.

III No existían estimaciones adecuadas de la eficiencia de la maquinaria militar iraní, pero dada su falta de experiencia en combates serios, tal eficiencia no era comparable en términos prácticos a la de otras fuerzas asiáticas, como las de la India, Paquistán, Jordania o Israel, por ejemplo. (16)

IV El flujo de armas norteamericanas generó la necesidad de implantar más y más personal militar de Estados Unidos.

V Irán ha dependido también decisivamente de Estados Unidos respecto a la continuación de los abastos. Erigió una industria de producción militar y construyó en Isfahán, con ayuda británica, una fábrica de equipos militares con valor de 800 millones de dólares. En 1976 se inició el ensamblaje de helicópteros Bell AH-1J en Shiraz, pero este programa de ensamblaje no disminuye en modo alguno la dependencia de Irán en materia de abastos y tecnología importados. Irán compró también una flotilla de aviones de transportes de armas y transformó a los Boeing 707 en tanqueros de reabastecimiento de combustible en vuelo para poder traer por vía aérea sus propios abastos desde Estados Unidos.

VI Como podría haberse esperado, el auge de las armas en Irán fue acompañado de considerable corrupción, en particular

en cobro de sobornos o concesiones por intermediarios que ag-  
tuaban a nombre de las firmas estadounidenses y de otros paí-  
ses.

La presencia militar norteamericana en Irán sirvió desde  
la década de los 40s hasta la caída del Sha, a fines de 1978,  
como una base de avanzada para vigilar a la Unión Soviética  
y cuidar los intereses de Estados Unidos en la zona.

Como consecuencia de la Revolución Islámica, un buen nú-  
meros de programas quedaron truncos. Tal es el caso del pro-  
yecto IBEX, el cual involucraba varios cientos de expertos  
norteamericanos en monitoreo que trabajarían permanentemente  
en Irán.

Por otra parte una cantidad considerable de material bé-  
lico previamente contratado por el Sha incluyendo los moder--  
nos aviones AWACS, nunca llegó a su destino.

NOTAS DEL CAPITULO I

- (1) Barry Rubin, Paved with Good Intentions, The American Experience in Iran, p.8
- (2) Yonah Alexander and Allan Naves. The United States and Iran: a documentary history, p.1
- (3) W.B. Fisher, Iran Physical and Social Geography, p.336
- (4) La abdicación de Reza Khan en favor de su hijo, posteriormente conocido como el Sha de Irán, obedeció a que el primero incurrió en el error de mostrar simpatías hacia la Alemania Nazi, por lo cual fuerzas británicas y soviéticas invadieron Irán en agosto de 1941 forzando a Reza Khan a abandonar el país y dejar el poder, quedando en el trono su hijo de 21 años. Barry Rubin op.cit pág.52
- (5) Fred Halliday, Irán dictadura y Desarrollo. p.35
- (6) Ibid. p.36
- (7) Doctrina Eisenhower: el 5 de enero de 1957 el presidente Eisenhower propuso al Congreso norteamericano una nueva política exterior para el Medio Oriente basada en tres consideraciones: 1) la utilización de las fuerzas armadas para asegurar y proteger la independencia de las naciones que pidan su ayuda para hacer frente a la agresión armada de un país comunista; 2) ayuda al desarrollo económico; y 3) asistencia militar a todos los países que lo deseen. Edmundo Hernández Vela, Diccionario de Política Internacional. p.61
- (8) Claire Brière y Pierre Blanchet, La Revolución en nombre de Dios. p.129. Ver también estudio monográfico sobre Irán Secretaría de la Presidencia, p.22
- (9) Fred Halliday, op.cit. 60.
- (10) Claire Brèire, op. cit, p.145
- (11) Fred Halliday, op.cit. p.120
- (12) Ibid. p.109
- (13) Claire Brière, op cit.147
- (14) Fred Halliday, op.cit. p.122 y 123.
- (15) Diario "The Guardian", 20 de oct. de 1976 y 4 de enero 77
- (16) Fred Halliday, op. cit. p.115

**CAPITULO II**

**LA REVOLUCION ISLAMICA**

**SUMARIO**

- 2.1 Fuerza Política del Islam
- 2.2 Modelo Islámico Civilizadorio
- 2.3 Caída del Sha
- 2.4 Llegada de Khomeini
- 2.5 Establecimiento de la  
República Islámica

## 2.1 Fuerza Política del Islam

Es de suma importancia entender el papel desempeñado por la religión en las diversas culturas, sobre todo si pretendemos analizar consideraciones políticas de un país como Irán.

En la época pre-islámica los antiguos persas profesaron el zoroastrianismo que era la religión de Estado en la época en que el imperio adquirió su mayor esplendor, el cual decayó tras la derrota de Darío a manos de las huestes de Alejandro el Magno.

Como consecuencia de la aparición de Mahoma y de la extensión de la fe islámica en el Medio Oriente, el Islam llega a Persia y logra desterrar la antigua religión. Desde sus inicios el Islam estuvo asociado a factores políticos e ideológicos, siendo así que en el año 750 la rebelión abassida se valió de éste para derrocar al califato.

Más tarde, al generalizarse la versión chiita del Islam en Persia, se unificó la dinastía safabid, convirtiéndose en religión oficial en 1502. Los safabids lanzaron incluso una campaña chiita de propaganda internacional para ganar convertidos, tal como lo habían hecho con ellos los revolucionarios abassidas.

El Islam surge dentro de la dualidad de regulación política y religiosa que era necesaria para la propagación de la nueva fe y la unificación y fortalecimiento del imperio que de ésta resultara. (1)

La nueva fe constituía un modo completo de vida que no sólo reglamentaba las creencias, sino también las reglas de



comportamiento social, reglamentaba las relaciones humanas en los aspectos económico, político y jurídico. (2)

Distinguir entre las dos ramas principales del Islam, a saber: chiita y sunita, es preciso remontarse a la situación planteada por la sucesión de Mahoma.

No obstante la óptima propagación de la fe islámica, Mahoma no reglamentó la forma en que se designaría la jefatura espiritual y temporal de la Ummah, comunidad islámica. Mientras vivía Mahoma en sus ausencias o ante cualquier incapacidad para dirigir a la comunidad era sustituido por el compañero que estuviere más cerca, de esta manera se aseguraba el cumplimiento de la oración y el arreglo de los problemas cotidianos: Pero no se estableció ningún criterio para designar a su sucesor.

La sucesión del profeta sería únicamente en el aspecto terrenal y en la dirección de la plegaria, pues su calidad de mensajero divino era intransmisible. Puesto que para sucederlo era necesario mostrar fe, rectitud y honestidad, los posibles sucesores eran todos compañeros y al no haber una designación precisa hubo discrepancias dentro de la Shura, Consejo, las cuales se resolvieron con el predominio del grupo burgués de la Meca.

La sucesión en favor de Abu Bakr y posteriormente de Umar no planteó grandes problemas, ya que eran ancianos que habían seguido desde los primeros años del Islam la nueva fe, y se encontraban muy cerca del profeta. Pero durante el mandato de este último, Alí empezó a manifestar abiertamente su deseo de dirigir a la comunidad, por lo cual defendió el principio de

que la Ummah debería ser encabezada por un musulmán que se encontrase unido por el lazo consanguíneo con el profeta, y en este caso él era el único capaz de suceder a Mahoma.

Es así que surge el chiísmo, o sea partidarios de que sólo los descendientes del profeta por la rama de Fátima, po---drían ser Califas. Esta facción se enfrenta a los sunitas o sea los que seguían el sendero del Profeta y respaldaban algu- nas de las costumbres árabes tribales.

La diferencia entre la suna, sendero, camino, y la chií, partido, marca la historia del imperio musulmán en el aspecto político a partir de la muerte de Uthman; así es que Alí, chiíta, lo derrota Muawiya, sunita, estableciendo la dinastía Uma- lla, que después de un siglo de dominación es derrotada por Abu-al-Abbas, que a su vez, establece la dinastía que lleva su nombre. (3)

Como diferenciación política básica entre las ramas chií- ta y sunita, esta última se caracteriza por ser sumisa y buro- cratizada, mientras que el clero chiíta conserva una jerarquía paralela e independiente.

En el Occidente cristiano se logró la separación de la Iglesia y el Estado tras la derrota del poder espiritual, del Papa, por el poder temporal, del monarca; llegando incluso el propio Jesucristo a hacer la distinción de entre lo que se rendía a Dios y lo que se rendía al César. Posteriormente, la Re- forma y el Renacimiento, así como la aceptación del Darwinismo y el método científico minaron el papel de la religión como fuente de filosofía, ética y derecho.

Nada semejante aconteció en el mundo islámico. En el caso iranio, en el presente siglo, la inmensa mayoría de la población continuó con su tradicional estilo de vida apegado a los valores islámicos. Pero por otra parte, un número relativamente reducido de iranos educados bajo puntos de vista del Occidente liberal, tecnocrático e incluso marxista gobernaban centralmente, o formaban parte de grupos intelectuales, ignorando a la mayoría de la población, fundamentalmente rural.

Mientras tanto, en otros sectores del mundo islámico los acontecimientos tomaban otro giro, como en el caso de Turquía con Atatürk quien implantó cambios básicos a través de su imposición del modernismo y el nacionalismo turco sobre el pueblo; o como en la región árabe, donde el nacionalismo obtuvo un gran dominio ideológico, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial.

En contraste, en Irán no existió tal intermediación del papel islámico y, consecuentemente, el clero desempeñó un mayor papel en el movimiento nacionalista y antimperialista que el desempeñado por el pueblo en el mundo árabe y sunita. En este contexto, se sospechaba de Occidente no sólo debido a su naturaleza no musulmana sino también a sus sentimientos de superioridad sobre Oriente. ¿Por qué era el mundo musulmán más ético y espiritual que Occidente, sujeto al poder occidental? La respuesta era que Occidente había suprimido inmoralmemente los derechos musulmanes. El modernismo era visto como una conspiración futura para derrocar política y económicamente a los musulmanes; y aún peor amenazaba con despojarlos de

su antigua religión y posición. (4)

## 2.2 Modelo Islámico Civilizatorio

En Irán una dinastía con más de 50 años en el poder. poseedora de un aparato de represión reputado como uno de los más poderosos del mundo, cayó ante un movimiento de masas que defendía un proyecto de civilización islámico.

Esta lucha popular es manifestación de un sólo fenómeno que por su fuerza transformadora y su raíz civilizacional musulmana se ha dado en llamar el "Islam Revolucionario". Es entonces en la diversidad de la resistencia que se puede encontrar la unidad de la lucha por alcanzar una alternativa propia, que además de tener una capacidad transformadora, ofrezca un proyecto para el futuro.

La resistencia popular comienza a gestarse, y de hecho surge como una respuesta, en los momentos en que las potencias occidentales penetran en la zona y su acción se manifiesta como una fuerza desintegradora que amenaza directamente a la civilización localizada allí desde hace doce siglos, es decir a la cultura islámica. Esa es la causa por la que se analizan los movimientos insurreccionales en Irán, Afganistán y el Asia Central Soviética.

El proceso de formación del pensamiento islámico revolucionario como lo conocemos actualmente, atravesó por distintas etapas. Abdel Malek distingue por lo menos dos: la primera: que se extiende aproximadamente de 1800 a 1945 presencia

una lucha contra el ocupante imperialista en donde el objetivo es restaurar una soberanía formal transformándola paulatinamente en poder de Estado para dirigir los destinos nacionales. La segunda etapa de la lucha tiene como objetivo la instauración de Estados nacionales independientes capaces de asegurar a las distintas clases sociales el acceso a los recursos materiales y culturales de la nación. (5)

La lucha es por lo tanto esencial e históricamente una lucha de liberación nacional. A pesar de eso, no se puede hablar de una lucha nacionalista en el sentido en que comunmente se utiliza en Occidente, ya que muchos de estos países islámicos no son de hecho, Estados-Nación. Abdel Malek propone entonces lo que él llama "nacionalitarismo" para oponerlo al nacionalismo:

En realidad, las manifestaciones activistas del nacionalismo europeo son actos de naciones desde hace tiempo seguras de ellas mismas de Estados nacionales soberanos e independientes en lucha por la posesión de fuentes de riqueza en Europa y en el mundo. En el mundo árabe; todo lo contrario, la lucha entablada contra las potencias imperialistas de ocupación se propone por objetivo -además de la evacuación de territorio nacional-, la independencia y soberanía del Estado nacional, el profundo desarraigamiento de las posiciones de la potencia ocupante, la reconquista del poder de decisión en todos los dominios de la vida nacional, preludio a esa reconquista de la identidad... (6)

El modelo islámico civilizatorio se caracteriza en Irán por constituir un movimiento nacionalista religioso, el fundamentalismo islámico, en el que participan artesanos, pequeños comerciantes, parvifundistas y líderes religiosos.

De esa manera en Irán, por primera vez tenemos un esfuerzo de renovación del Islam que no es una aculturación, que no se acomoda fuera de sí misma para justificarse o para encontrar las armas -en el pensamiento de Nietzsche, Bergson, Kant, Marx....- sino que se opera por una vuelta al Corán.... (7)

Se tacha comúnmente al fundamentalismo islámico como una corriente reaccionaria y retrógrada porque busca una vuelta al pasado. Este tipo de apreciaciones caen en el error de reproducir esquemas occidentales. Se cree, que porque la Iglesia cristiana jugó un papel conservador en la Europa del Siglo XIX, ver supra 2.1, cualquier manifestación política del Islam tiene entonces también una esencia reaccionaria. Toda proporción guardada, sería como se afirmase que el movimiento de Lutero por buscar una vuelta a las fuentes del cristianismo, hubiera representado en sí un movimiento reaccionario.

El fundamentalismo islámico plantea una lucha nacionalitaria, ya que el objetivo primordial es la expulsión del imperialismo. El nacionalismo secular por su parte tiene un proyecto elaborado por la burguesía naciente que pretende crear un Estado-Nación imitando el modelo europeo. Por lo tanto esta corriente puede llamarse nacionalista en toda la expresión del término, ya que sus objetivos son cualitativamente distintos a los de la corriente nacionalitaria.

Históricamente, la revolución islámica surge cuando el modelo secularizador se ha agotado y las reformas instrumentadas encuentran sus límites, mostrándose incapaz de contener el creciente proceso de alienación cultural y la creciente dependencia del país frente a Occidente. Emerge entonces la alternativa islámica que recoge y expresa la diaria lucha del pueblo y se nutre también de la lección que aporta la experiencia secularista.

Para comprender en su justa dimensión la esencia y naturaleza del Islam resulta obligatorio destacar la unidad del mismo, pues éste, al contrario de las civilizaciones occidentales no se manifiesta como continuo dualismo, sino como una profunda unidad. Mientras que en el pensamiento Occidental siempre hace la división entre cuerpo y espíritu, entre razón y fe, entre profano y sagrado, entre religión y política, entre religión y economía, etc., para los musulmanes estas distinciones se separan de la vida práctica. Para los occidentales la religión es un asunto de fe personal, mientras que para los musulmanes es un asunto social. De esta manera, el militante y el teólogo no están opuesto, al contrario deben ser una misma persona.

Justamente, la Revolución Islámica en Irán quiere ser al mismo tiempo un esfuerzo de renovación espiritual, con la búsqueda de una verdadera identidad, el descubrimiento de una autenticidad en el Islam, y una lucha de liberación. Revolución cultural en el pleno sentido del término, donde lo político, lo social, lo económico, se funden en una sola unidad con lo religioso. (8)

### 2.3 Caída del Sha

Precisar con exactitud los antecedentes del derrumbamiento de la dictadura Pahlevi no es tarea fácil, pues existieron un sin número de acontecimientos que alejaron al Sha de su pueblo y que provocó en éste una natural oposición al régimen represivo de aquél. Para recordar la fragilidad que en momentos mostró el poder del Sha, baste recordar que en 1953 se vió obligado a dejar el poder, aunque por tiempo mínimo, ver supra 1.2. Asimismo acontecieron otros sucesos en las décadas de los 50s y 60s que en diverso grado fueron acrecentando la resistencia organizada al régimen especialmente dentro del clero chiíta.

Es interesante destacar la fastuosidad y ostentación mostrados en 1971, en ocasión del 2,500 aniversario de la monarquía irania, celebración que se conoció como las "Fiestas de Persépolis". Se gastaron 300 millones de dólares y se invitó a los principales soberanos y representantes del mundo. Para dar la impresión de un régimen de tranquilidad, se tomaron medidas tales como: la evacuación de la mayor parte de la población en 100 kilómetros a la redonda; el arresto de elementos sospechosos; Shiraz, 300 mil habitantes, quedó extrañamente desierta, vigilada permanentemente por el ejército y la policía; en Teherán, los liceos y las universidades fueron cerradas para evitar cualquier agitación y los oponentes fueron encarcelados o vigilados.

El clero chiíta en voz de su principal representante, el Ayatola Khomeini, ver infra 2.3, desde su exilio en Nadjaf,



Iraq lanzó una severa crítica condenando las mencionadas fiestas, señalando el terrible contraste entre éstas y la miseria del pueblo. (9)

Los antecedentes más inmediatos del derrocamiento del régimen Pahlevi se remontan a 1978, a partir de la publicación en el diario Ettelat, de vinculación oficial, de un artículo particularmente calumnioso y difamatorio en contra del Imán Khomeini escrito por el Ministro de Información, ver infra 2.3. Con posterioridad a ese acontecimiento, las manifestaciones se multiplicaron y al día siguiente, el Ayatola Rohani rompe en plena mezquita un ejemplar del periódico antes citado.

En respuesta, la represión del régimen se hizo cada vez más sangrienta aumentando el número de detenciones y de presos políticos, siendo el hecho más dramático el incendio del cine Rex en Abadán, el 19 de agosto, en el que perdieron la vida 700 personas. En un principio el Sha pretendió culpar al clero chiíta de dicho atentado, pero se descubrió la maniobra y quedó establecida la responsabilidad del régimen. (10)

Por su parte, el Ayatola Khomeini se vió obligado a abandonar su refugio en Iraq, ya que el gobierno de éste último país accedió a las presiones del Sha y expulsó al líder religioso quien viajó a Francia y se instaló en NeupMles-le Chateau, ver infra 2.3.

En virtud del agravamiento de la situación, así como de la preocupación de Estados Unidos por sus intereses en Irán, el presidente Carter convocó al Consejo Nacional de Seguridad

y efectuó una reunión urgente sobre Irán. El 3 de enero de 1979, el Departamento de Estado creó un grupo especial a fin de revisar su posición respecto a Irán; y Estados Unidos ordenó al general de la Fuerza Aérea, Robert Huyser, subjefe de las fuerzas estadounidenses en Europa, que analizara la situación política y militar en el área. (11)

Finalmente, el 16 de enero el Sha sale exiliado, -la familia real había hecho lo propio el día 29 de mes anterior dirigiéndose a Estados Unidos- con destino a Egipto, (12) habiendo dejado previamente el poder a Chapour Bakhtiar, designándolo Primer Ministro, ver infra 2.3.

#### 2.4 Llegada de Khomeini.

Ruhollah Khomeini nació en el año de 1900 en el pueblo de Khomeini, sitio del cual toma su nombre. A la edad de 27 años el Ayatola comenzó a enseñar filosofía. Nunca tuvo otra aspiración que la vida religiosa. En 1941 empezó su lucha contra la dinastía Pahlevi. En esta época empezó también a escribir y en su primer ensayo denunció las atrocidades del gobierno de Sha Reza Khan, afirmando que: "las órdenes del Estado dictatorial de Reza Khan no tienen valor alguno y deben ser pasto de llamas". (13)

Este ensayo contiene también su credo político, que se resume en tres grandes temas: Irán en manos de los extranjeros; el pueblo no era independiente y los políticos corruptos saquean las riquezas del país.

Al abdicar Reza Khan en favor de su hijo, el Sha Muhammed

Reza Pahlevi, ver supra 1.1, Khomeini recibió con todo tipo de reservas esta designación y empezó a confirmarlas al observar una serie de reformas espectaculares, tales como la reforma agraria, la occidentalización de la mujer, el establecimiento de organizaciones bancarias y la proyección de películas norteamericanas.

En 1962, la oposición de Khomeini se acentuó aún más. El Ayatola afirmaba en sus sermones que el Sha había vendido Irán a los extranjeros y que temía por el Islam pues decía estaba en peligro. Después de la muerte del Ayatola Koshani, Khomeini se convirtió en líder de la comunidad chiíta y en 1963, fue arrestado por el Sha pues su poderío lo preocupaba. Khomeini fue encarcelado en el cuartel Ichratabid, cerca de Teherán y luego fue puesto bajo arresto domiciliario durante casi un año en Chemeran, al norte de la capital. Este hecho provocó repetidas manifestaciones que tuvieron un saldo de mil muertos cuando el ejército disparó sobre la multitud.

En 1964, el Ayatola Khomeini fue liberado y enviado al exilio, primero fue a Turquía y luego a Nadjaf, lugar santo del islam chiíta en Iraq, donde permaneció 14 años.

El motivo principal por el que Khomeini fue arrestado y posteriormente exiliado se debió a que el Sha en 1964 firmó un tratado con Estados Unidos mediante el cual ningún ciudadano norteamericano podía ser llevado ante la justicia irania. El Ayatola Khomeini criticó violentamente "esta traición y prueba de afiliación a Estados Unidos". (14)

Desde su exilio, Khomeini enviaba con regularidad cintas magnetofónicas grabadas a sus seguidores en Irán, quienes las escuchaban en las mezquitas del país, ya que era el único lugar donde no intervenía la policía y como sólo el podía hablar, por encontrarse fuera del país, se convirtió muy pronto en el símbolo de la resistencia al Sha.

Años más tarde, en octubre de 1977, el hijo de Khomeini fue hallado muerto en Iraq y aunque la causa de su fallecimiento según la versión oficial, fue un ataque cardíaco, el Ayatola consideró que fue víctima de agentes iraníes como parte de una tentativa del régimen por golpear a la oposición religiosa.

Por su parte, los incondicionales del Sha desmintieron categóricamente tales acusaciones y sostuvieron que Khomeini había desde ese momento desatado una venganza personal contra el monarca.

Un ataque directo contra el Ayatola en el diario progobernamental Ettelat, del 7 de enero de 1978, desencadenó también una ola sangrienta de manifestaciones en ese mismo año. A partir de esos acontecimientos, se desarrollaron en Qom manifestaciones de protesta. La policía intervino brutalmente y hubieron muchos muertos además de heridos. Manifestaciones similares tienen lugar en Mashad, Isfahán, Ahvaz, Shiraz y Kerlán.

Apetición del Sha, Khomeini fue expulsado de Iraq y finalmente encontró refugio en Francia, en la residencia de un grupo de seguidores de Neuphles -Le Chatteau-, en las afueras.

de París.

Durante su exilio, Khomeini se dirigió frecuentemente a los creyentes, exhortándolos a luchar contra el régimen y contra el sionismo y el imperialismo. Por su parte, los creyentes se dirigían a él para obtener consejos y directivas.

Desde París el Ayatolá Khomeini dirigió el asalto final contra el Sha en discursos electrizantes que, escuchados en Irán provocaron manifestaciones sangrientas y finalmente la partida del Sha.

Los mensajes de Khomeini desde París fueron reproducidos en cassetes en más de 20,000 ejemplares que entraron clandestinamente a Irán.

Por primera vez, el periódico Ettelát publicó una foto del Imán Khomeini, en esa ocasión el diario cuadruplicó su tiraje y en la calle la gente abrazaba la imagen del Ayatolá. El régimen amenazó con represalias al periódico. Los trabajadores por su parte publicaron un manifiesto y lo distribuyeron en la vía pública a la multitud que les expresaba espontáneamente su solidaridad. Esta huelga de la prensa no era ordinaria; en realidad los medios masivos estaban sometidos en Irán a una terrible censura.

No solamente el régimen dictaba ciertos artículos, sino que los savakis, miembros de la SAVAK, fueron introducidos entre los periodistas y cualquier autor de artículos demasiado simpatizantes con el Ayatolá podía ser arrestado en cualquier momento y desaparecer.

Posteriormente, el gobierno anunció oficialmente, mediante una declaración en la radio y la televisión, el fin de la censura directa e indirecta. Durante esas semanas los diarios Keyhan y Ettelat tuvieron un tiraje de un millón de ejemplares que divulgaron todas las huelgas y luchas y finalmente los periodistas conocieron la libertad de expresión.

En noviembre de 1978, 1200 prisioneros políticos fueron liberados al decretar el Sha "un día de paz y de reconciliación".<sup>(15)</sup> Pero en lugar de atenuar la cólera del pueblo, todas esas concesiones aparecieron como pruebas de debilidad del Sha y, paradójicamente, incitaron al pueblo a endurecer su actitud.

El líder del Frente Nacional, Sandjabi, se reunió en París en noviembre de 1978 con el Ayatola y durante ese encuentro anunciaron un acuerdo para el establecimiento de un nuevo gobierno basado en los principios del Islam, la democracia, la independencia y el sufragio universal.

Esto significó no solamente el alineamiento de los liberales al movimiento islámico revolucionario, representado por el Imán, sino igualmente el aislamiento del Sha, quien perdió así sus últimos apoyos potenciales.

Mientras tanto, Teherán se encontraba ardiendo. Se produjeron centenares de incendios, los símbolos del régimen monárquico fueron metódicamente destruidos y las estatuas derrumbadas.

El gobierno militar del general Azhari reemplazó al gobierno de Emami. La radio y televisión difundieron a toda hora "la mea culpa" del Sha que no podía equivocarse respecto

a alguna persona cuando anunció la "liberación de la dictadura". Los locales de la televisión fueron ocupados por el ejército. Sin embargo, a pesar de estas medidas, prosiguieron las manifestaciones en Teherán, tanto como en Shirz y Tabriz. Las huelgas fueron interrumpidas y las exportaciones de petróleo cesaron por algún tiempo.

El día primero de diciembre de 1978 se conmemoró el mes del gran duelo chiíta, Ashura, víspera de Moharrán, así como también la muerte del Imán Hussein y el hijo menor del Profeta.

El día 30 el Imán Khomeini proclamó esa fecha como día de duelo nacional en homenaje a las víctimas de las masacres realizadas por el ejército.

Finalmente, el 31 de diciembre, el general Azhari renunció a su puesto de Primer Ministro y se formó un nuevo gobierno encabezado por Chapour Bakhtiar, miembro del Frente Nacional. Este nuevo Primer Ministro, elegido por el Sha, prometió crear un gobierno libre de toda asociación con los últimos 25 años del gobierno Pahlevi. Bakhtiar, envió al Majlis un proyecto de ley que disolvía la SAVAK y prometió entregar el poder a un gobierno electo en cuanto se siguieran procedimientos constitucionales adecuados.

Con el apoyo de Estados Unidos, que advirtió que el Sha estaba condenado, Bakhtiar, persuadió al monarca de que saliera de Irán, ver supra 2.2.

La estrategia de Bakhtiar de manejar una transición pacífica hacia un régimen democrático estaba condenada al fracaso.

Al aceptar la nomenclación del Sha se desacreditó con el resto de la oposición y tanto Khomeini como sus propios colegas del Frente Nacional lo repudiaron.

Continuaron las huelgas y las manifestaciones masivas, y el Ayatola, en particular, se negó a llegar a un arreglo con los emisarios que Bakhtiar envió a París para que se reunieran con él. Al paso de los días, Bakhtiar era cada vez más un prisionero de las fuerzas armadas y de los norteamericanos que lo apoyaban. Aunque logró hacer salir al Sha y ,con la colaboración norteamericana, frenar el deseo de un golpe militar por parte del ejército, al final su gobierno fue declarado ilegal.

Siguieron las manifestaciones en distintos lugares del país y el pueblo afirmó que si se impedía la llegada a Khomeini, utilizaría las armas. El aeropuerto, que el gobierno había cerrado en un intento por impedir la llegada del Imán, fue invadido por el pueblo y se efectuó una masacre tal que obligó al general Bakhtiar a permitir la reapertura del aeropuerto para la llegada del Ayatola.

Finalmente, el día dos de febrero de 1979 a las 9:30 hrs. tras 15 años de exilio, el Ayatola Khomeini regresó a Irán. Millones de personas lo recibieron al grito de "Alla o Akhbar", Dios es lo más Grande, siguieron su camino a lo largo de 23 kilómetros entre el aeropuerto y el cementerio de Bechecht Zahar, primer sitio que deseó ver el Imán a fin de rendir homenaje a los miles de fieles que ofrecieron sus vidas para que triunfara la revolución. Fue en ese lugar donde anunció la destitución del gobierno de Chapour Bakhtiar.



## 2.3 Establecimiento de la República Islámica

Si bien el acontecimiento que exponemos a continuación es anterior a la llegada de Khomeini a Irán, estimamos oportuno citar la formación de un Consejo Islámico Revolucionario Provisional, el 14 de enero de 1979, como el primer paso formal para el establecimiento de la República Islámica de Irán. En este mismo orden de ideas el Ayatola había descrito en diciembre del año anterior, en una entrevista para la publicación Middle East, sus metas de la manera siguiente:

"El propósito de una futura República Islámica en Irán -y esa es la voluntad del pueblo iraní- será eliminar la influencia occidental en nuestro país. Con la misma tónica, nuestro propósito es acabar con todas las formas del dominio occidental en Irán. Esta influencia occidental se encuentra en todos los rangos de la vida iraní. Y ya que la nación entera se ha levantado en contra de ese estado de cosas, nadie puede esperar ahora que este movimiento se detenga". (16)

Al declarar la ilegalidad del gobierno de Bakhtiar, el Ayatola nombró a Mehdi Bazargán como Primer Ministro de su gobierno provisional. Mientras tanto, Bakhtiar desautorizó el establecimiento de otro gobierno. Sin embargo Bazargán se instaló en las oficinas del gobierno provisional en el local del "Comité Esteghbal" -Comité de Recibimiento".

Con este hecho se creó en Irán una situación de poder dual, en la que ninguno de los bandos parecía dispuesto a atacar al otro, hasta que la explosión llegó el 9 de febrero de

1979. Se inició en la base aérea de Dosh Tappeh, cerca de Teherán, donde algunos oficiales y técnicos de la fuerza aérea chocaron con los oficiales de mayor rango por el derecho de los primeros a presenciar por televisión un discurso de Khomeini. Como el conflicto continuaba, la base fue atacada por unidades de la Jabidán, la sección de "inmortales" de la Guardia Imperial, y ello provocó un levantamiento general en Teherán. (17)

Aunque esto se inició como una división dentro del ejército, la clave del resultado fue el hecho de que miles de civiles intervinieron activamente del lado de la sección rebelde de las fuerzas armadas y en esta forma derrotaron a las secciones de los militares que todavía estaban en favor del Sha. Dos días de lucha en Teherán destruyendo el aparato militar y obligando a renunciar a gobierno de Bakhtiar, permitieron, asimismo, que decenas de miles de activistas adquirieran armas en las bases militares que saqueaban.

En el plano internacional, los primeros gobiernos que reconocieron al gobierno provisional de Khomeini fueron: Libia, Estados Unidos, URSS, Checoslovaquia, RMA, Jordania, Iraq, Chipre, Turquía, Túnez, Afganistán, Argelia, Vietnam, Suecia, Polonia, Hungría y Grecia. (18)

Posteriormente, en el mismo mes de febrero, el líder de la OLP, Yasser Arafat, se entrevistó en Teherán con el Imán Khomeini. Asimismo, Harold Brown, Secretario de Defensa de Estados Unidos, inició una gira por Arabia Saudita, Jordania, Israel y Egipto, la cual fue vinculada por analistas interna-

cionales con el propósito norteamericano de encontrar un sustituto al vacío que había dejado el Sha.

En ese mismo período, el Partido Comunista iraní denunció que se habían introducido 135 agentes de la CIA a Irán.

En el mes de marzo, la crisis iraní se inserta en el llamado "arco de la crisis", el cual se extendió a Turquía trayendo como consecuencia la separación de ésta, así como de Faquistán e Irán del CENTO -ver supra 1.4-.

Por otro lado, el Imán Khomeini declaró que el pueblo iraní estaba deseoso de que su país se convirtiera en una república islámica, agregando que la democracia es un término occidental y por tanto ellos rechazaban las palabras occidentales.

Mientras tanto, Bazargán decidió poner a los consejeros revolucionarios bajo control de su gobierno y declaró que su país se alinearía con los Estados que confrontaban a Israel. Más tarde, el gobierno provisional de Khomeini rompió relaciones con Sudáfrica. Surgieron tensiones entre iraníes laicos y religiosos y se anunció la creación del Frente Nacional Democrático en Teherán.

Por su parte, el Departamento de Estado reveló la intención norteamericana de instalar una nueva flota en el Océano Índico.

En cuanto a la producción petrolera, ésta se elevó a 2.5 millones diarios, y Khomeini advirtió a la opinión pública iraní que los países consumidores de crudo tramaban un complot

contra Irán.

El Ayatola ordenó, asimismo la suspensión de los procesos políticos. Realizó la nacionalización de los hoteles. Más tarde, Irán solicitó su ingreso al Movimiento de los Países No Alineados.

Entre tanto, los comités de Khomeini se negaron a entregar municiones a los kurdos y como consecuencia se iniciaron enfrentamientos armados entre ambos. Después de dichos enfrentamientos, Khomeini prometió semiautonomía al Kurdistán. Por su parte, el Partido Kurdistano organizó actividades bajo el lema "Democracia para Irán, autonomía para el Kurdistán". A una escala menor, se expresaron demandas similares en Beluchistán, y era sólo cuestión de tiempo antes de que estuviesen activos algunos movimientos similares en Azerbaiján y las zonas árabes.

Posteriormente, el Ministro del Interior anunció que una nueva constitución garantizaría la existencia de todas las formaciones partidarias, así el día último del mes de marzo millones de iraníes se presentaron en las urnas para un referéndum sobre un Irán Islámico.

Por su parte, el máximo líder religioso expresó en los primeros días de abril: "estamos en guerra contra las superpotencias... Estados Unidos continúa sus provocaciones contra Irán... nuestra revolución no está terminada, ahora tenemos que construir el país con la misma fe con la que terminamos con la injusticia". (19)

Por ese tiempo un intento de asesinato del Primer Minis-

tro Bazargán fracasó y surgió una nueva crisis con la renuncia del vicepresidente del gobierno, Ibrahim Yazdi. En el mes de mayo un grupo de extremistas asesinó al dirigente del Consejo Revolucionario, el Ayatola Morteza Motaheri. El grupo fue acusado de ser instrumento de la CIA y el Ayatola culpó de ello a los "imperialistas y partidarios del Sha". Se decretó día de duelo nacional, asistieron a los funerales unas 200,000 personas.

Ante estos sucesos, Khomeini se refirió a Estados Unidos como una "víbora herida y derrotada" al mismo tiempo que le pedía a los norteamericanos que aplazaran el envío de su embajador a Teherán.

Mientras tanto, "la Voz de la Revolución Islámica" anunció la nacionalización de la banca, empresas de seguros, industria automotriz, minas, acerías, industria alimenticia y fábricas de aluminio.

Más tarde, se dió a conocer el proyecto de nueva constitución en estricta observancia de la ley islámica.

En el mes de julio, el Frente Nacional pidió la disolución del Consejo Revolucionario y la reestructuración del gobierno de Bazargán. Los días 3 y 4 de agosto, el pueblo asistió a los comicios para elegir a la asamblea constituyente. El Frente Nacional y el PPRM anunciaron su ausencia de la contienda, censurando las condiciones que según ellos no favorecían el voto libre.

Los primeros resultados dieron el triunfo a Khomeini, 5

partidos denunciaron fraudes electorales.

El día 11 del mismo mes se dieron a conocer los resultados de las elecciones, 60 de los 73 escaños en la asamblea fueron para los sacerdotes chiítas y los islámicos conservadores.

En el mes de septiembre, el Primer Ministro Mehdi Bazargán presentó su renuncia, mientras que los kurdos anunciaron estar alistándose para la guerra de guerrillas contra el régimen de Khomeini.

La comisión redactora de la Constitución a través del artículo 5, otorgó poderes ilimitados al Imán Khomeini.

Como complemento a mediados del mes de octubre se otorgó al Ayatola constitucionalmente, el cargo de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

NOTAS CAPITULO II

- (1) Aída Cervantes León, El Islam, Multidisciplina, P.61
- (2) Ibid. P.61
- (3) Ibid. p.62
- (4) Barry Rubin, op.cit. p.263
- (5) Abdel Malek, La pensée politique arabe contemporaine. Paris, Ed. du Seuil, 1970. P.10-11
- (6) Ibid. p.18
- (7) Ministère de L'Orientalion Nationale "L'Impact de la Revolu-  
tion Islamique en Iran sur le monde arabe", Le Message  
de L'Islamisme. 1 juin 1980 p.33
- (8) Ibid. p.15
- (9) 111<sup>e</sup> Anniversaire de la Revolution Islamique en Iran  
1979-1982, Gouvernement de la Republique Islamique p.5
- (10) Ibid. p.8
- (11) Cronología sobre Irán, SRE 1979, p.10
- (12) La ruta de exilio del ex Sha comprendió los siguientes  
países: Egipto, -primer y último sitio de refugio-, Marrue-  
cos, Bahamas, México, Estados Unidos y Panamá.
- (13) La Crisis de Irán, Estudios especiales, SPP p.21
- (14) 111<sup>e</sup> Anniversaire....op.cit.p.4
- (15) Ibid. p.11
- (16) The Middle East, diciembre 1978. P.10
- (17) Fred Halliday, op.cit.p.407
- (18) Cronología sobre Irán, op.cit. p.12
- (19) Ibid. p.15

### CAPITULO III

#### TOMA DE LA MISION DIPLOMATICA DE ESTADOS UNIDOS

##### SUMARIO

- 3.1 Antecedentes
  - 3.1.1 Orígenes del antiamericanismo
  - 3.1.2 Relaciones Estados Unidos con el gobierno de Khomeini
  - 3.1.3 Sucesos previos a la toma de noviembre
- 3.2 Desarrollo Cronológico de la Toma de la Misión Diplomática
- 3.3 Reacción y sanciones de Estados Unidos



### 3.1 Antecedentes

#### 3.1.1 Orígenes del antiamericanismo

Para poder comprender con mayor claridad los acontecimientos que se suscitaron a partir de la toma de los locales de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, así como del personal que se encontraba en ella, es necesario utilizar una visión retrospectiva que nos permita encontrar los orígenes del antiamericanismo que surgió en Irán, pues de lo contrario el hecho que mencionamos se vería en forma aislada, sin tomar en consideración el contexto histórico-político en que se han desarrollado las relaciones Irán-Estados Unidos, -ve supra 1--.

Con anterioridad a los años 50s, la xenofobia iraní se manifestaba respecto a ingleses y soviéticos, quienes como hemos visto intervinieron en los asuntos internos de esa nación por largo tiempo. En esa época se veía a Estados Unidos con cierta simpatía, los políticos iraníes pensaban que dicho país podía proporcionarles ayuda diversa que les permitiría romper con la influencia de las potencias arriba citadas, así como alcanzar un grado mayor de desarrollo.

Sin embargo, a partir de una fallida conspiración que pretendió derrocar a Mossadeg en la cual el Sha con la abierta ayuda de Estados Unidos, nombró arbitrariamente a otro Primer Ministro, tuvieron lugar diversas manifestaciones antinorteamericanas y los consulados y bibliotecas de Estados Unidos fueron atacados por turbas enardecidas. Poco tiempo después, se fraguó el golpe definitivo en contra de Mossadeg por parte de la CIA, a través de su agente Kermit Roosevelt, quien había

sido llamado a Londres por el gobierno británico para proponerle que la agencia estadounidense cooperara en la "operación Ajax" cuyo objetivo consistía en el derrocamiento de Mossadeg. Así el 19 de agosto de 1953 un equipo bien organizado y dotado con 100 mil dólares proporcionados por la CIA hicieron su aparición en Teherán destruyendo las oficinas de un periódico pro Mossadeg, y penetraron a la casa de éste, quien pocas horas antes había logrado ponerse a salvo. (1)

El error de Estados Unidos consistió en una grave confusión entre nacionalismo, Mossadeg en este caso, y marxismo-leninismo, y lamentablemente este mismo error se ha repetido en múltiples ocasiones en otras partes del mundo. En apoyo de esta afirmación baste citar las palabras de Eisenhower y el Secretario de Estado Dulles, quienes afirmaban que se había "salvado a Irán del comunismo".

Al estallar la revolución de 1978-79 los iraníes volvieron su vista al pasado inmediato y acusaron a Estados Unidos de haber reintegrado al Sha al poder en agosto de 1953, capacitado a la SAVAK, y suministrado la ayuda económica-militar que perpetuó su gobierno.

### 3.1.2 Relaciones Estados Unidos con el gobierno de Khomeini

Para ilustrar la forma en que el gobierno de Estados Unidos esperaba se desarrollase esta nueva etapa de sus relaciones con Irán estimamos oportuno transcribir extractos de conferencias de prensa presidenciales en las que Carter expone

la postura de Estados Unidos:

a) Conferencia de prensa presidencial del 17 de enero de 1979.-

Pregunta: "¿Cuál será la postura de nuestro gobierno ahora hacia las varias facciones contendientes en Irán que continúan aún luchando por el poder?".

Carter: "Tenemos muy importantes relaciones con Irán -en el pasado y en el presente- y espero que en el futuro también. Han sido buenos aliados nuestros y espero que así siga siendo.

De conformidad con las disposiciones de la constitución irania, se ha efectuado ahora un cambio de gobierno. Bajo el Sr. Bakhtiar, cuyo gobierno apoyamos, el Majlis, -la cámara baja del Parlamento, y la cámara alta, el Senadao,- han aprobado su gobierno así como su gabinete.

Hemos estimulado en lo posible el apoyo público para el gobierno de Bakhtiar, para la reestructuración de la estabilidad, para el fin del baño de sangre y para el retorno a la normalidad de Irán. (2)

Conferencia de prensa presidencial del 27 de febrero de 1979.-

Pregunta: "¿Sr. presidente, qué está haciendo nuestro gobierno, si es que algo está haciendo para influir en el nuevo gobierno iraní para incrementar la producción petrolera, mantener los precios bajos y, en términos generales, cómo describiría la relación entre nuestro gobierno y el de Khomeini?".

Carter: "El gobierno de Khomeini ha dejado claro desde que llegó al poder, a través de negociaciones directas con el

Primer Ministro Bazargán y nuestro Embajador, y a través de sus emisarios que incluso hoy hablaron con el Secretario Vance, que desea una estrecha y amistosa relación con Estados Unidos.

Ha.. anunciado también que se<sup>rá</sup> incrementada la producción petrolera en Irán y que muy pronto serán efectuadas exportaciones. Y mi propio punto de vista es que tienen serias intenciones de llevar a cabo ambos propósitos y de que son capaces de hacerlo". (2)

En cuanto a la posibilidad de otorgar asilo al ex Sha en Estados Unidos, los círculos políticos gubernamentales, en su afán por mejorar sus relaciones con Irán, se mostraban contrarios a concederlo. A pesar de presiones como las de David Rockefeller y Henry Kissinger, la posición oficial estadounidense era firme, especialmente dentro del Departamento de Estado, cuyo titular, Vance, tenía una política bien definida al respecto.

Cuando la Casa Blanca recibió informes sobre la delicada situación del Sha, el Departamento de Estado solicitó a su Embajada en Teherán realizar un balance de la situación. Laingen encargado de negocios dijo "no debemos tomar ningún paso hacia la admisión del Sha hasta que podamos preparar una fuerza efectiva y esencial para la protección de la Embajada". Agregó: "tengo la impresión de que la amenaza sobre el personal de Estados Unidos es menor ahora que en la primavera pasada... sin embargo, el peligro de toma de rehenes en Irán persistirá" (3).

El 22 de octubre el Sha ingresó al hospital Cornell de Nueva York, luego de que dictámenes médicos determinaron que en México no se contaba con las instalaciones y asistencia necesaria para atender al Sha. Horas antes Estados Unidos envió un emisario a Teherán para informar de dicha situación a Bazargán y Yazdi, quienes protestaron, y el primero solicitó que se permitiése a 2 médicos iraníes examinar al Sha, petición que fue rechazada por éste. Los iraníes de línea dura acusaron a sus funcionarios de tibiesas. Yazdi se defendió diciendo: "hemos hecho todo lo posible a través de canales diplomáticos", (4).

Un segundo evento simultáneo encolerizó aún más a los militantes iraníes. Bazargán y Yazdi viajaron a Argelia en ocasión del aniversario de la independencia de ese país, en donde se entrevistaron brevemente el 1° de noviembre con Brzezynsky, quien representaba a Estados Unidos en la celebración. Ansioso por eliminar a su antiguo rival Yazdi, Ghtbzadeh ordenó a la televisión iraní transmitir la imagen de dicho encuentro. Los de línea dura reclamaron que Khomeini no había sido informado. (5)

Respecto a la postura del régimen de Khomeini hacia Estados Unidos existen 4 puntos muy importantes que señalan el rumbo del primero:

- a) Irán denuncia al CENFO, 11 de marzo de 1979.
- b) Irán solicita su ingreso al Movimiento de los Países No Alineados, 18 de marzo de 1979.
- c) Khomeini expresó: "Estamos en guerra en contra de las superpotencias... Estados Unidos continúa sus provoca

ciones contra Irán", 6 de abril de 1979.

d) Irán canceló el Tratado de Amistad con Estados Unidos vigente desde 1959, 5 de noviembre de 1979. (6)

En seguimiento de su política denunciatoria y hostil a Estados Unidos, Khomeini calificó a este país como una "víbora herida y derrotada" y le pedía que aplazara el envío de su Embajador a Teherán. Así el 4 de junio el gobierno iraní rechazó la designación de W. Cuttler como Embajador de Estados Unidos en Teherán, sin dar a conocer las razones de tal determinación.

Sin embargo no sólo se mostraron aspectos negativos de la política iraní hacia Estados Unidos sino que en diversas ocasiones hubieron declaraciones oficiales favorables. Por ejemplo, el 7 de febrero de 1979 el Primer Ministro Bazargán declaró en una entrevista al diario griego ELEVtherotipia que "se establecerá una era de relaciones a un nivel de igualdad con Estados Unidos y no veo porque no debemos comprarles armas".

Por otra parte, El Ministro de Asuntos Exteriores, Yazdi en varias entrevistas de prensa se mostró partidario de mejorar las relaciones con Estados Unidos, llegando incluso a expresar su deseo de que pronto fueran intercambiados embajadores. Aún más, cuando visitó la sede de las Naciones Unidas, en octubre de 1979, sus pláticas con funcionarios estadounidenses fueron bastantes cordiales. (7)

### 3.1.3 Sucesos previos a la toma de noviembre

Como hemos visto en el subinciso anterior, el gobierno

iraní dió la pauta para la política a seguir en relación a los Estados Unidos, y de esta forma, en un plano popular el 14 de febrero se produjo un ataque a la Embajada de Estados Unidos por elementos desconocidos quienes penetraron a sus locales y capturaron a 70 personas incluyendo al embajador.

Las fuerzas del orden iraníes acudieron en auxilio de la Misión Diplomática y no obstante su oportuna intervención resultaron muertas dos personas asociadas con el personal de la Embajada y se infringieron daños materiales a la cancillería y a la residencia del Embajador. En igual fecha, también fueron atacados los consulados estadounidenses en las ciudades de Teherán y Shiraz.

El 24 de mayo se suscitó una manifestación masiva frente a la Embajada de Estados Unidos por su injerencia en los asuntos internos iraníes, sobre todo debido a que un grupo extremista había sido culpado de asesinar al dirigente del Consejo Revolucionario, el Ayatola Monteza Montaheri, y se acusó a la CIA de haber auspiciado dicha acción.

A finales del mes de octubre, Irán protestó oficialmente por la presencia del ex Sha en Estados Unidos. (8) Ello fue el inicio de una serie de acontecimientos que sacudieron todo el escenario político y económico internacional. Una marcha de protesta de 3 millones de manifestantes frente a la Embajada estadounidense en Teherán, organizada por el Partido de la República Islámica, se extendió en tiempo y espacio hasta las arcas del dinero islámico en Wall Street. Esta "casa de espías debe cerrarse" era la consigna que se coreaba. (9)

### 3.2 Desarrollo Cronológico de la Toma de la Misión Diplomática

1979

- 4 de noviembre: 1er día.- Estudiantes musulmanes atacaron la Embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron como rehenes a su personal. Exigían la ex tradición del Sha.
- 5 de noviembre: 2° día.- Publicación de un mensaje de la Casa Blanca subrayando el carácter humanitario de la presencia del Sha en Estados Unidos
- 6 de noviembre: 3er día.- Renuncia del Primer Ministro Mehdi Bazarqán, quien desaprobaba la toma de rehenes
- 9 de noviembre: 6° día.- El Consejo de Seguridad de las N.U. exigió la liberación de los rehenes norteamericanos; el Encargado de Negocios estadounidense, Bruce Laingen, se entrevistó con Bani Sadr. El Papa envió un mensaje a Khomeini.
- 10 de noviembre: 7° día.- El presidente Carter ordenó la expulsión de iraníes.
- 12 de noviembre: 9° día.- Cancelación de exportaciones de petróleo iraní en dirección a Estados Unidos.
- 14 de noviembre: 11° día.- E.U. congeló los haberes iraníes en los bancos norteamericanos.
- 17 de noviembre: 14° día.- Khomeini demandó a los estudiantes la liberación de mujeres y negros, si es que no eran acusados de espionaje.
- 19 de noviembre: 16° día.- Tres rehenes fueron liberados.
- 20 de noviembre: 17° día.- Otros 10 rehenes fueron liberados.
- 22 de noviembre: 19° día.- Los 13 rehenes americanos llegaron a Washington, y cinco más fueron liberados.
- 25 de noviembre: 22° día.- Kurt Waldheim, Secretario General de las N.U. convocó con urgencia al Consejo de Seguridad. El gobierno soviético demandó a Khomeini que diera la orden para liberar a los rehenes.
- 26 de noviembre: 23° día.- Breve reunión del Consejo de Seguridad ordenando a las dos partes evitar toda acción irreversible.
- 28 de noviembre: 25° día.- Sadegh Ghotbzadeh remplazó a Bani Sadr, considerado demasiado moderado, en el puesto de Ministro de Asuntos Exteriores.
- 29 de noviembre: 26° día.- Estados Unidos solicitó ante la Corte Internacional de Justicia que se juzgara a Irán por su acción.
- 1° de diciembre: 28° día.- Inicio de las discusiones de la ONU sobre la toma de rehenes.
- 7 de diciembre: 35° día.- Carter rechazó públicamente todo tipo de intervención militar en Irán.
- 12 de diciembre: 39° día.- Estados Unidos dió un plazo de 5 días a 183 diplomáticos iraníes para abandonar territorio norteamericano.



- 13 de diciembre: 40° día.- Observadores independientes extranjeros fueron invitados por Irán a ver a los rehenes.
- 15 de diciembre: 42° día.- El Sha dejó Estados Unidos para dirigirse a Panamá.
- 16 de diciembre: 43° día.- La Corte Internacional de Justicia ordenó a Irán liberar a los rehenes.
- 23 de diciembre: 50° día.- E.U. decidió sanciones económicas contra Irán. Los rehenes festejaron Navidad. Un árbol de Navidad fue adornado por ellos y 3 sacerdotes asistieron para celebrar los oficios.
- 24 de diciembre: 51° día.- Tres sacerdotes llegaron de Estados Unidos a celebrar la misa de Navidad para los rehenes.

1980

- 1° de enero: 59° día.- Kurt Waldheim llegó a Teherán para una visita de 3 días en el curso de la cual debía emprender una tentativa de negociación para la liberación de los rehenes. Le reprocharon su "compromiso" con el Sha, la gente lo recibió con cólera.
- 3 de enero: 61° día.- Khomeini se rehusó a recibir a Waldheim.
- 4 de enero: 62° día.- Salida de Waldheim y fracaso de su intento de entrevistarse con Khomeini.
- 8 de enero: 66° día.- Carter rechazó una intervención militar en Irán.
- 12 de enero: 70° día.- Seis diplomáticos norteamericanos que se ocultaron en la Embajada de Canadá, se fugaron de Irán con el personal canadiense repatriado.
- 13 de enero: 71° día.- Sanciones económicas contra Irán fueron sometidas a votación por la ONU.
- 17 de enero: 75° día.- Las cartas escritas por los rehenes llegaron a Estados Unidos.
- 23 de enero: 81° día.- El gobierno panameño declaró que el Sha estaba bajo arraigo y que esperaba los documentos para estudiar la solicitud de extradición.
- 4 de febrero: 93° día.- Bani Sadr fue electo presidente de la República, prestó juramento ante Khomeini.
- 23 de febrero: 112° día.- Una Comisión Investigadora de la ONU llegó a Teherán para efectuar una investigación sobre los crímenes cometidos por el Sha.
- 11 de marzo: 129° día.- Salida de la Comisión Investigadora, seguida por el anuncio de que los rehenes no serían liberados hasta después de que la Asamblea Nacional Islámica, elegida en marzo, hubiera estatuido su salida.
- 21 de marzo: 139° día.- Hamilton Jordan portavoz de la Casa Blanca voló a Panamá.
- 23 de marzo: 141° día.- El sha dejó Panamá con destino a El

Cairo, Egipto.

- 24 de marzo: 142° día.- La solicitud oficial de extradición del Sha fue recibida por las autoridades panameñas.
- 30 de marzo: 148° día.- Carter envió una carta secreta a Khomeini la cual se publicó de inmediato y se difundió por la radio y televisión iraníes.
- 1° de abril: 150° día.- Bani Sadr propuso que el gobierno se encargara de los rehenes a condición de que Estados Unidos cesara las presiones económicas y diplomáticas contra Irán. Esta iniciativa fue calificada como medida positiva por Carter.
- 6 de abril: 155° día.- Los sacerdotes celebraron los oficios de Pascua en la Embajada.
- 7 de abril: 159° día.- Khomeini anunció que los rehenes deberían permanecer en manos de los estudiantes musulmanes. Carter anunció entonces más sanciones económicas y la ruptura de relaciones diplomáticas: ordenó cerrar la Embajada y consulados iraníes sobre territorio norteamericano y expulsó a 35 diplomáticos iraníes que aún estaban en el país.
- 8 de abril: 157° día: Irán amenazó con cesar el abastecimiento de petróleo a todos los aliados de Estados Unidos.
- 11 de abril: 160° día - Irán reafirmó de nuevo, mediante inmensas manifestaciones organizadas en todo el país, su apoyo a los estudiantes musulmanes y su rechazo al imperialismo norteamericano.
- 14 de abril: 163° día.- Una delegación de la Cruz Roja Internacional visitó a los rehenes.
- 17 de abril: 166° día.- Carter mencionó la eventualidad de una acción militar contra Irán y anunció una nueva serie de sanciones económicas.
- 21 de abril: 170° día.- La madre de un rehén se presentó en la Embajada para ver a su hijo.
- 23 de abril: 172° día.- Los gobiernos occidentales aceptaron la aplicación de sanciones económicas contra Irán si para el 17 de mayo no se llevaba a cabo ninguna acción para liberar a los rehenes.
- 24 de abril: 173° día.- Fracaso de un intento norteamericano de rescate de los rehenes. La aviación de Estados Unidos penetró furtivamente en el desierto de Tabbas y una colisión entre ellos provocó la muerte de 8 hombres.
- 25 de abril: 174° día.- Se decidió la dispersión de los rehenes en varias en varias ciudades de Irán para prevenir nuevos intentos de liberación.
- 17 de mayo: 196° día.- la CCE anunció la segunda aplicación de sanciones económicas contra Irán: todos los contratos comerciales concluidos después del 4 de noviembre de 1979 fueron suspendidos.

- 24 de mayo: 203 día.- La Corte Internacional de Justicia demandó la liberación de los rehenes y una indemnización para Estados Unidos. Llegada a Teherán de Habib Boudy miembro de la Comisión Investigadora de la ONU.
- 28 de mayo: 207 día.- Primera reunión del Parlamento iraní que decidió deliberar sobre la salida de los rehenes hasta la nominación del nuevo gobierno, es decir, no antes del 20 de julio.
- 2 al 5 de junio: 212° al 215°.- Conferencia Internacional sobre los crímenes contra Irán. Asistieron 350 delegados de más de 100 países.
- 10 de julio: 250° día.- Anunció el gobierno iraní el descubrimiento de un intento de golpe de Estado fomentado por Estados Unidos.
- 11 de julio: 251° día.- Un rehén, Richard Queen, ex vicecónsul en Teherán fue liberado debido a su estado de salud: sufría problemas neurológicos.
- 27 de julio: 267° día.- El ex Sha murió en El Cairo.
- 5 de agosto: 276° día.- 191 iraníes fueron encarcelados en Estados Unidos después de una manifestación en Washington.
- 27 de agosto: 288° día.- Intervención de Helmut Shmidt ante el Primer Ministro Radjai a fin de abogar por la liberación de los rehenes.
- 12 de sep: 314° día.- Khomeini puso 4 condiciones para la liberación de los rehenes: restitución de la fortuna del Sha; abandono por los norteamericanos, de sus reclamaciones; descongelamiento de los haberes iraníes en Estados Unidos y compromiso de no injerencia de Estados Unidos en Irán.
- 16 de sep: 318° día.- Apertura en Teherán del debate sobre la cuestión de los rehenes. El Parlamento decidió la creación de una comisión especial para debatir sobre la salida de los rehenes. La composición y atribuciones de esta comisión fueron definidas.
- 22 de sep: 324° día.- Inicio de la guerra de Iraq contra Irán.
- 2 de nov: 365° día.- El Parlamento reanudó la discusión sobre las 4 condiciones de Khomeini.
- 3 de nov: 366° día.- En ocasión del primer aniversario de la toma de la Embajada los rehenes fueron transferidos por los estudiantes musulmanes al gobierno islámico y 3 grandes manifestaciones fueron organizadas para conmemorar dicho acto.
- 10 de nov: 373° día.- Warren Christopher, subsecretario de Estado norteamericano, encabezó una delegación en Argel, portando la respuesta de Estados Unidos, a las 4 condiciones planteadas por el Parlamento islámico.
- 20 de nov: 383° día.- Edmund Muskie, Secretario de Estado norteamericano, anunció oficialmente que su país

- aceptaba en principio las condiciones iraníes para la liberación de los rehenes. Con la mediación de Argelia tuvieron lugar una serie de discusiones para lograr la consecución de un acuerdo sobre la liberación de los rehenes.
- 19 de dic: 412° día.- Irán exigió antes de proceder a la liberación de los rehenes, el depósito en el Banco Central de Argelia, de los haberes iraníes congelados en Estados Unidos.
- 21 de dic: 414° día.- Irán estimó en 24 millones de dólares la suma que debía ser depositada en el Banco Central de Argelia y que representaba la fortuna del ex Sha y el monto de los haberes iraníes congelados en Estados Unidos.
- 25 de dic: 418° día.- Los rehenes pasaron su segunda Navidad en cautiverio.
- 28 de dic: 421° día.- Reagan, el nuevo presidente norteamericano declaró inaceptable la proposición hecha el 19 de diciembre por Irán.
- 1981
- 2 de enero: 426° día.- Después de 4 días de discusiones, E.U. hizo llegar a Irán a través de Argelia, sus últimas proposiciones.
- 10 de enero: 434° día.- Estados Unidos informó a Irán que podrían recuperar el 70% de la cantidad reclamada después de la liberación de los rehenes.
- 16 de enero: 440° día.- Redacción por Estados Unidos de un protocolo para el acuerdo definitivo.
- 18 de enero: 442° día.- Firma, en Argelia por Estados Unidos y en Teherán por Irán, del acuerdo para la liberación de los rehenes y el descongelamiento de haberes iraníes en Estados Unidos.
- 20 de enero: El acuerdo fue firmado la víspera en Argelia.  
444° El embargo sobre las exportaciones a Irán sería levantado el 24 de enero.  
Khomeini ordenó la liberación de los rehenes en el momento de la transferencia de poderes entre Carter y Reagan en Estados Unidos.

### 3.3 Reacción y sanciones de Estados Unidos

Tras conocer la toma de los locales de su Misión Diplomática, así como el personal que se encontraba en ella, el gobierno de Estados Unidos intentó ponerse en contacto con las autoridades iraníes en Teherán y con su Encargado de Negocios quien permanecía en custodia en el Ministerio del Exterior iraní.

Irán se negó a tener contacto con el gobierno de Estados Unidos e incluso el Ayatola Khomeini se rehusó a recibir a una delegación estadounidense presidida por Ramsey Clark, (10) quien permaneció en Turquía esperando viajar a Irán si el Ayatola accedía a recibirlo.

La primera medida que emprendió Estados Unidos contra Irán el 10 de noviembre, consistió en una orden del presidente Carter al procurador general de Estados Unidos para que informara a los 50,000 estudiantes iraníes que se reportaran a la más próxima oficina de inmigración y que cualquier estudiante que tuviera irregularidades en su visa sería deportado. Los días 12 y 14 del mismo mes se suspendieron las importaciones de petróleo iraní y el presidente Carter ordenó la congelación de los haberes iraníes en los bancos estadounidenses y sus sucursales extranjeras. Posteriormente, el 20 de noviembre, en una declaración emitida por la Casa Blanca se mencionaba la posibilidad de tomar acciones militares en caso de que Irán sometiera a juicio a los rehenes.

En el plano internacional, el 13 de diciembre, y a instancia de Estados Unidos, los Ministros del Exterior y de De-

fensa de los 15 países miembros de la OTAN pronunciaron una declaración en Bruselas en la que condenaban la acción irania y demandaban la liberación de los rehenes. Más tarde, el 10 de abril de 1980 en Lisboa, los cancilleres de la CEE y el Comité de Ministros de Europa, reclamaron en sesiones separadas, la liberación de los rehenes de la Embajada estadounidense en Teherán.

Tal como lo anunció Henry Mc Donald ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos decretó medidas unilaterales de orden económico en contra de Irán, consistentes en la ruptura de todo tipo de transacciones comerciales con Irán, imponiendo estrictas prohibiciones a las actividades de tráfico mercantil, así como de movimientos de capitales de empresa, e incluso restricciones de viaje a Irán. Esto aunado a la previa ruptura de relaciones diplomáticas y a la expulsión del personal diplomático y consular iraní. Prácticamente, el 7 de abril de 1980 se cortó todo contacto iranio-estadounidense.

En el plano militar, Estados Unidos fracasó en un audaz intento de rescate a los rehenes, a través de un comando especializado, llamado "luces azules" que estaba preparado para actuar bajo las más adversas condiciones.

Según se indicó por fuentes estadounidenses, la operación no era esencialmente militar, sino humanitaria y su único objetivo consistía en el rescate de los rehenes. El equipo de rescate estaba bajo control y comando directo del presidente

Carter, por lo que para tener una clara visión del acontecimiento, transcribimos a continuación un extracto traducido al español de la carta enviada, por el estadista al Senado como informe de la fallida operación de rescate.

"Aproximadamente a las 10:30 a.m. del 24 de abril, 6 aviones de transporte C-130 de Estados Unidos y 8 helicópteros RH-53 entraron en el espacio aéreo de Irán. Sus tripulaciones no estaban equipadas para el combate. Algunos de los aviones C-130 llevaban una fuerza de aproximadamente 90 de los miembros del equipo de rescate equipados para el combate, así como personal de apoyo.

De las 2 hasta las 4 p.m aproximadamente, los 6 aerotransportes y 6 de los 8 helicópteros aterrizaron en un remoto sitio desértico en Irán aproximadamente a 200 millas de Teherán donde desembarcaron el equipo de rescate e iniciaron operaciones de recombustible y la preparación de las fases subsecuentes.

Durante el vuelo al remoto sitio del desierto, 2 de los 8 helicópteros presentaron dificultades de operación. Uno de ellos se vió obligado a regresar al carguero Nimitz.; el segundo se vió forzado a aterrizar en el desierto, pero su tripulación fue llevada a bordo de otro de los helicópteros y prosiguieron hacia el sitio de aterrizaje. De los 6 helicópteros que aterrizaron, uno presentó un grave problema hidráulico y quedó imposibilitado para continuar con la misión. Los planes operacionales aceptaban un mínimo de 6 helicópteros en buenas condiciones que les permitiese seguir adelante desde su

base en el desierto. Se habían incluido 8 helicópteros en la fuerza para proveer una seguridad suficiente sin imponer cargas excesivas de reabastecimiento y requerimiento de salida de la operación. Cuando el número de helicópteros disponibles se redujo a 5, se determinó que la operación no podría continuar como se había planeado. Por eso, a recomendación del comandante de la fuerza y de mis consejeros militares decidí cancelar la misión y ordené que las fuerzas armadas de Estados Unidos involucradas partiesen de Irán.

Durante el proceso de retiro, uno de los helicópteros chocó accidentalmente con uno de los aviones C-130, que estaba preparándose para despegar. En la coalición murieron 8 miembros del personal y resultaron heridos muchos otros. Se decidió llevar a todo el personal sobreviviente a bordo de los restantes aviones C-130 y abandonar los helicópteros restantes en el sitio de aterrizaje. En total, las fuerzas armadas de Estados Unidos permanecieron en tierra 3 horas aproximadamente. Los 5 aviones restantes despegaron a las 5:45 P.M. y partieron del espacio aéreo de Irán sin ningún incidente posterior a las 8:00 P.M. del 24 de abril. Ninguna fuerza armada de Estados Unidos permaneció en Irán.

La remota área desértica fué seleccionada para evitar que esta fase de la misión fuese descubierta. En ningún momento durante la presencia temporal de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Irán se encontraron fuerzas iraneas de ningún tipo. Sabíamos, de hecho, que no había fuerzas militares iraneas en el área desértica y que éstas ignoraron la presencia de las



fuerzas armadas de los Estados Unidos hasta su salida de Irán. Tal como se planeó, no ocurrieron hostilidades durante esta parte de la misión, la única fase fue ejecutada.

En un momento en que los elementos de las fuerzas armadas de Estados Unidos estaban en tierra en el sitio desértico de aterrizaje, un autobús transportando 44 civiles iraneos apareció a través de un camino cercano. El autobús fue detenido e inhabilitado. Sus ocupantes fueron detenidos hasta la salida de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Un camión seguido de cerca por un segundo vehículo también pasó mientras los elementos de las fuerzas armadas de Estados Unidos estaban en tierra, éstos detuvieron al camión disparándole en los faros. El conductor corrió al segundo vehículo en el cual escapó a través del desierto. Ninguno de estos incidentes afectó la subsecuente decisión de terminar la misión". (11)

NOTAS DEL CAPITULO III

- (1) Barry Rubin, op. cit., p.85
- (2) Yonah Alexander, op. cit., p. 476
- (3) Los Angeles Time, 9 de Nov. de 1979 y The Washington Post, Nov. 11 de 1979.
- (4) Ver entrevista de Yazdi en Radio Teherán del 31 de Oct. y 5 de Nov. de 1979.
- (5) Barry Rubin, op. cit., p.89
- (6) Cronología sobre Irán, SRE, op cit., p.14
- (7) Ver entrevistas de Yazdi con An Nahar (Beirut) del 10. de Oct. de 1979 y con Radio Teherán del 10. de Oct. de 1979, así como entrevista del Primer Ministro Sadeq Tabaka con Al Nahar Al-Arabi Wa Al-Buwali, París del 15-21 de Oct. de 1979.
- (8) Cronología sobre Irán op. cit., p.28
- (9) Loc.cit.
- (10) Paradojicamente, Clark quien había sido Secretario de Justicia, participó posteriormente en la Conferencia Internacional sobre Crímenes contra Irán, con el obvio disgusto y desaprobación de Estados Unidos.
- (11) Yonah Alexander, op,cit., p.508.

**CAPITULO IV**

**LAS NACIONES UNIDAS ANTE EL CONFLICTO**

**SUMARIO**

- 4.1 El Consejo de Seguridad y sus Miembros**
- 4.2 Viaje del Secretario General**
- 4.3 Comisión Investigadora**
- 4.4 Convención sobre Toma de Rehenes**

#### 4.1 El Consejo de Seguridad y sus Miembros

El 9 y 27 de noviembre de 1979, el Presidente del Consejo de Seguridad, en nombre de los miembros de éste, hizo un llamado al gobierno de Irán para que liberase a los rehenes.

Más tarde, el 4 de diciembre el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la resolución 457 en la que exhortó urgentemente al gobierno de Irán a que liberara de inmediato al personal de Estados Unidos detenido en Teherán, suministrándole la protección y permitiéndole abandonar el país. Asimismo, dicho documento exhortaba a los dos gobiernos involucrados a actuar con moderación y emplear medios pacíficos de solución para resolver sus diferencias. De igual modo, se pidió que el Secretario General interpusiese sus buenos oficios para la inmediata aplicación de dicha resolución, así como para la adopción de todas las medidas apropiadas a tal fin.

El Consejo aprobó por unanimidad su resolución 461 del 31 de diciembre, en la cual se deploraba la continuación de la detención de los rehenes, ya que contravenía a la resolución anterior, así como la Providencia de la Corte Internacional de Justicia del 15 de diciembre de 1979, ver infra V, y una vez más exhortaba al gobierno de Irán a liberar inmediatamente a los nacionales de Estados Unidos mantenidos como rehenes en Teherán. En esa resolución el Consejo decidió que adoptaría medidas efectivas de conformidad con los artículos 39 y 41 de la Carta de las Naciones Unidas (1) en caso de que no fuese acatada.

El párrafo 6 de dicha resolución establecía que se fija-

ha el día 7 de enero de 1980 como plazo para examinar la situación y tomar las medidas pertinentes. Pero hasta el 11 de enero se reunió el Consejo para votar al respecto, horas antes varias sugerencias e informes de "portavoces" de Irán hicieron creer que era posible cierto progreso en relación a la liberación de los rehenes.

Aunque en principio el representante de Estados Unidos se opuso a posponer la reunión, se decidió esperar alguna comunicación oficial iraní. El Secretario General envió un mensaje urgente a Teherán solicitando detalles de la proposición no escrita de la que se había hablado.

En respuesta, el 12 de enero, el Secretario General recibió una carta pero ésta no contestaba el mensaje del mismo. Dicha misiva no mencionaba la existencia de los rehenes y no se responsabilizaba de nada.

Donald Mc Henry, representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad al proponer sanciones efectivas contra Irán, indicó que una vez que éstas fueran impuestas, "la clave para terminar esta crisis y para recobrar su status como miembro pleno de la comunidad internacional dependería de Irán. Sólo tiene que liberar a los rehenes y dotarlos de salvoconductos hasta que lleguen a casa, y las sanciones expirarán automáticamente. Nada afectará el derecho de Irán a proceder a sus reclamaciones, ya sea contra Estados Unidos o sus ex gobernantes, en un adecuado foro internacional".

En apoyo a su propuesta, el funcionario estadounidense

agregó:

"Recuerdo al Consejo que ésta no es una disputa bilateral sino una confrontación entre Irán y la totalidad de la comunidad internacional. La continuación y la observancia de los principios universalmente respetados del derecho internacional están en peligro". (2)

Dentro de ese orden de ideas, el gobierno de Estados Unidos, el 13 de enero, puso a consideración del Consejo un proyecto de resolución en el que conforme a los artículos 39 y 40 de la Carta de las Naciones Unidas proponía que todos los Estados miembros de la organización diesen por terminadas todo género de relaciones comerciales, públicas y privadas con Irán, exceptuando alimentos y medicinas, así como reducir al mínimo el número de diplomáticos iraníes acreditados ante sus respectivos países. Asimismo, exhortaba a todos los órganos de las Naciones Unidas, a los organismos especializados y a sus miembros a conformar sus relaciones con Irán a las disposiciones de la resolución. Además exhortaba a todos los Estados miembros de la organización, y en particular a aquéllos con mayor responsabilidad de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, a cumplir efectivamente con las medidas requeridas por dicha resolución.

Como era de esperarse, el proyecto de resolución no contó con el voto favorable de la URSS, quien como miembro permanente del Consejo tiene el derecho de veto, de tal suerte que

en esa ocasión impidió que se adoptase la resolución propuesta por Estados Unidos.

Los resultados de la votación fueron los siguientes:

A favor: Francia, Jamaica, Níger, Noruega, Filipinas, Portugal, Túnez, Reino Unido, Estados Unidos y Zambia.

En contra: República Democrática Alemana y la URSS.

Abstenciones: Bangladesh y México. (3)

Ausente: China.

Mc Henry en violenta respuesta a la oposición soviética declaró: "El voto soviético es un cínico e irresponsable ejercicio de su poder de veto. Su oculto motivo es claro. Los soviéticos esperan que bloqueando las sanciones podrían desviar la atención de la subyugación de Afganistán (4) y congraciarse con el gobierno y pueblo de Irán, quienes se encuentran entre los más directamente afectados por la invasión soviética".

El funcionario estadounidense añadió: "Pero las esperanzas soviéticas son vanas. Las naciones del mundo, viendo este veto en relación con la invasión soviética de Afganistán, no pueden dejar de notar que los tributos soviéticos a la primacía del Derecho Internacional son tan sólo retóricos y que la política soviética únicamente se adecúa a las normas internacionales sobre una base selectiva y a su conveniencia". (5)

La explicación de la posición asumida por México fue dada a conocer el 14 de enero por un boletín de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cuyo texto se hace hincapié en que el gobierno de nuestro país había condenado desde

el principio la acción irania, pues consideraba que constituía una grave violación a los más elementales principios del Derecho Internacional. lo cual no sólo lesionaba a Estados Unidos sino a la totalidad de la comunidad internacional. Asimismo, se recordaba que el papel del gobierno de México se había limitado a condenar lo ocurrido.

Se mencionaba que la conducta de México se fundamentaba en la valoración de ciertas relaciones, tanto con la eficacia de eventuales sanciones como sus implicaciones "políticas y jurídicas".

En el plano político, se afirmaba que la adopción de tales medidas traería consecuencias contrarias, es decir, fortalecería la oposición de los intransigentes y debilitaría la autoridad de quienes buscaban un diálogo y constreñería a las autoridades para no liberar a los rehenes.

Por otra parte, se ponía énfasis en el efecto político y psicológico que resultaría de una acción internacional de carácter punitivo sobre un pueblo. Además, se señalaba que históricamente se ha demostrado que las sanciones económicas han sido por regla general ineficaces.

En el plano jurídico el comunicado mexicano cuestionaba la interpretación legal del artículo 39 de la Carta, pues el gobierno de México consideraba que "en sí misma la toma y mantenimiento de los rehenes no constituye una amenaza para la paz. Puede constituir un elemento que, en caso de integrarse con otros, como sería un ataque armado, si podría conducir a



esa amenaza a la paz". De igual manera, se indicaba que esta resolución podría significar un precedente inaceptable para muchos Estados, en particular para aquéllos en vias de desarrollo, ya que "si estos hechos, por más graves que sean, se caracterizan como una amenaza para la paz y se adoptan sanciones en nombre de la comunidad internacional contra pueblos en insurgencia simplemente por el hecho de que han causado injusto daño a extranjeros, podría llegarse a interferir en el desarrollo de los procesos de cambio político que deben quedar finalmente confinados a la autodeterminación de los pueblos."

#### 4.2 Viaje del Secretario General

El día 30 de diciembre de 1979, Kurt Waldheim, Secretario General de las Naciones UNidas, anunció un viaje a Teherán como intento para negociar la liberación de los rehenes. Al mismo tiempo, el Ayatola Khomeini advirtió que no se entrevistaría con el Secretario General del máximo organismo internacional.

Sin embargo, el 1º de enero de 1980, Waldheim llegó a Teherán sin perder las esperanzas de entrevistarse con Khomeini e iniciar una investigación sobre los distintos aspectos de la crisis irania. Durante su estancia en Irán, Waldheim intentó visitar a los rehenes estadounidenses, pero fue impedido de hacerlo por los estudiantes musulmanes, ocupantes de la embajada norteamericana. Posteriormente, el Secretario General se entrevistó con el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Sadegh Ghotbzadeh, a quien prometió investigar las violaciones a los

derechos humanos cometidas durante el régimen del ex Sha Reza Pahlevi. El líder de la República Islámica, Ayatola Khomeini, le negó la entrevista.

A su regreso a Nueva York, Kurt Waldheim, rindió un informe en el que indicaba en el párrafo 10 la idea de una "investigación internacional de las graves violaciones de los derechos humanos y de actos ilegales bajo el anterior régimen de Irán". Añadió, que su informe de ninguna manera contenía una solución para este complicado y complejo problema, ya que el gobierno de Irán insistía sobre la extradición y restitución de los bienes del ex Sha, pero expresó su conformidad con la idea de crear una comisión internacional, con el fin de investigar los delitos cometidos por el depuesto Sha.

#### 4.3 Comisión Investigadora

En una conferencia de prensa celebrada el 20 de febrero, Kurt Waldheim, anunció el establecimiento de una Comisión Investigadora que viajaría a Irán para escuchar las reclamaciones de ese país y permitir una pronta solución a la crisis entre Estados Unidos e Irán.

La Comisión se integró por 5 juristas internacionales:

Andrés Aguilar de Venezuela; Mohammed Bedjaoui de Argelia; Adib Daoudy de la República Arabe de Siria; Héctor Wilfred Jayewardene de Sri Lanka; y Louis Edmond Pettiti de Francia. Siendo los miembros de Venezuela y Argelia copresidentes de la Comisión. (7)

Antes de llegar a Teherán, la Comisión sesionó el 21 de febrero en Ginebra en el Palacio de las Naciones, donde hubo un intercambio de opiniones sobre sus procedimientos y se comenzó a recopilar documentación. La Comisión también se entrevistó con Theodor Van Boven, Director de la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, y con Niall Mc Dermott, Secretario de la Comisión Internacional de juristas.

La Comisión Investigadora llegó a Teherán el 23 de febrero. El día 29, fue recibida por el presidente Bani Sadr y se entrevistó varias veces con el canciller iraní. Durante ese mismo período, la Comisión sesionó en la oficina de las Naciones Unidas en Teherán y escuchó declaraciones relativas a las reclamaciones de los iraníes, en particular acerca de violaciones a los derechos humanos.

Entre los que se presentaron ante la Comisión se encontraban funcionarios y miembros de la Asociación de Juristas Iraníes, y el Fiscal General de Teherán, el gobernador del Banco Central de Irán y el Sr. Habibi portavoz del Consejo Revolucionario. Sin embargo no se le permitió en ningún momento entrevistarse con el personal estadounidense cautivo.

Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, en una conferencia de prensa dictó el día 11 de marzo que el Ayatola puso a la Comisión una serie de condiciones que debía cumplir antes de ver a los rehenes, esas condiciones no estaban previstas en los arreglos y por lo tanto la Comisión no pudo cumplirlas. En vista de ese hecho se decidió que la

al gobierno iraní..." (9)

#### 4.4 Convención sobre Toma de Rehenes

Si bien lo que en seguida comentaremos no es resultado del problema de los rehenes norteamericanos en Teherán, es importante pues se refiere precisamente a la creación de un instrumento jurídico internacional a propósito de la toma de rehenes.

Tal Convención fue motivo de estudio y discusión en las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General, desde el 15 de diciembre de 1976, fecha en la cual la Asamblea General aprobó, mediante consenso, una resolución por la que decidió establecer un comité ad-hoc de 37 miembros, para redactar una convención internacional en contra de la captura de rehenes.

Se pidió al Secretario General que diera al Comité toda clase de ayuda y las facilidades que pudiera requerir para el desempeño de sus tareas.

La resolución en forma de proyecto fue patrocinada en la Comisión de Asuntos Jurídicos, por la República Federal de Alemania y otras 37 naciones, y siendo aprobada según fue revisada mediante consenso.

En las consideraciones del Comité sobre esta cuestión, se declaró que el creciente número de casos en los cuales se captura a rehenes, constituye una prueba de que la familia de naciones enfrenta un problema de dimensiones internacionales, y de la mayor importancia y urgencia. Asimismo, se consideró

Comisión regresara y consultara con Kurt Waldheim, a fin de dar al gobierno de Irán tiempo para aclarar el asunto.

El 27 de febrero, la Comisión visitó el cementerio de Zehra, el Palacio del ex Sha, Niavarán y la prisión de Evin. Al día siguiente, los miembros de la Comisión entrevistaron a 1200 personas, examinando casos de mutilación física. (8)

Así pues, el 10 de marzo, la Comisión Investigadora decidió suspender sus actividades en Teherán y regresar a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 12 de marzo para hablar con el Secretario General. Se explicó que en vista de las circunstancias la Comisión no podía presentar su informe.

Pensamos que es importante transcribir algunos segmentos de las declaraciones de la Comisión el día que salieron de Teherán hacia Nueva York:

"Con la activa cooperación de las autoridades iránias, la Comisión de Investigación se dedicó a sus tareas respecto a la consideración de todos los agravios del Irán y está lista a recibir cualquier otro documento pertinente que las autoridades iránias deseen presentar.

Respecto a contribución para resolver la crisis internacional, la Comisión considera imperioso, en vista de los acontecimientos recientes, partir a Nueva York para conferenciar con el Secretario General de las Naciones Unidas, con miras a continuar sus tareas que considera indivisibles.

En vistas de estas circunstancias, la Comisión no está en posición de preparar su informe. Tal cosa ha comunicado ya

que este fenómeno no puede ser ~~aceptado~~ por más tiempo por los Estados miembros de las Naciones Unidas sin reaccionar y que la sociedad internacional, por respeto propio debe luchar contra ese mal. (10)

Después de 3 años de arduo trabajo y discusiones de dicho órgano, la Asamblea General aprobó en su resolución 34/146 del 17 de diciembre de 1979 (11), la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, reconociendo que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la necesidad urgente de fomentar la cooperación internacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces para la prevención, el ejuiciamiento y el castigo de todos los actos de toma de rehenes como manifestaciones del terrorismo internacional.

Según dicho documento, comete el delito de toma de rehenes toda persona que se apodere de otra o la detenga y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, llámese Estado, organización internacional intergubernamental, persona natural o jurídica, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén. Igualmente, toda persona que intente cometer un acto de toma de rehenes o que participe como cómplice de otra que cometa o intente cometer dicho acto comete el delito de toma de rehenes. (12)

El articulado de la Convención contiene disposiciones tendientes a asegurar la prevención y control de las acciones terroristas cuyos fines sean la toma de rehenes. Para este efecto, prevee la adopción de medidas judiciales de orden interno con objeto de que los sujetos responsables de la comisión de tales actos no eludan la acción de la justicia. (13)

Cabe señalar que de acuerdo a la Convención no deberá accederse a la solicitud de extradición de un presunto delincuente si el Estado requerido tiene motivos fundados para creer que dicha petición se ha formulado con el fin de perseguir o castigar a una persona por razón de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico o credo político. (14)

NOTAS DEL CAPITULO IV

- (1) Artículo 39.- "El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá que medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o establecer la paz y la seguridad internacionales".  
Artículo 41 - "El Consejo de Seguridad podrá decidir que medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.
- (2) Yonah Alexander. op.cit. p,499
- (3) De conformidad con el procedimiento indicado en el párrafo dos del artículo 23 de la Carta de las Naciones Unidas el 7 de enero de 1980, México ingresó como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de la ONU, tras una votación de 133 votos a favor en la Asamblea General.
- (4) En diciembre de 1979, tras el derrocamiento del presidente Hafizullah Amin, tomó el poder Bramak Karmal, y de inmediato tropas soviéticas penetraron a Afganistán.
- (5) Yonah Alexander, op.cit. p.502
- (6) Prisma Mundial, Boletín de Información de la ONU en México P.2
- (7) Crónica de las Naciones Unidas, Vol.XVII No. 3 p.16.
- (8) Ibid. p.17
- (9) Crónica de las Naciones Unidas, Vol.XVII No. 4 p.5
- (10) Crónica de las Naciones Unidas, Vol.XVII No.12 p.92.
- (11) Documento A/RES/34/146 del 24 de enero de 1980.
- (12) Juan Manuel Portilla Gómez. "Aspectos Jurídicos del Terrorismo Internacional", AMRI, p.309
- (13) Loc. cit.
- (14) Loc. cit.



CAPITULO V

RESOLUCIONES DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

SUMARIO

- 5.1 Generalidades
- 5.2 Acción de Estados Unidos
  - 5.2.1 Solicitud
  - 5.2.2 Procedimiento ante la Corte
- 5.3 Providencia
- 5.4 Fallo del 24 de mayo de 1980
  - 5.4.1 Admisión y notificación
  - 5.4.2 Fundamentación Jurídica del Procedimiento
  - 5.4.3 Fallo jurisdiccional
  - 5.4.4 Puntos Operativos
  - 5.4.5 Opinión separada del Magistrado Lachs
  - 5.4.6 Opiniones disidentes de los Magistrados Morozov y Tarazi.

### 5.1 Generalidades

La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y funciona de acuerdo con su Estatuto, que es parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas. Las Partes en el Estatuto de la Corte son los Estados, incluidos automáticamente todos los miembros de la organización. Un Estado que no sea miembro de la misma puede llegar a ser Parte en el Estatuto de la Corte, de acuerdo con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

Todos los países que son Partes en el Estatuto de la Corte pueden ser Parte en los casos que se sometan a ésta. Otros Estados pueden encomendarle casos en condiciones que fija el Consejo de Seguridad. Este órgano, además puede encomendar que se remita a la Corte un litigio jurídico. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden solicitar una opinión consultiva a la Corte sobre cualquier cuestión jurídica; y otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados pueden también, previa autorización de la Asamblea General, solicitar opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas comprendidas en su especialidad. (1)

La jurisdicción de la Corte, se extiende a todos los litigios que los Estados le sometan, a todos los asuntos estipulados en la Carta de las Naciones Unidas y los tratados y convenciones vigentes. Los Estados pueden obligarse por anticipa

do a aceptar la jurisdicción de la Corte en casos especiales, ya sea mediante la firma de un tratado o convenio que estipule que se somete el caso a la Corte, o mediante una declaración especial en este sentido. Las declaraciones de aceptación o obligatoria de la jurisdicción de la Corte pueden excluir ciertas clases de casos. (1)

De conformidad con el artículo 38 del Estatuto, la Corte al decidir las controversias que le son sometidas aplica:

"Las convenciones internacionales que establecen reglas reconocidas por los Estados Litigantes;

La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;

Los principios generales de Derecho reconocidos por las naciones;

Las decisiones judiciales y las doctrinas de los autores más competentes en Derecho Internacional de los distintos países, como auxiliar para la determinación de las reglas de derecho".

La Corte puede decidir ex aequo et bono, según lo que es justo y bueno, es decir, más sobre una base de equidad práctica que con estricto apego a la ley, pero sólo si las partes interesadas están de acuerdo en ello.

Una de las partes en litigio puede pedir al Consejo de Seguridad que determine las medidas que deben tomarse para la ejecución de un fallo de la Corte, si la otra parte no cumple las obligaciones que de él emanan.

La Corte está integrada por 15 magistrados, llamados "miem

bros" de la Corte. Son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en votaciones independientes. Los magistrados son elegidos por sus méritos, no por su nacionalidad, pero se procura dar representación en la Corte a los principales sistemas jurídicos del mundo. No puede haber dos magistrados que sean nacionales del mismo país. Cada magistrado recibe un mandato de 9 años y puede ser reelegido, cada tercio del número total de magistrados es elegido cada 3 años. (1)

En 1979 y 1980, años en los que el gobierno de Estados Unidos presentó sus procedimientos ante la Corte, ésta estaba compuesta de la siguiente forma:

Presidente, Sir. Humprey Waldock, Reino Unido; Vicepresidente, Taslim Olawalw Elías, Nigeria; y los magistrados Manfred Lachs, Polonia; Issac Forster, Senegal; André Gros, Francia; Richard R. Baxter, Estados Unidos; P.D. Morozov, Unión Soviética; José Sette Cámara, Brasil; José María Ruda, Argentina; Nagendra Singh, India; Abdulah Ali El-Erian, Egipto; Hermann Mosler, República Federal de Alemania; Shigeru Oda, Japón; Salah El Dine Tarazi, Siria; y Roberto Ago, Italia; Secretario, S. Aquarone, Italia. (2)

## 5.2 Acción de Estados Unidos

### 2.2.1 Solicitud

El 29 de noviembre de 1979, el Departamento de Estado dió a conocer en su comunicado de prensa No. 311 que el gobierno de Estados Unidos había llevado su caso contra Irán a la Corte

Internacional de Justicia en esa fecha. Esto significa, de conformidad con el artículo 40 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que el gobierno de Estados Unidos presentó el 29 de noviembre su solicitud escrita al Secretario de la Corte.

En su acción presentada ante la Corte en La Haya, el gobierno de Estados Unidos acusó a su similar de Irán de haber violado principios fundamentales del Derecho Internacional al no proteger la Embajada de Estados Unidos en Teherán, apoyar las acciones de los que mantenían como rehenes a los nacionales americanos y amenazar con someterlos a juicio. (3)

De acuerdo con la posición de Estados Unidos, Irán violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961; la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963; la Convención sobre la Prevención y Castigo de los Delitos cometidos en contra de Personas Protegidas Internacionalmente, incluyendo a los Agentes Diplomáticos de 1973; el Tratado de Amistad entre Irán y Estados Unidos de 1955 y la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, Estados Unidos pidió la apertura urgente de audiencias de la Corte en respuesta a su solicitud y requirió de ésta emitir una providencia preliminar en la que se indicasen medidas provisionales para asegurar la liberación de los rehenes.

Además de la solicitud y el requerimiento de medidas provisionales, el Secretario de Estado Vance, envió en la misma fecha una carta al presidente de la Corte en la que reite-

raba el arreglo del conflicto conforme a la jurisdicción de la Corte, y le hacía saber el nombramiento de Roberts B. Owen, consejero legal del Departamento de Estado, como agente de los Estados Unidos en ese caso. (4)

La solicitud de Estados Unidos operó en virtud del establecimiento de la jurisdicción de la Corte de conformidad con el Artículo 36 párrafo I del Estatuto de la misma en el que se indica que la "competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las Partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes".

Estados Unidos e Irán son, como miembros de las Naciones Unidas, partes del Estatuto, y son también partes de 3 convenciones internacionales, cada una de las cuales establecen independientemente la jurisdicción de la Corte en este litigio.

Primero, ambos países son partes de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, suscrita en Viena el 18 de abril de 1961, y su Protocolo opcional relativo a la solución obligatoria de disputas.

El Artículo 1º de dicho Protocolo dispone que: "las disputas provenientes de la interpretación o aplicación de la Convención caerán dentro de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y pueden de este modo ser llevadas ante la Corte mediante una demanda realizada por cualquier parte en la disputa que sea parte del presente Protocolo".

(4)

Segundo, Estados Unidos e Irán son Partes de la Convención sobre Relaciones Consulares, celebrada en Viena el 24 de abril de 1963, y su Protocolo opcional relativo a la solución obligatoria de disputas. El Artículo 1º de dicho Protocolo es idéntico en sus términos al del Protocolo de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas antes citado. (4)

Finalmente, Estados Unidos e Irán son Partes del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares entre Estados Unidos e Irán, firmado en Teherán el 15 de agosto de 1955. El Artículo 21 párrafo II del Tratado dispone que "cualquier disputa entre las Altas Partes Contratantes así como la interpretación o aplicación del presente Tratado, que no sea resuelto favorablemente por medios diplomáticos, será sometido a la Corte Internacional de Justicia, salvo que las Altas Partes Contratantes acuerden llegar a un arreglo a través de otros medios pacíficos". (4)

Además de lo anterior Estados Unidos e Irán son Partes de la Convención sobre Prevención y Castigo de Delitos cometidos en contra de las Personas Protegidas Internacionalmente incluyendo a los Agentes Diplomáticos, suscrito en Nueva York en 1973, El Artículo 13 párrafo I de la Convención estipula que "cualquier disputa entre dos o más partes relativo a la interpretación o aplicación de esta Convención y que no sea solucionada por negociaciones, será a solicitud de una de ellas sometida a arbitraje. Si a los seis meses de la fecha de solicitud de arbitraje las partes no han podido acordar sobre la

organización del arbitraje, cualquiera de ellas puede referir el conflicto a la Corte Internacional de Justicia, solicitándola de conformidad con el Estatuto de la Corte. (4)

Respecto a este instrumento en particular la demanda de Estados Unidos hacía hincapié en que debido a la urgencia de rectificar las violaciones a la Convención y a la negativa irania de entrevistarse con funcionarios estadounidenses, resultaba impracticable recurrir al arbitraje; por lo cual se sometía a la Corte para que ésta diese entrada a las reclamaciones de Estados Unidos en relación a esta Convención.

En cuanto a las convenciones citadas por Estados Unidos, podemos sistematizar y analizar las violaciones aludidas de la manera siguiente:

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas:

Este instrumento que codifica las normas milenarias y universalmente aceptadas del Derecho Diplomático, establece como premisa básica la inviolabilidad e inmunidad de las Misiones Diplomáticas, así como de los Agentes Diplomáticos.

La primera disposición relevante en este sentido se encuentra en el Artículo 22:

1. "Los locales de la Misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del Jefe de la Misión.

2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas admitidas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se tur



be la tranquilidad de la Misión o se atente contra su dignidad.

3. Los locales de la Misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la Misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo, o medida de ejecución".

En lo que al personal diplomático atañe, el Artículo 29 reza:

"La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor lo tratará con debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad".

La inmunidad absoluta de jurisdicción penal del agente diplomático se consagra en el Artículo 31 párrafo I y el Artículo 37 lo hace extensivo a los miembros del personal administrativo y técnico de la Misión.

Otras inmunidades y privilegios pertinentes en este caso están contenidos en los Artículos 24, 25, 26, 27, 44 y 45. Entre éstos se encuentran la inviolabilidad de los archivos y documentos de la Misión, el derecho de los agentes diplomáticos a comunicarse libremente con propósitos oficiales y el derecho a abandonar el Estado receptor en el momento que deseen.

En el curso de la Historia estos principios han sido invariablemente reconocidos, y en tal virtud el único medio lícito de desaprobación de la conducta de un agente diplomático

consiste en la declaración de "persona non grata", por lo que el Estado acreditante se ve obligado a retirar de inmediato a dicha persona, pues en caso contrario ésta dejará de ser recocida como miembro de la Misión.

Por lo anterior, la detención y amenaza de sometimiento a juicio del personal de la Embajada de Estados Unidos, así como la ocupación de los locales de la misma, constituyeron gravísimas violaciones al status diplomático, el cual aún en caso de guerra o de ruptura de relaciones diplomáticas, debe cumplirse con todo rigor.

#### Convención de Viena sobre Relaciones Consulares

Este instrumento contiene básicamente los mismos principios que la Convención arriba citada, salvo que los adecúa a los agentes consulares. Así, de conformidad con ella, cada Estado Parte, incluyendo a Irán tiene la obligación legal internacional de proteger los locales consulares y a los miembros de éstos en los territorios de Cada Estado Parte.

Por supuesto, cuando el personal de una Misión Diplomática proporciona servicios consulares, dicho personal está bajo la plena protección concedida por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La Convención sobre Consulares requiere también del Estado receptor permitir a los funcionarios consulares del Estado acreditante comunicarse y tener acceso a sus nacionales. Este derecho fue manifiestamente violado al mantenerse incomunicados por la fuerza a los propios funcionarios consulares.

### Convención de Nueva York

A parte de estas dos convenciones de Viena, Estados Unidos e Irán son también partes de la Convención de Nueva York, sobre Prevención y Castigo de Delitos en contra de Personas Protegidas Internacionalmente, incluyendo a los Agentes Diplomáticos. Uno de los postulados básicos de la Convención de Nueva York se encuentra en su preámbulo y señala que los delitos en contra de tales personas protegidas internacionalmente, incluyendo a los agentes diplomáticos, son "una seria amenaza para el mantenimiento de relaciones internacionales normales", una materia de grave ocupación de la comunidad internacional.

La Convención define varios tipos de conducta como constitutivas de delitos. Según el Artículo 2 constituye un acto delictuoso participar como cómplice en un ataque contra la persona o libertad de alguien protegido internacionalmente o en un ataque violento de los locales oficiales. Conforme al Artículo 4 cada Estado Parte debe cooperar en la prevención de tales actos. De acuerdo al Artículo 7, debe tomar las medidas necesarias para que los responsables de tales actos sean procesados. El gobierno de Irán violó cada una de estas disposiciones.

### Tratado Bilateral de Amistad

Este tratado suscrito en 1955, es en cierto modo aún más amplio que las 3 convenciones multilaterales a que nos hemos referido. De conformidad con el Artículo 2 párrafo IV, cada Parte tiene la obligación legal de asegurarse que dentro de su

territorio los nacionales de la otra Parte reciban "constante protección y seguridad".

Además, el Artículo 2 prevé que, si algún nacional de Estados Unidos se halla bajo custodia en Irán, éste debe en cada caso otorgarle "un trato humano y razonable".

Según los Artículos 2 y 19 todo individuo en ese supuesto tiene derecho a comunicarse con su propio gobierno y a contar con los servicios de sus funcionarios consulares. El Artículo 13 preceptúa que a los funcionarios consulares y aún a los empleados se les conceden los privilegios e inmunidades otorgados por la costumbre internacional y un trato no menos favorable que sus similares de cualquier tercer país.

#### Carta de las Naciones Unidas.

Es importante señalar que no sólo se incurrió en violación de preceptos concretos contenidos en acuerdos específicos que obligan jurídicamente a ambos Estados, sino que además se violaron principios contenidos en la Carta constitutiva de la organización internacional universal por excelencia, las Naciones Unidas.

En este sentido el gobierno de Irán con su conducta se aparta del Artículo 2 párrafos III Y IV y del Artículo 33. El primero de ellos en lo conducente dispone lo siguiente:

3 "Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro la paz, la seguridad internacional y la justicia.

4 Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas".

Por su parte el Artículo 33, con el cual comienza el capítulo VI relativo al arreglo pacífico de controversias, propone como medios de solución pacífica; mecanismos como la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, o bien el recurso a organismos o acuerdos regionales.

#### 5.2.2 Procedimiento ante la Corte

Conforme a la fase oral señalada por el Artículo 43 párrafo I del Estatuto, se fijó el 10 de diciembre de 1979 para desahogar el argumento oral de Estados Unidos en apoyo de su solicitud, del 29 de noviembre, de medios provisionales.

Dicha acción fue representada ante la Corte, en La Haya por el Procurador General de Estados Unidos, Benjamín R. Civiletti y el asesor legal del Departamento de Estado, Roberts B. Owen. El gobierno de Estados Unidos estuvo por Roberts B. Owen, como agente; Benjamín R. Civiletti y Stephen M. Schwebel Asesor Legal Adjunto del Departamento de Estado como consejeros; y David H. Small, Consejero Legal Asistente para asuntos del Cercano Oriente y Sudasia del Departamento de Estado, como asesor. El Sr. Civiletti estuvo asistido por Jack Goldklan,

asesor de la Oficina del Consejero Legal del Departamento de Justicia y por Robert Smith, Asistente especial del Procurador General. (5)

Waldock, Presidente de la Corte, al comienzo de la audiencia señaló que se sometía a consideración la solicitud de medidas provisionales por parte de Estados Unidos en base al Artículo 41 del Estatuto y a los Artículos 73 y 74 del Reglamento de la Corte. (6)

El Presidente indicó que Irán no había designado a ningún agente, sino que en un mensaje telegráfico recibido el día anterior, el gobierno de Irán informó a la Corte sobre su posición en el sentido de que ésta no podía y no debería conocer del caso ni indicar las medidas provisionales formuladas en la solicitud de Estados Unidos. La comunicación irania reiteraba su respeto y alta estima por la Corte, pero rechazaba la jurisdicción de ésta, considerando que "la cuestión de los rehenes sólo representaba un aspecto global el cual no podía ser estudiado separadamente, y que involucraba, inter alia, más de 25 años de continua intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Irán, la vergonzosa explotación de nuestro pueblo y numerosos crímenes perpetrados en contra del pueblo iranio lo cual se opone y entra en conflicto con todas las normas internacionales y humanitarias".

Además, la argumentación irania señalaba que entanto las medidas provisionales están por definición dirigidas a proteger los intereses de las partes, no pueden ser unilaterales,

tal como según ellos eran en la solicitud de Estados Unidos.

Finalmente, se llamaba la atención de la Corte sobre el hecho de que las profundas raíces y el carácter fundamental de la Revolución Islámica de Irán no permitían ningún examen de sus repercusiones, las cuales son materia directa de la soberanía nacional de Irán. (7)-

Una vez dada a conocer la comunicación oficial del gobierno iraní, el Sr. Civiletti procedió a presentar la acción oral en nombre de Estados Unidos. Su argumentación giró en torno a las violaciones cometidas por Irán de los instrumentos jurídicos internacionales a que nos hemos referido en nuestro numeral anterior, y que corresponden exactamente a los mismos que se señalaron en la solicitud escrita de Estados Unidos. (8)

A continuación tocó su turno a Roberts Owen quien afirmó que este caso no involucraba complicadas consideraciones legales o difíciles cuestiones de interpretación e indicó que la única cuestión era la aplicación de los cuatro Tratados antes señalados, y tras un breve pero bien documentado relato de los hechos, indicó que la aplicación de aquéllos era muy clara.

La parte más relevante de la participación del Sr. Owen consistió en reafirmar la jurisdicción de la Corte sobre este asunto, dejando bien claro que el hecho de que el Consejo de Seguridad estuviese conociendo de este problema en forma paralela, ver supra 4.1, no impedía que ese órgano judicial siguiera adelante con sus procedimientos, pues ninguna disposición de la Carta de las Naciones Unidas ni del Estatuto de la Corte preceptúa la abstención de dicho órgano (9), amén de que a di

ferencia del Consejo de Seguridad que emplea métodos políticos de solución, la Corte Utiliza métodos judiciales en virtud de que es su responsabilidad aplicar métodos jurídicos de solución de controversias.

En cuanto al fundamento jurídico de la solicitud de medidas provisionales, el agente de Estados Unidos indicó que muchos sistemas legales reconocen que el alivio provisional requerido es adecuado con objeto de preservar el status quo pendente lite. Para evitar cualquier duda, Owen señaló que el status al que se refería es el status quo ante, o sea la situación inmediatamente anterior al 4 de noviembre de 1979.

Como respuesta al mensaje telegráfico del gobierno de Irán, el agente estadounidense señaló que: "primero que nada el punto de vista de Irán sobre considerar la posición de los rehenes como un problema secundario no es compartido por el Secretario General de las Naciones Unidas ni por el Consejo de Seguridad de la misma organización, ya que ambos han calificado unánimemente al cautiverio de los rehenes como una amenaza considerable a la paz internacional. Segundo, si existen otras disputas entre Irán y Estados Unidos, el primero no ha hecho nada para llevar tales asuntos ante la Corte. El hecho es que el único diferendo que ha sido llevado ante la Corte es el relativo al de la toma de rehenes, y asumimos, con gran respeto, que es el único con el cual puede tratar la Corte ahora". (9)

Respecto a la objeción irania de aplicación de medidas



provisionales en forma unilateral por la Corte, según la cual esta no podría pedir la liberación de los rehenes a Irán sin pedir una acción equivalente a Estados Unidos, Owen replicó que de conformidad con el Artículo 41 del Estatuto se autoriza a la Corte a indicar, cuando las circunstancias lo requieran "cualesquiera medidas provisionales que deban tomarse para preservar los respectivos derechos de cada Parte"; lo cual implica que cuando una de las dos partes esté causando un daño irreparable a la otra, la adopción unilateral de una medida es completamente adecuada. (10)

Por último, el representante de Estados Unidos señaló de la manera siguiente las medidas solicitadas:

"Primera, que el gobierno de Irán libere inmediatamente a todos los rehenes de nacionalidad estadounidense y facilite la pronta salida de Irán de estas personas y de todos los restantes funcionarios de Estados Unidos en condiciones dignas y humanas.

Segunda, que el gobierno de Irán desaloje inmediatamente de los locales de la Embajada, Cancillería y Consulados en Teherán a todas las personas cuya presencia no esté autorizada por el gobierno de Estados Unidos y que los reintegre al control de éste.

Tercera, que el gobierno de Irán se asegure de que a todas las personas adscritas a la Embajada de Estados Unidos y Consulados se les otorgue completa libertad de movimiento necesaria para realizar sus funciones diplomáticas y consulares.

Esto en caso de que Estados Unidos optara e Irán acordá-se la continuación de la presencia del personal diplomático en Teherán y en tal virtud se les debería permitir desempeñar sus funciones de acuerdo con sus privilegios e inmunidades.

Cuarta, que el gobierno de Irán no someta a juicio a ninguna persona adscrita a la Embajada y Consulado de Estados Unidos y que se abstenga de cualquier acción para llevar adelante tal juicio.

Quinta, que el gobierno de Irán asegure que no se tome ninguna acción que perjudique los derechos de Estados Unidos respecto de la ejecución de alguna decisión que dispusiese la Corte y en particular no llevar a cabo ni permitir ninguna acción que pudiera perjudicar las vidas, seguridad o bienestar de los rehenes". (10)

### 5.3 Providencia del 15 de diciembre de 1979

Luego de examinar la solicitud escrita de Estados Unidos del 29 de noviembre de 1979, así como la audiencia del 10 de diciembre del mismo año, y de haber procedido a intensas deliberaciones, la Corte emitió su Providencia del 15 de diciembre de 1979, la cual consta de 47 puntos. (11)

Dicho documento básicamente acepta la presentación jurídica de los hechos planteados por Estados Unidos, salvo que la Corte no consideró necesario establecer su jurisdicción con fundamento en el Artículo 21 párrafo II del Tratado de Amistad Relaciones Económicas y Derechos Consulares de 1955, así como

el Artículo 1º de la Convención sobre Prevención y Castigo de los Delitos en contra de las Personas Protegidas Internacionalmente, incluyendo los agentes diplomáticos, de 1973.

A efecto de no reproducir íntegramente el texto de la Providencia, a continuación incluimos la correspondiente traducción al español de los puntos 38 al 47, en los cuales pueden resumirse los considerandos de la Corte así como los puntos operativos de la Providencia que dictó medidas provisionales contra Irán. (Anexo I)

38. Considerando que no existe exigencia más fundamental en la conducción de las relaciones entre los Estados que la inviolabilidad de los agentes diplomáticos y de las Embajadas ya que a lo largo de la Historia las naciones de todos los cre- dos y culturas han observado las obligaciones recíprocas para tal propósito; y que las obligaciones así asumidas para garantizar en particular la seguridad personal de los diplomáticos y su inmunidad y jurisdicción son esenciales sin excepción alguna, e inherentes a su carácter representativo y a su función diplomática. (12)

39. Considerando que la institución de la diplomacia, con sus concomitantes privilegios e inmunidades ha resistido la prueba de los siglos y probado ser un instrumento esencial para la efectiva cooperación en la comunidad internacional, que permite a los Estados no obstante las diferencias de sus sistemas constitucionales y sociales lograr una comprensión mutua y resolver sus divergencias a través de medios pacíficos.

40. Considerando que el libre desenvolvimiento de las relaciones consulares, igualmente establecidas entre los pueblos desde tiempos remotos es no menos importante en el contexto del Derecho Internacional Contemporáneo, en cuanto al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones y asegura la protección y asistencia a los extranjeros residentes en el territorio de otros Estados y considerando por ésto que los privilegios e inmunidades de los funcionarios y empleados consulares y de los locales de archivos consulares son también principios de Derecho Internacional profundamente arraigados.

41. Considerando que ningún Estado tiene la obligación de mantener relaciones diplomáticas o consulares con otro, (13) no pueden dejar de reconocer las imperativas obligaciones inherentes, codificadas ahora en las Convenciones de Viena de 1961 y 1963, de las que son Partes Irán y Estados Unidos;

42. Considerando que la persistencia de la situación que constituye el objeto de requerimiento expone a los seres humanos involucrados a privación, malos tratos, angustia y a un peligro a su vida y salud, y en consecuencia a una seria posibilidad de daño irreparable;

43. Considerando a este respecto que la Corte no puede dejar de considerar las disposiciones de la Convención sobre Prevención y Castigo de Delitos en contra de Personas Protegidas Internacionalmente, incluyendo los Agentes Diplomáticos, de la cual Irán y Estados Unidos son Partes.

44. Considerando que en virtud de las observaciones precedentes, la Corte concluye que las circunstancias exigen que se indiquen medidas provisionales, de conformidad con el Artículo 41 del Estatuto de la Corte, con el fin de preservar los derechos invocados;

45. Considerando que la decisión emitida en el presente procedimiento de ningún modo prejuzga la cuestión de la jurisdicción de la Corte para conocer el fondo del asunto, ni la cuestión relativa al fondo mismo y que deja intacta el derecho del gobierno de Irán para presentar argumentos en contra de tal jurisdicción respecto al fondo;

46. Considerando que la Corte procede ahora a indicar medidas que estima necesarias en el presente caso.

47. Consecuentemente

La Corte,

Unánimemente,

1. Indica, a título transitorio en espera de la decisión final del procedimiento instituido el 29 de noviembre de 1979 por Estados Unidos contra la República Islámica de Irán las siguientes medidas provisionales:

A (1) El gobierno de la República Islámica de Irán debe asegurarse inmediatamente de que los locales de la Embajada, Cancillería y Consulados de Estados Unidos sean reintegrados a las autoridades de Estados Unidos bajo su exclusivo control y debe asegurar su inviolabilidad y efectiva protección tal como lo prevén los Tratados en vigor entre los dos Estados y

por el Derecho Internacional General;

(11) El gobierno de la República Islámica de Irán debe asegurar la inmediata libertad, sin excepción alguna de todas las personas de nacionalidad estadounidense que estén o hayan estado mantenidos como rehenes en alguna otra parte y otorgarles plena protección a la totalidad de tales personas, de conformidad con los Tratados en vigor entre los dos Estados y con el Derecho Internacional General.

(11) El gobierno de la República Islámica de Irán debe, en lo sucesivo, otorgar a todo personal diplomático y consular de Estados Unidos plena protección y los privilegios e inmunidades a los que tiene derecho bajo los Tratados en vigor entre las dos Partes y bajo el Derecho Internacional General, incluyendo la inmunidad de cualquier forma de jurisdicción penal y libertad y facilidades para abandonar el territorio de Irán;

B Los gobierno de Estados Unidos e Irán no deben emprender ninguna acción que pueda agravar la tensión entre los dos países o hacer más difícil la solución de la disputa existente;

2. Decide que, hasta que la Corte entregue su fallo final sobre el presente caso, mantendrá las materias objeto de esta providencia continuamente bajo revisión.

Hecha en inglés y francés (14), haciendo fe la versión inglesa, en el Palacio de la Paz, La Haya, este 15º día de diciembre de 1979, en 4 copias una de las cuales será deposita-

da en los archivos de la Corte y las otras transmitidas al gobierno de la República Islámica de Irán, al gobierno de Estados Unidos, y al Secretario General de las Naciones Unidas, respectivamente, para su transmisión al Consejo de Seguridad.

#### 5.4 Fallo del 24 de mayo de 1980 (15)

##### 5.4.1 Admisión y notificaciones

Como señalamos anteriormente, el gobierno de Estados Unidos, a través del Asesor Legal del Departamento de Estado, presentó al Secretario de la Corte una solicitud de procedimiento contra Irán y de conformidad con las disposiciones pertinentes (16) se notificó al gobierno de Irán, así como al Secretario General de la ONU, a los miembros de la organización y a otros Estados con derecho a participar en la Corte.

Más tarde, mediante una orden del presidente del 24 de noviembre de 1979 se fijó el 15 de enero de 1980 como plazo para la presentación de la memoria de Estados Unidos y el 18 de febrero de 1980 como plazo para la contramemoria de Irán, con libertad para éste, si designaba un agente para presentar observaciones sobre el caso, para solicitar la reconsideración de tal plazo.

La memoria de Estados Unidos fue recibida el 15 de febrero de 1980, dentro del plazo prescrito y fue comunicado al gobierno de Irán; ninguna contramemoria fue entregada por Irán, no fue designado ningún agente y no fue hecha solicitud alguna para reconsiderar el plazo fijado.

En tal virtud, el caso estaba listo para audiencia el 19 de febrero de 1980, sin embargo, y debido a que una comisión investigadora, ver supra 4.3, anunciada por el Secretario General el 20 de marzo, comenzó a funcionar el 23 de marzo, se propuso una postergación de la audiencia pidiéndose a las Partes involucradas, incluyendo al Secretario General, que clarificase los avances y funcionamiento de dicha comisión.

No fue sino hasta el 18 de marzo, tras el fracaso de la comisión de investigación, que se retiró de Irán el 10 de marzo, y de la urgencia de Estados Unidos por seguir adelante con el procedimiento, que se iniciaron las audiencias públicas que se prolongaron a los días 19 y 20 del mismo mes. En dichas audiencias la Corte oyó el argumento oral del agente de Estados Unidos, habiéndose producido interrogatorios y réplicas entre este último y los miembros de la Corte respectivamente.

El gobierno de Estados Unidos estuvo representado por los siguientes funcionarios:

Agente. Robert B. Owen, Asesor Legal del Departamento de Estado.

Agentes adjuntos: Jeri Joseph, Embajador de Estados Unidos en Hoalnda; Stephen M. Schwebel, Asesor Legal Adjunto del Departamento de Estado; Thomas J. Dunnygan, Consejero de la Embajada de Estados Unidos en Holanda.

Asistentes: David H. Small, Asesor Legal Asistente del Departamento de Estado; Ted L. Stein, Abogado Asesor del Departamento de Estado; Hugh V. Simon Jr., Segundo Secretario



sino a un tribunal arbitral". o (b) "adoptar un procedimiento de conciliación antes de recurrir a la Corte Internacional de Justicia". Sin embargo, los términos de los Artículos 2 y 3, al ser leídos en conjunto con los Artículos 1º así como de los preámbulos de los Protocolos, deja muy claro que no deben entenderse como una pre condición para la aplicabilidad de la disposición precisa y categórica contenida en el Artículo 1º que establece la jurisdicción obligatoria de la Corte con respecto a disputas que surgan de la interpretación o aplicación de Convención de Viena en cuestión. Los Artículos 2 y 3 disponen que si las Partes así lo convinieren puede recurrirse a arbitraje o conciliación. Se concluye, primero, que los Artículos 2 y 3 no se aplican sino cuando una de las Partes en controversia ha propuesto el recurso al arbitraje o conciliación y si la otra parte ha consentido en estudiar dicha proposición. Segundo, es sólo en ese caso que las disposiciones de éstos Artículos relativos a un plazo de dos meses entran en juego y acuerdan un límite de tiempo para la conclusión del acuerdo sobre la organización del procedimiento alterno.

En la presente instancia ninguna de las Partes en conflicto ha propuesto recurrir a cualquiera de estas alternativas, ya sea antes de presentar la solicitud o en cualquier momento posterior. Sino por el contrario, las autoridades iraníes se han negado absolutamente a discutir la cuestión con Estados Unidos, actitud que sólo puede entenderse por éste como el descarte. "in limine" de cualquier probabilidad de llegar a un

acuerdo para recurrir al arbitraje o conciliación bajo el Artículo 2 o el Artículo 3 de los Protocolos en lugar de recurrir a la Corte.

En consecuencia, cuando Estados Unidos presentó su solicitud del 29 de noviembre de 1979, tenía sin duda la facultad de recurrir al Artículo I de los Protocolos, y de invocarlo como base para el establecimiento de la jurisdicción de la Corte respecto a sus reclamaciones bajo las Convenciones de Viena de 1961 y 1963.

#### B) Principio de inviolabilidad diplomática

En esencia, las reglas del Derecho Diplomático constituyen un régimen autónomo el cual, por una parte, estipula las obligaciones del Estado receptor para contrarrestar cualquier posible abuso. Estos medios son por naturaleza completamente eficaces ya que si el Estado acreditante no retira a un miembro de la Misión que ha sido objetado, esto dará por resultado la pérdida inmediata de sus privilegios e inmunidades, pues el Estado acreditante dejará de reconocerlo como miembro de la misión, todo lo cual compelerá a tal persona, en su propio interés a partir sin demora.

El principio de la inviolabilidad personal de los agentes diplomáticos y de los locales de la Misión Diplomática es uno de los fundamentos de este régimen establecido desde hace mucho tiempo y a cuya evolución han contribuido sustancialmente las tradiciones del Islam.

El carácter fundamental del principio de la inviolabili-

dad se encuentra aún más vigorosamente subrayado por las disposiciones de los Artículos 44 y 45 de la Convención de Viena de 1961, Artículos 26 y 27 de la Convención de Viena de 1963. Aún en caso de conflicto armado o de ruptura de relaciones diplomáticas, estas disposiciones obligan al Estado receptor a respetar la inviolabilidad de los miembros de la Misión Diplomática así como a sus locales, bienes y archivos.

Naturalmente la observancia de este principio no quiere decir -y el gobierno solicitante lo ha reconocido expresamente- que un agente diplomático sorprendido en flagrante delito de agresión o de cualquier otra infracción no pueda, bajo ciertas circunstancias, ser brevemente detenido por la policía del Estado acreditante con fines preventivos, pero dichas eventualidades no guardan ninguna relación con lo ocurrido en el presente caso.

En el presente caso, el gobierno de Irán no rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y respondiendo a un miembro de la Corte, el agente de Estados Unidos indicó que en ningún momento previo a los acontecimientos del 4 de noviembre de 1979, había declarado o manifestado el gobierno de Irán su intención de declarar "persona non grata" a miembro alguno del personal diplomático o consular de Estados Unidos en Teherán. El gobierno de Irán no ha utilizado entonces los medios que el Derecho Diplomático pone a su disposición, precisamente con la finalidad de enfrentar las actividades del género de las que ahora se plantean. Al contrario ha permitido que un grupo de

militantes ataque y ocupe la Embajada de Estados Unidos por la fuerza y que tome al personal diplomático y consular como rehenes, al contrario, ha aprobado esta acción y deliberadamente ha dejado prolongar la ocupación de la Embajada y detención del personal para coaccionar al Estado acreditante. Al mismo tiempo, se ha negado a discutir la situación con los representantes de Estados Unidos. La Corte no puede más que concluir que el gobierno de Irán no ha aplicado los medios normales y eficaces que estaban a su disposición, sino que ha recurrido a medidas coercitivas contra la Embajada de Estados Unidos y su personal.

C) Convención de Nueva York

Estados Unidos ha invocado el Artículo 13 de la Convención de 1973 sobre Prevención y Castigo de los Delitos en contra de las Personas Protegidas Internacionalmente, incluyendo los Agentes Diplomáticos, como base para el ejercicio de la jurisdicción de la Corte respecto a sus reclamaciones bajo tal instrumento. Sin embargo, la Corte no considera necesario dilucidar en el presente juicio si, en las circunstancias del caso, el Artículo 13 de tal Convención podría servir de base para el ejercicio de su jurisdicción respecto a estas reclamaciones.

D) Aplicación del Tratado de Amistad

Estados Unidos presentó también reclamaciones respecto a violaciones de Irán a los Artículos 2 párrafa IV, 13, 14 y 19 del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Con-

sulares de 1955 entre Estados Unidos e Irán, el cual entró en vigor el 10 de junio de 1957. En relación a estas reclamaciones Estados Unidos ha invocado el párrafo II del Artículo 21 del Tratado como base para la jurisdicción de la Corte. Las reclamaciones de Estados Unidos bajo este Tratado coinciden en gran medida con sus reclamaciones bajo las dos Convenciones de Viena, y más especialmente la de 1963.

Por esto, la controversia entre Estados Unidos e Irán en relación a sus reclamaciones es al mismo tiempo una controversia que surge de la interpretación o aplicación de las Convenciones de Viena lo cual cae dentro del Artículo I de sus Protocolos. Fue por esta razón que la Corte en su orden del 15 de diciembre de 1979, ver supra 5.3, no consideró necesario entrar en la cuestión de si el Artículo 21 párrafo 2 del Tratado de 1955 pudiera haber provisto una base para el ejercicio de su jurisdicción en el presente caso.

Pero tomando en consideración que el Artículo 2 párrafo IV del Tratado de 1955 dispone que "los nacionales de cualquier Alta Parte Contratante recibirán las más constantes seguridad y protección dentro del territorio de la otra Alta Parte Contratante..." la Corte considera que la presente etapa del procedimiento que el Tratado tiene importancia en relación con las reclamaciones de Estados Unidos respecto a los individuos particulares que están como rehenes en Irán. Consecuentemente, la Corte considera ahora que si existe una base para el

ejercicio de su jurisdicción respecto a las mencionadas disposiciones del Tratado de 1955 en el Artículo 21 párrafo 2 del Tratado que dice: "cualquier controversia entre las Altas Partes Contratantes en cuanto a la interpretación del presente Tratado que no sea satisfactoriamente solucionado por la vía diplomática, será sometido a la Corte Internacional de Justicia, salvo que las Altas Partes Contratantes convengan en solucionarlo recurriendo a otros medios pacíficos".

Como se señaló previamente, cuando Estados Unidos presentó su solicitud del 29 de noviembre de 1979, sus esfuerzos de negociación con Irán habían sido inútiles y la situación había llegado a un impasse, debido a la negativa de Irán a discutir el asunto. En consecuencia, existía sin duda en esa fecha no sólo una controversia, sino una "controversia... no solucionada satisfactoriamente por la vía diplomática" dentro del significado del Artículo 21 párrafo 2 del Tratado de 1955; y esta controversia comprendía, inter alia, las materias que son objeto de las reclamaciones de Estados Unidos conforme a ese Tratado.

La disposición del Tratado de 1955 que preceptúa que las controversias relativas a su interpretación o aplicación serán sometidas a la Corte que establece un sistema análogo a la de los Protocolos de firma facultativa de las Convenciones de Viena que la Corte ya analizó. El Artículo 21 párrafo II del Tratado prevé la jurisdicción obligatoria de la Corte sobre estas controversias, a menos que las Partes convengan a un acuerdo por otros medios.

En la presente instancia, como en el caso de los Protocolos opcionales, la inmediata y total negativa de las autoridades iraníes para entablar cualquier negociación con Estados Unidos excluye in limine cualquier cuestión de una acción para recurrir a "otros medios pacíficos" para el arreglo de la controversia. Consecuentemente, bajo los términos del Artículo 21 párrafo II, Estados Unidos tenía el 29 de noviembre de 1979 la facultad de invocar las disposiciones del Artículo 21 párrafo II de la Corte. Dicho Artículo ciertamente no prevé en términos expresos que una u otra Parte pueda llevar su caso ante la Corte mediante solicitud unilateral, pero es evidente que, como lo ha sostenido Estados Unidos en su Memoria, eso es lo que las Partes pretendían. Disposiciones redactadas en términos similares son muy comunes en Tratados bilaterales de Amistad en que la intención de las Partes al aceptar estas cláusulas, es sin duda alguna reservarse este derecho a dirigirse unilateralmente a la Corte a falta de acuerdo para emplear cualquier otro medio pacífico de solución.

La cuestión ha sido planteada también en el sentido de saber si en razón de ciertas contramedidas emprendidas por Estados Unidos contra Irán, el primero tenía derecho a invocar el Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares el presente procedimiento. No obstante, que todas las medidas tomadas como respuesta a lo que Estados Unidos creía graves y manifiestas violaciones del Derecho Internacional por Irán, influyendo violaciones al propio Tratado de 1955.

De todas maneras, cualquier violación del Tratado por alguna de las Partes no podría tener por efecto impedir que tal Parte invocase las disposiciones del Tratado concernientes al arreglo pacífico de controversias.

Irán no había sugerido en ningún momento que el Tratado de 1955 no estuviese en vigor el 4 de noviembre de 1979 cuando la Embajada de Estados Unidos y sus nacionales fueron hechos rehenes, o el 29 de noviembre del mismo año cuando Estados Unidos sometió esta controversia a la Corte. El objetivo mismo de un Tratado de Amistad es promover relaciones cordiales entre las Partes involucradas, y entre sus pueblos, mediante el compromiso mutuo de asegurar en el territorio de cada Estado la protección y seguridad de los nacionales en el otro. Es precisamente en el momento en que las controversias se presentan cuando el Tratado asume toda su importancia; el objeto mismo del Artículo 21 párrafo II, es proveer un medio para lograr el arreglo amistoso de las controversias por la Corte o por otros medios pacíficos. Sería contradictorio concluir que en virtud del Artículo 21 párrafo II el Tratado no estuviera abierto a las Partes en el momento que este recurso es más necesario. Aún más, y a pesar de que el mecanismo que permite poner en juego efectivamente este Tratado esté sin duda actualmente bloqueado por la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos Estados, decretada por Estados Unidos, las disposiciones del Tratado continúan siendo parte del Derecho aplicable entre Estados Unidos e Irán.



E) No justificación de la acción irania

Además del mensaje telegráfico enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán el 9 de diciembre de 1979, ver supra 5.3, un segundo comunicado fue recibido en la sede de la Corte el 16 de marzo de 1980 cuyo contenido es prácticamente idéntico al primero.

En este sentido, la Corte señaló en su Providencia del 15 de diciembre de 1979 que si el gobierno de Irán consideraba que las actividades de Estados Unidos en Irán estaban en estrecha conexión jurídica con el objeto materia de la solicitud, Irán podía presentar su propio caso en relación a esas actividades ante la Corte a manera de defensa contra las reclamaciones de Estados Unidos.

Sin embargo, el gobierno de Irán no se presentó ante la Corte. Lo que es más, aún en su carta del 16 de marzo de 1980, transmitida a la Corte 3 meses después de la emisión de tal Providencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores iranio no proporcionó a la Corte ninguna información posterior sobre las supuestas actividades delictivas de Estados Unidos en Irán, ni explicó sobre que base legal consideraba que esas presunciones constituían una respuesta relevante ante las reclamaciones de Estados Unidos.

La gran cantidad de información sometida por el propio Estados Unidos a la Corte incluye, es verdad, algunas declaraciones emanadas de las autoridades iraniaas o de los militantes en las que se hace referencia a los supuestos espionaje e

interferencia de Estados Unidos en Irán teniendo como centro su Embajada en Teherán. Estas declaraciones son del mismo carácter de las aseveraciones sobre supuestas actividades delictivas de Estados Unidos contenidas en las cartas del Ministerio de Asuntos Exteriores y no están apoyadas por evidencia proporcionada por Irán ante la Corte. Por ello, no proveen una base sobre la que la Corte pudiera formar una opinión judicial respecto a la veracidad de estas presunciones.

De cualquier modo, incluso si las supuestas actividades delictivas de Estados Unidos en Irán pudieran ser consideradas como establecidas, la cuestión se reduciría a saber si podrían ser consideradas por la Corte como una justificación de la conducta de Irán y en consecuencia como medio de defensa contra las reclamaciones de Estados Unidos en el presente caso. Sin embargo, la Corte no puede aceptarlo así debido a que el propio Derecho Diplomático provee los medios necesarios de defensa y sanción de las actividades ilícitas cometidas por los miembros de las Misiones Diplomáticas y Consulares, ver supra inciso B.

F) Responsabilidad del gobierno de Irán (17)

Los hechos materiales que tomó en cuenta la Corte para su decisión deben verse desde dos puntos de vista. Primero, debe determinarse en que medida, legalmente, los actos en cuestión pueden considerarse como imputables al Estado iranio. Segundo, debe considerarse su compatibilidad o incompatibilidad con las

obligaciones de Irán conforme a los Tratados en vigor o a cualquier otra norma de Derecho Internacional que pueda ser aplicable. Los acontecimientos que son objeto de las reclamaciones de Estados Unidos se dividen en dos fases, las cuales conviene examinar separadamente:

La primera de estas fases cubre el ataque armado a la Embajada de Estados Unidos por militantes el 4 de noviembre de 1979, la ocupación de sus locales, la toma del personal como rehenes, el apoderamiento de su propiedad y archivos y la conducta de las autoridades iránias ante tales acontecimientos.

El ataque y subsecuente ocupación progresiva de la totalidad de las instalaciones de la Embajada fue una operación que se desarrolló en un período de 3 horas sin que interviniese ningún cuerpo de policía, unidad militar o cualquier funcionario iraní para tratar de impedir la realización de tal acción.

Como resultado del ataque se produjeron considerables daños a los locales y bienes de la Embajada, la apertura forzada de sus archivos, la confiscación de éstos y otros documentos encontrados en la Embajada y, lo que es más grave, el mantenimiento de su personal diplomático y consular como rehenes, junto con dos nacionales de Estados Unidos.

No se sostuvo en ningún momento que al atacar la Embajada los militantes hayan tenido algún status oficial como "agentes u órganos" del Estado iraní. Su acción no podía ser imputable al Estado iraní sobre esa base. Su responsabilidad directamente imputable hubiera podido establecerse sólo si los

militantes hubieran actuado a nombre del Estado, y habiendo sido comisionados para tal empresa por algún órgano competente de éste. Así, la información con que cuenta la Corte no basta para establecer en ese tiempo la existencia de una liga entre los militantes y cualquier órgano competente del Estado.

Previamente, el Ayatola Khomeini líder religioso del país, había hecho varias declaraciones públicas denunciando a Estados Unidos como responsable por todos los problemas del país. Al hacerlo parecía que el Ayatola estaba propiciando el resentimiento general de los partidarios de la Revolución en relación a la admisión del ex Sha en Estados Unidos. Según información de la Corte se indica también que un vocero de los militantes al explicar su acción se refirió expresamente a un mensaje del Ayatola Khomeini del 1° de noviembre de 1979, en el que había declarado que " dependía de los estudiantes de Teología multiplicar sus ataques en contra de Estados Unidos e Israel de modo que obligara a Estados Unidos a devolver al depuesto y criminal Sha y para condenar esta gran conjura", o sea, una conjura para provocar distensiones entre las principales tendencias islámicas.

Sin embargo, y según la Corte, sería ir demasiado lejos interpretar tales declaraciones del Ayatola Khomeini al pueblo o estudiantes de Irán como equivalentes a una autorización estatal para emprender la operación específica de invasión y toma de la Embajada de Estados Unidos. El hacerlo implicaría contradecir las aseveraciones de los propios militantes quienes

reclamaron crédito por haber ideado y llevado a cabo el plan de ocupación de la Embajada. Aún más, felicitaciones y otras declaraciones oficiales subsecuentes de apoyo no alteran el carácter independiente e inoficial del ataque de los militantes a la Embajada.

La primera fase incluye también los ataques a los consulados de Estados Unidos en Shiraz y Tabriz, en los que al igual que la Embajada en Teherán fueron atacados por grupos no oficiales y en total ausencia de fuerzas policiales.

La conclusión a que llegó la Corte es que el ataque inicial a la Embajada el 4 de noviembre así como a los Consulados al día siguiente, si bien no pueden considerarse como imputables en sí al Estado iraní, esto no significa que Irán esté libre de responsabilidad en relación a esos ataques.

Su comportamiento de contraponía a sus obligaciones internacionales, ya que, en virtud de diversas disposiciones de las Convenciones de Viena de 1961 y 1963 Irán tenía, en tanto que Estado receptor, la obligación de tomar medidas adecuadas para proteger la Embajada y Consulados de Estados Unidos, su personal, sus archivos, sus medios de comunicación y la libertad de movimiento de los miembros de su personal, ver supra inciso B.

Lo anterior contrastó con la posición asumida por el gobierno iraní el 14 de febrero de 1979 en ocasión de un ataque armado en contra de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. fecha en la cual la oportuna intervención de los guardias revo

lucionarios enviados por el gobierno impidió la consumación de dicha acción. Incluso el Primer Ministro de Irán envió el 1° de marzo una nota expresando sus disculpas por el incidente y dando seguridades de que se tomarían las medidas necesarias para evitar en lo futuro la repetición de tales hechos, indicando además la disposición de su gobierno para indemnizar a Estados Unidos por los daños causados. Tres días antes de la toma de la Misión Diplomática la policía intervino rápida y efectivamente para protegerla cuando una gran multitud de manifestantes protestaban frente a ésta. Además, en otras ocasiones que se intentó atacar otras Embajadas en Teherán, la policía evitó que se consumasen tales actos.

Y la reacción del gobierno iranio respecto a los acontecimientos del 4 de noviembre fue completamente nula pues no obstante las seguridades anteriormente presentadas ignoró completamente los repetidos y urgentes llamados de ayuda y no hizo nada para prever el ataque ni para persuadir a los ocupantes de abandonar la misión una vez consumado el hecho.

La Corte concluye en relación a: la primera fase de los acontecimientos estudiados que el 4 de noviembre las autoridades iranas:

(a) Estaban plenamente conscientes de las obligaciones impuestas por las Convenciones en vigor para tomar medidas apropiadas para proteger los locales de la Embajada y Consulados de Estados Unidos y a su personal contra cualquier atentado a su inviolabilidad y para garantizar la seguridad de otras

personas que ahí se encontraban;

(b) Estaban conscientes, en virtud de las llamadas de auxilio de la Embajada de Estados Unidos, de la urgente necesidad de actuar;

(c) Tenía los medios a su disposición para cumplir con sus obligaciones;

(d) Incumplieron totalmente con estas obligaciones.

De manera similar, la Corte concluyó que las autoridades iraníes estaban igualmente conscientes de sus obligaciones de proteger los consulados de Estados Unidos en Tabriz y Shiraz y de la necesidad de acción de su parte, y de manera similar se abstuvieron de utilizar los medios a su disposición para cumplir con sus obligaciones.

La segunda fase de los acontecimientos comprende todos los sucesos posteriores a la ocupación de la Embajada y Consulados de Estados Unidos. El Ministro de Asuntos Exteriores declaró en una conferencia de prensa el 5 de noviembre que "conforme a las normas internacionales el gobierno de Irán está obligado a salvaguardar la vida y propiedades de los nacionales extranjeros". Pero no hizo ninguna mención a la obligación de Irán de salvaguardar la inviolabilidad de las Embajadas y diplomáticos extranjeros, sino, por el contrario, que la acción de los estudiantes islámicos goza "de la simpatía y apoyo del gobierno, porque el mismo Estados Unidos es responsable de este incidente".

El Ayatolá Khomeini en una audiencia pública en Qom, el

5 de noviembre, apoyó la acción y declaró que había sido informado que "el centro ocupado por los jóvenes islámicos era un nido de espías y conspiradores" y se preguntó cómo se esperaba que estos permanecieran impasibles ante tal situación.

El sello oficial de la aprobación del gobierno de Irán fue emitido por un decreto del 17 de noviembre en el que el Ayatola Khomeini disponía que los locales de la Embajada y los rehenes permanecerían así indefinidamente en tanto que Estados Unidos se rehusara a entregar al Sha para enjuiciarlo y hasta que reintegráse los bienes de éste a Irán. En dicho documento, Khomeini ordenó la liberación de negros y mujeres, en caso de probarse que no eran espías. En cuanto al resto de los rehenes, declaró: "~~la noble nación irania no autoriza la liberación de~~ los restantes. Por ello, permanecerán bajo arresto hasta que el gobierno de Estados Unidos actúe conforme a los deseos de la nación".

La política anunciada por Khomeini de mantener la ocupación de la Embajada y la detención del personal para coaccionar a Estados Unidos fue instrumentada por otras autoridades iranianas y abalada repetidamente en declaraciones hechas en varios contextos. El resultado de esa política consistió fundamentalmente en la transformación de la naturaleza legal de la situación. La aprobación dada a estos hechos por el Estado iraní, así como la decisión de continuarlos, se tradujo en actos de Estado. Así, los militantes autores de la invasión se convirtieron en agentes del gobierno iraní, por cuyos actos



el Estado mismo era el responsable internacionalmente. Además, la situación se agravaba por el hecho de que los militantes ocupantes no estaban sujetos a ninguna disciplina o control gubernamental.

De igual modo, la detención del Encargado de Negocios de Estados Unidos y de dos diplomáticos que lo acompañaban en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, constituye también un elemento configurativo de la responsabilidad del gobierno de Irán, pues al proceder en tal sentido incurrió en un acto ilícito de Estado.

En conclusión, en esta segunda fase la responsabilidad internacional del gobierno de Irán se configuró plenamente pues no sólo avaló los hechos citados, sino que él mismo asumió posteriormente el papel de los que lo llevaron a cabo.

#### G) Reparación del daño

Como consecuencia de la tipificación de la responsabilidad del gobierno de Irán respecto a Estados Unidos, la Corte determinó que existía la obligación por parte de Irán de proceder a la reparación del daño causado por su conducta antijurídica internacional. Sin embargo, no pudo determinarse el monto de tal reparación en ese momento puesto que las violaciones de Irán no habían cesado de producirse.

#### H) Efecto acumulativo de las violaciones iránias

A la violación sucesiva y continua de las obligaciones

contraídas por el gobierno de Irán conforme a las Convenciones de Viena de 1961 y 1963, al Tratado de Amistad y Relaciones Económicas y Derechos Consulares de 1955, así como a las normas aplicables del Derecho Internacional, se suma la violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como a los principios fundamentales enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Corte deploró que en la actualidad se produzca un buen número de incidentes en los que se violan los más elementales postulados del Derecho Diplomático y Consular por individuos o grupos de éstos. Pero señaló que este caso es único pues no sólo grupos de particulares han procedido en este sentido sino el propio Estado receptor, lo cual es gravísimo.

#### J) Intento de rescate de Estados Unidos

En relación a la operación militar de Estados Unidos del 24-25 de abril de 1980, la Corte consideró que a pesar de la natural preocupación y aún frustración de Estados Unidos ante la situación creada por Irán, la acción del primero era contraria a la Providencia del 15 de diciembre de 1979; en la que la Corte había indicado que no debería emprenderse ninguna acción que agravara la tensión entre los dos países. Además se indicó que en la fecha de tal acción, Estados Unidos estaba participando en los procedimientos del plazo, una vez que había sido emitida su solicitud, lo cual significó por parte de Estados Unidos una falta de respeto a los procedimientos judicia-

Sin embargo, la Corte puntualizó que la legalidad de la operación del 24 de mayo de 1980 conforme a la Carta de la ONU o al Derecho Internacional General o de una posible cuestión de responsabilidad derivada de ella, no estaba siendo considerada por la Corte. Precisó también que esta cuestión no influiría sobre la evaluación de la conducta del gobierno iraní en los 6 meses anteriores, a partir del 4 de noviembre de 1979, lo cual constituye el objeto de la solicitud de Estados Unidos de lo cual se concluye que los puntos estudiados por la Corte no estarán afectados por esa operación.

#### 5.4.4 Puntos Operativos

1.- Por trece votos contra dos (Magistrados Morozov y Tarazi), decide que la República Islámica de Irán, por conducta que en la Corte determinó en el fallo, ha violado en diversos aspectos, y está violando aún las obligaciones debidas por ella a los Estados Unidos de América bajo las convenciones internacionales en vigor entre los dos países, así como reglas establecidas desde hace tiempo por el Derecho Internacional General.

2.- Por trece votos contra dos (Magistrados Morozov y Tarazi), decide que las violaciones a estas obligaciones comprometen la responsabilidad de la República Islámica de Irán hacia los Estados Unidos de América bajo el Derecho Internacional.

3.- Decide, unánimemente, que el gobierno de la República

Islámica de Irán debe dar de inmediato todos los pasos para remediar la situación resultante de los eventos del 4 de noviembre de 1979 y lo que siguió a los mismos, para ese fin:

(a) Debe terminar inmediatamente la detención ilegal del Encargado de Negocios de los Estados Unidos y otro personal diplomático y consular y otros nacionales de los Estados Unidos detenidos actualmente como rehenes en Irán, y debe liberar inmediatamente a todos y cada uno de ellos y confiarlos a la fuerza de protección ( Artículo 45 de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas).

(b) Debe asegurarse que todas las personas mencionadas ~~dispingan de medios para salir del territorio iranio, incluyendo~~ medios de transporte.

(c) Debe poner inmediatamente bajo protección el local, propiedades, archivos y documentos de la Embajada de Estados Unidos en Teherán y de sus consulados en Irán.

4.- Decide, unánimemente, que ningún miembro del personal diplomático y consular de los Estados Unidos puede ser retenido en Irán para ser sometido a cualquier forma de procedimiento judicial o participar en ellos como testigo.

5.- Decide, por 12 votos contra 3 (Magistrados Lachs, Morozov y Tarazi), que el gobierno de la República Islámica de Irán está bajo la obligación de reparar al gobierno de los Estados Unidos por el daño causado a éste último, por los eventos del 4 de noviembre de 1979 y a lo que siguió de éstos.

6.- Por 14 votos contra uno (Magistrado Morozov), decide

que la forma y cantidad de tal reparación, según el acuerdo de las dos partes será establecida por la Corte, y se reserva para este propósito el procedimiento subsecuente del caso. (18)

#### 5.4.5 Opinión separada del Magistrado Lachs

El juez Lachs indicó que votó contra la primera parte del párrafo 5 operativo por encontrarlo redundante. Siendo establecida la responsabilidad, la cuestión sobre la reparación debió dejarse al procedimiento subsecuentes, incluyendo la forma y el monto recibido por el jurado. La opinión enfatiza la importancia de la ley diplomática, cuya mayor parte preceptúa la solución pacífica por medios diplomáticos. Una vez que las conclusiones legales hayan sido aclaradas por el jurado, las partes deberán tomar una acción rápida y hacer esfuerzos máximos por desaparecer la tensión y el mal entendido. Es aquí donde una tercera parte puede ser importante.

El juez Lachs considera como tarea particular la del Secretario General al respecto, así como el trabajo de una comisión especial o cuerpo mediador.

En vista de la gravedad de la situación, el juez Lachs pide una resolución urgente. (19)

#### 5.4.6 Opiniones disidentes de los Magistrados Morozov y Tarazi

##### A) Opinión del juez Morozov

El juez Morozov votó en contra de los párrafos 1, 2, 5 y 6 y a favor del 3 y 4 de la parte operativa del jurado.

Considera que el aspecto del Derecho Internacional relativo a los privilegios, inviolabilidad e inmunidad del personal diplomático y consular, está entre los principios de mayor importancia del Derecho Internacional contemporáneo; así como la coexistencia pacífica entre países de diferentes estructuras políticas, sociales y económicas. Estas reglas están reflejadas en la Convención de Viena celebrada el 18 de abril de 1961 acerca de las relaciones diplomáticas y en la Convención de Viena del 24 de abril de 1963 acerca de las relaciones consulares.

Las obligaciones de las Partes respecto a la Convención deberán ser estrictamente observadas y cualquier violación debe ser inmediatamente sancionada.

Acerca del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares de 1955 entre Irán y Estados Unidos, el juez Morozov considera que este Tratado no provee a las partes del Derecho incondicional de invocar la jurisdicción obligatoria de la Corte y que en estas circunstancias la Corte, de hecho, no tiene competencia para considerar las violaciones alegadas.

El juez Morozov declara que Estados Unidos cometió durante el período de las deliberaciones judiciales, acciones ilegales culminando con la violación militar del territorio de la República Islámica de Irán, y por lo tanto, ha perdido el derecho legal de referirse al Tratado en sus relaciones con Irán.

Votó contra los párrafos 2, 5 y 6 porque notó que una serie de acciones fueron emprendidas por Estados Unidos contra Irán en el curso de las deliberaciones judiciales; en particular, el congelamiento de los fondos iraníes en Estados Unidos, el 17 de abril de 1980; incluso, de hacer uso de esos fondos si fuese necesario, de acuerdo a decisiones tomadas en el marco doméstico de Estados Unidos; significando ésto que actuaba como "juez de su propio caso".

Estados Unidos, después de causar serios daños a Irán, ha perdido el derecho, tanto legal como moral, de recibir reparaciones de Irán, como mencionan los párrafos 2, 5 y 6.

El juez Morozov también considera que el razonamiento en algunos párrafos describe incorrectamente la circunstancias del caso. Por una parte, considera que, sin perjuicio de la competencia exclusiva del Consejo de Seguridad, el Corte, desde un punto de vista puramente legal, pudo llamar la atención sobre el inegable hecho de que el Artículo 51 de la Carta de la ONU establece el derecho de defensa propia, al cual Estados Unidos se refiere en relación a los hechos del 24 y 25 de abril. Puede ser invocado, sólo si "un ataque armado ocurre contra un miembro de las Naciones Unidas". No hay evidencia de algún ataque armado contra Estados Unidos.

Indica que debería incluirse en el juicio que la solución a la disputa entre ambos países sea lograda exclusivamente por medios pacíficos. (20)

B) Opinión del Magistrado Tarazi

El Magistrado Tarazi votó a favor de los párrafos operativos 3 y 4 del fallo. Considera que la toma de la Embajada y el secuestro de las personas ahí presentes, constituyen un acto que rompe con las disposiciones de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, de 1961 y 1963.

Por otra parte, el juez Tarazi consideró importante votar contra el párrafo 1, porque sólo las Convenciones de Viena confieren jurisdicción a la Corte en el caso presente. También votó contra los párrafos 2 y 5 porque, en su opinión, la Corte en el momento de los acontecimientos y considerando las circunstancias concomitantes, no puede hacer ningún señalamiento de la responsabilidad del gobierno de la República Islámica de Irán. (21)



NOTAS DEL CAPITULO V

- (1) ABC de las Naciones Unidas, Nueva York, 1978. pp12 y 13
- (2) Cour Internationale de Justice. Recueil des Arrêts, Avis Consultatifs et Ordennances. Affaires:Relative au personnel diplomatique et Consulaire des Etats-Unis a Teheran. (Etats-Unis d'Amérique. c. Iran) Demande en Indication de Mesures Conservatoires. Ordennance du 15 décembre 1979 p.4
- (3) Yonah Alexander, op.cit. P.488
- (4) Loc.cit.
- (5) Department of State Bulletin, Vol 80 number 2034 January 1980 p.38
- (6) Ordonnance du 15 décembre 1979... op. cit. p.7
- (7) ~~Ibid. p.11~~
- (8) Yonah alexander, op.cit. P.489
- (9) La limitación que existe respecto a la abstención de recomendaciones sobre controversias cuando el Consejo de Seguridad actúa, se refiere única y exclusivamente a la Asamblea General, de conformidad con el artículo 12 de la Carta de las Naciones Unidas.
- (10) Department of State Bulletin, Vol 80 number 2035 February pp.43-49
- (11) Ordonnance du 15 décembre 1979, op. cit. P.9
- (12) La relación entre el carácter representativo y la función diplomática en el agente diplomático, se consagra en el preámbulo de la Convención de Viena de 1961 en la que señala ... tales inmunidades y privilegios se conceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados.
- (13) Esto significa que no existe el jus legati (derecho de legación) que algunos autores lo dividen en activo y pasivo, pues como indica el artículo 2 de la Convención de Viena de 1961: "el establecimiento de las relaciones di-

plomáticas entre Estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes, se efectúa por consentimiento mutuo

- (14) El artículo 34 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia preceptúa en su párrafo I: "Los idiomas oficiales de la Corte serán el Inglés y el Francés. Si las partes acordaren que el procedimiento se siga en francés la sentencia se pronunciará en este idioma. Si acordaren que el procedimiento se siga en inglés en este idioma se pronunciará la sentencia."
- (15) Cour Internationale de Justice. recueil des Arrêts, Avis Consultatifs et ordonnances. Affaire-Relative au personnel diplomatique et Consulaire des Etats-Unis a Teheran. (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) Arret du 24 mai 1980. p.4
- (16) De conformidad con los artículos 40 párrafo 2,3 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; 38 párrafos 4 y 40 del reglamento de la Corte.
- (17) Definición de Responsabilidad Internacional.- La responsabilidad del Estado se configura cuando un Estado, que, actuando ilícitamente, es decir, violando normas del Derecho Internacional vigente cause daño a otro u otros Estados, por lo que el Estado infractor está obligado a reparar los daños originados por su conducta contrarias a las normas del Derecho Internacional.
- (18) Prisma mundial. Boletín de Información de Naciones Unidas en México, No. 80-22,26 de mayo 1980. p.5
- (19) Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales 1980, Sección de documentos, Traducción del Prof. Juan Manuel Portilla Gómez. p. 883
- (20) Ibid. p.883-884
- (21) Ibid. p.884-885

CAPITULO VI

ACUERDO SOBRE LA LIBERACION DE LOS REHENES

SUMARIO

- 6.1 Antecedentes
- 6.2 Negociaciones
- 6.3 Documentos
  - 6.3.1 Declaración Argelina
  - 6.3.2 Acuerdo para la Liberación de los Rehenes
  - 6.3.3 Compromisos
  - 6.3.4 Acuerdo de Depósito
  - 6.3.5 Acuerdo Técnico
- 6.4 Justificación de la Política de Estados Unidos.
- 6.5 Acciones Jurídico-administrativas de ejecución

### 6.1 Antecedentes

El punto de partida para la conclusión del acuerdo sobre la liberación de los rehenes entre Estados Unidos e Irán tuvo su origen el 12 de septiembre de 1980 cuando el Ayatola Khomeini estableció cuatro condiciones para que los rehenes fueran liberados:

- a) Devolución de las propiedades del ex Sha a Irán
- b) Cancelación de las reclamaciones contra Irán
- c) Descongelamiento de los haberes iraníes
- d) Promesa de no intervención política o militar en los asuntos iraníes. (1)

Más tarde, el 16 de septiembre el Majlis acordó la formación de una comisión para estudiar la liberación de los rehenes y 6 días después los miembros de aquél efectuaron una visita de 3 horas a la Embajada de Estados Unidos para analizar el presunto equipo de espionaje norteamericano y para preparar el debate concerniente a la liberación de los rehenes. El 2 de octubre, el Majlis nombró a 7 fundamentalistas islámicos para integrar una comisión especial con el propósito de debatir el destino de los rehenes. Dicho debate se prolongó hasta el 29 de octubre, sin obtener resultados concretos.

El informe de la comisión citada que apoyaba las condiciones estipuladas por Khomeini fue aprobado el 2 de noviembre.

En dicho documento se establecieron 4 condiciones que Estados Unidos debía satisfacer si deseaba obtener la liberación de los rehenes:

- 1) Promesa de Estados Unidos de no intervenir política y

militarmente en la República Islámica de Irán.

2) Reversión del congelamiento de los haberes iraníes en Estados Unidos o en otros países.

3) Abrogación y cancelación de las sanciones económicas y financieras en contra de Irán.

4) Devolución de los bienes del ex Sha y de sus parientes cercanos.

Por otra parte, se hacía hincapié en que al proceder a su instrumentación el gobierno de Irán debería tomar en consideración la independencia islámica y la política general de no alinearse ni "con Oriente ni con Occidente". Además, se advertía que si Estados Unidos no satisfacía todas o alguna de las condiciones expuestas, se procedería al castigo de los "delincuentes". (2)

Al cumplirse un año de la toma de la Embajada, el gobierno iraní a través de la representación diplomática de Argelia hizo un llamado a la administración Carter para que diese pronta respuesta a sus condiciones. (3)

Como dato complementario es oportuno señalar que el 29 de noviembre los militantes ocupantes de la Misión Diplomática estadounidense informaron que los rehenes habían sido entregados a las autoridades iraníes.

## 6.2 Negociaciones

El 10 de diciembre de 1980, el Secretario Adjunto del Departamento de Estado, Warren Christopher, y una pequeña delegación partió de Washington con destino a Argelia llevando con consigo la respuesta de Estados Unidos a los términos planteados

por el Majlis sobre la liberación de los rehenes. El funcionario estadounidense se entrevistó con el Ministro de Asuntos Exteriores argelino, Benyahia. El gobierno argelino aceptó servir de intermediario en la respuesta de Estados Unidos y convino transmitirla al gobierno de Irán.

Después de haber comunicado la respuesta de Estados Unidos a Irán, los intermediarios argelinos llegaron a Washington el 25 de diciembre para informar sobre la reacción del gobierno de Irán a las propuestas estadounidenses, la cual había si do a su vez transmitida a los argelinos el 18 del mismo mes.

(4). Previamente, el 16 de diciembre de 1980, el Ayatola Khomeini aprobó "la respuesta final" sobre las condiciones de li beración de los rehenes. Así, ~~48 horas más tarde~~, los nuevos términos de la liberación de los rehenes fueron entregados a los argelinos, dichos términos consistían en :

a) Depósito de los fondos iraníes congelados en el Banco Central de Argelia.

b) Devolución a Irán de las propiedades del ex Sha y sus familiares. (5)

Posteriormente, el 21 de diciembre , demandó 24 millones de dólares como "garantía" de la devolución de Estados Unidos de sus haberes congelados y de las propiedades del ex Sha, se ñalándose adicionalmente que si no se proporcionaba tal canti dad los rehenes serían sometidos a juicio. (6)

Por su parte, la delegación argelina mantuvo largas discu siones con funcionarios de Estados Unidos en Washington del 27 al 30 de diciembre. En el último momento de su estancia en la capital norteamericana, la delegación argelina recibió una re

formulación de las propuestas de Estados Unidos en las que se daba oportunidad a Irán de terminar la crisis existente durante el tiempo que le restaba a la administración Carter. La correspondiente comunicación oficial fue entregada por Argelia a Irán el 3 de enero de 1981. (7)

Mientras tanto, tras pasar su segunda Navidad en cautiverio, los rehenes recibieron la visita, el 26 de diciembre, del Embajador de Argelia en Teherán, quien declaró que la totalidad de los mismos se encontraban en buen estado de salud. El 7 de enero de 1981, una delegación negociadora de Estados Unidos, encabezada por Warren Christopher llegó a Argel para agilizar posteriores intercambios. Las negociaciones continuaron en Argel entre las delegaciones de Estados Unidos y Argelia, esta última hizo varios viajes entre Teherán y Argelia.

El 8 de enero, el presidente electo Reagan declaró que podría cumplir cualquier acuerdo con Irán hecho por el presidente Carter pero declaró, asimismo, que se reservaba el derecho de proponer nuevos términos si la crisis no se solucionaba antes del 20 de enero. (8)

En consecuencia, el Majlis emitió dos decretos como legislación de "emergencia" para acelerar los acuerdos con Estados Unidos. Uno de ellos autorizaría el arbitraje de terceros sobre las reclamaciones en contra de los haberes iraníes y el otro "nacionalizaría" las propiedades del ex Sha. El 14 de enero, el Majlis aprobó tal legislación.

El 15 de enero, Behzad Nabavi, Ministro de Estado para Asuntos Ejecutivos advirtió a Estados Unidos que si los

"ilegalmente" haberes congelados no eran depositados en bancos argelinos de inmediato , las negociaciones se detendrían.

(9)

En este sentido, el presidente Carter efectuó dos acciones el 16 de enero:

a) ordenó una transacción de intercambio de aproximadamente 900 millones de dólares en oro a Inglaterra para su eventual transferencia a Irán;

b) Ordenó la venta de bonos de la tesorería poseídos por Irán en el Banco de Reserva Federal de Nueva York de modo que el dinero pudiera transferirse a Irán. (10)

Nabavi retiró su advertencia anterior e informó que no existía obstáculo para concluir un acuerdo.

Ese mismo día, un equipo de expertos legales y financieros -cinco americanos y tres británicos- se reunieron en Argelia en un esfuerzo por resolver los problemas pendientes.

El 17 de enero, a solicitud de Irán, Argelia envió un equipo de médicos a visitar a los rehenes para dar fe de su buena salud.

Finalmente, el 18 de enero Estados Unidos e Irán firmaron los documentos últimos que acordaban sobre los puntos centrales y emitieron una declaración final respecto a la liberación de los rehenes. Sin embargo, su liberación se demoró debido a objeciones planteadas por Irán en relación a un "apéndice" que los banqueros de Estados Unidos habían supuestamente agregado al acuerdo de liberación. (11)

Por último, y después de 444 días de cautiverio, el 20 de



enero, los rehenes fueron liberados.

Dos aeronaves argelinas los llevaron a Argel donde fueron recibidos por el Secretario Adjunto, Christopher, El Ministro del Exterior argelino, Benyahia y el Embajador de Estados Unidos en Argelia, Ulric Haynes Jr. Después de una ceremonia de recibimiento, los ex rehenes fueron llevados a aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos para ser transportados a Frankfurt, Alemania Occidental, donde abordaron autobuses que los condujeron a un hospital militar en Weisbaden.

El 25 de enero de 1981 los 52 ex rehenes volvieron a suelo estadounidense a bordo del avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos "Freedom One", el cual aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart en Newburgh, Nueva York, sitio en el cual fueron recibidos por sus familias y, después de un recorrido en autobús de 70 minutos llegaron a la academia militar de West Point.

Como epílogo final de esta serie de acontecimientos que despertaron polémica y gran expectación durante poco más de un año en la escena política internacional, los 53 ex rehenes, incluyendo a Richard Queen quien había sido liberado en julio de 1980, llegaron a Washington D.C. el 27 de enero, siendo recibidos en una ceremonia oficial por el presidente Ronald Reagan y altos funcionarios de Estados Unidos, así como empleados de la Casa Blanca.

### 6.3 Documentos

Este acuerdo se refiere a la liberación de los 52 nacio-

nales de Estados Unidos detenidos en Irán y el arreglo de las reclamaciones entre Estados Unidos y sus nacionales y la República Islámica de Irán y sus nacionales. Este acuerdo consiste en 5 documentos principales: declaración del gobierno de la República Democrática y Popular de Argelia, conocido como "Declaración Argelina"; Declaración del gobierno de la República Democrática Popular de Argelia sobre el Arreglo de las Reclamaciones entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de la República Islámica de Irán, conocido como acuerdo sobre el "Arreglo de las Reclamaciones"; Compromisos de Estados Unidos y Gobierno de la República Islámica de Irán respecto a la Declaración del Gobierno de la República Democrática y Popular Argelina, conocidos como "Compromisos"; Acuerdo de Depósito; y Acuerdo Técnico entre el Banco Central de Argelia, como Agente de Depósito y el Gobernador y la Compañía del Banco de Inglaterra y el Banco Federal de Reserva de Nueva York, como Agente Fiscal de Estados Unidos, conocido como Acuerdo Técnico. (12)

#### 6.3.1 Declaración Argelina

Este documento consta de un preámbulo, dos principios generales y cuatro puntos principales. (13)

En el preámbulo se establece la calidad de intermediario del gobierno de Argelia en la búsqueda de una solución aceptable entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán respecto a la crisis en sus relaciones con motivo de la detención de 52 nacionales de Estados Unidos en este último, y señala que tras

extensas consultas con los dos gobiernos, estos convinieron en solucionar el problema dentro del marco de los 4 puntos señalados en la resolución del 2 de noviembre de 1980 del Majlis, del cual resultaron los compromisos que a continuación estudiamos.

Los principios generales consisten en: a) obligación de Estados Unidos de restablecer las relaciones financieras que guardaban con Irán con anterioridad al 19 de noviembre de 1979 y b) terminación y anulación de toda clase de procedimientos legales contra Irán en tribunales de Estados Unidos y recurrir a arbitraje obligatorio para satisfacer las reclamaciones de Estados Unidos contra Irán.

En cuanto a la no intervención de Estados Unidos, el punto 1 preceptúa que éste se obliga en lo sucesivo a abstenerse de cualquier forma de intervención directa o indirecta contra Irán. Por su parte los puntos 1 y 2 señalaban con todo detalle las normas que habrían de seguirse para que a través de las instrucciones del gobierno de Argelia y de su Banco Central, se seleccionara un Banco Central que actuara como depositario de los fondos iraníes.

El párrafo 3 del punto 2 es de suma importancia pues hace depender de una certificación del gobierno de Argelia, en el sentido de que los 52 nacionales de Estados Unidos han sido liberados, la operación y transferencia de los fondos iraníes. Dicha transferencia consistiría en el traslado al banco central seleccionado, de todos los lingotes de oro pertenecientes a Irán y que se hallaban bajo custodia en el Banco de Re-

serva Federal de Nueva York, así como todos los activos iraníes en custodia de la misma institución neoyorkina.

En cuanto a los activos iraníes colocados en sucursales foráneas en bancos estadounidenses con posterioridad al 18 de noviembre de 1979, se estipuló que estos se depositarían con sus respectivos intereses en una cuenta a nombre del Banco Central de Argelia, y en el banco central seleccionado. Lo mismo se dispuso en el caso de bancos de Estados Unidos situados en su territorio.

Con objeto de destinar un fondo para el pago de las reclamaciones contra Irán, conforme al Acuerdo de Reclamaciones, se indicó que el 50% de los fondos colocados en el banco central se depositarían en una cuenta de intereses de seguridad; el otro 50% sería transferido a Irán. El monto de la cuenta sería fluctuante, debiendo el gobierno de Irán mantener un balance del orden de 500 millones de dólares en la misma, la cual sería mantenida hasta que el presidente del Tribunal Arbitral que se establecería certifique el Banco Central de Argelia que todas las adjudicaciones arbitrales contra Irán hayan sido satisfechas, y una vez hecho esto si queda algún remanente éste será transferido a Irán.

El alcance del compromiso de transferencia no sólo incluye activos monetarios líquidos, sino incluso todas las propiedades de Irán que se localizan en Estados Unidos.

Sujeto a la certificación del gobierno argelino sobre la liberación de los rehenes, Estados Unidos deberá rebocar todas las sanciones comerciales y económicas que fueron instru-

mentadas desde el 4 de noviembre de 1979 a la fecha. Además en el plano litigioso, Estados Unidos se compromete a retirar las reclamaciones actuales contra Irán ante la Corte Internacional de Justicia, y en lo sucesivo cerrar y excluir todo procedimiento legal sobre cualquier reclamación actual o futura de Estados Unidos o de algún nacional suyo en relación a los acontecimientos ocurridos antes de la fecha de esta declaración respecto a: A) la toma de los 52 nacionales de Estados Unidos el 4 de noviembre de 1979; B) Su subsecuente detención; C) el daño a la propiedad de Estados Unidos o a la propiedad de sus nacionales dentro de los locales de la Embajada de Estados Unidos en Teherán después del 3 de noviembre de 1979 y D) daño a los nacionales de Estados Unidos o a su propiedad como resulta de los movimientos populares en el curso de la Revolución Islámica en Irán que no hayan sido actos del gobierno de éste.

Estados Unidos cerrará y excluirá todo procedimiento contra Irán en los tribunales de Estados Unidos de cualquier reclamación actual o futura de nacionalidad distinta a la de Estados Unidos en relación a los acontecimientos especificados.

Con objeto de asegurar el retorno de los bienes del ex Sha y su familia, el párrafo 4 preceptúa la congelación y prohibición de toda transferencia de propiedad y bienes del ex Sha o cualquier pariente cercano de éste que actúe en calidad de defensor contra cualquier litigio emprendido por Irán para recuperar tales propiedades y bienes. Tal restricción tendrá efecto hasta que el litigio mencionado termine y la violación de aquélla estará sujeta a las sanciones civiles y penales

prescritas por la ley de Estados Unidos.

Al tener conocimiento de la certificación del gobierno de Argelia sobre la liberación de los rehenes, Estados Unidos hará saber a todos sus tribunales pertinentes que en cualquier litigio como el antes descrito, las reclamaciones de Irán no deberán ser detenidas por los principios de inmunidad soberana o de Acto de Estado, y que los derechos iraníes y los juicios relativos a dichos bienes serán instrumentados por tales tribunales de conformidad con las leyes de Estados Unidos.

En caso de surgir una controversia por incumplimiento de alguna de las disposiciones sobre los procedimientos legales de recuperación de los bienes del ex Sha, Irán puede someterla a arbitraje obligatorio de conformidad con el acuerdo de Reclamaciones y si el tribunal determina que Irán ha sido perjudicado por incumplimiento de Estados Unidos, se procederá a una adjudicación en favor de Irán, la cual será cumplimentada por Irán en los tribunales de cualquier nación de acuerdo con sus leyes.

Finalmente, el párrafo 17 indica que en caso de controversia respecto a la interpretación o funcionamiento de cualquier disposición de la declaración, cualquiera de las partes puede recurrir a arbitraje obligatorio mediante el tribunal establecido conforme al acuerdo y Acuerdo de Reclamaciones y que la decisión de dicho tribunal puede ser cumplimentada por la parte interesada en los tribunales de cualquier nación de acuerdo con su ley.

### 6.3.2 Acuerdo para la Liberación de los Rehenes

#### A) Establecimiento del arbitraje

Irán y Estados Unidos gestionarán la resolución de las reclamaciones descritas en este acuerdo por las partes directamente involucradas. Cualquier reclamo no resuelto dentro de los 6 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de este acuerdo, será sometido a un arbitraje obligatorio de una tercera parte, según los términos del acuerdo. El período de 6 meses mencionado anteriormente puede extenderse una vez por 3 meses a solicitud de cualquier parte.

Un tribunal de arbitraje internacional, el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos, se establecerá con el propósito de atender las reclamaciones de ciudadanos de Estados Unidos ~~contra Irán y las reclamaciones de ciudadanos de Irán~~ contra Estados Unidos y cualquier contra-reclamación que surja del mismo contrato, transacción o acontecimiento que constituya la la parte fundamental de la reclamación inicial, si tales reclamaciones y contra-reclamaciones están pendientes en la fecha de este acuerdo, estén o no registrados en cualquier tribunal y surjan de deudas, contratos, incluyendo transacciones que son tema de cartas de crédito o garantías bancarias, expropiaciones u otras medidas que afecten los derechos de propiedad, excluyendo las reclamaciones descritas en el párrafo 11 de la Declaración del gobierno de Argelia del 19 de enero de 1981 y los originados en las acciones de Estados Unidos en respuesta a la conducta descrita en dichos párrafos y exclu

yendo a aquellos que surjan de un contrato obligatorio entre las partes, previendo específicamente que cualquier disputa entre éstas estará dentro de la jurisdicción absoluta de los tribunales competentes en respuesta a la posición del Majlis.

El tribunal también tendrá jurisdicción sobre reclamaciones oficiales entre Estados Unidos e Irán, surgidos de arreglos contractuales entre ambos para la compra y venta de mercancías y servicios.

El tribunal tendrá jurisdicción, según lo especificado en los párrafos 16-17 de la declaración del gobierno de Argelia del 19 de enero de 1979, sobre cualquier disputa, como puede ser la interpretación o ejecución de cualquier convenio de esta declaración.

B) Composición y designación del Tribunal de Arbitraje

El tribunal estará integrado por 9 miembros o un múltiplo de 3 según los que Irán y Estados Unidos estipulen como necesarios para conducir sus negocios en forma expedita. Dentro de los 90 días después de la entrada en vigor de este acuerdo, cada gobierno nombrará un tercio de los miembros. Las reclamaciones pueden decidirse por el tribunal en pleno o por un jurado de 3 miembros según lo determine su presidente y serán designados por el método establecido anteriormente.

Tanto la designación de los miembros del tribunal así como su desempeño será siempre de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Ley de Comercio Internacional (UNCITRAL) excepto aquellas especificaciones efectuadas por las partes o por el tribunal para asegurarse.



que este acuerdo pueda llevarse a cabo. Las reglas del UNCI-TRAL para el nombramiento de miembros de los jurados de 3 miembros se aplicará mutatis mutandi al nombramiento de los tribunales.

Las reclamaciones de Estados Unidos e Irán englobadas por este acuerdo serán presentadas al tribunal por los mismos reclamantes, o en el caso de reclamaciones de menos de 250 mil dólares por el gobierno de tales personas.

Ningún reclamo puede permanecer ante el tribunal más de un año después de entrar en vigor este acuerdo o 6 meses después de la fecha del nombramiento del presidente. Este límite no se aplica a los procedimientos contemplados por los párrafos 16 y 17 de la declaración del gobierno de Argelia del 19 de enero de 1981.

C) Laudos arbitrales

Todas las decisiones del tribunal serán definitivas y obligatorias.

El presidente del Tribunal certificará, según lo establecido en el párrafo 7 de la declaración del gobierno de Argelia del 19 de enero de 1981, el momento en que todas las sentencias de arbitraje bajo este acuerdo hayan sido ejecutadas.

Cualquier sentencia que el tribunal pueda aplicar contra cualquier gobierno será forzosa para tal gobierno en los tribunales de cualquier nación de acuerdo con sus leyes.

El tribunal decidirá todos los casos sobre la base del respeto a la ley, aplicando sobre dicha elección de ley reglas y principios de la ley comercial e internacional según lo que

determine el tribunal que se deba aplicar, teniendo en cuenta el uso consuetudinario del comercio, cláusulas de contrato y circunstancias del cambio.

D) Sede del Tribunal Arbitral

La sede del tribunal será en La Haya, Países Bajos, o en cualquier otro lugar acordado por Irán y Estados Unidos.

Cada gobierno designará un agente para representarlo ante el tribunal o a sus ciudadanos, agencia, mediadores, o entidades conexas. Los gastos del tribunal serán pagados por igual por los dos gobiernos.

Cualquier solicitud respecto a la interpretación o aplicación de este acuerdo será decidida por el tribunal a pedido ya sea de Irán o de Estados Unidos.

E) Definición de conceptos

Un ciudadano iraní o de Estados Unidos, según sea el caso, significa: a) una persona nacida en estos países y que además sea ciudadano de Irán o de Estados Unidos y b) una corporación o cualquier otra entidad que esté autorizada bajo las leyes de Irán o de Estados Unidos o cualquiera de sus Estados o territorios como puede ser el Distrito de Columbia o el Estado asociado de Puerto Rico si, colectivamente, personas nacidas ahí y que además sean ciudadanas de ese país tengan directa o indirectamente, un interés en dicha corporación o entidad equivalente al 50% o más de su capital en existencia.

Las "reclamaciones de los ciudadanos" de Irán o de Estados Unidos, según sea el caso significan reclamaciones sostenidas

nidas en forma continua, por ciudadanos de ese país, desde la entrada en vigor de este acuerdo, se incluyen reclamaciones que sean reconocidas indirectamente por dichos ciudadanos a través de la propiedad de capital en existencia u otras propiedades en personas jurídicas, siempre que estas fueran suficientes, al momento de presentarse la reclamación, como para asegurar que la corporación u otra entidad está en sí misma autorizada a presentar reclamaciones bajo los términos de ese acuerdo. Las reclamaciones sometidas al tribunal de arbitraje, así como la fecha de entrada de esas reclamaciones ante el tribunal, serán consideradas excluidas de la jurisdicción de los tribunales de Irán, o de Estados Unidos o de cualquier otro tribunal.

"Irán" significa el Gobierno de Irán, cualquier subdivisión política de Irán y cualquier agencia, mediador o entidad controlada por el Gobierno de Irán o cualquier subdivisión política de éste.

"Estados Unidos" significa el Gobierno de Estados Unidos, cualquier subdivisión política de Estados Unidos, cualquier agencia, mediador o entidad controlada por el Gobierno de Estados Unidos o cualquier subdivisión política de éste.

F) Entrada en vigor

Este acuerdo entrará en vigencia cuando el gobierno de Argelia haya recibido tanto de Irán como de Estados Unidos la notificación de adhesión.

### 6.3.3 Compromisos

Este documento provee las bases para la transferencia de haberes iraníes a cierto banco a nombre del Banco Central de Argelia y dispone que cuando el balance de dicha cuenta alcance cuando menos 7 955 billones de dólares, Irán procederá a la liberación de los 52 nacionales de Estados Unidos detenidos.

Los compromisos disponen la distribución de los fondos en esa cuenta al certificar el gobierno de Argelia que los 52 estadounidenses han abandonado Irán. Un total de 3 667 billones de dólares fueron transferidos al Banco Federal de Reserva de Nueva York para empréstitos extraordinarios; quedando 1 418 billones de dólares en una cuenta de depósito para liquidar empréstitos extraordinarios; a los que la cantidad adeudada pueda estar en controversia y lo restante de la cuenta fue transferido al Banco Markazi de Irán. (15)

### 6.3.4 Acuerdo de Depósito

Este Acuerdo, firmado el 20 de enero se celebró entre el gobierno de Estados Unidos, el Banco Federal de Reservas de Nueva York, en calidad de Agente Fiscal de Estados Unidos; el banco Markazi de Irán, como parte interesada y el Banco Central de Argelia, como Agente de Depósito.

Dicho instrumento fue realizado para ejecutar las disposiciones de los puntos de la Declaración del gobierno de Argelia. Estas disposiciones se refieren al establecimiento de Acuerdos de Depósito de la propiedad de Irán a cambio de la liberación de los nacionales de Estados Unidos detenidos en Irán. Además,

se establece una cuenta de depósito en el Banco de Inglaterra a nombre del Banco Central de Argelia en su calidad de Agente de Depósito. (16)

#### 6.3.5 Acuerdo Técnico

Este acuerdo se celebró entre el Banco Central de Argelia como Agente de Depósito; el Gobernador y la Compañía del Banco de Inglaterra y el Banco Federal de Reserva de Nueva York, como Agente Fiscal de Estados Unidos.

Tal acuerdo constituye un documento bancario que define las responsabilidades del Banco de Inglaterra en relación al Acuerdo de Depósito y dispone las medidas necesarias para la transferencia de fondos de conformidad con los acuerdos procedentes. Asimismo, estipula que ninguna disposición contravenga a las leyes inglesas, lo cual fue confirmado por el Banco de Inglaterra.

Este documento fue redactado en versiones inglesa y francesa, haciendo fe la primera en caso de controversia.

Es importante destacar que los procedimientos técnicos bancarios descritos en este documento estuvieron controlados y ejecutados de conformidad con las leyes inglesas. (17)

#### 6.4 Justificación de la Política de Estados Unidos

William J. Dyess, vocero del Departamento de Estado, en una conferencia de prensa, el 18 de febrero de 1981, declaró que la decisión de Estados Unidos era congruente con los intereses de éste en la región del Golfo Pérsico y de todo el mundo

en general y que Irán no se beneficiaba con estos acuerdos si no que en última instancia se veía compelido a convenir en términos que simplemente restablecían el status quo ante. Esto debido a que los fondos devueltos a Irán y a los que próximamente serían reintegrados al ejecutarse los acuerdo eran todos esos fondos que pertenecían a Irán con anterioridad a la toma de los rehenes estadounidenses.

El funcionario hizo hincapié en que la decisión de ejecutar en debida forma los acuerdos no representaba ningún precedente para futuras acciones del gobierno de Estados Unidos en situaciones análogas. Asimismo, indicó que la actual administración (18) no habría entrado en negociaciones con Irán para obtener la liberación de los rehenes. (19)

Por su parte, Walter J. Stoessel, Subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Políticos declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos:

"La decisión de ejecutar los acuerdos debe ser considerada dentro del contexto de nuestros intereses internacionales y nuestras consideraciones nacionales. Debido a la estratégica ubicación de Irán, así como a sus recursos petroleros y a la posible influencia soviética ahí, cualquier acción tendiente a mejorar las relaciones con ellos puede en alguna medida ser en interés de Estados Unidos. Sin embargo, es también en interés nuestro el tener cuidado de que tal acción sea congruente con nuestra fuerte oposición al terrorismo y al apego que nosotros como todas las naciones respetuosas del Derecho Internacional y a la Costumbre". (20)

### 6.5 Acciones jurídico-administrativas de ejecución

Para ejecutar los acuerdos, el presidente Carter emitió 10 decretos, el 19 de enero de 1981, y el presidente Reagan emitió el 11° el 24 de febrero del mismo año.

Además, y con objeto de proceder al establecimiento de la cuenta de depósito descrita en los acuerdos, el presidente Carter ordenó la transferencia de los haberes existentes en Estados Unidos y en bancos foráneos del mismo, al gobierno de Irán. El presidente Carter revocó el embargo comercial contra Irán y determinó la restricción de transferencia de las propiedades al ex Sha. De igual manera, se estableció una comisión para estudiar la cuestión de compensación a los nacionales de Estados Unidos tomados como rehenes en Irán. El presidente Carter ordenó adicionalmente al Secretario del Tesoro promulgar regulaciones que prohibirían reclamaciones contra Irán relativas a la toma de rehenes y su subsecuente detención.

Por su parte, el presidente Reagan decretó, el 24 de marzo de 1981, la suspensión de las reclamaciones contra Irán que pudieran presentarse a tribunales de Estados Unidos, estipulando que durante el período de suspensión de tales reclamaciones tendría efecto legal en cualquier acción que se estuviese llevando a cabo en tribunales de Estados Unidos.

Finalmente, en abril de 1981, el gobierno de Estados Unidos retiró su demanda contra Irán ante, la Corte, aunque se estipuló que no se abandonaría el procedimiento tendiente a lograr la reintegración de su Embajada y otras propiedades suyas en Irán. (21)

NOTAS DEL CAPITULO VI

- (1) Department of State, Bulletin, Vol. 80, Number 2044, P.55
- (2) Department of State, Bulletin, Vol. 81, Number 2046, p.28
- (3) Loc. cit.
- (4) Loc. cit.
- (5) Department of State, Bulletin, Vol. 81, Number 2047, p.5
- (6) Loc.cit.
- (7) Department of State, Bulletin, Vol. 81, Number 2047, P.5
- (8) Loc. Cit.
- (9) Loc. cit.
- (10) Loc. cit.
- (11) Loc. cit.
- (12) Department of State, Bulletin, Vol.81, Number 2050, p.52
- (13) Department ... Vol.81 Number 2047 op. cit. p.1-3
- (14) Medio Oriente Informa, marzo 1981, pp. 31-33
- (15) Department... Vol.81 Number 2047 op.cit. p.4
- (16) Ibid. p.6
- (17) Ibid. p.14
- (18) Es conveniente recordar que el 20 de enero de 1981 tomó posesión Ronald Reagan, postulado por el Partido Republicano, tras derrotar a James Carter candidato Demócrata.
- (19) Department of State, Bulletin, Vol:81, Number 2048 p.17
- (20) Department of State, Bulletin, Vol.81, Number 2049 p.31
- (21) Department... Vol. 81 Number 2050 op.cit. p.53



### CONCLUSIONES POLITICAS

- Apartir de la Segunda Guerra Mundial los intereses de Estados Unidos en Irán intensifican las relaciones entre ambos países.
- El rechazo a soviéticos e ingleses en ese período propicia el acercamiento de Irán hacia Estados Unidos.
- En pleno auge de la Guerra Fría, el Sha es depuesto y expulsado del país, siendo inmediatamente reinstalado en el poder con la intervención directa de Estados Unidos.
- Sumas estratosféricas, obtenidas de la bonanza petrolera de la economía irania son destinadas por el Sha a la compra de modernos armamentos.
- Durante casi medio siglo, un considerable número de asesores militares de Estados Unidos permanecen en Irán, al mismo tiempo que el ejército imperial es adiestrado en aúel país.
- Una vez consolidado el régimen dictatorial, Irán se convierte, con el apoyo de Estados Unidos en el "Gendarme del Golfo Pérsico".
- Dentro del ajedrez político del Medio Oriente, Irán constituyó para Estados Unidos una importantísima pieza que servía de retén a la URSS, a la vez que frenaba los ímpetus de sus vecinos árabes radicales.
- La Revolución Islámica en Irán se palntea dentro del seno de una sociedad musulmana chiita que rechaza toda transformación de sus valores culturales y establece un modelo civilizatorio propio.

- Aunque al principio coaligado con grupos liberales laicos, la organización y jerarquía del clero chiita en Irán tuvo la fuerza suficiente para arrancar de tajo a una de las más nefastas dictaduras de la historia.
- El asalto a la Misión Diplomática de Estados Unidos en Teherán fue una respuesta del pueblo a las consignas antinorteamericanas proclamadas por las autoridades iraníes.
- Si bien tal acontecimiento no estuvo originalmente patrocinado por el gobierno iraní, el Ayatola Khomeini lo aprovechó para estimular el sentimiento nacionalista y religioso de su pueblo, en un momento en que el poder político se hallaba sumamente polarizado, y en que debido a la insurrección de los kurdos, la reciente república se tambaleaba peligrosamente.
- El problema se llevó al Consejo de Seguridad, de las Naciones Unidas en el cual se emitieron dos resoluciones meramente condenatorias contra Irán. Pero cuando Estados Unidos pretendió que se tomaran medidas efectivas, la interposición del veto soviético paralizó toda acción, manifestándose una vez más la ineffectividad de dicho órgano.
- Paralelamente, el Secretario General de las Naciones Unidas, en forma personal y a través de una Comisión Investigadora, trató de hallar una solución pacífica, pero no obstante cierta colaboración del gobierno iraní, no se obtuvo ningún resultado positivo.
- Al prolongarse la detención de los rehenes estadounidenses

en Irán, el gobierno de éste vió complicarse demasiado la situación debido, sobre todo, al bloqueo económico y financiero decretado en su contra por Estados Unidos.

- A lo anterior se sumó el conflicto bélico entre Irán e Iraq lo cual significó para el primero la necesidad de refaccionamiento de pertrechos militares estadounidenses.
- En consecuencia, y urgido por la sucesión presidencial en Estados Unidos, el gobierno iraní, siguiendo las directrices de Khomeini, accedió a negociar con el gobierno de Estados Unidos a través de la mediación de Argelia.
- Estados Unidos, actuando con un pragmatismo no siempre característico de su política exterior, convino en la satisfacción de gran parte de las condiciones iraníes, con lo cual obtuvo finalmente la liberación de sus nacionales detenidos en Irán.

### CONCLUSIONES JURIDICAS

- Uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional es la No Intervención en los Asuntos Internos de los Estados. Sin embargo, históricamente tal postulado ha sido ignorado reiteradamente por las grandes potencias.
- En este caso Estados Unidos intervino por largo tiempo en Irán, llegando incluso a proporcionar apoyo directo para la instauración de un régimen incondicional a sus intereses.
- Lamentablemente, el orden jurídico internacional está condicionado a una serie de consideraciones políticas y económicas que impiden la utilización de una vía jurídica efectiva en contra de sujetos que detentan un poder desproporcionado en la sociedad internacional.
- En un marco estrictamente doméstico y en legítimo ejercicio de su derecho de Autodeterminación, el pueblo iraní impulsó un movimiento revolucionario que condujo a la creación de la República Islámica.
- El Islam no sólo es religión sino también derecho y en el aspecto internacional, las tradiciones islámicas han contribuido al establecimiento de la inviolabilidad personal de los agentes diplomáticos.
- Las normas del Derecho Diplomático contienen principios elementales de Derecho Internacional General, las cuales han sido observadas incluso en los períodos más adversos de la historia de las relaciones internacionales.
- El gobierno de Irán incurrió en responsabilidad internacional

- respecto a Estados Unidos al incumplir y violar diversas disposiciones relativas al status de inmunidades y privilegios diplomáticos, así como a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales que preceptúan el arreglo pacífico de controversias.
- Quizá bajo una perspectiva metajurídica pudiera plantearse la justificación de la conducta del gobierno de Irán, pero ateniéndonos a un criterio jurídico, éste tuvo a su alcance medios lícitos para actuar contra Estados Unidos, y sin embargo se abstuvo de usarlos.
  - El gobierno de Estados Unidos recurrió a la Corte Internacional de Justicia, la cual al dar trámite a su solicitud de procedimiento contra Irán, determinó que tenía jurisdicción<sup>1</sup> sobre tal asunto en base a un buen número de preceptos legales que la estatúan.
  - Ante la negativa del gobierno iraní de participar en los procedimientos de la Corte, ésta actuó conforme a lo establecido en su Estatuto y Reglamento.
  - En tal virtud, el máximo organismo judicial internacional dictaminó en contra de los actos del gobierno iraní, valiéndose de una impecable técnica jurídica.
  - Aunque la solución final del conflicto se basó en consideraciones eminentemente políticas, requirió de todo un mecanismo jurídico especial.
  - Esto explica en buena medida la dinámica que caracteriza a las relaciones internacionales contemporáneas, en las que

factores diversos, en este caso políticos y jurídicos, se concatenan a fin de hallar modos de solución a los conflictos que se desarrollan dentro de la sociedad internacional.

## BIBLIOGRAFIA

- ABC de las Naciones Unidas, Nueva York, 1978.
- Alexander, Yonah and Naves, Allan. The United States and Iran, a Documentary History. Editors Univeristy publications of America, 1982.
- III<sup>e</sup> Anniversaire de la Revolution Islamique en Iran 1979 1982. Gouvernement de la Republique Islamique d'Iran, Teheran, 1982.
- Behrang. Irán. Un eslabón débil del equilibrio mundial. Siglo XXI editores. México 1980.
- Briere, Claire et Blanchet, Pierre. La Revolución en Nombre de Dios. Editorial, Terra Nova, México 1980.
- Cahier, Philippe. Derecho Diplomático Contemporáneo. Editorial RIALP, Madrid, 1965.
- Cervantes, Aída. El Islam. Revista Multidisciplina. ENEP Acatlán UNAM, Nov-Dic. 1980.
- Cronología sobre Irán. Secretaría de Relaciones Exteriores, Número 22. México, 1979.
- Crisis de Irán. Estudios Especiales. No.22 Secretaría de Programación y Presupuest. México 1980.
- Diez de Velasco, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público. Editorial Tecnos, Madrid 1981.
- Spina Gioconda. La Cosntitución de 1906 y la Insurrección Popular iraní de 1978. El Colegio de México, 1980.
- Estudio Monográfico de Irán. Secretaría de la Presidencia. Dirección General de Documentación. México 1975.
- Fisher, W.B. Irán Physical and Social Geography. Nueva York. 1976.
- Halliday, Fred. Irán Dictadura y Desarrollo. F.C.E. Méx. 1981
- Halliday, Fred. Estudios de Asia y Africa. No,43 El Colegio de México. 1980.
- Hernández Vela S.º Edmundo. Diccionario de Política Internacional UNAM, 1981.
- Ministère de L'Orientation Nationale. "L'Impact de la Revolution Islamique en Iran sur le monde Arabe, Le Message de

L' Islamisme". juin. 1980.

- Malek, Abdel. La Pensée Politique Arabe Contemporaine. Ed. du Seuil. Paris, 1970.
- Peretz, Don. The Middle East Today. Hall Rinehart and Winston, Inc. New York, 1978.
- Portilla Gómez, Juan Manuel. Aspectos Jurídicos del Terrorismo Internacional. Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales. ENEP Acatlán. UNAM 1980.
- Rubin, Barry. Paved with Good Intentions, The American Experience and Iran. Ed. Oxford, University Press, 1981.
- Seara Vázquez, Modesto. Tratdo General de Organizaciones Internacionales. F.C.E. México 1976.
- Sorensen, Max. Manual de Derecho Internacional Público. FCE México, 1974.
- Tunkin, Grigori. Curso de Derecho Internacional Público. Ed. Progreso. Moscú 1980.

#### REVISTAS Y PERIODICOS

- Department of State, Bulletin.  
Vol. 80 Number 2034 January 1980  
" " " 2035 February 1980  
" " " 2044 November 1980  
" 81 " 2046 January 1981  
" " " 2047 February 1981  
" " " 2048 March 1981  
" " " 2049 April 1981  
" " " 2050 May 1981
- Foreign Affairs. "Khomeini's Iran" Eric Rouleau. Fall 1980.  
Vol. 59 No. 1
- Medio Oriente Informa. Marzo 1981.
- Newsweek. Enero 26, 1981
- ONU Crónica Vol. XVII Número 12. Diciembre 1979  
" " " 3. Abril 1980  
" " " 4. Mayo 1980
- Prisma Mundial. Boletín de Información de las Naciones Unidas en México. No. 80-02 9 de Enero, 1980  
No. 80-22 26 de Mayo, 1980



- The Middle East. December 1978.
- Los Angeles Times. November 9, 1979.
- The Guardian. October 20, 1976.  
January 4, 1977.
- The Washington Post. November 11 1979.

DOCUMENTOS

- Cour Internationale de Justice. Recueil des Arrêts, Avis Consultatifs et ordonnances. Affaire Relative au personnel diplomatique et consulaire des États-Unis a Téhéran. (États-Unis d'Amérique C.Iran). Demande en Indication de Mesures Conservatoires. Ordonnances du 15 décembre 1979. La Haye, 1979.
- Cour Internationale de Justice. Recueil des Arrêts, Avis Consultatifs et ordonnances. Affaire Relative au personnel diplomatique et consulaire des États-Unis a Téhéran. (États-Unis d'Amérique C.Iran). Arrêt du 24 mai 1980.
- ~~Carta de las Naciones Unidas.~~
- Convención Internacional Contra la Toma de Rehenes. A/RES/34/146. 24 de enero de 1980.
- Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
- Reglamento de la Corte Internacional de Justicia.

## COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1979

15 décembre 1979

AFFAIRE RELATIVE AU PERSONNEL  
DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE  
DES ÉTATS-UNIS A TÉHÉRAN

(ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE c. IRAN)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES  
CONSERVATOIRES

## ORDONNANCE

*Présents* : Sir Humphrey WALDOCK, *Président* ; M. ELIAS, *Vice-Président* ; MM. FORSTER, GROS, LACHS, MOROZOV, NAGENDRA SINGH, RUDA, MOSLER, TARAZI, ODA, AGO, EL-ERIAN, SETTE-CAMARA, BAXTER, *juges* ; M. AQUARONE, *Greffier*.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour,

Vu les articles 73 et 74 du Règlement de la Cour,

Vu la requête enregistrée au Greffe le 29 novembre 1979, par laquelle les Etats-Unis d'Amérique ont introduit une instance contre la République islamique d'Iran au sujet d'un différend concernant la situation à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran ainsi que la prise en otages et la détention de membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis en Iran ;

*Rend l'ordonnance suivante* :

1. Considérant que dans la requête susmentionnée le Gouvernement des Etats-Unis invoque les clauses juridictionnelles de certains traités

comme bases de la compétence de la Cour en l'espèce ; qu'il relate toute une série d'événements commençant le 4 novembre 1979 à l'intérieur et aux alentours de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran et comportant l'invasion des locaux de l'ambassade, la capture de membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis et leur maintien en détention ; et que, se fondant sur les faits ainsi allégués, il prie la Cour de dire et juger :

- « a) que, en tolérant, en encourageant et en s'abstenant de prévenir et de réprimer le comportement décrit dans l'exposé des faits [figurant dans la requête], le Gouvernement de l'Iran a violé ses obligations juridiques internationales à l'égard des Etats-Unis telles qu'elles résultent
- des articles 22, 24, 25, 27, 29, 31, 37 et 47 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
  - des articles 28, 31, 33, 34, 36 et 40 de la convention de Vienne sur les relations consulaires,
  - des articles 4 et 7 de la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques,
  - des articles II, paragraphe 4, XIII, XVIII et XIX du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires conclu entre les Etats-Unis et l'Iran,
  - des articles 2, paragraphes 3 et 4, et 33 de la Charte des Nations Unies ;
- b) que, conformément aux obligations juridiques internationales mentionnées ci-dessus, le Gouvernement de l'Iran a l'obligation formelle d'assurer la libération immédiate de tous les ressortissants des Etats-Unis qui sont actuellement détenus dans le bâtiment de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran et de faire en sorte que toutes ces personnes et les autres ressortissants des Etats-Unis en Iran soient autorisés à quitter l'Iran en sécurité ;
- c) que le Gouvernement de l'Iran doit réparation aux Etats-Unis, sur la base de leur droit propre et dans l'exercice de leur droit de protection diplomatique à l'égard de leurs ressortissants, en raison des violations susmentionnées par l'Iran de ses obligations juridiques internationales envers les Etats-Unis, le montant devant être déterminé par la Cour ;
- d) que le Gouvernement de l'Iran remette aux autorités compétentes iraniennes aux fins de poursuites les personnes responsables des infractions commises contre le bâtiment et le personnel de l'ambassade des Etats-Unis et contre le bâtiment des consulats des Etats-Unis » ;

2. Vu la demande du 29 novembre 1979 enregistrée au Greffe le même jour, par laquelle le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, invoquant

l'article 41 du Statut et les articles 73, 74 et 75 du Règlement, prie la Cour d'indiquer d'urgence, en attendant l'arrêt définitif en l'affaire dont la Cour a été saisie par la requête datée du même jour, les mesures conservatoires suivantes, tendant à ce que :

- a) le Gouvernement de l'Iran libère immédiatement tous les otages ressortissants des Etats-Unis et aide ces personnes ainsi que tous autres fonctionnaires ressortissants des Etats-Unis à quitter l'Iran rapidement et en sécurité dans des conditions dignes et humaines ;
- b) le Gouvernement de l'Iran expulse immédiatement des bâtiments de l'ambassade, de la chancellerie et du consulat des Etats-Unis toutes les personnes dont la présence n'est pas autorisée par le chargé d'affaires des Etats-Unis en Iran et remette les bâtiments sous l'autorité des Etats-Unis ;
- c) le Gouvernement de l'Iran fasse en sorte que toutes les personnes attachées à l'ambassade et au consulat des Etats-Unis se voient accorder, avec la protection voulue, toute liberté à l'intérieur des bâtiments de l'ambassade et de la chancellerie ainsi que la liberté de mouvement à l'intérieur de l'Iran qui leur est nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions diplomatiques et consulaires ;
- d) le Gouvernement de l'Iran ne traduise en justice aucune des personnes attachées à l'ambassade et au consulat des Etats-Unis et s'abstienne de toute action tendant à entamer un tel procès ;
- e) le Gouvernement de l'Iran fasse en sorte qu'aucune mesure ne soit prise qui puisse porter atteinte aux droits des Etats-Unis pour ce qui est de l'application de toute décision que la Cour pourrait rendre sur le fond et en particulier qu'il ne prenne ni n'autorise aucune action mettant en danger la vie, la sécurité ou le bien-être des otages » ;

3. Considérant que, le jour où la requête introductive d'instance et la demande en indication de mesures conservatoires sont parvenues au Greffe, le Gouvernement de l'Iran a été avisé par télégramme de leur dépôt, ainsi que des mesures sollicitées, et que copie des deux documents a été expédiée par courrier aérien exprès au ministre des affaires étrangères de l'Iran ;

4. Considérant que, conformément à l'article 40, paragraphe 3, du Statut et à l'article 42 du Règlement, des copies de la requête ont été transmises au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant la Cour ;

5. Considérant que le 6 décembre 1979 le Greffier a adressé la notification prévue à l'article 63 du Statut aux Etats, autres que les parties en litige, énumérés dans les documents pertinents du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies comme étant parties aux conventions suivantes citées dans la requête :

- i) la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends qui s'y rattache ;
- ii) la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends qui s'y rattache ;
- iii) la convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ;

6. Considérant que le 30 novembre 1979, en attendant la réunion de la Cour et dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par l'article 74, paragraphe 4, du Règlement, le Président a adressé à chacun des deux gouvernements concernés un télégramme où il appelait leur attention sur le fait que l'affaire était désormais pendante devant la Cour et sur la nécessité d'agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus ; et considérant que, par le même télégramme, les deux gouvernements ont été en outre informés que la Cour tiendrait audience à une date rapprochée afin qu'ils puissent présenter leurs observations sur la demande en indication de mesures conservatoires ; et que la date projetée pour cette audience était celle du 10 décembre 1979, ultérieurement confirmée par télégramme du 3 décembre 1979 ;

7. Considérant que, dans le cadre de la préparation de l'audience, le Président a posé certaines questions préliminaires à l'agent du Gouvernement des Etats-Unis par télégramme du 4 décembre 1979, dont copie a été communiquée le même jour au Gouvernement de l'Iran ; considérant qu'en réponse à ces questions l'agent des Etats-Unis a soumis à la Cour le 7 décembre 1979 une déclaration de M. David D. Newsom, sous-secrétaire d'Etat pour les affaires politiques, déclaration qui était accompagnée de plusieurs documents annexés ; et considérant que copie de la lettre, de la déclaration et des pièces jointes a été immédiatement transmise au Gouvernement de l'Iran ;

8. Considérant que le 9 décembre 1979 a été reçue du ministre des affaires étrangères d'Iran une lettre datée du même jour et transmise par télégramme, dont le texte suit :

J'ai l'honneur d'accuser réception des télégrammes concernant la réunion, le 10 décembre 1979, de la Cour internationale de Justice, sur requête du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et de vous soumettre ci-dessous la position du Gouvernement de la République islamique de l'Iran à cet égard.

1. Tout d'abord, le Gouvernement de la République islamique de l'Iran tient à exprimer le respect qu'il voue à la Cour internationale de Justice et à ses distingués membres pour l'œuvre par eux accomplie dans la recherche de solutions justes et équitables aux conflits juri-

diques entre Etats. Cependant, le Gouvernement de la République islamique de l'Iran estime que la Cour ne peut et ne doit se saisir de l'affaire qui lui est soumise par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et de façon fort révélatrice, limitée à la soi-disant question des « otages de l'ambassade américaine à Téhéran ».

2. Cette question en effet ne représente qu'un élément marginal et secondaire d'un problème d'ensemble dont elle ne saurait être étudiée séparément et qui englobe entre autres plus de vingt-cinq ans d'ingérences continues par les Etats-Unis dans les affaires intérieures de l'Iran, l'exploitation éhontée de notre pays et de multiples crimes perpétrés contre le peuple iranien, envers et contre toutes les normes internationales et humanitaires.

3. Le problème en cause dans le conflit existant entre l'Iran et les Etats-Unis ne tient donc pas de l'interprétation et de l'application des traités sur lesquels se base la requête américaine, mais découle d'une situation d'ensemble comprenant des éléments beaucoup plus fondamentaux et plus complexes. En conséquence, la Cour ne peut examiner la requête américaine en dehors de son vrai contexte à savoir l'ensemble du dossier politique des relations entre l'Iran et les Etats-Unis au cours de ces vingt-cinq dernières années. Ce dossier comprend entre autres tous les crimes perpétrés en Iran par le Gouvernement américain, en particulier le coup d'Etat de 1953 fomenté et exécuté par la CIA, l'éviction du gouvernement national légitime du docteur Mossadegh, la remise en place du Chah et de son régime asservi aux intérêts américains et toutes les conséquences sociales, économiques, culturelles et politiques des interventions directes dans nos affaires intérieures, ainsi que des violations graves, flagrantes et perpétuelles de toutes les normes internationales perpétrées par les Etats-Unis en Iran.

4. En ce qui concerne la demande de mesures conservatoires, telle que formulée par les Etats-Unis, elle implique en fait que la Cour ait jugé de la substance même de l'affaire qui lui est soumise, ce que celle-ci ne saurait faire sans violer les normes qui régissent sa compétence. D'autre part, les mesures conservatoires étant par définition destinées à protéger les intérêts des parties en cause, elles ne pourraient avoir le caractère unilatéral de la requête présentée par le Gouvernement américain.

En conclusion, le Gouvernement de la République islamique de l'Iran attire respectueusement l'attention de la Cour sur les racines profondes et l'essence même de la révolution islamique de l'Iran, révolution de toute une nation opprimée contre les oppresseurs et leurs maîtres, et dont l'examen des multiples répercussions relève essentiellement et directement de la souveraineté nationale de l'Iran ;

9. Considérant que la possibilité a été donnée tant au Gouvernement

des Etats-Unis d'Amérique qu'au Gouvernement de l'Iran de présenter leurs observations sur la demande en indication de mesures conservatoires ;

10. Considérant qu'à l'audience publique qui s'est tenue le 10 décembre 1979 étaient présents devant la Cour l'agent, les conseils et un conseiller du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ;

11. Ayant entendu les observations orales sur la demande en indication de mesures conservatoires présentées au nom du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique par l'honorable Roberts B. Owen, agent, et l'honorable Benjamin R. Civiletti, *Attorney-General* des Etats-Unis, conseil, et ayant pris note des réponses données au nom de ce gouvernement à d'autres questions posées à l'issue de l'audience par le Président de la Cour et par deux membres de la Cour ;

12. Ayant noté que, dans ses conclusions finales enregistrées au Greffe le 12 décembre 1979 à la suite de l'audience du 10 décembre 1979, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique prie la Cour, en attendant l'arrêt définitif en l'affaire, d'indiquer immédiatement des mesures conçues comme suit :

« Premièrement, que le Gouvernement de l'Iran libère immédiatement tous les otages ressortissants des Etats-Unis et aide ces personnes ainsi que tous autres fonctionnaires ressortissants des Etats-Unis à quitter l'Iran rapidement et en sécurité dans des conditions dignes et humaines.

Deuxièmement, que le Gouvernement de l'Iran expulse immédiatement des bâtiments de l'ambassade, de la chancellerie et du consulat des Etats-Unis à Téhéran toutes les personnes dont la présence n'est pas autorisée par le chargé d'affaires des Etats-Unis en Iran et remette les bâtiments sous l'autorité des Etats-Unis.

Troisièmement, que le Gouvernement de l'Iran fasse en sorte que, pour autant que les Etats-Unis souhaiteraient -- et que l'Iran accepterait -- le maintien du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis en Iran, toutes les personnes attachées à l'ambassade et aux consulats des Etats-Unis se voient accorder, avec la protection voulue, l'entière liberté de mouvement, ainsi que les privilèges et immunités auxquels elles ont droit, qui leur sont nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions diplomatiques et consulaires.

Quatrièmement, que le Gouvernement de l'Iran ne traduise en justice aucune des personnes attachées à l'ambassade et aux consulats des Etats-Unis et s'abstienne de toute action tendant à entamer un tel procès ; et que le Gouvernement de l'Iran ne maintienne en détention ni n'autorise la détention d'aucune de ces personnes en vue d'une procédure devant une instance quelconque, « commission internationale » ou autre, et qu'aucune d'elles ne soit contrainte de participer à une telle procédure.

Cinquièmement, que le Gouvernement de l'Iran fasse en sorte qu'aucune mesure ne soit prise qui puisse porter atteinte aux droits des Etats-Unis pour ce qui est de l'application de toute décision que la

Cour pourrait rendre sur le fond et en particulier qu'il ne prenne ni n'autorise aucune action mettant en danger la vie, la sécurité ou le bien-être des otages » ;

13. Constatant que le Gouvernement de l'Iran ne s'est pas fait représenter à l'audience et considérant que la non-comparution de l'un des Etats en cause ne saurait en soi constituer un obstacle à l'indication de mesures conservatoires ;

14. Considérant que les dispositions conventionnelles sur lesquelles le Gouvernement des Etats-Unis, dans sa requête introductive d'instance et ses observations orales, prétend fonder la compétence de la Cour pour connaître de la présente affaire sont les suivantes :

- i) la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et l'article I du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends qui s'y rattache ;
- ii) la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et l'article I du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends qui s'y rattache ;
- iii) l'article XXI, paragraphe 2, du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Iran ;
- iv) l'article 13, paragraphe 1, de la convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ;

15. Considérant que, dans l'examen de la demande en indication de mesures conservatoires en la présente affaire, la Cour ne doit indiquer de telles mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur se présentent comme constituant *prima facie* une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée ;

16. Considérant que, quant aux droits invoqués par les Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne le personnel et les locaux de leur ambassade et de leurs consulats en Iran, l'article I de chacun des deux protocoles accompagnant respectivement les conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et les relations consulaires stipule expressément :

« Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même Partie au présent Protocole » ;

considérant que la publication des Nations Unies intitulée *Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire*



cite l'Iran et les Etats-Unis comme parties à chacune des deux conventions, ainsi qu'à chacun des protocoles correspondants concernant le règlement obligatoire des différends, dans chaque cas sans aucune réserve quant à l'instrument dont il s'agit ;

17. Considérant que, s'il est vrai que les articles II et III des protocoles susmentionnés prévoient que les parties peuvent convenir d'adopter dans certaines conditions, au lieu du recours à la Cour internationale de Justice, une procédure devant un tribunal arbitral ou une procédure de conciliation, aucun accord de ce genre n'a été conclu entre les parties ; et que les termes de l'article I des protocoles de signature facultative ne sauraient établir plus clairement la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice pour tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des conventions de Vienne susmentionnées ;

18. Considérant par conséquent qu'il ressort manifestement des renseignements soumis à la Cour et des termes de l'article I de chacun des deux protocoles que les dispositions de cet article fournissent une base sur laquelle la compétence de la Cour pour connaître des demandes présentées par les Etats-Unis en vertu des conventions de Vienne de 1961 et 1963 pourrait être fondée ;

19. Considérant que, quant aux droits invoqués par les Etats-Unis en ce qui concerne deux de leurs ressortissants qui, selon la déclaration de M. David D. Newsom mentionnée au paragraphe 7 ci-dessus, ne font partie ni du personnel de leur mission diplomatique ni de celui de leur mission consulaire, il ressort des déclarations du Gouvernement des Etats-Unis que ces deux personnes privées ont été prises en otages et sont détenues dans les locaux de l'ambassade ou consulat des Etats-Unis à Téhéran ; considérant que dans ces conditions la capture et la détention de ces personnes entrent aussi dans le cadre des dispositions applicables des conventions de Vienne de 1961 et 1963 relatives à l'inviolabilité des locaux des ambassades et des consulats ; considérant en outre que la capture et la détention de ces personnes dans les circonstances alléguées par les Etats-Unis entrent tout aussi clairement dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la convention de Vienne de 1963 qui prévoit expressément que les fonctions consulaires comprennent l'assistance aux ressortissants, leur protection et la sauvegarde de leurs intérêts ; et considérant que ces fonctions visent précisément à permettre à l'Etat d'envoi de veiller, par l'intermédiaire de ses consulats, à ce que ses ressortissants se voient accorder le traitement auquel ils ont droit, en vertu des règles générales du droit international, comme étrangers sur le territoire de l'Etat d'accueil ;

20. Considérant, par suite, qu'il est non moins manifeste que l'article I des protocoles concernant le règlement obligatoire des différends qui se rattachent aux conventions de Vienne de 1961 et 1963 constitue une base sur laquelle la compétence de la Cour pour connaître des demandes des Etats-Unis au sujet des deux personnes privées en question pourrait être fondée ;

21. Considérant, dès lors, que la Cour n'estime pas nécessaire aux présentes fins de traiter la question de savoir si l'exercice des pouvoirs que

lui confère l'article 41 du Statut pourrait également être fondé sur l'article XXI, paragraphe 2, du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 et sur l'article 13, paragraphe 1, de la convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques.

\*

22. Considérant par ailleurs que, dans la lettre susmentionnée du 9 décembre 1979, le Gouvernement de l'Iran soutient que la Cour ne peut et ne doit se saisir de la présente affaire, au motif que la question des otages ne représenterait « qu'un élément marginal et secondaire d'un problème d'ensemble » concernant les activités des Etats-Unis en Iran depuis plus de vingt-cinq ans ; et qu'il affirme au surplus que tout examen des multiples répercussions de la révolution islamique de l'Iran relève essentiellement et directement de la souveraineté nationale de l'Iran ;

23. Considérant que, quelque importance et quelque lien avec la présente affaire que les iniquités attribuées au Gouvernement des Etats-Unis dans cette lettre par le Gouvernement de l'Iran puissent sembler avoir aux yeux de ce dernier, l'invasion de l'ambassade et des consulats des Etats-Unis et la prise en otages de personnes internationalement protégées ne sauraient, selon la Cour, en raison de l'importance des principes juridiques en cause, être considérées comme ayant un caractère « secondaire » ou « marginal » ; rappelant, à cet égard, que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a effectivement vu dans ces événements une « situation grave » constituant « une menace grave contre la paix et la sécurité internationales » et que, dans sa résolution 457 (1979), le Conseil de sécurité s'est déclaré profondément préoccupé par le niveau dangereux de la tension entre les deux Etats, qui pourrait avoir des conséquences graves pour la paix et la sécurité internationales ;

24. Considérant de surcroît que, si le Gouvernement de l'Iran estime que les activités alléguées des Etats-Unis en Iran sont en étroite connexité juridique avec l'objet de la requête des Etats-Unis, il lui est loisible, en vertu du Statut et du Règlement de la Cour, de développer à ce sujet sa propre argumentation devant la Cour, soit comme moyen de défense dans un contre-mémoire, soit par la voie d'une demande reconventionnelle présentée en vertu de l'article 80 du Règlement ; et que par conséquent, en ne comparaisant pas dans la présente instance, le Gouvernement de l'Iran s'est de plein gré privé de la possibilité de faire valoir ses propres thèses devant la Cour et de présenter lui-même une demande en indication de mesures conservatoires ; et qu'aucune disposition du Statut ou du Règlement n'envisage que la Cour ne doive pas se saisir d'un aspect d'un différend pour la simple raison que ce différend comporterait d'autres aspects, si importants soient-ils ;

25. Considérant qu'il n'est certes pas douteux que la révolution isla-

mique de l'Iran « relève essentiellement et directement de la souveraineté nationale de l'Iran » ; que toutefois un différend concernant des locaux diplomatiques et consulaires et la détention de personnes internationalement protégées et mettant en jeu l'interprétation ou l'application de conventions multilatérales qui codifient le droit international en matière de relations diplomatiques et consulaires relève, par sa nature même, de la juridiction internationale ;

26. Considérant par conséquent que les deux considérations avancées par le Gouvernement de l'Iran dans sa lettre du 9 décembre 1979 ne sauraient, selon la Cour, être tenues pour un obstacle à ce qu'elle connaisse de l'affaire dont elle a été saisie par la requête des Etats-Unis en date du 29 novembre 1979 ;

\*

27. Considérant que, dans la même lettre du 9 décembre 1979, le Gouvernement de l'Iran présente également deux considérations sur la base desquelles il affirme qu'en tout état de cause la Cour ne doit pas accéder à la demande en indication de mesures conservatoires présentée en l'espèce par les Etats-Unis ;

28. Considérant qu'il soutient en premier lieu que la demande en indication de mesures conservatoires, telle qu'elle a été formulée par les Etats-Unis, « implique en fait que la Cour ait jugé de la substance même de l'affaire qui lui est soumise » ; considérant que dans l'affaire de l'*Usine de Chorzów* la Cour permanente de Justice internationale s'est certes abstenue d'indiquer des mesures conservatoires, motif pris de ce qu'en l'espèce la demande tendait à « obtenir un jugement provisionnel adjugeant une partie des conclusions » (*ordonnance du 21 novembre 1927, C.P.J.I. série A n° 112, p. 10*) ; considérant cependant que dans ladite affaire les circonstances étaient totalement différentes de celles de la présente espèce et qu'il s'agissait alors d'obtenir de la Cour une décision définitive sur une partie de la demande de dédommagement monétaire ; considérant en outre qu'une demande en indication de mesures conservatoires a nécessairement, par sa nature même, un lien avec la substance de l'affaire puisque, comme l'article 41 l'indique expressément, son objet est de protéger le droit de chacun ; et qu'en la présente espèce le but de la demande des Etats-Unis ne paraît pas être d'obtenir un jugement, provisionnel ou définitif, sur le fond des réclamations mais de protéger *pendente lite* la substance des droits invoqués ;

29. Considérant que le Gouvernement de l'Iran soutient en second lieu que, « les mesures conservatoires étant par définition destinées à protéger les intérêts des parties en cause, elles ne pourraient avoir le caractère unilatéral » ; considérant cependant que le point de départ de cette thèse ne correspond pas aux termes de l'article 41 du Statut qui vise expressément les « mesures conservatoires du droit de *chacun* [devant] être prises à titre provisoire » ; considérant que l'idée même d'une indication de mesures conservatoires, comme l'article 73 du Règlement le reconnaît,

suppose qu'une des parties sollicite des mesures pour protéger ses droits propres contre tout acte de l'autre partie de nature à leur porter préjudice *pendente lite* ; considérant qu'il en découle qu'une demande en indication de mesures conservatoires est par nature unilatérale ; et que le Gouvernement de l'Iran n'a pas comparu devant la Cour pour solliciter l'indication de mesures conservatoires ; considérant cependant que la Cour, ainsi qu'il ressort de l'article 75 de son Règlement, doit veiller en tout temps à protéger les droits des deux parties dans les instances qui se déroulent devant elle et qu'il n'est pas rare qu'en indiquant des mesures conservatoires elle se soit adressée aux deux parties ; et que cela ne signifie pas et ne saurait signifier que la Cour ne puisse connaître d'une demande émanant d'une seule partie pour la simple raison que les mesures sollicitées seraient unilatérales ;

30. Considérant en conséquence que ni l'une ni l'autre des considérations énoncées par le Gouvernement de l'Iran dans sa lettre du 9 décembre 1979 ne saurait constituer un motif qui doive amener la Cour à refuser de connaître de la demande des Etats-Unis en l'espèce ;

\*

31. Considérant qu'il découle de ce qui précède que, dans la lettre du Gouvernement de l'Iran en date du 9 décembre 1979, la Cour ne trouve pas de motifs juridiques l'amenant à conclure qu'elle ne doit pas se saisir de la demande des Etats-Unis ;

\*

32. Considérant qu'en conséquence la Cour se propose d'aborder l'examen de la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Gouvernement des Etats-Unis en l'espèce ;

33. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du Statut la Cour ne peut indiquer de telles mesures que si elle estime que les circonstances l'exigent pour sauvegarder les droits de chacune des parties ;

34. Considérant que les circonstances alléguées par le Gouvernement des Etats-Unis, et qui, selon ce gouvernement, exigent l'indication de mesures conservatoires en l'espèce, peuvent être résumées comme suit :

- i) Le 4 novembre 1979, au cours d'une manifestation qui se déroulait devant l'enceinte de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran, des manifestants ont attaqué les locaux de l'ambassade ; aucune force de sécurité iranienne n'est intervenue ou n'a été envoyée pour rétablir la situation, en dépit d'appels répétés à l'aide adressés par l'ambassade aux autorités iraniennes. Pour finir, tous les locaux de l'ambassade ont été envahis. Le personnel de l'ambassade, y compris des membres du personnel consulaire et des agents non américains, ainsi que des visiteurs qui se trouvaient à ce moment à l'ambassade, ont été capturés.

Peu après, selon le Gouvernement des Etats-Unis, les consulats des Etats-Unis à Tabriz et à Chiraz, qui avaient été attaqués au début de l'année 1979, ont été également occupés sans que rien soit fait pour empêcher cette occupation.

- ii) Depuis lors, les locaux de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran et ceux des consulats à Tabriz et à Chiraz sont restés aux mains de leurs occupants. Ceux-ci ont mis au pillage les archives et les documents de la mission diplomatique des Etats-Unis et de sa section consulaire. Les membres du personnel de l'ambassade et les autres personnes capturées au moment de l'attaque ont été retenus en otages, sauf treize d'entre eux qui ont été relâchés les 18 et 20 novembre 1979. Ceux qui détiennent les otages ont refusé de les libérer tant que le Gouvernement des Etats-Unis ne céderait pas à diverses exigences que ce gouvernement considère inacceptables. Selon ce qui a été dit, les otages sont souvent liés et les yeux bandés, soumis à un régime très pénible, à l'isolement complet et sont menacés d'être jugés ou éventuellement mis à mort. Le Gouvernement des Etats-Unis affirme qu'il a des raisons de penser que certains d'entre eux ont peut-être été transférés dans d'autres lieux de détention.
- iii) De l'avis du Gouvernement des Etats-Unis, non seulement le Gouvernement de l'Iran n'a rien fait pour prévenir les événements qui viennent d'être évoqués, mais la preuve est clairement faite qu'il s'en est rendu complice et les a approuvés.
- iv) D'après les renseignements fournis à la Cour par l'agent des Etats-Unis, les personnes détenues en otages dans les locaux de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran comprennent au moins vingt-huit personnes ayant la qualité, dûment reconnue par le Gouvernement de l'Iran, de « membres du personnel diplomatique » au sens de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ; au moins vingt personnes ayant la qualité, également reconnue, de « membres du personnel administratif et technique » au sens de cette convention ; et deux autres ressortissants des Etats-Unis n'ayant ni statut diplomatique ni statut consulaire. Quatre des personnes qui ont la qualité de membres du personnel diplomatique appartiennent à la section consulaire de l'ambassade.
- v) Outre les personnes détenues en otages dans les locaux de l'ambassade à Téhéran, le chargé d'affaires en Iran et deux autres agents diplomatiques des Etats-Unis sont détenus dans les locaux du ministère des affaires étrangères d'Iran, dans des conditions que le Gouvernement des Etats-Unis n'a pas pu entièrement élucider mais qui comporteraient apparemment des restrictions à leur liberté de mouvement et une mise en cause de leur inviolabilité en tant que diplomates ;

35. Considérant que, sur la base des faits ainsi allégués par le Gouvernement des Etats-Unis, celui-ci fait valoir dans sa requête que le Gouvernement de l'Iran a violé et viole encore un certain nombre d'obligations juridiques que lui imposent la convention de Vienne de 1961 sur les

relations diplomatiques, la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, le traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre l'Iran et les Etats-Unis, la convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, la Charte des Nations Unies et le droit international coutumier ;

36. Considérant que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires que l'article 41 du Statut confère à la Cour a pour objet de sauvegarder les droits de chacune des parties en attendant que la Cour rende sa décision et présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire ;

37. Considérant que les droits qui, d'après les Etats-Unis d'Amérique, devraient être protégés par l'indication de mesures conservatoires ont été spécifiés dans la demande du 29 novembre 1979 comme étant :

« les droits de leurs ressortissants à la vie, à la liberté, à la protection et à la sécurité ; les droits à l'inviolabilité, à l'immunité et à la protection de leurs fonctionnaires diplomatiques et consulaires ; les droits à l'inviolabilité et à la protection de leurs locaux diplomatiques et consulaires » ;

et, à l'audience du 10 décembre 1979, comme :

« le droit [des Etats-Unis] d'avoir à Téhéran une ambassade qui fonctionne normalement, le droit à ce que la vie et la personne de leurs agents diplomatiques et consulaires soient protégées contre toute intervention et tout excès et le droit à la protection et à la sécurité de leurs ressortissants » ;

et considérant que les mesures sollicitées par les Etats-Unis pour assurer la protection de ces droits sont énoncées aux paragraphes 2 et 12 ci-dessus ;

38. Considérant que, dans la conduite des relations entre Etats, il n'est pas d'exigence plus fondamentale que celle de l'inviolabilité des diplomates et des ambassades et que c'est ainsi que, au long de l'histoire, des nations de toutes croyances et toutes cultures ont observé des obligations réciproques à cet effet ; et que les obligations ainsi assumées pour garantir en particulier la sécurité personnelle des diplomates et leur exemption de toute poursuite sont essentielles, ne comportent aucune restriction et sont inhérentes à leur caractère représentatif et à leur fonction diplomatique ;

39. Considérant que l'institution de la diplomatie, avec les privilèges et immunités qui s'y rattachent, a résisté à l'épreuve des siècles et s'est avérée un instrument essentiel de coopération efficace dans la communauté internationale, qui permet aux Etats, nonobstant les différences de leurs systèmes constitutionnels et sociaux, de parvenir à la compréhension mutuelle et de résoudre leurs divergences par des moyens pacifiques ;

40. Considérant que le déroulement sans entrave des relations consulaires, également nouées entre les peuples depuis des temps anciens, n'est

pas moins important dans le contexte du droit international contemporain, en ce qu'il favorise le développement des relations amicales entre les nations et assure protection et assistance aux étrangers résidant sur le territoire d'autres Etats ; considérant dès lors que les privilèges et immunités des fonctionnaires et employés consulaires et l'inviolabilité des locaux et archives consulaires sont eux aussi des principes de droit international profondément enracinés ;

41. Considérant qu'aucun Etat n'a l'obligation d'entretenir des relations diplomatiques ou consulaires avec un autre Etat, mais qu'il ne saurait manquer de reconnaître les obligations impératives qu'elles comportent et qui sont maintenant codifiées dans les conventions de Vienne de 1961 et 1963 auxquelles l'Iran et les Etats-Unis sont parties ;

42. Considérant que la persistance de la situation qui fait l'objet de la requête expose les êtres humains concernés à des privations, à un sort pénible et angoissant et même à des dangers pour leur vie et leur santé et par conséquent à une possibilité sérieuse de préjudice irréparable ;

43. Considérant à cet égard que la Cour note les dispositions de la convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, à laquelle l'Iran et les Etats-Unis sont parties ;

44. Considérant que, étant donné ce qui précède, la Cour conclut que les circonstances exigent qu'elle indique des mesures conservatoires, ainsi qu'il est prévu à l'article 41 du Statut, en vue de sauvegarder les droits invoqués ;

\*

45. Considérant qu'une décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître du fond de l'affaire ni aucune question relative au fond lui-même et qu'elle laisse intact le droit du Gouvernement de l'Iran de faire valoir ses moyens tant sur la compétence que sur le fond ;

\*

46. Considérant que la Cour doit en conséquence indiquer maintenant les mesures qu'elle estime nécessaires en la présente espèce ;

47. En conséquence,

LA COUR,

à l'unanimité,

1. *Indique* à titre provisoire, en attendant son arrêt définitif dans l'instance introduite le 29 novembre 1979 par les Etats-Unis d'Amérique contre la République islamique d'Iran, les mesures conservatoires suivantes, tendant à ce que :

- A. i) Le Gouvernement de la République islamique d'Iran fasse immédiatement en sorte que les locaux de l'ambassade, de la chancellerie et des consulats des Etats-Unis soient remis en possession des autorités des Etats-Unis et placés sous leur contrôle exclusif et assure leur inviolabilité et leur protection effective conformément aux traités en vigueur entre les deux Etats et au droit international général ;
- ii) Le Gouvernement de la République islamique d'Iran assure la libération immédiate et sans aucune exception de tous les ressortissants des Etats-Unis qui sont ou ont été détenus à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique ou au ministère des affaires étrangères à Téhéran ou qui ont été détenus en otages ailleurs et accorde pleine protection à ces personnes conformément aux traités en vigueur entre les deux Etats et au droit international général ;
- iii) Le Gouvernement de la République islamique d'Iran reconnaisse désormais à tous les membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis la plénitude de la protection, des privilèges et des immunités auxquels ils ont droit conformément aux traités en vigueur entre les deux Etats et au droit international général, notamment l'immunité à l'égard de toute forme de juridiction criminelle et la liberté et les moyens de quitter le territoire iranien ;
- B. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République islamique d'Iran ne prennent aucune mesure, et veillent à ce qu'il n'en soit prise aucune, qui soit de nature à aggraver la tension entre les deux pays ou à rendre plus difficile la solution du différend existant ;

2. *Décide* que, jusqu'à ce que la Cour rende son arrêt définitif en l'espèce, elle demeurera saisie des questions qui font l'objet de la présente ordonnance.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la Paix, à La Haye, le quinze décembre mil neuf cent soixante-dix-neuf, en quatre exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République islamique d'Iran, au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour transmission au Conseil de sécurité.

Le Président,

(Signé) Humphrey WALDOCK.

Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.



24 MAY 1980

JUDGMENT

CASE CONCERNING UNITED STATES DIPLOMATIC  
AND CONSULAR STAFF IN TEHRAN  
(UNITED STATES OF AMERICA v. IRAN)

---

AFFAIRE RELATIVE AU PERSONNEL DIPLOMATIQUE  
ET CONSULAIRE DES ÉTATS-UNIS À TÉHÉRAN  
(ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE c. IRAN)

24 MAI 1980

ARRÊT

## COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1980

24 mai 1980

1980  
24 mai  
Rôle général  
n° 64AFFAIRE RELATIVE AU PERSONNEL  
DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE  
DES ÉTATS-UNIS À TÉHÉРАН

(ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE c. IRAN)

*Article 53 du Statut — Preuve des faits — Recevabilité de l'instance — L'existence d'un différend politique plus large ne fait pas obstacle à l'instance judiciaire — La procédure devant le Conseil de sécurité n'a pas d'effet restrictif pour la Cour — Commission d'établissement des faits instituée par le Secrétaire général.*

*Compétence de la Cour — Protocoles de signature facultative aux conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires — Traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (États-Unis/Iran) — Disposition permettant de saisir la Cour du différend à moins que les parties ne conviennent « de le régler par d'autres moyens pacifiques » — Droit d'introduire une requête unilatérale — Les contre-mesures empêchent-elles d'invoquer le traité d'amitié ?*

*Responsabilité de l'Etat pour violation des conventions de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires — Faits de personnes n'agissant pas pour le compte de l'Etat — Ces faits ne sont pas imputables à l'Etat — Manquement à l'obligation de protéger commis par l'Etat — Décision ultérieure de perpétuer, au nom de l'Etat, la situation ainsi créée — Utilisation de la situation comme moyen de contrainte.*

*Problème de la justification possible du comportement de l'Etat du fait de circonstances spéciales — Remèdes en cas d'abus prévus par le droit diplomatique.*

*Effet cumulatif de violations successives d'obligations internationales — Caractère fondamental du droit diplomatique et consulaire.*

## ARRÊT

*Présents : Sir Humphrey WALDOCK, Président ; M. ELIAS, Vice-Président ; MM. FORSTER, GROS, LACHS, MOROZOV, NAGENDRA SINGH, RUDA, MOSLER, TARAZI, ODA, AGO, EL-ERIAN, SETTE-CAMARA, BAXTER, juges ; M. AQUARONE, Greffier.*

En l'affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran,

*entre*

les Etats-Unis d'Amérique,  
représentés par

l'honorable Roberts B. Owen, conseiller juridique du département d'Etat,  
comme agent,

S. Exc. M<sup>me</sup> Geri Joseph, ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique aux Pays-Bas,  
comme agent adjoint,

M. Stephen M. Schwebel, conseiller juridique adjoint du département d'Etat,  
comme agent adjoint et conseil,

M. Thomas J. Dunnigan, conseiller de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique,  
comme agent adjoint,  
assistés par

M. David H. Small, assistant du conseiller juridique du département d'Etat,  
M. Ted L. Stein, avocat-conseil au département d'Etat,  
M. Hugh V. Simon Jr., deuxième secrétaire de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique,  
comme conseillers.

*et*

la République islamique d'Iran,

LA COUR,

ainsi composée,

*rend l'arrêt suivant :*

1. Le 29 novembre 1979 le conseiller juridique du département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique a remis au Greffier une requête introduisant une instance contre la République islamique d'Iran au sujet d'un différend relatif à la prise et à la détention en otages de membres du personnel diplomatique et consulaire et de certains autres ressortissants des Etats-Unis.

2. Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut et à l'article 38, paragraphe 4, du Règlement de la Cour, la requête a été immédiatement communiquée au Gouvernement de l'Iran. Conformément à l'article 40, paragraphe 3, du Statut et à l'article 42 du Règlement, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les Membres des Nations Unies et les autres Etats admis à ester devant la Cour ont été informés de la requête.

3. Le 29 novembre 1979, jour du dépôt de la requête, le Gouvernement des

Etats-Unis a déposé au Greffe de la Cour une demande en indication de mesures conservatoires fondée sur l'article 41 du Statut et l'article 73 du Règlement. Par ordonnance du 15 décembre 1979 la Cour, statuant à l'unanimité, a indiqué des mesures conservatoires en l'instance.

4. Par ordonnance du Président de la Cour prise le 24 décembre 1979, la date d'expiration des délais a été fixée au 15 janvier 1980 pour le dépôt du mémoire des Etats-Unis et au 18 février 1980 pour le dépôt du contre-mémoire de l'Iran, étant entendu que, si l'Iran désignait un agent pour comparaître devant la Cour et présenter des observations sur l'affaire, il lui serait loisible de demander que cette dernière date soit reconsidérée. Le mémoire des Etats-Unis a été déposé le 15 janvier 1980, dans le délai fixé, et a été communiqué au Gouvernement de l'Iran ; ce gouvernement n'a pas déposé de contre-mémoire et n'a pas non plus nommé d'agent ni demandé que la date d'expiration soit reconsidérée.

5. L'affaire s'est ainsi trouvée en état le 19 février 1980, le lendemain du jour où expirait le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire de l'Iran. Dans des circonstances qui sont expliquées aux paragraphes 41 et 42 ci-après, et les parties ayant été dûment avisées, le début de la procédure orale a été fixé au 18 mars 1980 ; des audiences publiques ont eu lieu les 18, 19 et 20 mars 1980, durant lesquelles la Cour a entendu les plaidoiries de l'agent et du conseil des Etats-Unis ; le Gouvernement de l'Iran n'était pas représenté à ces audiences. Des membres de la Cour ont adressé des questions à l'agent des Etats-Unis durant et après les audiences ; il y a été répondu soit oralement à l'audience soit par écrit, conformément à l'article 61, paragraphe 4, du Règlement.

6. Le 6 décembre 1979 le Greffier a adressé la notification prévue à l'article 63 du Statut aux Etats qui, selon les renseignements fournis par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en tant que dépositaire, étaient parties à une ou plusieurs des conventions et protocoles suivants :

- a) la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ;
- b) le protocole de signature facultative à cette convention concernant le règlement obligatoire des différends ;
- c) la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires ;
- d) le protocole de signature facultative à cette convention concernant le règlement obligatoire des différends ;
- e) la convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques.

7. La Cour, après s'être renseignée à ce sujet auprès du Gouvernement des Etats-Unis et avoir donné au Gouvernement de l'Iran la possibilité de faire connaître son opinion, a décidé, conformément à l'article 53, paragraphe 2, du Règlement que des exemplaires des pièces de procédure et des documents annexés seraient tenus à la disposition du public à dater du 25 mars 1980.

8. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été déposées au nom du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :

dans la requête :

« les Etats-Unis demandent à la Cour de dire et juger :

- a) que, en tolérant, en encourageant et en s'abstenant de prévenir et de réprimer le comportement décrit dans l'exposé des faits qui précède, le Gouvernement de l'Iran a violé ses obligations juridiques internationales à l'égard des Etats-Unis telles qu'elles résultent
  - des articles 22, 24, 25, 27, 29, 31, 37 et 47 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
  - des articles 28, 31, 33, 34, 36 et 40 de la convention de Vienne sur les relations consulaires,
  - des articles 4 et 7 de la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques,
  - des articles II, paragraphe 4, XIII, XVIII et XIX du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis et l'Iran,
  - des articles 2, paragraphes 3 et 4, et 33 de la Charte des Nations Unies ;
- b) que, conformément aux obligations juridiques internationales mentionnées ci-dessus, le Gouvernement de l'Iran a l'obligation formelle d'assurer la libération immédiate de tous les ressortissants des Etats-Unis qui sont actuellement détenus dans le bâtiment de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran et de faire en sorte que toutes ces personnes et tous les autres ressortissants des Etats-Unis en Iran soient autorisés à quitter l'Iran en sécurité ;
- c) que le Gouvernement de l'Iran doit réparation aux Etats-Unis, sur la base de leur droit propre et dans l'exercice de leur droit de protection diplomatique à l'égard de leurs ressortissants, en raison des violations susmentionnées par l'Iran de ses obligations juridiques internationales envers les Etats-Unis, le montant devant être déterminé par la Cour ;
- d) que le Gouvernement de l'Iran remette aux autorités compétentes iraniennes aux fins de poursuites les personnes responsables des infractions commises contre le bâtiment et le personnel de l'ambassade des Etats-Unis et contre le bâtiment des consulats des Etats-Unis » ;

dans le mémoire :

« Le Gouvernement des Etats-Unis prie respectueusement la Cour de dire et juger :

- a) que, en permettant, en tolérant, en encourageant, en adoptant, en s'efforçant d'exploiter et en s'abstenant de prévenir et de réprimer le comportement décrit dans l'exposé des faits, le Gouvernement de la République islamique d'Iran a violé ses obligations juridiques internationales à l'égard des Etats-Unis telles qu'elles résultent :
  - des articles 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 44 et 47 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
  - des articles 5, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 40 et 72 de la convention de Vienne sur les relations consulaires,

- des articles II, paragraphe 4, XIII, XVIII et XIX du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis et l'Iran,
  - des articles 2, 4 et 7 de la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ;
- b) que, conformément aux obligations juridiques internationales mentionnées ci-dessus :
- i) le Gouvernement de la République islamique d'Iran doit immédiatement faire en sorte que les locaux de l'ambassade, de la chancellerie et des consulats des Etats-Unis soient remis en possession des autorités des Etats-Unis et placés sous leur contrôle exclusif, et doit assurer leur inviolabilité et leur protection effective conformément aux traités en vigueur entre les deux Etats et au droit international général ;
  - ii) le Gouvernement de la République islamique d'Iran doit assurer la libération immédiate et sans aucune exception de tous les ressortissants des Etats-Unis qui sont ou ont été détenus à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique ou au ministère des affaires étrangères à Téhéran ou qui sont ou ont été détenus en otages ailleurs, et accorder pleine protection à ces personnes conformément aux traités en vigueur entre les deux Etats et au droit international général ;
  - iii) le Gouvernement de la République islamique d'Iran doit désormais reconnaître à tous les membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis la protection, les privilèges et les immunités auxquels ils ont droit conformément aux traités en vigueur entre les deux Etats et au droit international général, notamment l'immunité à l'égard de toute forme de juridiction criminelle et la liberté et les moyens de quitter le territoire iranien ;
  - iv) le Gouvernement de la République islamique d'Iran doit, en reconnaissant aux membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis la protection, les privilèges et les immunités auxquels ils ont droit, notamment l'immunité à l'égard de toute forme de juridiction criminelle, faire en sorte qu'aucun d'eux ne soit contraint de comparaître comme accusé ou comme témoin, déclarant, source d'information, ou à tout autre titre, dans une instance, officielle ou non, entamée par le Gouvernement de l'Iran ou avec son acquiescement, quelle que soit la dénomination de cette instance : « procès », « jury d'accusation » ou « commission internationale », etc. ;
  - v) le Gouvernement de la République islamique d'Iran doit déférer aux fins de poursuite à ses autorités compétentes ou extradier aux Etats-Unis les responsables des infractions commises contre le personnel et les locaux de l'ambassade et des consulats des Etats-Unis en Iran ;
- c) qu'en vertu de leur droit propre et dans l'exercice de leur droit de protection diplomatique de leurs ressortissants détenus en otages les Etats-Unis d'Amérique ont droit à ce que la République islamique d'Iran

leur verse, à raison des violations des obligations juridiques internationales susvisées dont elle est tenue à leur égard, une réparation dont la Cour déterminera le montant à un stade ultérieur de la procédure. »

9. A l'issue de la procédure orale, des conclusions écrites ont été déposées au Greffe au nom du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique conformément à l'article 60, paragraphe 2, du Règlement ; copie en a été transmise au Gouvernement de l'Iran. Ces conclusions sont identiques à celles qui figurent dans le mémoire des Etats-Unis.

10. Aucune pièce écrite n'a été déposée par le Gouvernement de l'Iran et celui-ci ne s'est pas fait représenter à la procédure orale ; aucune conclusion n'a donc été présentée en son nom. Toutefois, l'attitude de ce gouvernement a été définie dans deux communications adressées à la Cour par le ministre des affaires étrangères d'Iran ; la première consiste en une lettre du 9 décembre 1979 transmise par télégramme le même jour, dont le texte intégral est reproduit dans l'ordonnance de la Cour du 15 décembre 1979 (*C.I.J. Recueil 1979*, p. 10-11) ; la deuxième est une lettre du 16 mars 1980 transmise par télex et reçue le 17 mars 1980, dont le texte, très proche de celui de la lettre du 9 décembre 1979, est reproduit ci-après :

« J'ai l'honneur d'accuser réception des télégrammes concernant la réunion, le 17 mars 1980, de la Cour internationale de Justice, sur requête du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et de vous exposer ci-dessous encore une fois la position du Gouvernement de la République islamique d'Iran à cet égard :

Le Gouvernement de la République islamique d'Iran tient à exprimer le respect qu'il voue à la Cour internationale de Justice et à ses distingués membres pour l'œuvre par eux accomplie dans la recherche de solutions justes et équitables aux conflits juridiques entre Etats et à attirer respectueusement l'attention de la Cour sur les racines profondes et l'essence même de la révolution islamique de l'Iran, révolution de toute une nation opprimée contre les oppresseurs et leurs maîtres, et dont l'examen des multiples répercussions relève essentiellement et directement de la souveraineté nationale de l'Iran.

Le Gouvernement de la République islamique d'Iran estime que la Cour ne peut et ne doit se saisir de l'affaire qui lui est soumise par le Gouvernement d'Amérique, et de façon fort révélatrice, limitée à la soi-disant question des « otages de l'ambassade américaine à Téhéran ».

Cette question, en effet, ne représente qu'un élément marginal et secondaire d'un problème d'ensemble dont elle ne saurait être étudiée séparément et qui englobe entre autres plus de vingt-cinq ans d'ingérences continuelles par les Etats-Unis dans les affaires intérieures de l'Iran, d'exploitation éhontée de notre pays et de multiples crimes perpétrés contre le peuple iranien, envers et contre toutes les normes internationales et humanitaires.

Le problème en cause dans le conflit existant entre l'Iran et les Etats-Unis ne tient donc pas de l'interprétation et de l'application des traités sur

lesquels se base la requête américaine, mais découle d'une situation d'ensemble comprenant des éléments beaucoup plus fondamentaux et plus complexes. En conséquence, la Cour ne peut examiner la requête américaine en dehors de son vrai contexte à savoir l'ensemble du dossier politique des relations entre l'Iran et les Etats-Unis au cours de ces vingt-cinq années.

En ce qui concerne la demande de mesures conservatoires, telle que formulée par les Etats-Unis, elle implique en fait que la Cour ait jugé de la substance même de l'affaire qui lui est soumise, ce que celle-ci ne saurait faire sans violer les normes qui régissent sa compétence, d'autre part, les mesures conservatoires étant par définition, destinées à protéger les intérêts des parties en cause, elles ne pourraient avoir le caractère unilatéral de la requête présentée par le Gouvernement américain. »

Les questions soulevées dans ces deux communications seront examinées plus loin dans le présent arrêt (paragraphe 33-38 et 81-82).

\* \* \*

11. La position adoptée par le Gouvernement de l'Iran à l'égard de la présente instance entraîne l'application de l'article 53 du Statut, en vertu duquel la Cour doit s'assurer notamment que les conclusions du demandeur sont fondées en fait. Comme la Cour l'a dit à propos de cet article en l'affaire du *Détroit de Corfou*, une telle obligation s'entend dans certaines limites :

« Tout en prescrivant ainsi à la Cour de procéder à un examen des conclusions de la Partie comparante, l'article 53 n'a pas pour effet de lui imposer la tâche d'en vérifier l'exactitude dans tous les détails – tâche qui, dans certains cas et en raison de l'absence de contradiction, pourrait s'avérer pratiquement impossible. Il suffit que, par les voies qu'elle estime appropriées, la Cour acquière la conviction que ces conclusions sont fondées. » (*C.I.J. Recueil 1949*, p. 248.)

En l'espèce les Etats-Unis ont fait valoir que, par suite des événements survenus en Iran qui sont à l'origine de leurs demandes, ils n'ont pu prendre contact avec leurs représentants diplomatiques et consulaires ni avoir accès à leurs locaux et à leurs archives diplomatiques et consulaires dans ce pays ; il ne leur a donc pas été possible d'apporter des preuves détaillées de certains faits survenus à partir du 4 novembre 1979. L'absence de données de fait sur le traitement et la condition des personnes détenues en otages à Téhéran a été mentionnée comme exemple. Sur ce point, cependant, les Etats-Unis ont produit, sans indiquer les noms des intéressés, des copies de déclarations sous serment de six des treize otages qui ont été libérés et rapatriés aux Etats-Unis en novembre 1979 après deux semaines de détention.

12. La plupart des faits essentiels de l'affaire sont de notoriété publique et ont été largement évoqués dans la presse mondiale ainsi que dans des émissions de radiodiffusion et de télévision de l'Iran et d'ailleurs. Les



Etats-Unis les ont présentés à la Cour dans leur mémoire, dans les plaidoiries de leur agent et de leur conseil et dans leurs réponses écrites à des questions de membres de la Cour. Les annexes au mémoire comportent de nombreux extraits de déclarations faites par des personnalités iraniennes et américaines, soit au cours de conférences de presse, soit à la radiodiffusion et à la télévision, extraits qui ont été soumis à la Cour à l'appui de la demande en indication de mesures conservatoires ou de l'exposé des faits figurant dans le mémoire. On trouve également dans celui-ci une attestation d'un haut fonctionnaire du département d'Etat des Etats-Unis qui a « la responsabilité globale, dans ce département, des questions relatives à la crise iranienne ». Tout en soulignant que, dans les circonstances de l'espèce, les Etats-Unis ont dû s'appuyer sur les comptes rendus des journaux, de la radiodiffusion et de la télévision pour étayer un certain nombre des faits rapportés dans le mémoire, ce haut fonctionnaire certifie qu'autant qu'il le sache les faits exposés dans le mémoire sont exacts. En outre, après le dépôt du mémoire, les Etats-Unis ont, avec l'autorisation de la Cour, déposé un grand nombre de documents supplémentaires analogues à ceux qui avaient été soumis auparavant, afin de mettre à jour l'information dont disposait la Cour au sujet de la situation persistante caractérisée par l'occupation de l'ambassade et la détention des otages.

13. Il en résulte que la Cour dispose d'une masse de renseignements de sources diverses sur les faits et circonstances de la présente affaire, y compris de nombreuses déclarations officielles des autorités iraniennes et américaines. Pour les nouvelles d'origine iranienne transmises par les journaux, la radiodiffusion et la télévision, la Cour a dû recourir dans certains cas à des traductions en langue anglaise fournies par le demandeur. Les renseignements disponibles sont néanmoins d'une cohérence et d'une concordance totales en ce qui concerne les principaux faits et circonstances de l'affaire. La Cour les a communiqués au Gouvernement de l'Iran, ainsi que le mémoire des Etats-Unis et les comptes rendus d'audiences, sans que ce gouvernement ait opposé la moindre dénégation ou mis en doute les faits allégués par les Etats-Unis devant la Cour. En conséquence la Cour est convaincue qu'au sens de l'article 53 du Statut les allégations de fait sur lesquelles reposent les demandes des Etats-Unis en l'espèce sont fondées.

\* \* \*

14. Avant d'examiner les événements du 4 novembre 1979 directement incriminés par le Gouvernement des Etats-Unis, il convient de mentionner certains autres incidents qui se sont produits auparavant. Le 14 février 1979 vers 10 h 45, pendant la période d'agitation qui a suivi en Iran la chute du gouvernement de M. Bakhtiar, dernier premier ministre nommé par le Chah, un groupe armé a attaqué et pris l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran, faisant prisonnières les soixante-dix personnes qui s'y trouvaient, y compris l'ambassadeur. Deux personnes en rapport avec le personnel de l'ambassade ont été tuées, l'ambassade a été gravement endommagée et la

résidence de l'ambassadeur a souffert de certains actes de pillage. A cette occasion, bien qu'elles n'aient pu empêcher l'irruption des manifestants, les autorités iraniennes ont réagi rapidement quand l'ambassade a demandé, l'attaque étant en cours, qu'on lui vienne en aide d'urgence. Vers midi M. Yazdi, alors vice-premier ministre, est arrivé à l'ambassade en compagnie d'un représentant de la police nationale, d'une autre personnalité et d'un contingent de gardiens de la révolution ; ceux-ci ont mis fin au désordre et remis les lieux en possession des diplomates des Etats-Unis. Le 11 mars 1979, l'ambassadeur des Etats-Unis a reçu une lettre du premier ministre, M. Bazargan, en date du 1<sup>er</sup> mars, où celui-ci exprimait des regrets pour l'attaque de l'ambassade, annonçait que des dispositions avaient été prises pour prévenir la répétition d'incidents semblables et se déclarait disposé à réparer les dommages causés. Des attaques ont aussi eu lieu à la même époque contre les consulats des Etats-Unis à Tabriz et à Chiraz.

15. En octobre 1979 le Gouvernement des Etats-Unis envisageait d'autoriser l'ancien chah d'Iran, qui se trouvait alors au Mexique, à se rendre aux Etats-Unis pour y subir un traitement médical. Les milieux gouvernementaux américains craignaient que, dans le climat politique qui régnait alors en Iran, l'admission de l'ancien Chah n'accroisse la tension existant entre les deux Etats et, entre autres effets, n'entraîne de nouveaux actes de violence contre l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran. Aussi fut-il décidé de demander au Gouvernement de l'Iran l'assurance qu'il accorderait à l'ambassade une protection adéquate. Le 21 octobre 1979, à une réunion à laquelle participaient le premier ministre d'Iran, M. Bazargan, le ministre des affaires étrangères, M. Yazdi, et le chargé d'affaires des Etats-Unis à Téhéran, le Gouvernement de l'Iran a été avisé de la décision de laisser entrer l'ancien Chah aux Etats-Unis et de l'inquiétude du Gouvernement des Etats-Unis quant aux réactions possibles du public à Téhéran. Lorsque le chargé d'affaires des Etats-Unis a demandé à être assuré que l'ambassade et son personnel bénéficieraient de la protection voulue, le ministre des affaires étrangères d'Iran a promis que le Gouvernement de l'Iran remplirait son obligation internationale de protéger l'ambassade. La même demande a été formulée à une nouvelle réunion qui a eu lieu le lendemain, 22 octobre, et le ministre des affaires étrangères a renouvelé ses assurances. L'ancien Chah est arrivé le même jour aux Etats-Unis. Le 30 octobre le Gouvernement de l'Iran, qui avait exprimé à diverses reprises sa ferme opposition à l'admission de l'ancien Chah aux Etats-Unis et avait prié les Etats-Unis de permettre à deux médecins iraniens de vérifier la réalité et la nature de sa maladie, a demandé aux Etats-Unis de faire en sorte qu'il retourne en Iran. Le 31 octobre le commandant de la police nationale iranienne a cependant indiqué au responsable de la sécurité de l'ambassade des Etats-Unis que la police avait reçu pour instructions de veiller à la complète protection du personnel de l'ambassade.

16. Le 1<sup>er</sup> novembre 1979, alors qu'une très grande manifestation se déroulait dans un autre quartier de Téhéran, de nombreux manifestants ont passé et repassé devant l'ambassade des Etats-Unis. Dans le cadre des dispositions de sécurité alors en vigueur, les autorités iraniennes mainte-

naient normalement dix à quinze agents de police en uniforme à l'extérieur de l'enceinte de l'ambassade et un détachement de gardiens de la révolution à proximité. A cette occasion le contingent habituel de police était à son poste à l'extérieur de l'enceinte, et l'ambassade a fait part au département d'Etat de sa certitude de pouvoir obtenir une protection accrue s'il en était besoin. Le chef de la police s'est rendu en personne à l'ambassade et y a rencontré le chargé d'affaires, lequel a informé Washington que ce fonctionnaire « prenait son travail de protection de l'ambassade très au sérieux ». Des appels ont été lancés par la radiodiffusion et par la personnalité qui dirigeait la prière à la manifestation principale en cours dans un autre quartier, afin que la population ne se porte pas vers l'ambassade. Pendant la journée, le nombre des manifestants devant l'ambassade s'est situé autour de cinq mille, mais les forces iraniennes de sécurité n'ont pas relâché leur protection. Le même soir, au moment où la foule se dispersait, le chef du protocole et le chef de la police iraniens ont dit au chargé d'affaires combien ils étaient soulagés que tout se fût bien passé.

17. Le 4 novembre 1979 vers 10 h 30 du matin, au cours d'une manifestation de quelque trois mille personnes, un fort groupe armé de plusieurs centaines de personnes a fait irruption dans l'enceinte de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran. Les forces de sécurité iraniennes – a-t-on dit – ont purement et simplement disparu ; il est certain en tout cas qu'elles n'ont apparemment rien fait pour décourager les manifestants ou pour les empêcher de s'emparer des locaux de l'ambassade. Le groupe des envahisseurs (qui se sont qualifiés eux-mêmes depuis lors d'« étudiants musulmans partisans de la politique de l'imam » et qui seront appelés ci-après *les militants*) s'est introduit par la force dans l'enceinte, puis au rez-de-chaussée de la chancellerie. Plus de deux heures après le début de l'attaque, après avoir essayé de mettre le feu à la chancellerie et de découper au chalumeau les portes d'acier de l'étage supérieur, les militants ont réussi à envahir celui-ci ; une heure plus tard la chambre forte principale est tombée en leur pouvoir. Les militants se sont aussi emparés des autres bâtiments sis dans l'enceinte, y compris les différentes résidences. Au cours de l'attaque tous les membres du personnel diplomatique et consulaire ainsi que les autres personnes qui se trouvaient sur les lieux ont été pris en otages et détenus dans l'enceinte de l'ambassade ; plus tard des membres du personnel, ainsi qu'un autre ressortissant des Etats-Unis, capturés ailleurs dans Téhéran, ont été amenés à l'ambassade et réunis aux otages.

18. Pendant les trois heures ou plus que cette attaque a duré, des appels à l'aide répétés ont été adressés de l'ambassade au ministère des affaires étrangères d'Iran et le chargé d'affaires des Etats-Unis, qui se trouvait alors au ministère des affaires étrangères avec deux autres membres de la mission, s'est aussi efforcé à plusieurs reprises, par des conversations directes, d'obtenir l'assistance des autorités iraniennes. Du ministère, il a pris contact avec le cabinet du premier ministre et avec des fonctionnaires des affaires étrangères. Il a également été demandé au chargé d'affaires d'Iran à Washington d'apporter son aide pour que cesse l'occupation de l'am-

bassade. Malgré ces demandes réitérées, aucune force de sécurité iranienne n'a été dépêchée à temps pour prêter secours et protection à l'ambassade. En fait, lorsque des gardiens de la révolution, envoyés par le gouvernement pour « empêcher des affrontements », sont finalement arrivés sur les lieux, ils ont estimé que leur seul rôle était de « protéger la sécurité des otages et des étudiants », ainsi qu'il ressort des déclarations ultérieures du porte-parole du Gouvernement de l'Iran et d'un commandant des gardiens. Le Gouvernement de l'Iran n'a rien fait pour dégager les locaux de l'ambassade, pour délivrer les personnes prises en otages, ni pour persuader les militants de mettre fin à l'action contre l'ambassade.

19. Le matin du 5 novembre, quelques heures seulement après la chute de l'ambassade, les consulats des Etats-Unis à Tabriz et à Chiraz étaient occupés à leur tour ; là encore le Gouvernement de l'Iran n'a pris aucune mesure de protection. Ces consulats ayant suspendu toute activité depuis l'attaque de février 1979 (paragraphe 14 ci-dessus), aucun fonctionnaire des Etats-Unis n'y a été capturé.

20. La mission diplomatique et les postes consulaires des Etats-Unis en Iran n'ont pas été les seuls à être visés par des manifestations au cours de la période révolutionnaire dans ce pays. Le 5 novembre 1979 un groupe a envahi l'ambassade du Royaume-Uni, mais en a été chassé après une brève occupation. Le 6 novembre 1979 le consulat d'Irak à Kermanschah a été temporairement occupé, mais il a été évacué sur l'ordre de l'ayatollah Khomeini ; ses locaux et les biens qui s'y trouvaient n'ont subi aucun dommage. Le 1<sup>er</sup> janvier 1980 l'ambassade de l'URSS à Téhéran a été attaquée par une foule nombreuse mais, grâce à la protection fournie par les autorités iraniennes, elle n'a pas subi de dommage important.

21. Les locaux de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran sont toujours aux mains des militants et il semble en aller de même pour les consulats de Tabriz et de Chiraz. Sur le nombre total de citoyens américains capturés et retenus en otages, treize ont été libérés les 18-20 novembre 1979, mais les autres sont encore détenus à ce jour. Les treize otages libérés l'ont été à la suite d'une décision du 17 novembre 1979, par laquelle l'ayatollah Khomeini invitait les militants à « remettre au ministère des affaires étrangères les Noirs et les femmes, s'il est prouvé qu'ils n'ont pas eu d'activité d'espionnage, afin qu'ils soient immédiatement expulsés d'Iran ».

22. D'après les renseignements que les Etats-Unis ont fournis à la Cour, les otages encore détenus en Iran comprennent au moins vingt-huit personnes ayant la qualité dûment reconnue par le Gouvernement de l'Iran de « membres du personnel diplomatique » au sens de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, au moins vingt ayant la qualité également reconnue de « membres du personnel administratif et technique » au sens de cette convention et deux autres ressortissants des Etats-Unis n'ayant ni statut diplomatique ni statut consulaire. Quatre des personnes qui ont la qualité de membres du personnel diplomatique appartiennent à la section consulaire de la mission.

23. Le Gouvernement des Etats-Unis a allégué que des otages ont subi des traitements inhumains ; les militants et les autorités iraniennes ont affirmé que les otages sont bien traités et ont autorisé des visites spéciales de personnalités religieuses et de représentants du Comité international de la Croix-Rouge. Toutefois les allégations précises de mauvais traitements n'ont pas été réfutées. Comme exemples des faits ainsi allégués, mentionnés dans certaines des déclarations sous serment d'otages libérés en novembre 1979, on peut citer ce qui suit : au début de l'occupation de l'ambassade, des otages ont été promenés, mains liées et yeux bandés, devant des foules hostiles et scandant des slogans ; pendant la période initiale de leur captivité au moins, des otages ont été attachés et on leur a souvent bandé les yeux, ils ont été privés de courrier et de toute communication avec leur gouvernement ou entre eux, soumis à des interrogatoires, menacés avec des armes.

24. Les archives et documents de l'ambassade des Etats-Unis qui n'ont pas été détruits par le personnel pendant l'attaque du 4 novembre ont été pillés par les militants. Des documents présentés comme en faisant partie ont été divulgués par eux ainsi que par les médias sous contrôle du gouvernement.

25. Le chargé d'affaires des Etats-Unis à Téhéran et les deux autres membres du personnel diplomatique de l'ambassade qui se trouvaient dans les locaux du ministère des affaires étrangères d'Iran au moment de l'attaque ne les ont pas quittés depuis lors ; leur situation exacte au ministère a donné lieu à des déclarations contradictoires. Le 7 novembre 1979 le ministère des affaires étrangères d'Iran a annoncé que, « comme la protection des étrangers est du devoir du Gouvernement de l'Iran », le chargé d'affaires « restait » dans ses locaux. Le 1<sup>er</sup> décembre 1979 M. Sadegh Ghotbzadeh, devenu entre-temps ministre des affaires étrangères, déclarait :

« il a été annoncé que, si le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis et ses deux compagnons, qui ont cherché asile au ministère des affaires étrangères d'Iran, quittaient ce ministère, le ministère n'assumerait aucune responsabilité à leur sujet ».

Selon un article de journal du 4 décembre, le ministre des affaires étrangères a complété cette déclaration en disant que, tant qu'ils seraient au ministère, il s'engageait personnellement à ce que rien ne leur arrive, mais que « dès qu'ils quitteront l'enceinte du ministère, ils retomberont entre les mains de la justice et je serai alors le premier à demander qu'on les arrête et qu'on les juge ». Les militants ont proclamé qu'ils considéraient aussi le chargé d'affaires et ses deux collègues comme des otages. Lorsqu'en mars 1980 le procureur général de la révolution islamique d'Iran a demandé que l'un des trois diplomates lui soit livré, le ministre des affaires étrangères a annoncé :

« Quant au sort à réserver aux trois Américains qui se trouvent au ministère des affaires étrangères, la décision dépend tout d'abord de l'imam de la nation [c'est-à-dire de l'ayatollah Khomeini] ; au cas où

celui-ci ne prendrait pas de décision ferme à ce sujet, c'est le conseil de la révolution qui trancherait la question. »

26. Dès le début de l'attaque contre leur ambassade à Téhéran, les Etats-Unis ont protesté auprès du Gouvernement de l'Iran aussi bien contre l'attaque elle-même que contre la capture et la détention des otages. Le 7 novembre M. Ramsey Clark, ancien *Attorney-General* des Etats-Unis, a été désigné pour se rendre en Iran avec un collaborateur afin de remettre à l'ayatollah Khomeini un message du président des Etats-Unis. Le demandeur n'a pas communiqué à la Cour le texte de ce message, mais il lui a fait connaître que le Gouvernement des Etats-Unis y protestait contre le comportement du Gouvernement de l'Iran et demandait la libération des otages et que M. Clark était en outre autorisé à discuter toutes les possibilités de résolution de la crise. Alors que M. Clark était en route, la radiodiffusion de Téhéran a transmis un message du 7 novembre de l'ayatollah Khomeini, qui interdisait formellement aux membres du conseil de la révolution et aux personnalités responsables de rencontrer les représentants des Etats-Unis. Il était indiqué dans ce message que « l'ambassade des Etats-Unis en Iran est le centre d'espionnage de nos ennemis contre notre mouvement islamique sacré » et que :

« Si les Etats-Unis remettaient à l'Iran le Chah déposé ... et abandonnaient l'espionnage contre notre mouvement, la voie des pourparlers serait ouverte sur la question de certaines relations qui sont dans l'intérêt de la nation. »

Ultérieurement, en dépit des efforts faits par le Gouvernement des Etats-Unis pour entamer des négociations, il est apparu clairement que les autorités iraniennes entendaient n'avoir aucun contact direct avec les représentants du Gouvernement des Etats-Unis au sujet de la détention des otages.

27. Au cours de la période écoulée depuis la prise de l'ambassade, diverses personnalités gouvernementales iraniennes ont fait un certain nombre de déclarations pertinentes pour l'examen par la Cour des responsabilités attribuées au Gouvernement de l'Iran dans les conclusions des Etats-Unis. La Cour en traitera dans le cadre de l'étude de ces conclusions (paragraphe 59 et 70-74 ci-après).

\* \*

28. Le 9 novembre 1979 le représentant permanent des Etats-Unis aux Nations Unies a adressé une lettre au Président du Conseil de sécurité pour demander que soit examiné d'urgence ce qui pourrait être fait afin que les otages soient relâchés et que soit rétablie « l'inviolabilité du personnel et des locaux diplomatiques ». Le même jour le Président du Conseil de sécurité a fait une déclaration publique demandant la libération des otages et le Président de l'Assemblée générale a annoncé qu'il envoyait personnellement un appel en ce sens à l'ayatollah Khomeini. Le 25 novembre

1979 le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a adressé une lettre au Président du Conseil de sécurité, où il évoquait la prise de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran et la détention de son personnel diplomatique et demandait que le Conseil se réunisse d'urgence « en vue de rechercher une solution pacifique du problème ». Le Conseil de sécurité s'est réuni les 27 novembre et 4 décembre 1979 ; à cette dernière date, aucun représentant de l'Iran n'était présent, mais le Conseil a pris note d'une lettre du 13 novembre 1979 du responsable du ministère des affaires étrangères d'Iran au Secrétaire général. Le Conseil de sécurité a alors adopté la résolution 457 (1979), demandant à l'Iran de libérer immédiatement le personnel de l'ambassade, d'assurer sa protection et de lui permettre de quitter le pays. La résolution demandait en outre aux deux gouvernements de prendre des mesures pour régler pacifiquement les questions qui restaient à résoudre entre eux et priait le Secrétaire général de prêter ses bons offices pour l'application immédiate de la résolution et de prendre toutes les mesures appropriées à cette fin. Elle décidait aussi que le Conseil resterait « activement saisi de la question » et priait le Secrétaire général de lui faire rapport d'urgence sur les résultats de ses efforts.

29. Le 31 décembre 1979 le Conseil de sécurité a tenu une nouvelle réunion et adopté la résolution 461 (1979), dans laquelle il réitérait ses appels au Gouvernement de l'Iran et priait de nouveau le Secrétaire général de prêter ses bons offices pour réaliser les objectifs de sa résolution. Le Secrétaire général s'est rendu à Téhéran du 1<sup>er</sup> au 3 janvier 1980 et a fait rapport au Conseil de sécurité le 6 janvier. Le 20 février 1980 il a annoncé la création d'une commission chargée d'entreprendre « une mission d'établissement des faits » en Iran. La Cour reviendra sur le mandat de cette commission et le déroulement de ses travaux à propos de la recevabilité de l'instance (paragraphe 39-40 ci-après).

\* \*

30. Avant l'introduction de la présente instance et en plus de son appel au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Gouvernement des Etats-Unis a adopté certaines mesures unilatérales en réponse aux actes dont il tenait le Gouvernement de l'Iran pour responsable. Le 10 novembre 1979 des dispositions ont été prises pour recenser tous les étudiants iraniens qui se trouvaient aux Etats-Unis dans des conditions non conformes à leur visa d'entrée et pour entamer une procédure d'expulsion contre ceux qui auraient contrevenu aux lois et règlements d'immigration. Le 12 novembre 1979 le président des Etats-Unis a ordonné de mettre fin aux achats de pétrole iranien destinés aux Etats-Unis. Pensant que le Gouvernement de l'Iran allait retirer tous les fonds iraniens des banques américaines, refuser d'accepter le règlement en dollars des livraisons de pétrole et répudier ses obligations financières envers les Etats-Unis et leurs ressortissants, le Président a fait bloquer le 14 novembre 1979 les très importants avoirs officiels iraniens sous contrôle des Etats-Unis, y compris les dépôts dans

des banques aux Etats-Unis et dans des succursales et filiales étrangères de banques américaines. Le 12 décembre 1979, après l'introduction de la présente instance, les Etats-Unis ont informé le chargé d'affaires d'Iran à Washington que le nombre des fonctionnaires affectés à l'ambassade et aux postes consulaires iraniens aux Etats-Unis devrait être réduit.

31. Après que la Cour eut indiqué des mesures conservatoires et pendant la présente instance, le Gouvernement des Etats-Unis a adopté d'autres mesures. Un projet de résolution prescrivant des sanctions économiques contre l'Iran a été soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Lorsqu'il a été mis aux voix le 13 janvier 1980, dix membres ont voté pour, deux contre et deux se sont abstenus (un membre n'ayant pas participé au vote) ; un membre permanent du Conseil ayant voté contre, le projet de résolution n'a pas été adopté. Le 7 avril 1980 le Gouvernement des Etats-Unis a rompu les relations diplomatiques avec le Gouvernement de l'Iran. En même temps il a prohibé les exportations des Etats-Unis vers l'Iran, ce qui était l'une des sanctions qu'il avait antérieurement proposées au Conseil de sécurité. Des mesures ont été prises pour faire l'inventaire des avoirs du Gouvernement de l'Iran bloqués le 14 novembre 1979 et dresser la liste des réclamations de ressortissants des Etats-Unis contre le Gouvernement de l'Iran, en vue de « mettre au point un plan d'action contre l'Iran au profit des otages, de leurs familles et des autres réclamants américains » qui comporte la préparation d'une législation destinée à « faciliter l'examen et le règlement de ces réclamations » ; en outre tous les visas délivrés à des citoyens iraniens pour entrée ultérieure aux Etats-Unis ont été annulés. Le 17 avril 1980 le Gouvernement des Etats-Unis a annoncé l'adoption de nouvelles mesures économiques contre l'Iran ; il a interdit aux ressortissants des Etats-Unis de se rendre dans ce pays et a pris de nouvelles dispositions pour que les otages et leurs familles puissent être indemnisés au moyen des avoirs iraniens bloqués.

32. Dans la nuit du 24 au 25 avril 1980, le président des Etats-Unis a déclenché, puis fait cesser pour des raisons techniques, une opération en territoire iranien visant à faire délivrer les otages par des unités militaires des Etats-Unis. Dans une déclaration du 25 avril le président Carter a expliqué que l'opération avait été préparée de longue date en tant que mission humanitaire de délivrance des otages et qu'il l'avait finalement ordonnée parce qu'à son avis la situation en Iran comportait des dangers croissants pour la sécurité des otages et que leur libération à une date rapprochée était tout à fait improbable. Le Président indiquait que l'opération était en cours en Iran lorsque des défaillances du matériel avaient obligé à y mettre fin et que, pendant le repli des forces de sauvetage, deux aéronefs des Etats-Unis étaient entrés en collision en un lieu désertique reculé de l'Iran. Il ajoutait que l'ordre de préparer cette opération de sauvetage avait été donné pour des raisons humanitaires, afin de protéger les intérêts nationaux des Etats-Unis et afin d'atténuer les tensions internationales. Il disait enfin que l'opération n'était inspirée par aucun sentiment d'hostilité contre l'Iran ou le peuple iranien. Les textes de la



déclaration du président Carter et de certains autres documents officiels relatifs à l'opération ont été transmis par l'agent des Etats-Unis à la Cour en réponse à une demande faite par le Président de la Cour le 25 avril. Parmi ces documents figure le texte d'un rapport adressé par les Etats-Unis au Conseil de sécurité le 25 avril « en application de l'article 51 de la Charte des Nations Unies ». Dans ce rapport, les Etats-Unis affirmaient qu'ils avaient entrepris la mission « dans l'exercice de leur droit naturel de légitime défense, en vue de sauver les ressortissants américains qui ont été et demeurent les victimes de l'attaque armée iranienne contre notre ambassade ». La Cour reviendra sur cette opération plus loin dans le présent arrêt (paragraphe 93-94 ci-après).

\* \* \*

33. Il est regrettable que le Gouvernement de l'Iran ne se soit pas présenté devant la Cour pour développer ses arguments sur les questions de droit et de fait qui se posent en l'espèce et qu'en conséquence la Cour n'ait pas eu l'aide que l'exposé de ces arguments et toute preuve présentée à l'appui auraient pu lui apporter. Néanmoins, lorsqu'elle applique l'article 53 du Statut, la Cour doit, en vertu d'une jurisprudence constante, commencer par examiner d'office toute question préliminaire de recevabilité ou de compétence que paraissent soulever en l'espèce les renseignements à sa disposition et dont le règlement pourrait faire obstacle à la poursuite de l'examen au fond des thèses du demandeur. En conséquence la Cour examinera d'abord les considérations avancées par le Gouvernement de l'Iran dans ses lettres du 9 décembre 1979 et du 16 mars 1980 pour faire valoir que la Cour ne doit pas connaître de la présente affaire.

34. Dans sa lettre du 9 décembre 1979 le Gouvernement de l'Iran a attiré l'attention sur ce qu'il a appelé « les racines profondes et l'essence même de la révolution islamique de l'Iran, révolution de toute une nation opprimée contre les oppresseurs et leurs maîtres ». Il ajoutait que l'examen des « multiples répercussions » de la révolution « relève essentiellement et directement de la souveraineté nationale de l'Iran ». Toutefois, comme la Cour l'a souligné dans son ordonnance du 15 décembre 1979 :

« un différend concernant des locaux diplomatiques et consulaires et la détention de personnes internationalement protégées et mettant en jeu l'interprétation ou l'application de conventions multilatérales qui codifient le droit international en matière de relations diplomatiques et consulaires relève, par sa nature même, de la juridiction internationale » (*C.I.J. Recueil 1979*, p. 16, par. 25).

Dans sa lettre ultérieure du 16 mars 1980 le Gouvernement de l'Iran s'est borné à répéter ce qu'il avait écrit à ce propos le 9 décembre 1979 sans présenter d'arguments ni d'explications complémentaires. Dans ces conditions la Cour considère qu'il lui suffit de rappeler et confirmer ce qu'elle avait énoncé à ce sujet dans son ordonnance du 15 décembre 1979.

35. Dans sa lettre du 9 décembre 1979 le Gouvernement de l'Iran a invoqué un autre motif selon lequel la Cour ne pouvait ni ne devait d'après lui se saisir de la présente espèce, à savoir que l'affaire soumise par les Etats-Unis est « limitée à la soi-disant question des « otages de l'ambassade américaine à Téhéran ». Il expliquait ensuite en quoi, à son avis, cette circonstance empêchait la Cour de connaître de l'affaire :

« Cette question en effet ne représente qu'un élément marginal et secondaire d'un problème d'ensemble dont elle ne saurait être étudiée séparément et qui englobe entre autres plus de vingt-cinq ans d'ingérences continuelles par les Etats-Unis dans les affaires intérieures de l'Iran, d'exploitation éhontée de notre pays et de multiples crimes perpétrés contre le peuple iranien, envers et contre toutes les normes internationales et humanitaires.

Le problème en cause dans le conflit existant entre l'Iran et les Etats-Unis ne tient donc pas de l'interprétation et de l'application des traités sur lesquels se base la requête américaine, mais découle d'une situation d'ensemble comprenant des éléments beaucoup plus fondamentaux et plus complexes. En conséquence, la Cour ne peut examiner la requête américaine en dehors de son vrai contexte, à savoir l'ensemble du dossier politique des relations entre l'Iran et les Etats-Unis au cours de ces vingt-cinq dernières années. Ce dossier comprend entre autres tous les crimes perpétrés en Iran par le Gouvernement américain, en particulier le coup d'Etat de 1953 fomenté et exécuté par la CIA, l'éviction du gouvernement national légitime du docteur Mossadegh, la remise en place du Chah et de son régime asservi aux intérêts américains et toutes les conséquences sociales, économiques, culturelles et politiques des interventions directes dans nos affaires intérieures, ainsi que des violations graves, flagrantes et perpétuelles de toutes les normes internationales perpétrées par les Etats-Unis en Iran. »

36. Dans son ordonnance du 15 décembre 1979 la Cour a néanmoins souligné que l'invasion de l'ambassade et des consulats des Etats-Unis et la prise en otages de personnes internationalement protégées ne sauraient, en raison de l'importance des principes juridiques en cause, être considérées comme ayant un caractère « secondaire » ou « marginal ». Elle a fait également état d'une déclaration du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de la résolution 457 (1979) du Conseil de sécurité comme attestant l'importance que la communauté internationale dans son ensemble attache au respect desdits principes en l'espèce et la préoccupation que lui inspire le niveau dangereux de la tension entre l'Iran et les Etats-Unis. La Cour a souligné en outre qu'aucune disposition du Statut ou du Règlement ne lui interdit de se saisir d'un aspect d'un différend pour la simple raison que ce différend comporterait d'autres aspects, si importants soient-ils. Elle a souligné enfin que, si le Gouvernement de l'Iran estimait que les activités alléguées des Etats-Unis en Iran sont en rapport

juridique étroit avec l'objet de la requête des Etats-Unis, il lui était loisible de développer à ce sujet sa propre argumentation devant la Cour, soit comme moyen de défense dans un contre-mémoire soit par la voie d'une demande reconventionnelle.

37. En dépit des termes de l'ordonnance de la Cour, le Gouvernement de l'Iran n'a déposé aucune pièce de procédure et n'a pas comparu. Il s'est donc volontairement privé de la possibilité que lui offraient le Statut et le Règlement de soumettre des preuves et des arguments à l'appui de ses thèses sur le « problème d'ensemble ». Même dans sa dernière lettre du 16 mars 1980, il s'est borné à réitérer ce qu'il avait affirmé le 9 décembre 1979, sans rien dire des points sur lesquels la Cour avait appelé son attention dans l'ordonnance du 15 décembre 1979. Il n'a pas exposé les raisons pour lesquelles, selon lui, les violations du droit diplomatique et consulaire alléguées dans la requête des Etats-Unis ne sauraient être examinées par la Cour indépendamment de ce qu'il appelle un « problème d'ensemble » englobant « plus de vingt-cinq ans d'ingérences continues par les Etats-Unis dans les affaires intérieures de l'Iran ». Il n'a pas non plus essayé d'expliquer, et encore moins de définir, quel pouvait être en droit ou en fait le rapport entre le « problème d'ensemble » de ses griefs généraux contre les Etats-Unis et les événements particuliers qui sont à l'origine des réclamations des Etats-Unis en l'espèce, rapport qui, d'après lui, empêcherait la Cour d'examiner indépendamment ces réclamations. Des explications sur ces différents points auraient été d'autant plus nécessaires que les différends juridiques entre Etats souverains ont, par leur nature même, toutes chances de surgir dans des contextes politiques et ne représentent souvent qu'un élément d'un différend politique plus vaste et existant de longue date entre les Etats concernés. Nul n'a cependant jamais prétendu que, parce qu'un différend juridique soumis à la Cour ne constitue qu'un aspect d'un différend politique, la Cour doit se refuser à résoudre dans l'intérêt des parties les questions juridiques qui les opposent. La Charte et le Statut ne fournissent aucun fondement à cette conception des fonctions ou de la juridiction de la Cour ; si la Cour, contrairement à sa jurisprudence constante, acceptait une telle conception, il en résulterait une restriction considérable et injustifiée de son rôle en matière de règlement pacifique des différends internationaux.

38. Il s'ensuit que les considérations et arguments présentés dans les lettres du Gouvernement de l'Iran en date des 9 décembre 1979 et 16 mars 1980 ne font apparaître aucun motif qui obligerait la Cour à conclure qu'elle ne peut ni ne doit se saisir de la présente espèce.

\* \*

39. La Cour a aussi jugé opportun de rechercher d'office si la constitution de la commission annoncée le 20 février 1980 par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avait pu avoir une incidence sur sa compétence pour se prononcer en l'espèce ou sur la recevabilité de

l'instance. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la question de l'occupation de l'ambassade et de la détention en otages de membres de son personnel diplomatique et consulaire a été portée devant le Conseil de sécurité, par les Etats-Unis le 9 novembre 1979 et par le Secrétaire général le 25 novembre. Quatre jours plus tard, alors que la question était à l'examen devant le Conseil, les Etats-Unis ont saisi la Cour de la présente requête ainsi que d'une demande en indication de mesures conservatoires. Le 4 décembre, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 457 (1979) dont les termes ont déjà été indiqués (paragraphe 28 ci-dessus). Celle-ci précisait notamment que le Conseil resterait « activement saisi de la question » et demandait au Secrétaire général de lui faire rapport d'urgence sur les résultats des efforts qu'il entreprendrait conformément à ladite résolution. En faisant connaître la constitution de la commission le 20 février 1980, le Secrétaire général a déclaré que son mandat consistait à « entreprendre une mission d'établissement des faits en Iran en vue d'entendre les griefs de l'Iran et de permettre une solution rapide de la crise entre l'Iran et les Etats-Unis ». Il a ajouté que la commission terminerait ses travaux aussitôt que possible et lui présenterait un rapport. Le 15 mars 1980, dans un message adressé au Président de la Cour, le Secrétaire général a confirmé que le mandat de la commission était celui qu'il avait annoncé le 20 février et a précisé que les Gouvernements de l'Iran et des Etats-Unis avaient « accepté la constitution de la commission sur cette base ». Dans ce message le Secrétaire général informait aussi la Cour que la commission avait décidé de suspendre son activité à Téhéran et de rentrer à New York le 11 mars 1980 « pour conférer avec le Secrétaire général en vue de poursuivre ses tâches, qu'elle considère indivisibles ». Il faisait en outre savoir à la Cour que, vu les circonstances, la commission n'était pas en mesure de présenter un rapport, mais qu'elle était disposée à retourner à Téhéran conformément à son mandat et aux instructions du Secrétaire général quand la situation l'exigerait. Le message indiquait enfin que le Secrétaire général poursuivrait ses efforts, comme le Conseil de sécurité le lui avait demandé, pour rechercher une solution pacifique de la crise et qu'il resterait en contact avec les parties et avec la commission au sujet de la reprise de sa tâche.

40. En conséquence il ne fait aucun doute que le Conseil de sécurité était « activement saisi de la question » et qu'il avait donné expressément mandat au Secrétaire général de prêter ses bons offices lorsque, le 15 décembre 1979, la Cour a décidé à l'unanimité qu'elle avait compétence pour connaître de la demande en indication de mesures conservatoires des Etats-Unis et a indiqué de telles mesures. Comme il a déjà été signalé, le Conseil s'est réuni de nouveau le 31 décembre 1979 et a adopté la résolution 461 (1979). Dans le préambule de cette seconde résolution, le Conseil de sécurité tenait expressément compte de l'ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires du 15 décembre 1979 ; il ne semble être venu à l'esprit d'aucun membre du Conseil qu'il y eût ou pût y avoir rien d'irrégulier dans l'exercice simultané par la Cour et par le Conseil de sécurité de leurs fonctions respectives. Le fait n'est d'ailleurs pas surpre-

nant. Alors que l'article 12 de la Charte interdit expressément à l'Assemblée générale de faire une recommandation au sujet d'un différend ou d'une situation à l'égard desquels le Conseil remplit ses fonctions, ni la Charte ni le Statut n'apportent de restriction semblable à l'exercice des fonctions de la Cour. Les raisons en sont évidentes : c'est à la Cour, organe judiciaire principal des Nations Unies, qu'il appartient de résoudre toute question juridique pouvant opposer des parties à un différend ; et la résolution de ces questions juridiques par la Cour peut jouer un rôle important et parfois déterminant dans le règlement pacifique du différend. C'est d'ailleurs ce que reconnaît l'article 36, paragraphe 3, de la Charte, qui prévoit expressément :

« En faisant les recommandations prévues au présent article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour. »

41. En l'occurrence l'instance devant la Cour s'est poursuivie conformément au Statut et au Règlement et, le 15 janvier 1980, les Etats-Unis ont déposé leur mémoire. Le délai fixé pour la présentation du contre-mémoire iranien a expiré le 18 février 1980 sans que l'Iran eût déposé un contre-mémoire ni demandé une prorogation de délai. En conséquence l'affaire s'est trouvée en état le lendemain et, en application de l'article 31 du Règlement, l'Etat demandeur a été consulté au sujet de la date d'ouverture de la procédure orale. Le 19 février 1980 l'agent des Etats-Unis a fait connaître à la Cour que, en raison du stade délicat où en étaient certaines négociations touchant à la libération des otages de l'ambassade des Etats-Unis, il lui saurait gré de bien vouloir différer pour le moment la fixation de la date d'ouverture des audiences. Le lendemain, 20 février, le Secrétaire général a annoncé la constitution de la commission mentionnée plus haut, qui a entamé ses travaux à Téhéran le 23 février. Prié le 27 février de préciser l'attitude des Etats-Unis à l'égard de la suite de la procédure, l'agent a déclaré que la commission ne s'occuperait pas des demandes soumises par les Etats-Unis à la Cour. Les Etats-Unis, disait-il, tenaient toujours à aboutir rapidement à une décision sur le fond et il suggérait le 17 mars comme date pouvant convenir pour l'ouverture des audiences. Il ajoutait cependant que la préoccupation que leur inspirait le sort des otages pourrait conduire les Etats-Unis à suggérer une date ultérieure. Le Gouvernement de l'Iran a alors été prié, par message télex du 28 février, de faire connaître les vues qu'il pourrait souhaiter exprimer sur la date de l'ouverture des audiences, le 17 mars étant mentionné comme une date possible. Aucune réponse du Gouvernement de l'Iran n'était parvenue à la Cour le 10 mars, date à laquelle la commission, ne pouvant mener à bien sa mission, a décidé de suspendre son activité à Téhéran et de rentrer à New York.

42. Le 11 mars, c'est-à-dire immédiatement après le départ de la com-

mission de Téhéran, les Etats-Unis ont informé la Cour qu'ils étaient prêts à plaider et ont suggéré que les audiences commencent le 17 mars. Un nouveau message télex a été expédié le 12 mars au Gouvernement de l'Iran pour l'informer de la demande des Etats-Unis et pour indiquer que la Cour se réunirait le 17 mars en vue d'arrêter la suite de la procédure. Le Gouvernement de l'Iran a répondu par une lettre du 16 mars déjà citée par la Cour (paragraphe 10 ci-dessus), où, sans toucher mot de la procédure orale, il réitérait les raisons qu'il avait avancées dans sa lettre précédente du 9 décembre 1979 pour soutenir que la Cour ne devait pas connaître de l'affaire. Il ne faisait aucune allusion à la commission, et pas davantage à l'idée que l'existence de celle-ci ou le mandat confié par le Conseil de sécurité au Secrétaire général puissent influencer sur la poursuite de l'instance. Dans les circonstances ainsi évoquées la Cour ne découvre aucun élément faisant apparaître que les Etats-Unis ou l'Iran aient cru comprendre que la constitution de la commission pouvait entraîner la suspension de toute procédure devant la Cour aussi longtemps que les travaux de la commission et l'examen de la question par le Conseil de sécurité n'auraient pas abouti.

43. Comme on l'a vu précédemment, la commission a été créée pour entreprendre « une mission d'établissement des faits en Iran en vue d'entendre les griefs de l'Iran et de *permettre* une solution rapide de la *crise* entre l'Iran et les Etats-Unis » (les italiques sont de la Cour). Elle n'a pas été créée par le Secrétaire général en tant que tribunal chargé de se prononcer sur les questions de fait ou de droit en litige entre l'Iran et les Etats-Unis ; ces deux Etats n'ont d'ailleurs pas accepté sa constitution sur une telle base. Au contraire, le Secrétaire général a créé la commission comme étant un organe ou un instrument de médiation, de conciliation ou de négociation, en vue d'atténuer la crise entre les deux pays ; et c'est là, de toute évidence, la base sur laquelle l'Iran et les Etats-Unis ont consenti à son établissement. La constitution de la commission par le Secrétaire général avec l'accord des deux Etats ne saurait donc en aucune façon être considérée comme incompatible en elle-même avec la poursuite d'une procédure parallèle devant la Cour. La négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage et le règlement judiciaire sont énumérés ensemble à l'article 33 de la Charte comme moyens de règlement pacifique des différends. Ainsi qu'il a été souligné dans l'affaire du *Plateau continental de la mer Egée*, la jurisprudence de la Cour fournit plusieurs exemples d'affaires dans lesquelles négociation et règlement judiciaire se sont poursuivis en même temps. Dans ladite affaire, où le Conseil de sécurité était également saisi du différend, la Cour a conclu expressément que « le fait que des négociations se poursuivent activement pendant la procédure actuelle ne constitue pas, en droit, un obstacle à l'exercice par la Cour de sa fonction judiciaire » (*C.I.J. Recueil 1978*, p. 12, par. 29).

44. Il s'ensuit que ni le mandat donné par le Conseil de sécurité au Secrétaire général dans les résolutions 457 et 461 de 1979, ni la constitution de la commission par le Secrétaire général ne sauraient être considérés

comme des obstacles à l'exercice de la juridiction de la Cour en l'espèce. La Cour doit donc maintenant examiner, conformément à l'article 53, paragraphe 2, du Statut, si elle a compétence pour se prononcer en l'espèce et si les conclusions des Etats-Unis sont fondées en fait et en droit.

\* \* \*

45. En vertu de l'article 53 du Statut, la Cour doit, avant d'adjuger à un demandeur ses conclusions, s'assurer qu'elle possède la compétence nécessaire aux termes des articles 36 et 37. En la présente espèce, les principales demandes des Etats-Unis se rapportent essentiellement au fait que l'Iran aurait manqué aux obligations dont il est tenu à l'égard des Etats-Unis en vertu des conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de 1963 sur les relations consulaires. Les Etats-Unis ont invoqué comme base de la compétence de la Cour pour connaître de ces demandes l'article I du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends qui accompagne chacune de ces conventions. La publication des Nations Unies intitulée *Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général remplit les fonctions de dépositaire* cite l'Iran et les Etats-Unis comme parties aux deux conventions susmentionnées et à leurs protocoles respectifs concernant le règlement obligatoire des différends, sans que, dans chaque cas, l'instrument visé ait fait de leur part l'objet de réserves. Les conventions de Vienne, qui codifient le droit des relations diplomatiques et consulaires, énoncent les principes et règles indispensables au maintien de relations pacifiques entre Etats et acceptés dans le monde entier par des nations de toutes croyances, cultures et appartenances politiques. Qui plus est, le Gouvernement de l'Iran n'a pas soutenu dans ses communications à la Cour que les deux conventions et protocoles de Vienne ne sont pas en vigueur entre l'Iran et les Etats-Unis. Par conséquent, ainsi qu'il était indiqué dans l'ordonnance de la Cour du 15 décembre 1979, les protocoles facultatifs fournissent manifestement une base sur laquelle la compétence de la Cour pour connaître des demandes présentées par les Etats-Unis en vertu des conventions de Vienne de 1961 et de 1963 pourrait être fondée. Il reste à examiner si le présent différend relève effectivement de leurs dispositions.

46. Le texte de l'article I, qui est le même dans les deux protocoles, est ainsi rédigé :

« Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même Partie au présent Protocole. »

Les demandes des Etats-Unis présentement en cause visent des violations qu'aurait commises l'Iran des obligations résultant de plusieurs articles des conventions de Vienne de 1961 et de 1963 et ayant trait aux privilèges et

immunités du personnel de l'ambassade et des consulats des Etats-Unis en Iran, à l'inviolabilité de leurs locaux et de leurs archives et à l'octroi de facilités pour l'accomplissement de leurs fonctions. Dans la mesure où ces demandes concernent deux simples ressortissants des Etats-Unis détenus en otages à l'ambassade, la situation de ces personnes relève également des dispositions de la convention de Vienne de 1961 garantissant l'inviolabilité des locaux des ambassades, ainsi que des dispositions de l'article 5 de la convention de 1963 relatives aux fonctions consulaires en matière d'assistance aux ressortissants et de protection ou sauvegarde de leurs intérêts. Par leur nature même, toutes ces demandes mettent en cause l'interprétation ou l'application de l'une ou l'autre des deux conventions de Vienne.

47. L'occupation de l'ambassade des Etats-Unis par des militants le 4 novembre 1979 et la détention de membres de son personnel en otages étaient des événements de nature à susciter les protestations immédiates de tout gouvernement, et c'est bien ainsi que le Gouvernement des Etats-Unis a réagi quand il a envoyé en Iran un représentant spécial chargé de remettre une protestation formelle. Bien que ce représentant, se voyant refuser tout contact avec des personnalités iraniennes, ne soit jamais allé jusqu'en Iran, le Gouvernement de l'Iran ne pouvait avoir aucun doute quant à la réaction des Etats-Unis à la prise de leur ambassade et à la détention en otages de membres de leur personnel diplomatique et consulaire. De fait, la Cour a été informée que le Gouvernement des Etats-Unis avait dans le même temps fait connaître ses vues au Gouvernement de l'Iran par l'intermédiaire de son chargé d'affaires, qui était retenu depuis le 4 novembre 1979 dans le bâtiment même du ministère des affaires étrangères d'Iran, où il se trouvait avec deux membres de sa mission pendant l'attaque de l'ambassade. De toute manière, par lettre du 9 novembre 1979, les Etats-Unis ont saisi le Conseil de sécurité de la situation concernant leur ambassade. Le Gouvernement de l'Iran n'a pas pris part aux débats du Conseil sur la question et il persistait encore dans son refus d'entamer le moindre pour-parler en la matière au moment où les Etats-Unis ont déposé, le 29 novembre 1979, la présente requête saisissant la Cour de leurs demandes. De toute évidence il existait à cette date un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des conventions de Vienne et entrant donc dans le cadre de l'article I des protocoles.

48. Il est vrai que les articles II et III de ces instruments prévoient que, dans un délai de deux mois après qu'une partie a notifié à l'autre qu'il existe à son avis un litige, les parties peuvent convenir d'un commun accord : a) « d'adopter, au lieu du recours à la Cour internationale de Justice, une procédure devant un tribunal d'arbitrage », ou b) « de recourir à une procédure de conciliation avant d'en appeler à la Cour internationale de Justice ». Toutefois, si le texte des articles II et III est examiné en même temps que celui de l'article I et du préambule des protocoles, il tombe sous le sens qu'il ne faut pas y voir une condition préalable à l'applicabilité de la disposition précise et catégorique de l'article I qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour pour connaître des différends relatifs à l'interpré-



tation ou à l'application de la convention de Vienne dont il s'agit. Les articles II et III se bornent à stipuler que les parties *peuvent convenir* de recourir à l'arbitrage ou à la conciliation comme procédure de remplacement de la saisine de la Cour. Il s'ensuit que, premièrement, les articles II et III ne s'appliquent que si l'une des parties au différend a proposé un recours à l'arbitrage ou à la conciliation et si l'autre partie s'est déclarée prête à étudier cette proposition. Deuxièmement, c'est seulement en ce cas que les dispositions de ces articles concernant un délai de deux mois entrent en jeu et font intervenir une limite de temps pour la conclusion de l'accord sur l'organisation de la procédure de remplacement.

49. En l'espèce aucune des parties au différend n'a proposé d'avoir recours à l'une ou l'autre de ces voies, que ce soit avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure. Bien au contraire, les autorités iraniennes se sont absolument refusées à discuter la question avec les Etats-Unis, attitude qui ne pouvait être comprise par ces derniers que comme écartant d'emblée toute perspective d'accord en vue de recourir à l'arbitrage ou à la conciliation, en application de l'article II ou de l'article III des protocoles, au lieu de saisir la Cour. Par conséquent, lorsque les Etats-Unis ont déposé leur requête du 29 novembre 1979, ils avaient sans nul doute la faculté de mettre en œuvre l'article I des protocoles et d'invoquer cet article comme fondement de la compétence de la Cour pour connaître de leurs demandes au titre des conventions de Vienne de 1961 et de 1963.

\* \*

50. Les Etats-Unis formulent cependant d'autres demandes au motif que l'Iran aurait violé les articles II, paragraphe 4, XIII, XVIII et XIX du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis et l'Iran, entré en vigueur le 16 juin 1957. Pour ce faire, ils invoquent l'article XXI, paragraphe 2, de ce traité comme fondement de la compétence de la Cour. Les demandes des Etats-Unis au titre dudit traité coïncident dans une très large mesure avec celles que se rattachent aux deux conventions de Vienne et plus particulièrement à celle de 1963. De ce point de vue le différend existant à ce sujet entre les Etats-Unis et l'Iran est donc aussi un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des conventions de Vienne et relève de l'article I de leurs protocoles. C'est pour cette raison que, dans l'ordonnance du 15 décembre 1979 par laquelle elle a indiqué des mesures conservatoires, la Cour n'a pas cru devoir rechercher si l'article XXI, paragraphe 2, du traité de 1955 pouvait lui aussi servir de fondement à l'exercice de sa compétence en l'affaire. Etant donné cependant que l'article II, paragraphe 4, du traité de 1955 prévoit que « les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes bénéficieront de la manière la plus constante de la protection et de la sécurité dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante », la Cour considère qu'au stade actuel de l'instance ce traité peut présenter de l'importance par rapport aux demandes relatives aux deux simples ressortissants des Etats-Unis qui seraient détenus en otages en Iran. La Cour va donc examiner

maintenant si sa compétence pour connaître des violations du traité de 1955 alléguées par le demandeur peut être fondée sur l'article XXI, paragraphe 2, de ce traité.

51. Le paragraphe 2 est ainsi conçu :

« Tout différend qui pourrait s'élever entre les Hautes Parties contractantes quant à l'interprétation ou à l'application du présent Traité et qui ne pourrait pas être réglé d'une manière satisfaisante par la voie diplomatique sera porté devant la Cour internationale de Justice, à moins que les Hautes Parties contractantes ne conviennent de le régler par d'autres moyens pacifiques. »

Il a déjà été souligné que, lorsque les Etats-Unis ont déposé leur requête du 29 novembre 1979, leurs tentatives de négociations avec l'Iran au sujet de l'invasion de leur ambassade et de la détention de leurs ressortissants en otages avaient abouti à une impasse, le Gouvernement de l'Iran ayant refusé toute discussion. Il existait donc à cette date non seulement un différend mais, sans aucun doute, « un différend ... qui ne [pouvait] pas être réglé d'une manière satisfaisante par la voie diplomatique » au sens de l'article XXI, paragraphe 2, du traité de 1955 ; et ce différend portait notamment sur les matières faisant l'objet des demandes présentées par les Etats-Unis en vertu de ce traité.

52. La disposition du traité de 1955 qui prévoit que les différends relatifs à son interprétation ou à son application seront soumis à la Cour établit un système analogue à celui des protocoles de signature facultative aux conventions de Vienne, que la Cour a déjà analysé. L'article XXI, paragraphe 2, du traité prévoit la compétence obligatoire de la Cour pour connaître de ces différends, à moins que les parties ne *conviennent* de les régler par quelque autre méthode. Comme dans le cas des protocoles de signature facultative, le refus immédiat et total des autorités iraniennes d'entamer des négociations avec les Etats-Unis a éliminé d'emblée en l'occurrence toute possibilité d'*accord* pour recourir à « d'autres moyens pacifiques » de règlement du litige. Par conséquent, le 29 novembre 1979, les Etats-Unis avaient la faculté d'invoquer les dispositions de l'article XXI, paragraphe 2, du traité de 1955 aux fins de saisir la Cour de leurs réclamations contre l'Iran en vertu de ce traité. Cet article ne prévoit certes pas en termes exprès que l'une ou l'autre des parties peut saisir la Cour par requête unilatérale, mais il est évident que, comme les Etats-Unis l'ont soutenu dans leur mémoire, c'est bien ainsi que les parties l'entendaient. Des dispositions conçues dans des termes similaires sont très courantes dans les traités bilatéraux d'amitié ou d'établissement et l'intention des parties, lorsqu'elles acceptent ces clauses, est sans aucun doute de se réserver ce droit de s'adresser unilatéralement à la Cour faute d'accord en vue de recourir à un autre mode de règlement pacifique.

53. La question a aussi été posée de savoir si, en raison de certaines contre-mesures prises par eux à l'égard de l'Iran, les Etats-Unis étaient fondés à invoquer le traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires

dans la présente instance. Cependant, toutes les mesures dont il s'agit ont été prises par les Etats-Unis après la capture de leur ambassade par un groupe armé et la détention en otages de membres de leur personnel diplomatique et consulaire qui en est résultée. Il s'agissait de mesures prises à la suite de ce que les Etats-Unis considéraient comme des violations graves et manifestes du droit international par l'Iran, y compris des violations du traité de 1955 lui-même. De toute manière, aucune violation du traité commise par l'une ou l'autre des parties ne saurait avoir pour effet d'empêcher cette partie d'invoquer les dispositions du traité relatives au règlement pacifique des différends.

54. L'Iran n'a pas soutenu que le traité de 1955 n'était pas en vigueur le 4 novembre 1979, quand l'ambassade des Etats-Unis a été occupée et les ressortissants de ce pays pris en otages, ni le 29 novembre, au moment où les Etats-Unis ont saisi la Cour du différend. Le but même d'un traité d'amitié, et en particulier d'un traité d'établissement, est avant tout de promouvoir les relations entre deux Etats et entre leurs peuples par l'engagement mutuel d'assurer sur le territoire de chacun la protection et la sécurité des ressortissants de l'autre. C'est précisément au moment où des difficultés se présentent que le traité prend toute son importance ; l'objet même de l'article XXI, paragraphe 2, du traité de 1955 est de procurer le moyen de parvenir au règlement amical de difficultés semblables par la Cour ou par d'autres voies pacifiques. Conclure qu'une action devant la Cour en vertu de l'article XXI, paragraphe 2, ne serait pas ouverte aux parties au moment précis où cette voie de recours est le plus nécessaire serait donc contraire au but même du traité de 1955. De plus, bien que le mécanisme permettant de faire jouer effectivement ce traité soit sans nul doute actuellement bloqué du fait de la rupture des relations diplomatiques entre les deux Etats décidée par les Etats-Unis, les dispositions du traité continuent à faire partie du droit applicable entre les Etats-Unis et l'Iran.

\* \* \*

55. Les Etats-Unis ont invoqué en outre l'article 13 de la convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, comme fondement de l'exercice de la compétence de la Cour pour connaître de leurs demandes au titre de cette convention. La Cour n'estime cependant pas nécessaire de rechercher dans le présent arrêt si, dans les circonstances de l'espèce, l'article 13 de ladite convention peut servir de fondement à l'exercice de sa compétence pour connaître de ces demandes.

\* \* \*

56. Les principaux faits pertinents aux fins de la décision de la Cour sur le fond de la présente affaire ont été exposés plus haut. La Cour doit

maintenant les examiner de deux points de vue. Tout d'abord elle doit déterminer dans quelle mesure les comportements en question peuvent être considérés comme juridiquement imputables à l'Etat iranien. Ensuite elle doit rechercher s'ils sont compatibles ou non avec les obligations incombant à l'Iran en vertu des traités en vigueur ou de toute autre règle de droit international éventuellement applicable. Les événements donnant lieu aux réclamations des Etats-Unis s'échelonnent en deux phases qu'il convient de considérer séparément.

57. La première de ces deux phases recouvre l'attaque armée perpétrée le 4 novembre 1979 par des militants contre l'ambassade des Etats-Unis, l'invasion de ses locaux, la prise en otages des personnes qui s'y trouvaient, la saisie de ses biens et de ses archives et le comportement des autorités iraniennes devant ces événements. L'attaque puis l'occupation progressive de tous les bâtiments de l'ambassade se sont poursuivies pendant quelque trois heures sans qu'un corps de police, une unité de l'armée ou une personnalité iranienne intervienne pour essayer de les faire cesser. L'attaque s'est soldée par des dégâts considérables pour les biens de l'ambassade, par l'ouverture forcée de ses archives, la saisie de celles-ci et d'autres documents trouvés sur place et, ce qui est le plus grave, par la capture par la force de membres de son personnel diplomatique et consulaire, lesquels ont été pris en otages avec deux autres ressortissants des Etats-Unis.

58. Il n'a pas été soutenu qu'au moment où ils attaquaient l'ambassade les militants aient eu un statut officiel quelconque en tant qu'« agents » ou organes de l'Etat iranien. Leur comportement, lorsqu'ils ont organisé l'attaque, envahi l'ambassade et pris ses occupants en otages, ne saurait donc être considéré comme imputable à l'Etat iranien sur cette base. Il ne pourrait être considéré en lui-même comme directement imputable à cet Etat que s'il était avéré que les militants agissaient alors effectivement pour son compte, parce qu'un organe compétent dudit Etat les aurait chargés d'une opération déterminée. Les éléments d'information dont la Cour dispose ne permettent cependant pas d'établir, avec le degré de certitude nécessaire, l'existence à ce moment d'un tel lien entre les militants et un organe compétent de l'Etat.

59. Il est vrai que précédemment l'ayatollah Khomeini, guide religieux de la nation, avait fait plusieurs déclarations publiques dénonçant les Etats-Unis comme responsables de tous les maux du pays. En agissant ainsi, l'ayatollah s'était fait, semble-t-il, l'interprète du ressentiment général qu'inspirait aux partisans de la révolution l'admission de l'ancien Chah aux Etats-Unis. Il ressort aussi des renseignements soumis à la Cour qu'un porte-parole des militants, expliquant après coup leur action, s'est expressément référé à un message de l'ayatollah Khomeini du 1<sup>er</sup> novembre 1979, où celui-ci affirmait qu'il appartenait « aux enfants des écoles, aux étudiants et aux étudiants en théologie bien-aimés de multiplier de toutes leurs forces leurs attaques contre les Etats-Unis et Israël pour que les Etats-Unis soient obligés de livrer le souverain criminel déposé et de condamner ce grand complot » (c'est-à-dire un complot visant à provoquer des dissen-

sions entre les principales tendances islamiques). Selon la Cour, ce serait cependant aller trop loin que d'interpréter de telles déclarations générales adressées par l'ayatollah Khomeini à la population ou aux étudiants iraniens comme équivalant à une autorisation d'entreprendre pour le compte de l'Etat l'opération précise qui consistait à envahir et à occuper l'ambassade. Cela irait même à l'encontre des assertions attribuées aux militants, qui se seraient vantés d'avoir conçu et exécuté le plan d'occupation de l'ambassade. De même, des félicitations venues après coup, comme celles que l'ayatollah Khomeini semble avoir faites par téléphone le soir même de l'attaque, et d'autres déclarations ultérieures d'approbation officielle, si elles revêtent une grande importance dans un autre contexte qui sera examiné ci-après, ne modifient pas le caractère initialement indépendant et non officiel de l'attaque de l'ambassade par les militants.

60. La première phase, examinée ici, des événements incriminés comprend aussi les attaques des consulats des Etats-Unis à Tabriz et à Chiraz. Comme celle de l'ambassade, ces attaques semblent avoir été exécutées par des militants dépourvus de caractère officiel, et avoir réussi parce que les bâtiments n'étaient pas suffisamment protégés.

61. Il reste que la conclusion à laquelle la Cour est parvenue – à savoir que le déclenchement de l'attaque contre l'ambassade des Etats-Unis le 4 novembre 1979 et des attaques contre les consulats de Tabriz et de Chiraz le lendemain ne peut être considéré comme étant en lui-même imputable à l'Etat iranien – ne signifie pas que l'Iran soit, en conséquence, exonéré de toute responsabilité à propos de ces attaques. Son propre comportement était en effet incompatible avec ses obligations internationales, car, en vertu de diverses dispositions des conventions de Vienne de 1961 et de 1963, l'Iran avait, en tant qu'Etat acc. éditaire, l'obligation la plus formelle de prendre des mesures appropriées pour protéger l'ambassade et les consulats des Etats-Unis, leur personnel, leurs archives, leurs moyens de communication et la liberté de mouvement des membres de leur personnel.

62. C'est ainsi que, après avoir solennellement proclamé l'inviolabilité des locaux d'une mission diplomatique, l'article 22 de la convention de 1961 dispose en son paragraphe 2 :

*« L'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. »* (Les italiques sont de la Cour.)

De même, après avoir stipulé que la personne de l'agent diplomatique est inviolable et qu'il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention, l'article 29 prévoit :

*« L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. »* (Les italiques sont de la Cour.)

L'obligation de l'Etat accréditaire de protéger l'inviolabilité des archives et

documents d'une mission diplomatique est énoncée à l'article 24, où il est spécifié qu'ils sont « inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent ». Aux termes de l'article 25, l'Etat accréditaire « accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission » ; en vertu de l'article 26, il « assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire » et, selon l'article 27, il « permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles ». Des dispositions analogues figurent dans la convention de 1963 au sujet des privilèges et immunités des missions consulaires et de leur personnel (art. 31, par. 3, et art. 40, 33, 28, 34 et 35). Selon la Cour, les obligations du Gouvernement de l'Iran dont il s'agit ne sont pas simplement des obligations contractuelles établies par les conventions de Vienne de 1961 et de 1963 ; ce sont aussi des obligations imposées par le droit international général.

63. Les faits exposés aux paragraphes 14 à 27 ci-dessus établissent pour la Cour que, le 4 novembre 1979, le Gouvernement de l'Iran a totalement manqué de prendre des « mesures appropriées » afin de protéger les locaux, le personnel et les archives de la mission des Etats-Unis contre l'attaque des militants et n'a rien fait pour prévenir cette attaque ou l'empêcher d'aboutir. Ils montrent aussi que, le 5 novembre 1979, le Gouvernement de l'Iran a de même manqué de prendre des mesures appropriées pour protéger les consulats des Etats-Unis à Tabriz et à Chiraz. Ils montrent enfin, de l'avis de la Cour, que la carence du Gouvernement de l'Iran était due à plus qu'une simple négligence ou un simple manque de moyens.

64. L'inaction totale des autorités iraniennes à cette date, en dépit d'appels à l'aide urgents et répétés, contraste de manière frappante avec leur comportement dans plusieurs situations similaires. Quelque huit mois auparavant, le 14 février 1979, l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran avait été l'objet de l'attaque armée déjà mentionnée (paragraphe 14), au cours de laquelle les assaillants avaient fait prisonniers l'ambassadeur et son personnel. A cette occasion, toutefois, un détachement de gardiens de la révolution dépêché par le gouvernement était arrivé rapidement sur les lieux en compagnie d'un vice-premier ministre et avait très vite réussi à libérer l'ambassadeur et son personnel et à dégager l'ambassade. De plus, dans une lettre du 1<sup>er</sup> mars 1979, le premier ministre d'Iran avait exprimé ses profonds regrets pour l'incident, assuré que des dispositions appropriées avaient été prises pour en empêcher le retour et déclaré que son gouvernement était disposé à indemniser les Etats-Unis pour les dommages causés. Le 1<sup>er</sup> novembre 1979, trois jours seulement avant les événements qui sont à l'origine de la présente affaire, la police iranienne était intervenue de manière prompte et efficace pour protéger l'ambassade des Etats-Unis alors qu'une foule nombreuse de manifestants passait et repassait devant elle pendant plusieurs heures. Enfin, en novembre 1979 et janvier 1980, des invasions ou tentatives d'invasion d'autres ambassades étrangères ont été repoussées ou rapidement mises en échec.

65. Pour les consulats, le déroulement des faits répond au même sché-

ma. En février 1979, vers l'époque de la première attaque contre l'ambassade des Etats-Unis, des manifestants s'en sont pris aux consulats américains à Tabriz et à Chiraz, mais les autorités iraniennes ont alors adopté les mesures nécessaires pour les faire évacuer par les manifestants. En revanche, elles n'ont rien fait pour prévenir l'attaque du 5 novembre 1979 ni pour remettre les consulats en possession des Etats-Unis. Par contraste, quand les militants ont envahi le jour suivant le consulat d'Irak à Kermanschah, les autorités iraniennes ont fait preuve de diligence pour leur faire quitter les lieux. Ainsi les autorités et la police iraniennes ont pris dans ce cas les mesures nécessaires pour prévenir ou faire échouer les tentatives d'invasion ou rendre les locaux à leurs occupants légitimes.

66. Quant à la façon dont les autorités iraniennes se sont en fait comportées face aux événements du 4 novembre 1979, les éléments d'information dont la Cour dispose établissent que, malgré les assurances qu'elles avaient précédemment données au Gouvernement des Etats-Unis et malgré des appels à l'aide urgents et répétés, elles n'ont pris apparemment aucune mesure, soit pour empêcher les militants d'envahir l'ambassade, soit pour les persuader de se retirer ou pour les y obliger. De plus, après que les militants eurent pénétré de force dans les locaux de l'ambassade, les autorités iraniennes n'ont rien fait pour les contraindre ni même pour les persuader de les évacuer et de libérer les membres du personnel diplomatique et consulaire qu'ils avaient faits prisonniers.

67. Cette carence du Gouvernement de l'Iran constituait en tant que telle une violation grave et manifeste des obligations dont l'Iran était tenu à l'égard des Etats-Unis en vertu des dispositions de l'article 22, paragraphe 2, et des articles 24, 25, 26, 27 et 29 de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, ainsi que des articles 5 et 36 de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. De même, pour ce qui est de l'attaque des consulats de Tabriz et de Chiraz, cette carence des autorités iraniennes s'est traduite par une violation grave et manifeste des obligations prévues par plusieurs autres articles de la convention de 1963 sur les relations consulaires. En ce qui concerne les deux simples ressortissants des Etats-Unis pris en otages par les militants, la même carence a entraîné, encore qu'incidemment, une violation des obligations imposées par l'article II, paragraphe 4, du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955, lequel, en plus des obligations résultant du droit international général, exige de chacune des parties qu'elle assure sur son territoire « de la manière la plus constante ... la protection et ... la sécurité » des ressortissants de l'autre.

68. La Cour est donc nécessairement amenée à conclure, au sujet de la première phase des événements prise en considération jusqu'ici, que, le 4 novembre 1979, les autorités iraniennes :

- a) étaient pleinement conscientes des obligations que leur imposaient les conventions en vigueur de prendre des mesures appropriées pour protéger les locaux de l'ambassade des Etats-Unis et son personnel diplomatique et consulaire contre toute attaque et contre toute atteinte à leur

- inviolabilité, ainsi que pour assurer la sécurité des autres personnes qui pouvaient s'y trouver ;
- b) étaient pleinement conscientes, du fait des appels à l'aide de l'ambassade des Etats-Unis, que des mesures urgentes de leur part s'imposaient ;
  - c) disposaient des moyens de s'acquitter de leurs obligations ;
  - d) ont totalement manqué de se conformer auxdites obligations.

De même, la Cour est amenée à conclure que les autorités iraniennes étaient également conscientes de leur obligation de protéger les consulats des Etats-Unis à Tabriz et à Chiraz et de la nécessité de prendre des mesures à leur sujet, et que là encore elles ont manqué à utiliser les moyens dont elles disposaient pour s'acquitter de leurs obligations.

\* \*

69. La seconde phase des événements qui motivent les réclamations des Etats-Unis comprend toute la série des faits qui se sont déroulés après l'occupation de l'ambassade des Etats-Unis par les militants et la prise des consulats de Tabriz et de Chiraz. Cette occupation s'étant produite et les membres du personnel diplomatique et consulaire de la mission des Etats-Unis ayant été pris en otages, les mesures exigées du Gouvernement de l'Iran par les conventions de Vienne et par le droit international général ne pouvaient faire aucun doute. Le devoir évident de ce gouvernement était, sans plus tarder, de ne négliger aucun effort et de prendre toutes les dispositions appropriées pour mettre fin rapidement à ces atteintes flagrantes à l'inviolabilité des locaux, des archives et du personnel diplomatique et consulaire de l'ambassade des Etats-Unis, de remettre les consulats de Tabriz et de Chiraz en possession des Etats-Unis et, d'une façon générale, de rétablir la situation antérieure aux attaques et de proposer la réparation du préjudice subi.

70. Or les autorités iraniennes n'ont rien fait de semblable. Lors d'une conférence de presse tenue le 5 novembre, M. Yazdi, ministre des affaires étrangères, a admis que, « conformément aux règles internationales, le Gouvernement iranien » avait « l'obligation de sauvegarder la vie et les biens des ressortissants étrangers ». Mais il n'a rien dit de l'obligation de sauvegarder l'inviolabilité des ambassades et des diplomates étrangers qui incombait à l'Iran ; et il a déclaré pour finir que l'action des étudiants « bénéficiait de l'appui et de l'approbation du gouvernement, l'Amérique elle-même étant responsable de cet incident ». Quant au premier ministre, M. Bazargan, il ne semble pas avoir fait de déclaration à ce sujet avant de résigner ses fonctions le 5 novembre.

71. Quoi qu'il en soit, de nombreuses autorités iraniennes, notamment religieuses, judiciaires, exécutives, ainsi que des représentants de la police et de la radiodiffusion, ont immédiatement manifesté leur approbation de la prise de l'ambassade et des consulats de Tabriz et de Chiraz opérée par les militants. Et surtout l'ayatollah Khomeini a proclamé que l'Etat apportait sa caution tant à la prise de l'ambassade et des consulats qu'à la



détention en otages de membres du personnel de l'ambassade. Donnant audience le 5 novembre à Qom, l'ayatollah Khomeini a clairement fait entendre aux personnes présentes qu'il approuvait l'occupation de l'ambassade par les militants, action à laquelle, a-t-il dit, « nos jeunes gens ont eu recours parce qu'ils ont appris que le Chah était autorisé à se rendre en Amérique ». Affirmant être instruit de ce que le « centre occupé par nos jeunes » était « un repaire d'espions et de comploteurs », il a demandé comment l'on aurait voulu « que ces jeunes gens assistent à tout cela sans rien faire ». Il a en outre formellement traité de « racines pourries » ceux qui espéraient en Iran « que nous apporterions notre médiation et dirions aux jeunes de quitter ces lieux ». Le refus de l'ayatollah d'ordonner aux « jeunes gens » de mettre fin à leur occupation de l'ambassade et aux militants de Tabriz et de Chiraz d'évacuer les consulats des Etats-Unis dans ces villes a dû paraître encore plus significatif le 6 novembre, quand l'ayatollah a enjoint aux occupants du consulat d'Irak à Kermanschah de quitter les lieux au plus tôt. La signification réelle de tout cela est apparue encore plus nettement lorsque, le lendemain, l'ayatollah a formellement interdit aux membres du conseil de la révolution et à toutes les personnalités responsables de rencontrer les représentants spéciaux envoyés par le président Carter pour essayer d'obtenir la libération des otages et l'évacuation de l'ambassade.

72. En tout cas, ainsi encouragés dans leur action, les militants de l'ambassade ont immédiatement franchi un pas de plus. Ils ont proclamé le 6 novembre que l'ambassade, dénoncée également par eux comme « centre de complots et d'espionnage des Etats-Unis », resterait sous leur occupation et qu'ils y garderaient « sous étroite surveillance » les membres du personnel diplomatique pris en otages, qu'ils traitaient de « mercenaires et espions des Etats-Unis ».

73. Le sceau de l'approbation officielle du gouvernement a finalement été donné par une décision du 17 novembre 1979 où l'ayatollah Khomeini commençait par affirmer que l'ambassade américaine était « un centre d'espionnage et de conspiration » et que « les gens qui ont fomenté des complots contre notre mouvement islamique en cet endroit n'ont pas droit au respect diplomatique international ». Il poursuivait en proclamant que la situation des locaux de l'ambassade et des otages resterait inchangée tant que les Etats-Unis n'auraient pas livré l'ancien Chah pour qu'il soit traduit en justice et n'auraient pas restitué ses biens à l'Iran. La seule atténuation apportée par l'ayatollah à cette déclaration de politique consistait à demander aux militants qui détenaient les otages de « remettre au ministère des affaires étrangères les Noirs et les femmes, s'il est prouvé qu'ils n'ont pas eu d'activité d'espionnage, afin qu'ils soient immédiatement expulsés d'Iran ». Quant au sort des autres otages, il ne laissait planer aucun doute sur les intentions du Gouvernement de l'Iran :

« La noble nation iranienne ne permettra pas la libération du reste des otages. Ceux-ci par conséquent resteront en état d'arrestation jusqu'à ce que le Gouvernement américain se plie aux désirs de la nation. »

74. La politique ainsi annoncée par l'ayatollah Khomeini, consistant à maintenir l'occupation de l'ambassade et la détention des otages afin de faire pression sur le Gouvernement des Etats-Unis, a été appliquée par d'autres autorités iraniennes et appuyée par elles de façon réitérée dans des déclarations faites à diverses occasions. Cette politique a eu pour effet de transformer radicalement la nature juridique de la situation créée par l'occupation de l'ambassade et la détention de membres de son personnel diplomatique et consulaire en otages. L'ayatollah Khomeini et d'autres organes de l'Etat iranien ayant approuvé ces faits et décidé de les perpétuer, l'occupation continue de l'ambassade et la détention persistante des otages ont pris le caractère d'actes dudit Etat. Les militants, auteurs de l'invasion et geôliers des otages, sont alors devenus des agents de l'Etat iranien dont les actes engagent sa responsabilité internationale. M. Ghotbzadeh, ministre des affaires étrangères, aurait d'ailleurs déclaré dans un entretien télévisé du 6 mai 1980 que l'occupation de l'ambassade des Etats-Unis était « le fait de notre nation ». Au surplus, dans l'ambiance qui régnait alors, la situation des otages a été aggravée par le fait que leur détention par les militants n'offre pas même les garanties que l'on pourrait normalement attendre de forces disciplinées de police ou de sécurité aux ordres de leurs supérieurs réguliers.

75. Au cours des six mois écoulés depuis que la décision de l'ayatollah Khomeini a créé la situation ainsi décrite, celle-ci n'a pas sensiblement évolué. L'ordonnance en indication de mesures conservatoires du 15 décembre 1979, qui demandait la restitution immédiate de l'ambassade des Etats-Unis et la libération des otages, a été rejetée publiquement le lendemain par le ministre des affaires étrangères et ignorée par toutes les autorités iraniennes. Par deux fois, les 23 février et 7 avril 1980, l'ayatollah Khomeini a proclamé que les otages resteraient à l'ambassade des Etats-Unis sous la garde des militants tant que le nouveau parlement iranien ne se serait pas réuni et n'aurait pas réglé leur sort. Cette politique excluait que l'ayatollah puisse consentir à ce que les otages soient enlevés aux militants et remis au gouvernement ou au conseil de la révolution. De toute manière, si désirable eût-il été sous l'angle humanitaire ou sous celui de la sécurité, un tel transfert n'aurait pas sensiblement changé la situation juridique, ses promoteurs eux-mêmes ayant souligné qu'il ne fallait pas en conclure que les otages seraient de ce fait libérés.

\* \*

76. La décision des autorités iraniennes de continuer à soumettre les locaux de l'ambassade des Etats-Unis à une occupation par des militants et à détenir son personnel en otage a manifestement entraîné des manquements répétés et multiples aux dispositions applicables des conventions de

Vienne, manquements encore plus graves que le fait, pour ces mêmes autorités, de n'avoir pris aucune mesure en vue de prévenir les atteintes à l'inviolabilité des locaux et du personnel de l'ambassade.

77. En premier lieu, ces faits ont ajouté à celles déjà commises d'autres violations de l'article 22, paragraphe 2, de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, qui prescrit à l'Iran d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, sa paix troublée ou sa dignité amoindrie. Les paragraphes 1 et 3 du même article ont également été et continuent d'être enfreints, puisqu'ils interdisent aux agents de l'Etat accréditaire de pénétrer sans autorisation dans les locaux de la mission ou d'y opérer toute perquisition, réquisition, saisie ou mesure semblable. En second lieu, les mêmes faits constituent des violations continues de l'article 29 de la même convention, qui interdit toute arrestation ou détention d'un agent diplomatique et toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. En troisième lieu, il n'est pas douteux que les autorités iraniennes enfreignent en permanence les dispositions des articles 25, 26 et 27 de la convention de Vienne de 1961 et les dispositions pertinentes de la convention de Vienne de 1963 relatives aux facilités pour l'accomplissement des fonctions et à la liberté de déplacement et de communication du personnel diplomatique et consulaire, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la première et de l'article 33 de la seconde qui prévoient l'inviolabilité absolue des archives et documents des missions diplomatiques et des consulats. Cette infraction particulière est connue du monde entier par les déclarations répétées des militants qui occupent l'ambassade, affirmant que des documents tirés des archives sont entre leurs mains, et par celles de diverses autorités gouvernementales, prétendant en révéler la teneur. Enfin la détention continue en otages des deux simples ressortissants des Etats-Unis implique une violation persistante des obligations incombant à l'Iran en vertu de l'article II, paragraphe 4, du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955.

78. En recherchant si le comportement des autorités iraniennes était ou non compatible avec les prescriptions des conventions de Vienne, la Cour a été amenée inévitablement à porter avant tout son attention sur l'occupation de l'ambassade et le traitement du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis qui y était détenu. Il est toutefois évident que le même problème de compatibilité du comportement des autorités iraniennes avec les conventions de Vienne se pose à propos du traitement du chargé d'affaires des Etats-Unis et de deux membres de son personnel se trouvant au ministère des affaires étrangères depuis le 4 novembre 1979. Les faits de la cause établissent d'après la Cour que, depuis cette date, les autorités iraniennes ont refusé au chargé d'affaires et aux deux membres de son personnel la protection et les moyens nécessaires pour qu'ils puissent quitter le ministère en toute sécurité. La Cour estime donc que, pour ces trois membres de la mission des Etats-Unis, les autorités iraniennes ont commis une violation continue des obligations que leur imposent les articles 26 et 29 de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Elle estime en outre que, dans de telles

circonstances, la persistance de cette situation équivaut à une détention au ministère.

79. La Cour ne saurait enfin conclure ses observations sur la série d'actes qu'elle juge imputables à l'Etat iranien et manifestement incompatibles avec ses obligations internationales aux termes des conventions de Vienne de 1961 et de 1963 sans évoquer un autre fait encore : des autorités judiciaires de la République islamique d'Iran et le ministre des affaires étrangères ont souvent proféré la menace, ou se sont associés à celle qui avait été proférée en premier lieu par les militants, de faire juger certains des otages par un tribunal ou une autre instance. Ces menaces sont peut-être actuellement de simples éventualités. Toutefois la Cour juge nécessaire de souligner dès maintenant que, si l'intention de soumettre les otages à toute espèce de procès criminel ou d'enquête devait se traduire dans les faits, cela constituerait une violation grave des obligations incombant à l'Iran en vertu de l'article 31, paragraphe 1, de la convention de Vienne de 1961. Ce paragraphe est des plus formels : « L'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat accréditaire. » De même, si l'on essayait de contraindre les otages à témoigner, possibilité évoquée à nouveau lors du séjour en Iran de la commission du Secrétaire général, l'Iran violerait sans nul doute le paragraphe 2 du même article 31 de la convention de 1961 suivant lequel : « L'agent diplomatique n'est pas obligé de donner son témoignage. »

\* \*

80. Les faits de l'espèce, envisagés à la lumière des règles de droit applicables, font donc ressortir de la façon la plus nette les manquements successifs, et persistant à ce jour, de l'Iran aux obligations dont il est tenu envers les Etats-Unis en vertu des conventions de Vienne de 1961 et de 1963 ainsi que du traité de 1955. Avant de tirer de cette constatation les conclusions qui en découlent sur le plan de la responsabilité internationale de l'Etat iranien à l'égard des Etats-Unis d'Amérique, la Cour estime devoir examiner un autre point. Elle ne peut en effet ignorer que, du côté iranien, dans des formes souvent imprécises, l'idée a été avancée que le comportement de l'Etat iranien, lors des événements du 4 novembre 1979 et par la suite, pourrait être justifié par l'existence de circonstances spéciales.

81. En effet, dans ses lettres des 9 décembre 1979 et 16 mars 1980, le ministre des affaires étrangères d'Iran, comme on l'a déjà rappelé, a affirmé que la présente affaire n'est qu'« un élément marginal et secondaire d'un problème d'ensemble ». Il a soutenu que ce problème « englobe entre autres plus de vingt-cinq ans d'ingérences continues par les Etats-Unis dans les affaires intérieures de l'Iran, d'exploitation éhontée de notre pays et de multiples crimes perpétrés contre le peuple iranien, envers et contre toutes les normes internationales et humanitaires ». Dans la première des deux lettres, il citait notamment parmi les « crimes » qu'il imputait aux Etats-Unis la complicité qu'aurait eue l'Agence centrale de renseignements dans le coup d'Etat de 1953 et la restauration du Chah. Invoquant ces

crimes reprochés aux Etats-Unis, le ministre des affaires étrangères d'Iran estimait que la Cour ne pouvait examiner la requête des Etats-Unis en dehors de son vrai contexte qui, insistait-il, était « l'ensemble du dossier politique des relations entre l'Iran et les Etats-Unis au cours de ces vingt-cinq dernières années ».

82. La Cour doit cependant souligner avant tout que les faits allégués dans les lettres du ministre des affaires étrangères d'Iran des 9 décembre 1979 et 16 mars 1980 sont de nature telle que, s'ils étaient invoqués dans une instance judiciaire, ils devraient être clairement établis à la satisfaction du tribunal avec toutes les preuves voulues. Dans son ordonnance du 15 décembre 1979, la Cour a fait observer que, si le Gouvernement de l'Iran estimait que les activités alléguées des Etats-Unis en Iran étaient en étroite connexité juridique avec l'objet de la requête, il était loisible à l'Iran de développer à ce sujet sa propre argumentation devant la Cour comme moyen de défense contre les demandes des Etats-Unis. Or le Gouvernement de l'Iran n'a pas comparu. De plus, même dans sa lettre du 16 mars 1980, parvenue à la Cour trois mois environ après que cette ordonnance eut été rendue, le ministre des affaires étrangères d'Iran n'a fourni à la Cour aucun renseignement complémentaire sur les allégations d'agissements criminels des Etats-Unis en Iran et n'a pas non plus indiqué sur quelle base juridique il considère que ces allégations constituent une réponse pertinente aux demandes des Etats-Unis. Il est vrai que, parmi les nombreux renseignements soumis à la Cour par les Etats-Unis, on trouve certaines déclarations de personnalités iraniennes ou de militants faisant mention des actes d'espionnage et d'ingérence auxquels les Etats-Unis se seraient livrés en Iran à partir de leur ambassade de Téhéran. Toutefois ces déclarations ont le même caractère de généralité que les allégations relatives aux agissements criminels des Etats-Unis qui figurent dans les lettres du ministre des affaires étrangères et elles ne s'appuient sur aucune preuve fournie par l'Iran dont la Cour aurait été saisie. Elles ne constituent donc pas une base permettant à la Cour de se former une opinion judiciaire sur la véracité de ces allégations.

83. De toute manière, même dans l'hypothèse où les agissements criminels allégués à l'encontre des Etats-Unis en Iran pourraient être considérés comme établis, il resterait à déterminer si, de l'avis de la Cour, ils ne pourraient constituer une justification du comportement de l'Iran et par conséquent un moyen de défense opposable aux demandes des Etats-Unis dans la présente instance. La Cour ne saurait accepter cette manière de voir. En effet le droit diplomatique lui-même fournit les moyens de défense nécessaires ainsi que des sanctions contre les activités illicites de membres de missions diplomatiques ou consulaires.

84. Les conventions de Vienne de 1961 et de 1963 renferment des dispositions expresses pour le cas où des membres d'une mission diplomatique, sous le couvert des privilèges et immunités diplomatiques, se livrent à des abus de fonctions tels que l'espionnage ou l'immixtion dans les affaires intérieures de l'Etat accréditaire. C'est précisément parce que de tels abus sont possibles que l'article 41, paragraphe 1, de la convention

de Vienne sur les relations diplomatiques, dont s'inspire l'article 55, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur les relations consulaires, dispose :

« Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. »

L'article 41, paragraphe 3, de la convention de 1961 spécifie en outre : « Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions de la mission » ; la convention de 1963 contient des dispositions analogues concernant les locaux consulaires en son article 55, paragraphe 2.

85. C'est donc afin précisément de fournir un remède à de tels abus éventuels des fonctions diplomatiques que l'article 9 de la convention de 1961 sur les relations diplomatiques stipule :

« 1. L'Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'Etat accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est *persona non grata* ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'Etat accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée *non grata* ou non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'Etat accréditaire.

2. Si l'Etat accréditant refuse d'exécuter, ou n'exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l'Etat accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission. »

On trouve, à l'article 23, paragraphes 1 et 4, de la convention de 1963, des dispositions analogues au sujet des fonctionnaires et du personnel consulaire. L'article 9, paragraphe 1, de la convention de 1961 et l'article 23, paragraphe 4, de la convention de 1963 tiennent compte de la difficulté qu'il peut y avoir en pratique à prouver de tels abus dans chaque cas ou même à déterminer exactement quand l'exercice de la fonction diplomatique, expressément visée à l'article 3, paragraphe 1 d), de la convention de 1961, qui consiste à « s'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution des événements dans l'Etat accréditaire », peut être considéré comme se traduisant par des actes d'« espionnage », ou d'« ingérence dans les affaires intérieures ». Pour faire face à cette difficulté, l'article 9, paragraphe 1, prévoit expressément dans sa première phrase que l'Etat accréditaire peut « à tout moment et sans avoir à motiver sa décision » informer l'Etat accréditant qu'un membre de sa mission diplomatique est « *persona non grata* » ou « n'est pas acceptable » (de même l'article 23, paragraphe 4, de la convention de 1963 dispose que « l'Etat de

résidence n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de sa décision »). En plus de ce moyen de remédier aux abus de la fonction diplomatique que peuvent commettre les membres d'une mission à titre individuel, l'Etat accréditaire dispose d'un remède plus radical si les abus prennent de graves proportions. C'est le pouvoir discrétionnaire qu'a tout Etat accréditaire de rompre les relations diplomatiques avec un Etat accréditant et de demander la fermeture immédiate de la mission coupable.

86. Bref les règles du droit international constituent un régime se suffisant à lui-même qui, d'une part, énonce les obligations de l'Etat accréditaire en matière de facilités, de privilèges et d'immunités à accorder aux missions diplomatiques et, d'autre part, envisage le mauvais usage que pourraient en faire des membres de la mission et précise les moyens dont dispose l'Etat accréditaire pour parer à de tels abus. Ces moyens sont par nature d'une efficacité totale car, si l'Etat accréditant ne rappelle pas sur-le-champ le membre de la mission visé, la perspective de la perte presque immédiate de ses privilèges et immunités, du fait que l'Etat accréditaire ne le reconnaîtra plus comme membre de la mission, aura en pratique pour résultat de l'obliger, dans son propre intérêt, à partir sans tarder. Le principe de l'inviolabilité des personnes des agents diplomatiques et des locaux des missions diplomatiques est l'un des fondements mêmes de ce régime établi de longue date et à l'évolution duquel les traditions de l'Islam ont apporté une contribution substantielle. Le caractère fondamental du principe d'inviolabilité est en outre souligné avec force par les dispositions des articles 44 et 45 de la convention de 1961 (voir aussi les articles 26 et 27 de la convention de 1963). Même en cas de conflit armé ou de rupture des relations diplomatiques, ces dispositions obligent l'Etat accréditaire à respecter l'inviolabilité des membres d'une mission diplomatique aussi bien que celle de ses locaux, de ses biens et de ses archives. Naturellement l'observation de ce principe ne veut pas dire – et le gouvernement demandeur l'a d'ailleurs expressément reconnu – qu'un agent diplomatique pris en flagrant délit d'agression ou d'autre infraction ne puisse, en certaines circonstances, être brièvement détenu par la police de l'Etat accréditaire à des fins préventives. Mais de telles éventualités n'ont aucun rapport avec ce qui s'est passé en l'espèce.

87. En l'occurrence le Gouvernement de l'Iran n'a pas rompu les relations diplomatiques avec les Etats-Unis ; répondant à une question d'un membre de la Cour, l'agent des Etats-Unis a indiqué qu'à aucun moment avant les événements du 4 novembre 1979 ledit gouvernement n'avait déclaré ou manifesté l'intention de déclarer *persona non grata* un membre quelconque du personnel diplomatique ou consulaire des Etats-Unis à Téhéran. Le Gouvernement de l'Iran n'a donc pas usé des moyens que le droit diplomatique mettait à sa disposition, afin précisément de faire face à des activités du genre de celles dont il se plaint maintenant. Il a, au contraire, laissé un groupe de militants attaquer et occuper l'ambassade des Etats-Unis par la force et prendre des membres du personnel diplomatique et consulaire en otages ; il a, au contraire, approuvé cette action des militants et délibérément laissé se prolonger leur occupation de l'am-

bassade et la détention du personnel pour faire peser une contrainte sur l'Etat accréditant. Il s'est, en même temps, absolument refusé à discuter de la situation avec des représentants des Etats-Unis. La Cour ne peut donc que conclure que le Gouvernement de l'Iran n'a pas employé les moyens normaux et efficaces qui étaient à sa disposition, mais a eu recours à des mesures de contrainte contre l'ambassade des Etats-Unis et son personnel.

88. Dans une déclaration du 5 novembre 1979, l'ayatollah Khomeini a attribué à la nouvelle de l'arrivée de l'ancien chah d'Iran aux Etats-Unis l'origine de l'opération effectuée la veille par les militants islamiques. Ce fait peut sans doute avoir été l'ultime catalyseur du ressentiment qu'éprouvaient certains milieux d'Iran et le peuple iranien contre le Chah détrôné et les méfaits qui lui étaient reprochés, ainsi que contre le Gouvernement des Etats-Unis, accusé publiquement de l'avoir rétabli sur le trône, de l'avoir soutenu pendant de nombreuses années et de vouloir continuer à le faire. Mais, quelle que soit la vérité à ce sujet, il serait difficile de trouver là une justification à l'attaque contre l'ambassade des Etats-Unis et sa mission diplomatique. Même si l'on pouvait voir dans l'offense ressentie par les autorités iraniennes en raison de l'admission du Chah aux Etats-Unis une atténuation de la responsabilité découlant de leur propre comportement, ledit sentiment d'offense ne pouvait modifier le caractère impératif des obligations juridiques incombant au Gouvernement de l'Iran, qu'un état de tension diplomatique entre les deux Etats ne saurait amoindrir. Encore moins pourrait-on considérer que le simple refus des Etats-Unis d'extrader le Chah en Iran ou le fait de ne pas l'extrader ait modifié les obligations des autorités iraniennes, sans même parler des difficultés juridiques qu'il pourrait y avoir, en droit interne ou en droit international, à accéder à une telle demande d'extradition.

89. En conséquence la Cour conclut à l'inexistence en l'espèce de circonstances qui soient de nature à effacer le caractère fondamentalement illicite du comportement adopté par l'Etat iranien le 4 novembre 1979 et depuis lors. Cette conclusion n'exclut cependant pas que certaines des circonstances alléguées, au cas où elles seraient dûment établies, puissent se voir reconnaître ultérieurement quelque pertinence quand il s'agira de déterminer les effets de la responsabilité encourue par l'Etat iranien du fait de son comportement, encore qu'on ne puisse les tenir pour modifiant le caractère illicite de celui-ci.

\* \* \*

90. En conclusion de l'analyse détaillée du fond de l'affaire effectuée dans les paragraphes qui précèdent, la Cour tient que les violations successives et continues par l'Iran des obligations qui lui incombent au titre des conventions de Vienne de 1961 et de 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires, du traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 et des règles du droit international général en la matière engagent la responsabilité de l'Iran à l'égard des Etats-Unis. Une consé-



quence évidente de cette constatation est que l'Etat iranien a l'obligation de réparer le préjudice ainsi causé aux Etats-Unis. Toutefois, les violations des obligations de l'Iran persistant, les formes et le montant de la réparation ne peuvent être déterminés à la date du présent arrêt.

91. En même temps la Cour estime devoir souligner l'effet cumulatif des manquements de l'Iran à ses obligations, considérés globalement. Une véritable progression marque en effet le passage de l'absence d'opposition des autorités iraniennes devant l'attaque armée des militants et la capture des locaux et du personnel de l'ambassade le 4 novembre 1979, à la caution apportée presque immédiatement par les autorités iraniennes à la situation ainsi créée, puis au maintien délibéré pendant de nombreux mois de l'occupation de l'ambassade et de la détention de son personnel par un groupe de militants armés agissant pour le compte de l'Etat afin de contraindre par ce moyen les Etats-Unis à se plier à certaines exigences. Le fait de priver abusivement de leur liberté des êtres humains et de les soumettre dans des conditions pénibles à une contrainte physique est manifestement incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies et avec les droits fondamentaux énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais ce qu'il convient de souligner surtout, c'est l'ampleur et la gravité du contraste entre le comportement adopté par l'Etat iranien et les obligations que lui impose l'ensemble de règles internationales constitué par le droit diplomatique et consulaire, dont la Cour doit fermement réaffirmer le caractère fondamental. Dans son ordonnance du 15 décembre 1979, la Cour avait tenu à souligner que les obligations imposées aux Etats par les deux conventions de Vienne sont d'une importance capitale pour le maintien de bonnes relations entre Etats dans le monde interdépendant d'aujourd'hui. Comme la Cour l'a dit alors, « dans la conduite des relations entre Etats, il n'est pas d'exigence plus fondamentale que celle de l'inviolabilité des diplomates et des ambassades et ... c'est ainsi que, au long de l'histoire, des nations de toutes croyances et toutes cultures ont observé des obligations réciproques à cet effet ». L'institution de la diplomatie, a-t-elle poursuivi, « s'est avérée un instrument essentiel de coopération efficace dans la communauté internationale, qui permet aux Etats, nonobstant les différences de leurs systèmes constitutionnels et sociaux, de parvenir à la compréhension mutuelle et de résoudre leurs divergences par des moyens pacifiques » (*C.I.J. Recueil 1979*, p. 19).

92. La Cour regrette profondément que la situation ayant donné lieu à ces observations n'ait pas été corrigée depuis lors. Vu leur importance, la Cour estime essentiel de réitérer lesdites observations dans le présent arrêt. La fréquence avec laquelle, à l'époque actuelle, les principes du droit international qui régissent les relations diplomatiques et consulaires sont réduits à néant par des individus ou des groupes d'individus est déjà déplorable en elle-même. Mais l'affaire soumise à la Cour est unique et d'une gravité toute particulière parce qu'en l'occurrence ce ne sont pas seulement des individus privés ou des groupes d'individus qui ont agi au mépris de l'inviolabilité d'une ambassade étrangère ; c'est le gouvernement de l'Etat accréditaire lui-même qui l'a fait. En rappelant donc à nouveau

l'extrême importance des principes de droit dont elle est amenée à faire application en la présente affaire, la Cour croit de son devoir d'attirer l'attention de la communauté internationale tout entière, y compris l'Iran, qui en est membre depuis des temps immémoriaux, sur le danger peut-être irréparable d'événements comme ceux qui ont été soumis à la Cour. Ces événements ne peuvent que saper à la base un édifice juridique patiemment construit par l'humanité au cours des siècles et dont la sauvegarde est essentielle pour la sécurité et le bien-être d'une communauté internationale aussi complexe que celle d'aujourd'hui, qui a plus que jamais besoin du respect constant et scrupuleux des règles présidant au développement ordonné des relations entre ses membres.

\* \*

93. Avant de tirer les conclusions appropriées de ses constatations quant au fond de l'affaire, la Cour considère qu'elle ne peut laisser passer sans commentaire l'incursion en territoire iranien d'unités militaires des Etats-Unis les 24-25 avril 1980, qui est évoquée plus haut dans le présent arrêt (paragraphe 32). La préoccupation qu'a pu éprouver le Gouvernement des Etats-Unis quant au sort de ses ressortissants détenus en otages à l'ambassade depuis plus de cinq mois est certes compréhensible. Sans doute a-t-il pu éprouver aussi un sentiment de frustration compréhensible devant la détention prolongée des otages par l'Iran, en dépit de deux résolutions du Conseil de sécurité et de l'ordonnance de la Cour du 15 décembre 1979 demandant expressément leur libération immédiate. Néanmoins, dans les circonstances de la présente instance, la Cour ne peut manquer d'exprimer le souci que lui inspire l'incursion américaine en Iran. Lorsque, comme on l'a déjà rappelé, l'instance s'était trouvée en état le 19 février 1980, l'agent des Etats-Unis avait demandé à la Cour, en raison de la phase délicate que traversaient certaines négociations, de ne fixer que plus tard la date des audiences. Par la suite, le 11 mars, l'agent a informé la Cour du désir du Gouvernement des Etats-Unis d'obtenir aussitôt que possible un arrêt sur le fond de l'affaire. Des audiences ont donc eu lieu les 18, 19 et 20 mars, et la Cour délibérait sur le présent arrêt par lequel elle se prononce sur les demandes des Etats-Unis contre l'Iran quand l'opération du 24 avril 1980 s'est produite. En conséquence la Cour se sent tenue de faire observer que, quels qu'en soient les motifs, une opération entreprise dans ces circonstances est de nature à nuire au respect du règlement judiciaire dans les relations internationales ; et de rappeler qu'au paragraphe 47, 1 B, de son ordonnance du 15 décembre 1979 elle avait indiqué qu'aucune mesure de nature à aggraver la tension entre les deux pays ne devait être prise.

94. La Cour doit néanmoins souligner en même temps qu'elle n'est pas saisie de la question du caractère licite ou illicite de l'opération du 24 avril 1980 au regard de la Charte des Nations Unies et du droit international général, ou des responsabilités éventuelles qui en découleraient. Elle doit aussi souligner que cette question ne saurait influencer sur l'appréciation du

comportement du Gouvernement de l'Iran depuis plus de six mois, à partir du 4 novembre 1979, qui constitue l'objet de la requête des Etats-Unis. Il s'ensuit que les conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans le présent arrêt ne sont pas modifiées du fait de cette opération.

\* \* \*

95. Par ces motifs,

LA COUR,

1. Par treize voix contre deux,

*Décide* que, par le comportement mis en évidence par la Cour dans le présent arrêt, la République islamique d'Iran a violé à plusieurs égards et continue de violer des obligations dont elle est tenue envers les Etats-Unis d'Amérique en vertu de conventions internationales en vigueur entre les deux pays ainsi que de règles du droit international général consacrées par une longue pratique ;

POUR : Sir Humphrey Waldock, *Président* ; M. Elias, *Vice-Président* ;  
MM. Forster, Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago,  
El-Erian, Sette-Camara, Baxter, *juges*.

CONTRE : MM. Morozov et Tarazi, *juges*.

2. Par treize voix contre deux,

*Décide* que les violations de ces obligations engagent la responsabilité de la République islamique d'Iran envers les Etats-Unis d'Amérique selon le droit international ;

POUR : Sir Humphrey Waldock, *Président* ; M. Elias, *Vice-Président* ;  
MM. Forster, Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago,  
El-Erian, Sette-Camara, Baxter, *juges*.

CONTRE : MM. Morozov et Tarazi, *juges*.

3. A l'unanimité,

*Décide* que le Gouvernement de la République islamique d'Iran doit prendre immédiatement toutes mesures pour remédier à la situation qui résulte des événements du 4 novembre 1979 et de leurs suites, et à cette fin :

a) doit faire cesser immédiatement la détention illicite du chargé d'affaires, d'autres membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis et d'autres ressortissants des Etats-Unis détenus en otages en Iran, et doit assurer la libération immédiate de toutes ces personnes sans exception et les remettre à la puissance protectrice (article 45 de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques) ;

- b) doit assurer à toutes les personnes en question les moyens, notamment les moyens de transport, qui leur sont nécessaires pour pouvoir quitter le territoire iranien ;
- c) doit remettre immédiatement à la puissance protectrice les locaux, biens, archives et documents de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran et de leurs consulats en Iran ;

4. A l'unanimité,

*Décide* qu'aucun membre du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis ne peut être retenu en Iran afin d'être soumis à une forme quelconque de procédure judiciaire ou d'y participer en qualité de témoin ;

5. Par douze voix contre trois,

*Décide* que le Gouvernement de la République islamique d'Iran est tenu envers le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de l'obligation de réparer le préjudice causé à celui-ci par les événements du 4 novembre 1979 et leurs suites ;

POUR : Sir Humphrey Waldoek, *Président* ; M. Elias, *Vice-Président* ;  
MM. Forster, Gros, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Erian,  
Sette-Camara, Baxter, *juges*.

CONTRE : MM. Lachs, Morozov et Tarazi, *juges*.

6. Par quatorze voix contre une.

*Décide* que les formes et le montant de cette réparation seront réglés par la Cour, au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord à ce sujet, et réserve à cet effet la suite de la procédure.

POUR : Sir Humphrey Waldoek, *Président* ; M. Elias, *Vice-Président* ;  
MM. Forster, Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Tarazi, Oda,  
Ago, El-Erian, Sette-Camara, Baxter, *juges*.

CONTRE : M. Morozov, *juges*.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la Paix, à La Haye, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt, en trois exemplaires dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et au Gouvernement de la République islamique d'Iran.

Le Président,

(Signé) Humphrey WALDOCK.

Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

M. LACHS, juge, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle.

MM. MOROZOV et TARAZI, juges, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

*(Paraphé) H.W.*

*(Paraphé) S.A.*

## OPINION INDIVIDUELLE DE M. LACHS

[Traduction]

Je voudrais formuler quelques observations au sujet de l'arrêt et de la manière dont il résout les questions litigieuses entre les deux Etats concernés. Je crois tout d'abord souhaitable d'exprimer certaines préoccupations au sujet de l'inclusion de la décision qui fait l'objet du paragraphe 5 du dispositif.

Ce n'est pas qu'il puisse y avoir aucun doute quant au principe en cause, car la règle selon laquelle la violation d'un engagement, s'il en résulte un préjudice, entraîne l'obligation de réparer a été affirmée à plusieurs reprises par les juridictions internationales. En réalité cette idée est sous-entendue, elle va sans dire. « La réparation, a déclaré la Cour permanente de Justice internationale, est ... le complément indispensable d'un manquement à l'application d'une convention, sans qu'il soit nécessaire que cela soit inscrit dans la convention même. » (*C.P.J.I. série A n° 9*, p. 21.) Ce prononcé visait en fait une convention et non une décision judiciaire. Mais l'arrêt rendu par la Cour actuelle dans l'affaire du *Détroit de Corfou* offre l'exemple d'une décision de la Cour dont le dispositif ne disait rien de l'obligation de réparer.

Il n'était donc pas nécessaire de décider dans le dispositif du présent arrêt que pareille obligation était due, alors que la responsabilité qui pouvait faire conclure à son existence se trouvait clairement définie à la fois dans les motifs et dans le paragraphe 2 du dispositif. C'est pourquoi j'ai considéré le paragraphe 5 comme superflu. Compte tenu des circonstances de l'affaire, une saine économie judiciaire aurait conduit, me semble-t-il, à limiter le domaine de la chose jugée aux quatre premiers paragraphes et à conclure en réservant pour décision ultérieure, au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, toute suite de procédure que nécessiterait une demande en réparation.

En procédant de la sorte, la Cour aurait, je pense, laissé le champ libre à une telle suite de procédure sans priver l'Etat requérant d'une réponse suffisante à sa présente demande sur ce point.

\*

Je tiens ensuite à souligner quelle est, selon moi, la valeur du présent arrêt. J'estime qu'il constitue non seulement une décision en l'espèce, mais une importante confirmation d'un ensemble de dispositions juridiques qui est l'un des principaux piliers de la communauté internationale. Cet ensemble de dispositions a été incorporé dans les conventions de Vienne de 1961 et de 1963 qui constituent, à mon avis, avec les règles du droit international général, le fondement de l'arrêt. Les principes et les règles des

privilèges et immunités diplomatiques ne sont pas — l'on ne saurait trop y insister — l'invention ou le système d'un seul groupe de nations, d'un seul continent ou d'une seule culture ; ils ont été établis au cours des siècles et sont partagés par les nations de toutes races et de toutes civilisations. Il est significatif que le préambule de la convention de 1961 rappelle que, « depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques » et s'achève sur ces mots : « *Affirmant* que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente convention. » Au surplus, à la date du 31 décembre 1978, la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques avait obtenu la ratification ou l'adhésion de cent trente-deux États, y compris soixante et un États d'Afrique ou d'Asie. Pour la convention de 1963 sur les relations consulaires, les chiffres étaient à la même date de quatre-vingt-un États, dont quarante-cinq appartenant aux deux continents susdits. Il est donc clair que ces deux conventions sont l'expression du droit, d'un droit qu'approuvent toutes les régions du globe et les peuples du Nord comme du Sud, de l'Est comme de l'Ouest. Les règles de droit dont il s'agit sont le bien commun de la communauté internationale et elles ont été confirmées dans l'intérêt de tous.

\*

Il est cependant tout à fait regrettable qu'une fois de plus la Cour ait dû statuer sans l'assistance qu'elle pouvait attendre de la présentation de sa cause par l'État défendeur, à l'exception des arguments d'ordre général contenus dans deux lettres qui lui ont été adressées. La Cour a pris acte des griefs formulés par la République islamique d'Iran contre les États-Unis d'Amérique et laissé la porte ouverte pour que la démonstration lui en soit fournie. Malheureusement l'Iran a choisi de se priver des moyens dont il disposait pour développer ses thèses. Tout en s'acquittant des obligations dont elle est tenue en vertu de l'article 53 du Statut, la Cour n'a pu se prononcer sur aucune demande du Gouvernement iranien parce qu'il n'y en a pas eu ; on ne saurait en rejeter la responsabilité sur elle.

Dans ce contexte, je tiens à rappeler que la Cour a été instituée par la Charte des Nations Unies comme « organe judiciaire principal des Nations Unies » (art. 92) et pour servir toute la communauté internationale en réglant « conformément au droit international les différends qui lui sont soumis » (Statut, art. 38, par. 1). Elle ne peut s'acquitter de cette tâche qu'avec l'assistance des États intéressés. Les gouvernements demeurent évidemment libres d'agir en la matière comme ils le souhaitent, mais je pense que, ayant créé la Cour, ils lui doivent de comparaître devant elle lorsqu'ils y sont invités — c'est-à-dire de reconnaître les faits, de présenter une défense ou d'introduire une demande reconventionnelle selon le rôle qu'ils entendent assumer. Par ailleurs un demandeur ne saurait, après avoir introduit l'instance, prendre des mesures unilatérales d'ordre militaire ou autre comme s'il n'y avait pas d'instance en cours.

\*

La Cour ayant statué sur les questions de droit qui lui étaient soumises, il convient de se demander si l'on peut utilement indiquer les modalités d'une solution pratique des problèmes qui se posent entre les parties. A cet égard il ne serait pas réaliste de méconnaître que le mandat confié par le Secrétaire général des Nations Unies à sa commission spéciale établissait un rapport entre les griefs de chacune des parties.

Les travaux de cette commission ont donc placé la question sur le terrain de la négociation diplomatique, ce qui aurait dû grandement en faciliter la solution. Malheureusement les efforts de la commission n'ont pas abouti et les événements subséquents ont contribué à aggraver la tension. Néanmoins, maintenant que l'arrêt a tranché, avec l'autorité de la chose jugée, l'un des principaux problèmes en cause, il me semble qu'il devrait être possible de reprendre les négociations en vue de rechercher une solution pacifique du différend. Je ne puis qu'exprimer, comme je l'ai fait en d'autres occasions, ma profonde conviction selon laquelle, si la Cour n'a pas le pouvoir d'obliger les parties à engager des négociations, son arrêt devrait, dans la mesure convenable, les y encourager, conformément à son rôle d'institution consacrée au règlement pacifique des différends.

En conséquence les deux Etats, en tant que parties à la Charte et membres de la communauté internationale, devraient maintenant entamer des négociations en vue de mettre fin à un désaccord qui, combiné avec d'autres facteurs, entretient le climat de tension et d'incompréhension régnant aujourd'hui dans cette partie du monde. En tenant compte des griefs de l'Iran contre les Etats-Unis pour autant qu'elle a été mise en mesure de le faire, la Cour s'est préoccupée non-seulement de la question immédiate de la responsabilité d'actes déterminés dont elle était saisie, mais aussi du désaccord plus large qui a perturbé les relations entre les deux pays. Etant donné que la République islamique d'Iran a radicalement rompu tout lien avec un passé récent correspondant au règne de l'ancien souverain, la nécessité s'impose de reprendre la recherche d'une solution à ces problèmes et, tant que le dialogue est interrompu entre les deux parties, on doit à mon avis faire appel à l'initiative de tiers. Il faut encourager les Etats concernés à rechercher une solution afin d'éviter entre eux toute nouvelle détérioration de la situation. Pour combler le gouffre qui les sépare, pour dissiper la tension et la méfiance, la seule voie est celle d'une action patiente et judicieuse par la médiation, la conciliation ou les bons offices. Le rôle du Secrétaire général des Nations Unies est peut-être ici l'élément clé.

Si j'ai joint à l'arrêt les observations qui précèdent, c'est que, je l'espère, il marquera une étape vers la solution des graves divergences subsistant dans les relations entre les deux Etats concernés. Les moyens pacifiques que j'ai cités peuvent encore paraître difficiles à appliquer, mais notre époque a montré que le recours à de tels moyens peut permettre de progresser vers la solution de problèmes encore plus complexes, tandis que le recours à des méthodes dangereuses tend à avoir l'effet inverse. Les efforts déjà accomplis ont échoué pour diverses raisons, dont beaucoup tiennent précisément à l'absence de communication directe et d'autres au fait que la situation est



dominée par des facteurs dépassant l'objet spécifique du différend. Dans ce contexte l'élément capital du choix du moment a été perdu de vue.

Il faudra saisir le moment opportun en vue d'élaborer une procédure acceptable de part et d'autre. Mais je suis convaincu que la valeur de la diplomatie, soulignée en l'occurrence, sera confirmée par les événements.

(Signé) Manfred LACHS.

## OPINION DISSIDENTE DE M. MOROZOV

[Traduction]

J'ai voté contre les paragraphes 1, 2, 5 et 6 et pour les paragraphes 3 et 4 du dispositif de l'arrêt. En outre je n'ai pu accepter certains passages des motifs et je voudrais dire pourquoi.

1. J'estime que les règles du droit international général relatives aux privilèges, inviolabilités et immunités du personnel diplomatique et consulaire, règles consacrées par une longue pratique, sont des plus importantes pour la mise en œuvre de principes fondamentaux du droit international contemporain tels que celui de la coexistence pacifique entre pays à structures politiques, sociales et économiques différentes. Ces règles sont incorporées dans la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et dans la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.

Les obligations imposées aux parties par ces conventions doivent être strictement respectées et il doit être mis fin sans délai à toute violation de leurs dispositions par quelque pays que se soit.

2. Toutefois la Cour n'a compétence pour connaître d'une question relative à de telles violations, à la requête d'une seule des parties au différend, que si l'autre partie a exprimé, sous l'une ou l'autre des formes prévues aux articles 36 ou 37 du Statut, son consentement à ce que l'affaire soit portée devant la Cour. En ce qui concerne le présent différend, qui a été soumis à la Cour par *une seule* partie, il y a lieu de noter que les protocoles de signature facultative aux deux conventions de Vienne disposent en leur article I :

« Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie *par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même Partie au présent Protocole.* » (Les italiques sont de moi.)

Ces protocoles de signature facultative ont été dûment ratifiés par les Etats-Unis et par l'Iran.

3. Il n'aurait donc pas été nécessaire d'entreprendre ce nouvel examen de la question de compétence si, au paragraphe 1 du dispositif, la Cour s'était bornée à reconnaître que la République islamique d'Iran a violé plusieurs obligations dont elle est tenue *en vertu des conventions de Vienne de 1961 et de 1963.*

Mais la Cour a qualifié les actes de l'Iran de violations de ses obligations

« en vertu de conventions internationales en vigueur entre les deux pays » (les italiques sont de moi.)

La formule adoptée par la Cour, rapprochée des paragraphes 50, 51, 52, 53, 54 de l'arrêt, revient à dire que le traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis et l'Iran est une autre source de compétence de la Cour en l'espèce.

Si l'on compare le texte de l'article I des deux protocoles de signature facultative aux conventions de Vienne au texte de l'article XXI, paragraphe 2, du traité de 1955, on voit aisément que ce dernier instrument — à la différence des protocoles de signature facultative — ne prévoit pas la compétence inconditionnelle de la Cour sur requête d'une seule partie au différend.

Dans son mémoire (p. 41), le demandeur a concédé : « Certes il n'est pas expressément prévu à l'article XXI, paragraphe 2, que l'une ou l'autre partie à un différend puisse porter celui-ci devant la Cour par requête unilatérale. »

La suite du mémoire contient des références à l'interprétation de certains traités bilatéraux du même type donnée, dit-on, d'un commun accord par les Etats-Unis d'Amérique et d'autres pays. D'après l'agent des Etats-Unis, divers pays estimerait qu'une formule analogue à celle de l'article XXI, paragraphe 2, du traité donne à toute partie le droit de saisir la Cour d'un différend par requête unilatérale.

Or, comme il est dit justement à la page 42 du mémoire : « Certes l'Iran n'est pas lié par une interprétation sur laquelle les Etats-Unis et des pays tiers sont tombés d'accord. » Le demandeur a donc reconnu lui-même que, du point de vue juridique, le traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 ne pouvait servir de fondement à la compétence de la Cour.

Compte tenu des actes accomplis par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en novembre 1979 et de décembre 1979 à avril 1980 — l'invasion militaire du territoire de l'Iran et une série de sanctions économiques et d'autres mesures coercitives qui sont pour le moins incompatibles avec des notions telles que l'amitié —, il est évident que, selon les principes communément reconnus du droit international, les Etats-Unis se sont désormais privés de tout droit d'invoquer le traité de 1955 dans leurs relations avec la République islamique d'Iran.

En s'efforçant de prouver que les dispositions du traité de 1955 peuvent être considérées comme une source de compétence en l'espèce, la Cour, dans certains de ses motifs, va jusqu'à considérer les actes des Etats-Unis d'Amérique comme étant en quelque sorte des contre-mesures normales et méconnaît qu'ils sont incompatibles non seulement avec le traité de 1955, mais aussi avec les dispositions du droit international général, y compris la Charte des Nations Unies.

4. Par ailleurs la formule utilisée par la Cour au paragraphe 1 du dispositif, rapprochée du paragraphe 55 des motifs et des paragraphes 5 et 6

du dispositif, implique que c'est *seulement dans le présent arrêt* que la Cour a décidé de ne pas rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, l'article 13 de la convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, « peut servir de fondement à l'exercice de sa compétence pour connaître » des demandes des Etats-Unis d'Amérique.

La Cour prévoyant au paragraphe 6 du dispositif une reprise éventuelle de l'affaire sur une question de réparation, cela implique qu'elle n'exclut pas que la prétention des Etats-Unis de fonder la compétence sur la convention de 1973 puisse être réexaminée à l'avenir. Je me vois donc obligé de faire observer que la convention de 1973 ne prévoit pas le droit *inconditionnel d'une partie* à un différend de saisir la Cour d'une requête. En vertu de l'article 13 de la convention, ce droit ne prend naissance que si, dans un délai de six mois, l'autre partie n'a pas accepté une demande tendant à organiser un arbitrage. Le mémoire des Etats-Unis, de même que les explications complémentaires fournies par le conseil des Etats-Unis à l'audience du 20 mars 1980, attestent que le Gouvernement des Etats-Unis n'a jamais suggéré au Gouvernement de la République islamique d'Iran l'organisation d'un arbitrage comme le prévoit la convention de 1973.

Il convient aussi de noter que la convention de 1973 n'est pas destinée à se substituer à l'une ou l'autre des conventions de Vienne de 1961 et de 1963 ; elle a été élaborée afin d'assurer la coopération entre Etats dans la lutte contre le terrorisme international.

Enfin la formule utilisée par la Cour au paragraphe 1 du dispositif, rapprochée du paragraphe 91 des motifs, aboutit à accuser sans fondement l'Iran d'avoir violé la Charte des Nations Unies et la déclaration universelle des droits de l'homme.

5. Les paragraphes 2, 5 et 6 du dispositif de l'arrêt ont trait à la question de la responsabilité de la République islamique d'Iran envers les Etats-Unis d'Amérique et de l'obligation de l'Iran de faire réparation aux Etats-Unis.

Il est bien connu que, selon le droit international général, des violations d'obligations internationales librement souscrites peuvent entraîner une obligation de dédommager de leurs conséquences.

Mais étant donné les événements extraordinaires survenus pendant le délibéré judiciaire, au cours duquel on a vu le demandeur lui-même commettre de nombreux actes causant de graves dommages à la République islamique d'Iran, le demandeur a perdu, sur le plan juridique comme sur le plan moral, le droit d'attendre de la Cour qu'elle donne suite à aucune demande de réparation.

*La situation dans laquelle la Cour a procédé à son délibéré judiciaire en l'espèce est sans précédent dans toute l'histoire de l'administration de la justice internationale, aussi bien devant la présente Cour que devant toute autre instance judiciaire internationale.*

En même temps qu'il proclamait son intention de régler exclusivement par des moyens pacifiques le différend entre les deux Etats, et qu'il saisissait la Cour d'une requête, le demandeur a en fait agi à l'encontre de ses propres déclarations et commis une série de violations graves des dispositions du droit international général et de la Charte des Nations Unies. Pendant la période d'attente de la décision de la Cour, ces violations ont consisté en sanctions économiques unilatérales et en nombre d'autres mesures coercitives contre l'Iran et elles ont eu pour couronnement une attaque militaire contre le territoire de la République islamique d'Iran.

Il y a eu entre autres la décision de bloquer les avoirs iraniens aux Etats-Unis qui, d'après la presse et la radiodiffusion, représenteraient quelque 12 milliards de dollars. Le 7 avril 1980 le président des Etats-Unis a adopté des mesures additionnelles en vue de permettre aux autorités des Etats-Unis de disposer ultérieurement des avoirs bloqués. Dans la lettre de l'agent adjoint des Etats-Unis en date du 15 avril 1980, ces actes du Président ont été expliqués notamment par la nécessité de procéder à un inventaire et à « un calcul qui se révéleront sans doute utiles dans la suite de la procédure devant la Cour en ce qui concerne le montant de la réparation due par l'Iran ». Mais la lettre de l'agent adjoint ne touche pas le point *crucial* de la déclaration faite le 7 avril 1980 par le président des Etats-Unis, laquelle montre sans conteste que le but réel du blocage des avoirs iraniens est de les utiliser conformément à des décisions à prendre par les Etats-Unis eux-mêmes sur le plan interne.

Dans la déclaration du président des Etats-Unis en date du 7 avril 1980, on peut lire :

« 3. Le secrétaire au Trésor fera un inventaire officiel des avoirs du Gouvernement iranien bloqués en vertu de mon ordre antérieur et il procédera également au recensement ou à l'inventaire des réclamations de citoyens ou de sociétés américaines contre le Gouvernement de l'Iran. *Ce relevé aidera à mettre au point un plan d'action contre l'Iran au profit des otages, de leurs familles et des autres réclamants américains. Nous sommes en train de préparer une législation qui sera soumise au Congrès pour faciliter l'examen et le règlement de ces réclamations.* » (Les italiques sont de moi.)

Dans le contexte, cela implique que les Etats-Unis agissent comme juge et partie. On notera que, d'après un article paru dans l'*International Herald Tribune* des 19-20 avril 1980, la proposition soumise au Congrès des Etats-Unis prévoit une disposition visant à « *rembourser les Etats-Unis de leurs dépenses militaires entraînées par la crise des otages* » (les italiques sont de moi).

6. Au surplus, bien que le Conseil de sécurité n'ait pas adopté les sanctions suggérées par les Etats-Unis contre la République islamique d'Iran, le Gouvernement des Etats-Unis a décidé, non seulement d'appliquer unilatéralement toutes ces sanctions, mais de prendre en outre certaines mesures de coercition.

Dans ces circonstances tout à fait insolites, rien n'autorisait à inclure

dans l'arrêt des dispositions relatives à la responsabilité de la République islamique d'Iran envers les Etats-Unis d'Amérique et à l'obligation de réparer, comme on en trouve aux paragraphes 2, 5 et 6 du dispositif. La Cour, ne tenant pas compte du caractère illicite des actes susmentionnés des Etats-Unis d'Amérique ne dit rien de la responsabilité du demandeur envers la République islamique d'Iran découlant de ces actes.

Le paragraphe 6 du dispositif de l'arrêt, qui énonce que « les formes et le montant de cette réparation seront réglés par la Cour, au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord à ce sujet, et réserve à cet effet la suite de la procédure », ne change rien à mes objections. Même si on le détache du paragraphe 5 et si on le rapproche uniquement du paragraphe 2, il reste évident que la Cour reconnaît l'obligation impérative de l'Iran de faire réparation aux Etats-Unis.

Il a été prétendu que l'absence de l'Iran à l'instance empêchait de prendre en considération ses éventuelles demandes reconventionnelles contre les Etats-Unis. Mais les actes parfaitement unilatéraux des Etats-Unis contre l'Iran pendant la procédure sont clairement établis par des documents présentés sur requête de la Cour par le demandeur lui-même ; au moins dans son examen de la question de la responsabilité, rien en droit n'interdisait à la Cour de tenir compte de ces éléments de preuve sur sa propre initiative en vertu de l'article 53 de son Statut.

7. Certaines parties des *motifs* décrivent les circonstances de l'affaire d'une manière que j'estime inexacte ou tendancieuse.

Je n'ai pas l'intention de citer tous les paragraphes des motifs que je ne puis accepter. Je me bornerai à faire état des points qui me paraissent les plus importants.

8. Je n'ai pu accepter les paragraphes 32, 93 et 94. La façon dont la Cour les a rédigés ne donne pas une description complète et correcte des actions menées par les Etats-Unis sur le territoire de la République islamique d'Iran les 24-25 avril 1980. Certains des termes utilisés par la Cour pour décrire ces événements empruntent sans critique à la terminologie de la déclaration du 25 avril 1980 dans laquelle le président des Etats-Unis a essayé de justifier de diverses façons, sur le plan du droit international, la prétendue opération de sauvetage. Mais, même lorsque la déclaration du président est citée, certains passages très importants pour l'appréciation correcte des événements en sont omis.

Que s'est-il passé en réalité ? Dans la nuit du 24 au 25 avril 1980, des unités armées des forces militaires des Etats-Unis ont envahi le territoire de la République islamique d'Iran. Selon la déclaration faite le 25 avril 1980 par le président des Etats-Unis, les préparatifs de cette invasion « ont commencé peu de temps après la prise de notre ambassade ... cette opération complexe devait être précédée d'une préparation et d'un entraînement inten-

*sifs et de plusieurs répétitions* » (les italiques sont de moi). Cela signifie, premièrement, que, presque en même temps qu'ils déposaient leur requête visant à régler le différend par des voies pacifiques, les Etats-Unis ont entamé des préparatifs pour le trancher par la force armée et, deuxièmement, qu'ils sont passés à l'exécution alors que la décision de la Cour était en suspens.

C'est un fait bien connu que, pendant la période qui a précédé l'invasion militaire, les Etats-Unis ont concentré près des côtes de l'Iran des forces navales, y compris *le porte-avions* Nimitz. On lit dans la déclaration faite le 25 avril 1980 par le secrétaire à la Défense des Etats-Unis : « *Le deuxième hélicoptère [qui participait à l'invasion] a eu des difficultés, a rebroussé chemin et s'est posé sur le porte-avions Nimitz en mer Arabique.* » (Les italiques sont de moi.)

La Cour ayant demandé à l'agent des Etats-Unis de lui communiquer des documents sur les événements des 24-25 avril, ces documents lui ont été officiellement transmis. Parmi eux se trouve un rapport adressé par les Etats-Unis au Conseil de sécurité le 25 avril « en application de l'article 51 de la Charte des Nations Unies ». Dans ce rapport les Etats-Unis soutiennent que, s'ils ont entrepris la « mission », c'était « dans l'exercice de leur droit naturel de légitime défense ».

Certes la question d'une invasion militaire commise par un Membre des Nations Unies contre un autre doit être examinée chaque fois par le Conseil de sécurité dans l'exercice de la compétence exclusive qu'il tient de la Charte.

Cependant, comme je l'ai dit, l'invasion du territoire iranien a été commise par les Etats-Unis alors que le délibéré judiciaire était en cours et elle avait pour but – au moins selon l'explication donnée par les Etats-Unis – de régler le différend non par des moyens pacifiques tels que des négociations ou autres méthodes de ce genre pouvant être employées parallèlement à la procédure judiciaire, mais *par la force*.

A mon avis, dans cette situation tout à fait inhabituelle, la Cour ne saurait se contenter de « faire observer que, quels qu'en soient les motifs, une opération entreprise dans ces circonstances est de nature à nuire au respect du règlement judiciaire dans les relations internationales » et de « rappeler qu'au paragraphe 47, I B, de son ordonnance du 15 décembre 1979 elle avait indiqué qu'aucune mesure de nature à aggraver la tension entre les deux pays ne devait être prise » (par. 93). Elle déclare aussi « qu'elle n'est pas saisie de la question du caractère licite ou illicite de l'opération du 24 avril 1980 au regard de la Charte des Nations Unies et du droit international général » et qu'« il s'ensuit que les conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans le présent arrêt ne sont pas modifiées du fait de cette opération » (par. 94).

J'estime que, sans préjudice de la compétence exclusive du Conseil de sécurité rappelée ci-dessus, la Cour, d'un point de vue strictement juridique, aurait pu attirer l'attention sur le fait juridique incontestable que l'article 51 de la Charte prévoyant le droit de légitime défense ne saurait

être invoqué que « dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée ». Elle aurait dû ajouter que, dans les documents que les Etats-Unis lui ont officiellement communiqués sur sa demande au sujet des événements des 24-25 avril 1980, rien n'établit que les Etats-Unis aient été l'objet d'une agression armée.

En outre la Cour aurait dû indiquer d'une manière ou d'une autre dans son arrêt qu'elle considère que le règlement du différend entre les Etats-Unis et la République islamique d'Iran doit être obtenu exclusivement par des moyens pacifiques.

9. Parmi les passages des motifs de l'arrêt que j'ai qualifiés au paragraphe 7 ci-dessus d'inexacts ou de tendancieux il y a ce qui est dit au paragraphe 88 quant à l'autorisation donnée à l'ancien Chah de se rendre à New York. Cette autorisation lui a été accordée bien que le Gouvernement des Etats-Unis sût parfaitement qu'il était considéré par le Gouvernement et le peuple de la République islamique d'Iran comme ayant été remis sur le trône par les Etats-Unis après qu'ils eurent renversé le gouvernement légitime de M. Mossadegh et comme ayant commis les crimes les plus graves, s'étant rendu responsable de la torture et de l'exécution de milliers d'Iraniens. Son admission aux Etats-Unis et le refus de l'extrader constituaient donc de véritables provocations et non point seulement, comme le suggère l'arrêt, des actes ordinaires ayant simplement donné lieu à un « sentiment d'offense ».

(Signé) P. MOROZOV.



## DISSENTING OPINION OF JUDGE TARAZI

*[Translation]*

Having perused the Application instituting proceedings which the Government of the United States of America filed on 29 November 1979, read the Memorial filed by it on 15 January 1980 and listened to the oral arguments during the hearings of 18, 19 and 20 March 1980, the Court had before it a series of facts, historical developments and legal arguments which were to lead to its delivering a Judgment of, in my view, cardinal importance. I concurred in the findings of the Judgment concerning the necessity of compliance by the Government of the Islamic Republic of Iran with the obligations incumbent upon it under the Vienna Conventions of 1961 and 1963 on, respectively, Diplomatic and Consular Relations. I nevertheless found some difficulty, arising on the one hand from the situation which has developed in Iran since the overthrow of the régime of which the former Shah was the symbol, and on the other hand from the conduct of the applicant State both before and after the events of 4 November 1979, in deciding and declaring only that the Government of the Islamic Republic of Iran was responsible vis-à-vis that of the United States of America while neglecting to point out at the same time that the latter had also incurred responsibility, to an extent remaining to be determined, vis-à-vis the Government of Iran.

My intention here is to indicate, with as brief explanations as possible, the reasons for my attitude and position. To that end I will have to consider the following points :

1. The principle of the inviolability of diplomatic and consular missions and of the immunity enjoyed by their members ;
2. The factors which enter into the assessment in principle of the responsibility incurred by the Government of the Islamic Republic of Iran ;
3. The actions undertaken by the United States Government both before and after the seisin of the Court which were capable of affecting the course of the proceedings.

### 1. THE INVIOLABILITY OF DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSIONS AND THE IMMUNITY ENJOYED BY THEIR MEMBERS

I entirely concurred in the reasoning of the Judgment on this point. I was pleased to note that the Judgment took particular account of the traditions of Islam, which contributed along with others to the elaboration of the rules of contemporary public international law on diplomatic and consular inviolability and immunity.

In a course of lectures which he gave in 1937 at the Hague Academy of International Law on the subject of "Islam and *jus gentium*", Professor Ahmed Rechid of the Istanbul law faculty gave the following account of the inviolability of the envoy in Muslim law :

"In Arabia, the person of the ambassador had always been regarded as sacred. Muhammad consecrated this inviolability. Never were ambassadors to Muhammad or to his successors molested. One day, the envoy of a foreign nation, at an audience granted to him by the Prophet, was so bold as to use insulting language. Muhammad said to him : 'If you were not an envoy I would have you put to death.' The author of the 'Siyer' which relates this incident draws from it the conclusion that there is an obligation to respect the person of ambassadors."

Ahmed Rechid adds further on :

"The Prophet always treated the envoys of foreign nations with consideration and great affability. He used to shower gifts upon them and recommended his companions to follow his example, saying : 'Do the same as I' <sup>1</sup>."

In a work entitled *International Law*, published by the Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the USSR, the following is to be read on the conduct in the Middle Ages of the Arabs, the bearers of the Islamic faith :

"The Arab States, which played an important part in international relations in the Middle Ages (from the 7th century) had well-developed conceptions regarding the Law of Nations, closely linked with religious precepts.

The Arabs recognised the inviolability of Ambassadors and the need for the fulfilment of treaty obligations. They resorted to arbitration to settle international disputes and considered the observance of definite rules of law necessary in time of war ('the blood of women, children and old men shall not besmirch your victory')."

## 2. FACTORS WHICH ENTER INTO THE ASSESSMENT IN PRINCIPLE OF THE RESPONSIBILITY INCURRED BY THE IRANIAN GOVERNMENT

The deductions made by the Court from the fact that the Government of the Islamic Republic of Iran had violated its binding international obligations to the United States of America with regard to diplomatic invio-

<sup>1</sup> Ahmed Rechid, "L'Islam et le droit des gens", 60 *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, 1937-II, pp. 421 f.

lability and immunity have led it to declare the former responsible by reason of acts of both omission and commission.

I find this approach inadequate. It is not right to proclaim the responsibility of the Iranian Government unless its examination is first preceded by an appropriate study of the historical facts antedating the seizure by Islamic students of the United States Embassy in Tehran on 4 November 1979. In that respect, it is a matter for deep regret that the Iranian Government refused to appear before the Court. Nevertheless, it emerges from the two identical communications addressed to the Court by the Iranian Minister for Foreign Affairs on 9 November 1979 and 16 March 1980 that the Government of the Islamic Republic of Iran considers that the present proceedings are only a marginal aspect of a wider dispute dividing Iran and the United States since the Shah was in 1953 restored to the throne thanks to the intrigues of the CIA and the United States Government continued to meddle in Iran's internal affairs.

In spite, and perhaps because of the absence, of the Government of Iran from the proceedings, it behoved the Court to elucidate this particular point before pronouncing on the responsibility of the Iranian State. That responsibility ought to have been qualified as relative and not absolute.

I recognize that the Court made a laudable effort in that direction. This, however, remained insufficient. It has been argued that more would mean examining deeds of a political nature which lay outside the framework of the Court's powers. But is it possible to ignore historical developments which have direct repercussions on legal conflicts? The Permanent Court of International Justice well clarified this point when in its Judgment of 7 June 1932 (*Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex*), it stated :

“The era of the Napoleonic Wars preceding the Hundred Days was brought to an end by the treaties concluded at Paris on May 30th, 1814, between France, on the one hand, and Austria, Great Britain, Prussia and Russia respectively, on the other.” (*P.C.I.J., Series A/B, No. 46, 1932, p. 115.*)

One could therefore have devoted some attention to the events of 1953 with a view to gauging to what extent the assertion of the Iranian Minister for Foreign Affairs was plausible. On this essential question, I have been able to glean some impression from a source that does not look with any favourable eye upon the Islamic Revolution of Iran. In his work entitled *The Fall of the Shah*, Mr. Fereydoun Hoveyda, the brother of the ex-sovereign's former Prime Minister, Mr. Abbas Amir Hoveyda, who was condemned to death and executed after the ex-sovereign left Iran, says :

“Some Iranian observers were sceptical, considering that foreign interests were pulling the strings : top-ranking non-British companies on the world market were pushing for a break of the contract with the

AIOC [Anglo-Iranian Oil Company]. Be that as it may, when the nationalist uproar grew, the Iranian ruling class and various foreign powers got the wind up and turned to the Shah again. It was then that the CIA floated the idea of a coup d'état, and in 1953 Kermit Roosevelt visited Tehran to examine the possibilities and find a likely candidate. He found his man in General Zahedi, and the plotters staged the departure of the Shah after having him sign a decree naming Zahedi prime minister. He used CIA money to buy the services of Shaban-bi-mokh (literally Shaban the Scatterbrain), the master of a famous 'Zurkhané' (a traditional gymnastics club), in order to recruit a commando squad of 'civilians' to act in concert with the army. The operation begun in August 1953 did not take more than a day, and then the Shah made a triumphal return. And the very people who had followed Mossadeq right up to the eleventh hour scurried to the airport and prostrated themselves before the sovereign to kiss his boots !

In spite of the facts, which have been disclosed by the Americans themselves, the Shah was pleased to consider the 1953 coup as a 'popular revolution' which gave him the mandate of the people. And apparently he ended up by believing his own propaganda. Already the sovereign was showing a tendency to bend the truth ; it was to intensify to the point of cutting him right off from the realities of the country<sup>1</sup>."

Thus, in the eyes of the present Iranian leaders, the power of the Shah had lacked all legitimacy or legality ever since the overthrow of Dr. Mossadeq in 1953. This point should have been examined carefully, because these same leaders say that they are firmly convinced that the Shah would not have been able to maintain himself upon the throne without the backing given him by the Government of the United States of America.

This opinion concords with the reflections of Dr. Henry Kissinger, the former Secretary of State of the United States of America. In his work entitled *The White House Years*, Dr. Kissinger states that :

"Under the Shah's leadership the land bridge between Asia and Europe, so often the hinge of world history, was pro-American and pro-West beyond any challenge. Alone among the countries of the region — Israel aside — Iran made friendship with the United States the starting point of its foreign policy. That it was based on a cold-eyed assessment that a threat to Iran would most likely come from the Soviet Union, in combination with radical Arab states, is only another way of saying that the Shah's view of the realities of world politics

<sup>1</sup> Fereydoun Hoveyda (trans. Roger Liddell), *The Fall of the Shah*, London, 1979, pp. 92 f.

paralleled our own. Iran's influence was always on our side; its resources reinforced ours even in some distant enterprises – in aiding South Vietnam at the time of the 1973 Paris Agreement, helping Western Europe in its economic crisis in the 1970s, supporting moderates in Africa against Soviet-Cuban encroachment . . . In the 1973 Middle East war, for example, Iran was the *only* country bordering the Soviet Union not to permit the Soviets use of its air space – in contrast to several NATO allies. The Shah . . . refueled our fleets without question. He never used his control of oil to bring political pressure; he never joined any oil embargo against the West or Israel. Iran under the Shah, in short, was one of America's best, most important, and most loyal friends in the world. The least we owe him is not retrospectively to vilify the actions that eight American Presidents – including the present incumbent – gratefully welcomed<sup>1</sup>.”

It is in these words that Dr. Kissinger himself describes the links which existed between the presence of the Shah at the head of the Iranian State and the exigencies of American worldwide and Middle-East strategy. These links do not in any way justify the occupation of the Embassy. But they should be placed in the balance when the responsibility incurred by the Iranian Government falls to be weighed.

Furthermore, the ex-Shah, when in Mexico, was authorized to enter United States territory. The United States authorities were perfectly aware that this authorization might have untoward consequences. They nevertheless granted it, thus committing a serious fault which the Court could have taken into consideration. In what has become a classic work, entitled *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle*, the brothers Henri, Léon and Jean Mazeaud write :

“If the sole cause of the injury is an act of the complainant, the defendant should always be absolved, for it was not his fault if harm was done. He is thus entitled to rely on the complainant's act, whatever it be. Here it should be pointed out that the question whether the complainant's act contained an element of fault does not even arise. The defendant is absolved because it was not *his* act which was held to be the cause of the injury. In reality, he relies on the complainant's act solely in order to establish the absence of any causal connection between his own act and the harm done<sup>2</sup>.”

Similarly, before reaching the point of declaring the Iranian State

<sup>1</sup> H. Kissinger, *The White House Years*, London, 1979, p. 1262.

<sup>2</sup> H., L. and J. Mazeaud, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle*, Tome II, 6th ed., Paris, 1970, p. 552.

responsible, one should take into consideration the circumstances in which the facts complained of occurred. In doing so, one must bear in mind the essential point that Iran is at present traversing a period of revolution. It is no longer valid to assess the obligations of the Iranian State in accordance with the criteria which were current before the departure of the Shah. This corresponds to the essence of the theory recognized in French administrative law with regard to the influence of war on the obligations of the State and public bodies. In its Judgment of 30 March 1916 (*Compagnie du gaz de Bordeaux*) the French Conseil d'Etat confirmed the principle of the collapse of the economy of contracts on account of war<sup>1</sup>. This principle was endorsed by the great French jurist Maurice Hauriou, in his theory of the unforeseen<sup>2</sup>.

With this essential factor added to those already mentioned, the responsibility of the Government of the Islamic Republic of Iran ought to have been envisaged in the context of the revolution which took place in that country and brought about, as it were, a break with a past condemned as oppressive. Thus it would in my view be unjust to lay all the facts complained of at the door of the Iranian Government without subjecting the circumstances in which those acts took place to the least preliminary examination.

### 3. THE ACTIONS UNDERTAKEN BEFORE AND AFTER THE SEISIN OF THE COURT WHICH WERE CAPABLE OF AFFECTING THE COURSE OF THE PROCEEDINGS

The Government of the United States of America referred its dispute with Iran to the Court on 29 November 1979. It is certain that the Court's jurisdiction is not automatic. The Court possesses only such jurisdiction, as is conferred upon it. Two essential consequences flow from this :

- (a) any State is free to ignore the possibility of the judicial solution of a dispute, either by omitting to refer it to the International Court of Justice, or by refusing to submit to the Court's jurisdiction, to the extent that the circumstances of the case enable it so to refuse ;
- (b) however, once a State presents itself before the Court as an applicant and requests it to direct the respondent State to submit to the law, the option it possessed before the institution of proceedings disappears. The whole dossier of the dispute at issue is taken in hand by the Court. The applicant State must refrain from taking any decisions on the planes of either domestic or international law which could have the effect of impeding the proper administration of justice.

<sup>1</sup> Conseil d'Etat, 30 March 1916, *Recueil Sirey*, 1916, Part III, pp. 17 ff.

<sup>2</sup> Maurice Hauriou, note to judgment in question (*ibid.*)

Yet, even before turning to the Court, the Government of the United States of America had already decided to freeze the Iranian assets in United States dollars lodged in United States banks or their branches abroad.

Subsequently, just when the Court was embarking upon its deliberation prior to the Judgment it was to adopt, the President of the United States of America, on 7 April 1980, announced a series of measures he had decided to take which were closely connected with the case before the Court. Having regard to the normal exercise of the Court's powers, the most important of these measures was unquestionably the third, whereby he ordered the Secretary of the Treasury to :

“make a formal inventory of the assets of the Iranian Government which were frozen by my previous order and also make a census or inventory of the outstanding claims of American citizens and corporations against the Government of Iran. This accounting of claims will aid in designing a program against Iran for the hostages, the hostage families and other United States claimants.”

The President added : “We are now preparing legislation which will be introduced in the Congress to facilitate processing and paying of these claims.”

This, in my view, constituted an encroachment on the functions of the Court, for until the Court has ruled upon the principle of reparation the applicant State is not entitled to consider that its submissions, or part of them, have already been accepted and recognized as well founded. What is more, the decision of the United States President to propose the adoption by Congress of legislation granting victims the possibility of receiving compensation out of the Iranian assets frozen in the United States, when the action before the Court has not yet been exhausted, raises the problem of a conflict between the rules of municipal law and those of international law. Were the legislation contemplated to be passed, the conflict would be settled to the detriment of the latter.

However, it was the military operation of 24 April 1980 which was the gravest encroachment upon the Court's exercise of its power to declare the law in respect of the dispute laid before it. This operation was called off by the President of the United States for technical reasons. It is not my intention to characterize that operation or to make any legal value-judgment in its respect, but only to allude to it in connection with the case before the Court. I must say that it was not conducive to facilitating the judicial settlement of the dispute.

In his report to the Security Council of 25 April 1980, Mr. Donald McHenry, the Permanent Representative of the United States of America, stated that the military operation of 24 April 1980 had been undertaken pursuant to Article 51 of the Charter of the United Nations. Yet Article 51 provides for the eventuality of that kind of operation only “if an armed attack occurs against a Member of the United Nations”. One can only wonder, therefore, whether an armed attack attributable to the Iranian

Government has been committed against the territory of the United States, apart from its Embassy and Consulates in Iran.

To sum up my position, I would like to mention the following points :

- (a) I consider that the Court has jurisdiction to decide the present case only under the provisions of the Vienna Conventions of 1961 and 1963 on, respectively, Diplomatic and Consular Relations. Any direct or indirect reference to the 1955 Treaty between the United States and Iran or to the 1973 Convention is, from my point of view, unacceptable.
- (b) I consider that the Iranian Government has violated its obligations under the two Vienna Conventions mentioned above. I concur in those parts of the operative paragraph which deal with this question.
- (c) On the other hand, I could not support the idea that the Iranian Government should be declared responsible unless the Court also found :
  - (i) that the responsibility in question is relative and not absolute, that it must straightway be qualified in accordance with the criteria which I have put forward and others which may be envisaged ;
  - (ii) that the Government of the United States of America, by reason of its conduct both before and after the institution of proceedings, has equally incurred responsibility.

(Signed) S. TARAZI.